REGISTRO OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº 419

Quito, miércoles 27 de marzo de 2013

Valor: US$ 9.00 + IVA

ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-90 y Pasaje Nicolás Jiménez

Dirección: Telf. 2901 - 629
Oficinas centrales y ventas:
Telf. 2234 - 540

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 110

Sucursal Guayaquil:
Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2527 - 107

Suscripción anual: US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país
Impreso en Editora Nacional

304 páginas

www.registroficial.gob.ec

Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

SENTENCIAS

2011

SENTENCIA

CAUSA 270-2011

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: DRA. ALEXANDRA CANTOS MOLINA, JUEZA; DR. ARTURO DONOSO CASTELLÓN, JUEZ; AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO, JUEZ; AB. JUAN PAÚL YCAZA VEGA; JUEZ SUPLENTE; DRA. NELLY CEVALLOS BORJA, JUEZA SUPLENTE.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 12 de enero de 2012, las 15H55.- **VISTOS.-**

I. ANTECEDENTES

El día viernes 29 de julio de 2011, a las 17h30, el señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, interpuso para ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, el día 29 de julio de 2011, dentro de la causa No. 270-2011.

En auto de fecha 02 de agosto de 2011, a las 10h45, la Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, por oportunamente interpuesto, aceptó el recurso de apelación presentado por el señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley y dispuso remitir el expediente a la Secretaría General, a fin de que se envíe el proceso al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Mediante Oficio No. 024-2011-VP-TCE de 02 de agosto de 2011, la Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora remite al Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral encargado a la fecha referida, el Expediente identificado con el No. 270-2011 "relacionado con la denuncia presentada por el señor Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, en contra del señor Santiago Pérez Pazmiño y de la empresa encuestadora "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", en la persona de su Gerente General, señora Ana Isabel Oña Gudiño.

El expediente consta de novecientas cuarenta y cuatro (944) fojas del cual se consideran:

1. El expediente de primera instancia correspondiente a la causa 270-2011, que en 10 cuerpos y 922 fojas fue sustanciado por la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Dentro del mismo constan:

1.1 Denuncia presentada por el Ab. Abdalá Bucaram Pulley, Asambleísta Nacional, en contra del señor Santiago Pérez Pazmiño, por sus propios y personales derechos y en contra de la Encuestadora Electoral "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA, en la persona de su Gerente General señorita Ana Isabel Oña Gudiño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. (fojas 3 a 4 vlta)

1.2 Providencia de 19 de mayo de 2011, a las 16h00, mediante la cual la Dra. Ximena Endara Osejo, admite a trámite la denuncia presentada, ordena citar con copia certificada de todo lo actuado a los presuntos infractores señor Santiago Pérez Pazmiño y señorita Ana Isabel Gudiño, Gerente General de la Encuestadora "Santiago Pérez Investigación y Estudios CIA. LTDA"; asi como señala para el día miércoles 15 de junio de 2011, a las 10h00 la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. (fs. 15 a 15 vlta).

1.3 Escrito del señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, Asambleísta Nacional, en el que anuncia la práctica de prueba a ser considerada en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en los numerales 1, 2, 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4); 4 (4.1; 4.2; 4.3) 5, 6, 7 y 8; y, providencia de fecha 8 de junio de 2011, a las 13h55, en la cual la Jueza de Primera Instancia, ordena la práctica de las diligencias solicitadas por el denunciante, se niega alguna de sus peticiones y solicita especifique y determine otras al tenor de lo señalado en la referida providencia a partir de los numerales PRIMERO a OCTAVO. (fs. 45 a 47).

1.4 Escrito del señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, Asambleísta Nacional presentado el día 10 de junio de 2011, a las 14h44 mediante el cual adjunta dieciséis recortes de prensa en originales. (fs. 248 a 264 vlta); y providencia de fecha 11 de junio de 2011 a las 13h10. (fs. 265)

1.5 Providencia de 14 de junio de 2011, a las 18h30, a través de la cual la señora Jueza Dra. Ximena Endara Osejo, nombra como perito técnico al Doctor PhD Luis Horna. (fs. 634); y acta de posesión de perito (fs. 638)

1.6 Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento dentro de la causa No. 270-2011, efectuada el día miércoles 15 de junio de 2011, a las 10h10. (fs. 639-644 vlta); Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (reinstalación) efectuada el día miércoles 22 de junio de 2011, a las 10h05. (fs. 840 a 842); Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento realizada el día lunes 27 de junio de 2011, a las 15h05 (reinstalación). (fs. 846 a 848).

1.7 Dos DVDs que contienen la grabación magnetofónica de las Audiencias Orales de Prueba y Juzgamiento y sus reinstalaciones. (fs. 899)

1.8 Sentencia de 29 de julio de 2011 a las 10h00 dictada por la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 900 a 915 vlta)

2. Escrito de la señora Ana Isabel Oña Gudiño, representante de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA LTDA, presentado con fecha 04 de agosto de 2011. (fs. 928 a 929 vlta)

3. Auto de fecha 24 de agosto de 2011, las 09h55 suscrito por la señora jueza y señores Jueces: Dra. Alexandra Cantos Molina, Ab. Douglas Quintero Tenorio y Ab. Juan Paúl Ycaza Vega. (fs. 931 a 931 vlta)

4. Escrito de la señora Ana Isabel Oña Gudiño, representante de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA LTDA, ingresado el día 27 de septiembre de 2011, a las 15h27. (fs. 936 a 936 vlta)

5. Auto de 12 de octubre de 2011, suscrito por la señora jueza y jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Dra. Alexandra Cantos Molina, Dr. Arturo Donoso Castellón y Ab. Douglas Quintero Tenorio.

6. Voto salvado del Dr. Arturo Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 942) y Auto de mayoría dictado con fecha 28 de noviembre de 2011, las 12h45, mediante el cual el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral integrado para la presente causa con las señoras juezas y señores jueces: Dra. Alexandra Cantos Molina, Dr. Arturo Donoso Castellón (V.S), Ab. Juan Paúl Ycaza Vega y Dra. Nelly Cevallos Borja, admite a trámite el recurso de apelación y da contestación a la petición de la señora Ana Isabel Gudiño, representante de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA LTDA. (fs. 943)

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso final del artículo 221, determina que los fallos y resoluciones dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral, constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Conforme lo determina el artículo 70 numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, es atribución de este Tribunal, el "Administrar Justicia como instancia final en materia electoral y expedir fallos".

De conformidad con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 72 del Código de la Democracia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral, para la resolución de la "acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia". La primera instancia "será tramitada por una jueza, o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva corresponde al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral". El artículo 42 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, por su parte, concuerda con lo señalado por la ley electoral, respecto a la doble instancia. En el mismo Reglamento, se establece dentro del Capítulo V, Disposiciones Generales, artículo 107 que "En los casos en que la primera instancia fuere conocida y resuelta por una jueza o juez, se podrá apelar de su sentencia en los plazos que determine la ley y este reglamento. La o el Secretario Relator tendrá veinte y cuatro horas para remitir el expediente a Secretaría General, con el fin de que, por sorteo, se designe a la jueza o juez sustanciador del Pleno".

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

3.1 La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia dictada dentro de la causa No. 270-2011, el día 29 de julio de 2011, a las 10h00 y leída en la misma fecha a partir de las 15h00, la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, en el numeral 7.5 de su fallo dispuso que: "**7.5.** Por las consideraciones expuestas 1) al no ajustarse la empresa "SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA", dentro de la cualificación determinada en la norma electoral, respecto del sujeto activo de la infracción; 2) al no existir adecuación de los hechos (acción) al tipo de la infracción electoral, no siendo antijurídica, ni culpable; 3) que dicha acción no ha configurado un resultado dañosoy(sic) por lo mismo no existe ninguna violación de ninguna norma, peor aun afectación de un bien jurídico o de algún derecho; 4) al haberse establecido que el trabajo realizado por el señor Santiago Pérez Pazmiño y la empresa "SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", dentro del proceso de exit poll del Referéndum y Consulta Popular 2011 se ha ceñido al procedimiento, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales, conforme la prueba actuada, esto es aquella pedida, presentada, practicada y agregada a los autos por los denunciados; y, 5) por no existir prueba suficiente aportada por el denunciado, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** resuelve: 1. Desestimar la denuncia presentada por el Asambleísta Nacional Ab. Abdalá Bucaram Pulley en contra del señor Santiago Pérez Pazmiño, y en contra de la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", en la persona de su Gerente General y representante legal señora Ana Isabel Oña Gudiño. (...)"

3.2 El recurso de apelación

El día viernes 29 de julio de 2011, a las 17h30 el señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, interpone recurso de apelación, que en el cual textualmente expresa:

"Que, por no estar de acuerdo con la Ley y méritos del proceso, interpongo recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Electoral, de la Sentencia dictada por su autoridad el 29 de julio de 2011. En virtud de lo expuesto, se dignará remitir los autos al Superior ante quien haré valer mis derechos".

3.3 De la petición de la señora Ana Isabel Oña Gudiño en su calidad de representante de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA LTDA

En relación a la interposición del recurso de apelación, la señora Ana Isabel Oña Gudiño, representante de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA, presentó dos escritos el uno de fecha 04 de agosto de 2011 (fs. 928 a 929) y el otro de fecha 27 de septiembre de 2011 solicitando que se rechace el recurso de apelación por que según la mencionada ciudadana, había sido interpuesto fuera de tiempo, asi como pidió se la reciba en Audiencia de Estrados. Al respecto, una vez que se conformó el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, se procedió a dar contestación fundamentadamente conforme se observa en el acápite primero numerales 1.1; 1.2; 1.3 y 1.4 de la providencia dictada el día 28 de noviembre de 2011, a las 12h45, por voto de mayoría.

3.4 Análisis del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral

Corresponde al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 72 inciso primero del Código de la Democracia sustanciar las causas que se sometan a su conocimiento siguiendo los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, asi como observar las garantías del debido proceso, que señala la Constitución y la Ley.

El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, establece en el artículo 32, respecto a la carga de la prueba, que "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita."; en tanto que el artículo 35 del mismo Reglamento dispone que: "La prueba deberá ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y deberá observar los principios de constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad, celeridad, oportunidad, publicidad y otros aplicables en derecho electoral." Para el juzgamiento de infracciones electorales, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina en el artículo 253 que: "En la Audiencia de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante las juezas y jueces y responden al interrogatorio respectivo".

El artículo 76 numeral 7 de la Constitución, establece el aseguramiento al debido proceso que incluye las garantías básicas descritas en sus trece literales. Entre ellas: h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; y m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.

Del escrito de apelación, se colige que el señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, no especifica ni determina con claridad cuáles son los aspectos del fallo de la Jueza de Primera Instancia, con los cuales está en desacuerdo o que presuntamente contravienen "la Ley" o "los méritos del proceso", que permitan determinar los fundamentos de su apelación.

Por su parte, de la revisión por el mérito de los autos, de la documentación, así como de actuaciones de las partes procesales y de la jueza de primera instancia que constan en los diez cuerpos que conforman el expediente, es necesario señalar que:

a) El hecho denunciado por parte del Asambleísta Ab. Abdalá Bucaram Pulley, era el cometimiento de una presunta infracción electoral tipificada en el artículo 303 inciso segundo de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

El señor Asambleísta señala en el texto de su denuncia que: "Precisamente, como consecuencia de la participación popular en el ejercicio de la democracia directa, Consulta Popular y Referéndum, convocada por el señor Presidente Constitucional de la República y que tuvo su plena ejecución el 7 de mayo de 2011, una de las empresas que realiza pronósticos electorales y que tienen Certificado de Registro No. 02 conforme a la Resolución No. PLE-CNE-5-22-3-2011 de 22 de marzo de 2011 del Consejo Nacional Electoral para ejercer su actividad, me refiero concretamente, a **"SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA", y su encuestador SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO** – quien, además como es de dominio público, funge como el encuestador oficial del Gobierno- **NO** ha cumplido con su finalidad específica, esto es "garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales", pues, contratada, con criterios de exclusividad, por los Canales de Televisión administrados actualmente por el Estado ecuatoriano GAMATV y TC TELEVISIÓN para realizar el proceso de pronóstico electoral denominado "EXIT POLL" (sondeo a boca de urna), sus resultados, anticipados la tarde y noche del pasado sábado 7 de mayo de 2011, tras del cierre de la jornada electoral, tuvieron un alto margen de error que publicitó un supuesto aplastante triunfo del SI en la Consulta, el cual horas mas tarde fue desmentido por el CONTEO RÁPIDO del Consejo Nacional Electoral, que pone en evidencia-salvo error u omisión-una maniobra de desinformación que puede tener indicios, inclusive de responsabilidad penal. En virtud de lo expuesto y sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía General del Estado para investigar y de los jueces penales para juzgar los delitos tipificados en el Código Penal y otras normas penales, en razón de que la encuestadora electoral "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", como es de conocimiento público no ha garantizado información **veraz y seria** en su pronóstico electoral denominado exit poll, pues su trabajo no se ha sujetado a los procedimientos, para este tipo de labores, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, observando las garantías del debido proceso constitucional, solicito, proceda a **SANCIONARLA**, con la **INHABILITACIÓN POR EL SIGUIENTE PERIODO ELECTORAL, sin perjuicio de hacela extensiva, también, a la persona natural que apareció ante la opinión pública como su real ejecutor, el señor SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO.** Esta denuncia fue presentada en contra del señor Santiago Pérez Pazmiño por sus propios y personales derechos, así como en contra de la Encuestadora Electoral "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", en la persona de su Gerente General señorita Ana Isabel Oña Gudiño.

b) El artículo 303 inciso segundo de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, textualmente dice: "(...) Asimismo, con la finalidad de garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales, serán sancionadas con suspensión inmediata e inhabilitación por el siguiente período electoral, las empresas que elaboran pronósticos electorales que no ciñan

su trabajo a procedimientos, análisis, y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores".

c) La empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA, solicitó mediante Oficio Nº106-S.P de fecha 27 de abril de 2011, al Licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral, de esa época, autorización para realizar un EXIT POLL en el proceso electoral para el Referéndum y Consulta Popular del 7 de mayo de 2011 (fs. 53). Según el documento técnico que obra a fojas x, se define en el numeral 2 al Exit Poll como "levantamiento de una encuesta con votantes a la salida de las urnas, inmediatamente después de que hayan votado. Usualmente se les pregunta por qué partido u opción votaron, las razones asociadas a su decisión y algunas características socio-demográficas tales como: edad, sexo, ocupación, escolaridad, entre otras. En esencia, un *Exit Poll* no tiene como fin predecir con exactitud los resultados de una votación, es más una herramienta que sirva para conocer el resultado general, la votación por los mismos segmentos de la población, el perfil de los votantes de cada partido u opción y las motivaciones asociada al voto. Si la encuesta de salida se realiza con una muestra probabilística y representativa del universo de electores; asi también útil para ir midiendo, a lo largo de la jornada, la tendencia de la votación y hacer una estimación del resultado final. En el Ecuador, un inadecuado manejo de la herramienta y la ausencia de una cabal comprensión de la diversidad social, cultural y política del país, ha ocasionado que los *Exit Poll* no tengan la precisión necesaria. Es por eso que es indispensable adaptar los instrumentos a nuestras particularidades y a las característica específicas de esta elección."

Durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el 15 de junio de 2011, rindieron testimonio personas llamadas por los denunciados, que acreditaban experiencia en consulta política, análisis y encuestas: señor Ralph Douglas Murphine, señora Santa Arisveth Mora Rubio y el señor Francisco Xavier Rocha Romero. Estos testigos fueron interrogados en su turno por los abogados del señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley.

El señor Ralph Douglas Murphine, miembro de consultores políticos de Estados Unidos respecto a la preguntas formuladas por la señora Jueza de primera instancia en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, señaló: "PREGUNTA: Teniendo en cuenta su experiencia, que opina del exit poll del 7 de mayo de 2011. RESPUESTA: Lo que he visto, no fue precisamente correcto, es algo típico; como se conoce hay errores estadísticos y nivel de confianza. Los países no tienen conocimiento. El análisis es de probabilidades, la encuesta es algo útil para el análisis de la opinión pública. Como usuario puede existir un error o margen de error y también un nivel de confianza. (…) PREGUNTA: Que es encuesta y conteo rápdo (sic). RESPUESTA: Encuesta tiene las mismas reglas de margen de error y posibilidades de cambio en el nivel de confianza. El Dr. Víctor Hugo Sicouret, formuló al testigo la siguiente pregunta: "¿Cuál es el marguen (sic) de error aceptable en un exit poll RESPUESTA: Depende de las personas encuestadas. Cuando hay muestras más grandes y todo es correcto, el 100 de ello también es correcto y se tiene el mínimo de error. Normalmente este margen es del 5%. Creo que un nivel de error es de 4 a 5% pero esto también puede se errróneo. Hay dos probabilidades, según mi apreciación. (...)"

La señora Santa Arisbeth Mora Rubio, manifestó ante la preguntas formuladas por la señora Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral que: PREGUNTA: Cual es su opinión sobre el exit poll. RESPUESTA: En un sistema democrático ayuda para que la ciudanía oiga su voz. Hay encuestas académicas y de cualquier tipo como las electorales que ayudan a tomar deciones. Concretamente el uso es público, es decir se publican los resultados en un medio para que la gente conzoca (sic) quien puede quedar triunfador, su objetivo es indicar quien va a ganar, no con cuanto, ya que está sujeto a un margen de error estadístico ya que en nuestra opinión la gente puede decirnos cualquier cosa. Al ser una herramienta de investigación, indica que la muestra puede caer en este parámetro donde puede ser que no sea válida, porque se sujeta a error. Este error estadístico puede verse en publicaciones, puede escucharlo pero gente que no está familiarizada, no entiende qué es un margen de error, esto es un parámetro que no puede manejarse. El objetivo es decir quién gana. Lo importante es que la gente tiene la presión de decir o no decir la verdad. PREGUNTA: El exit poll puede fallar por las respuestas de los ciudadanos: RESPUESTA: Sí, el error es de la fuente de información que son los encuestados. PREGUNTA: El exit poll es un pronóstico o predicción o se trata de un estuidio (sic) estadístico en base a una muestra regulado por las ciencias sociales. RESPUESTA: La encuesta es un instrumento de investigación que orienta a lo que la gente piensa. No se puede adivinar y no se puede saber qué va a ocurrir. Todos hacen pronóstico, como el clima, los matemáticos, los pronósticos son probabilidades, en el tema electoral lleva la idea de probabilidad, se reduce un poco la incertidumbre, en este caso la votación, reducir la esfera de quien es el ganador. En la consulta popular, Santiago Pérez y otros dieron pronósticos de que el sí ganaría y las distancias van de 64, 62.55 algunas mas y otros menos pero es no importa porque al fin ganó el sí. Lo contrario sí hubiera sido un error." Interrogó a la testigo el Dr. Fausto. Garcés abogado del denunciante, en dicho interrogatorio se observa que: "PREGUNTA: cuál es la metodología para tener seguridad de que en verdad la persona votó como votó. RESPUESTA: Primero debo aclarar que no es para declarar un solo ganador ya que hubo diez preguntas, esto es que diez veces gana el sí y así se va preguntando, la metodología es la muestra. PREGUNTA: La consecuencia práctica es que hubo un error de 22% cuál es la objetividad práctica. RESPUESTA: En la nota metodológica se utilizó un margen de error de mas menos 2%. El margen no es importante. No interesa el margen de error. El margen únicamente nos dice cuidado. (...)".

El señor Francisco Xavier Rocha Romero, interrogado por la señora Jueza de Primera instancia contesta: PREGUNTA: Dentro de su experiencia como analista político, qué sabe de las encuestas: RESPUESTA: (…) En cuanto al tema que nos convoca este es primario cómo se va a juzgar algo que es estadístico. (…) Revisando las fórmulas con las que se trabaja uno se pregunta cuál es el margen de error, este (sic) es una hipótesis. (...)PREGUNTA: Una cosa es la muestra y otra es la falla debido a factores exógenos. Puede fallar un

exit poll por la conducta del ciudadano, voto oculto, llámase el voto miedo, puede fallar? RESPUETA (sic): Sí podría, porque una encuesta cuando es política tiene que ver con lo público y la gente se cuida más. Esta influencia del gobierno tiene peso en la gente. (…) PREGUNTA: Las encuestas son el resultado final. RESPUESTA: Es una fotografía del momento y eso no significa que los fotografiados son inmóviles. Los que hacemos opinión pública e información estadística, podemos decir que esto no significa que sustituye los resultados electorales porque además de ser técnico, ha de jugar el prestigio de las personas, esto se puede distorsionar con los medios de comunicación. Los resultados de la encuesta pueden cambiar.(...)". El Dr. Víctor Hugo Sicouret preguntó al testigo "...Existen técnicos que tienen que saber cuál es el método social que va a utilizar para poder paliar el problema de la percepción, en el momento en que ejecute sus encuestas. Siendo la metodología un elemento básico y que falló ya que no tenía el ingrediente de la percepción, pero como elemento básico cuál es el objetivo, tengo yo el elemento de la metodología social, el análisis y la divulgación. Acepto lo que dice el testigo de que la percepción de la influencia del gobierno. PREGUNTA: la metodología social del exit poll, también es un pronóstico y al fallar eso, falló el resultado, habrá sido el método. RESPUESTA. Cuando uno hace una encuesta, si es cuantitiva no entiende lo cualitativo, no puede medir la voluntad de los ciudadanos, como los votos vergonzantes o el voto de miedo que tienen un peso, pero no hay una forma de medir una muestra, pero eso no descalifica el trabajo ni la parte técnica, si hay una manipulación, capaz que sí, pero hay temas de comportamiento humano que no nos permite predecir lo que va a pasar. Que margen debería tener el comportamiento humano. Depende de cómo se despierta y de su comportamiento. El tema es que no hemos logrado cómo se mide el comportamiento de la gente". Otro de los abogados del denunciante, el Dr. Garcés, preguntó al testigo: PREGUNTA: ratifica usted en que mucho pesa en los pronósticos el cliente: RESPUESTA. No he dicho que pesa el cliente. En este caso puedo decir que la forma de gobierno pudo haber influido en la respuesta distinta a lo que pasó".

d) A fojas 822 y 823, informe elaborado por el señor Hugo Barber, Director General, de la empresa Perfiles de Opinión, respecto al exit poll realizado por la empresa Santiago Pérez y Asociados el día 7 de mayo de 2011. Según este informe: "El tamaño muestral aplicado (23,880 entrevistas) es correcto a nivel nacional). (...)Teniendo en consideración que, según la empresa Santiago Pérez y Asociados el procedimiento muestral presentado es multietápico (se seleccionan aleatoriamente los recintos en los que deben ser aplicada la recolección de información y luego se selecciona a los recintos en los que debe ser aplicada la recolección de información y luego se selecciona a los entrevistados de dichos recintos) y que la muestra es estatificada por provincia (el porcentaje de entrevistados en cada una de ellas no coincide con la distribución porcentual de los electorales) es razonable plantear que el error estadístico sea de ± 2 puntos porcentuales. Se debe aclarar que este procedimiento de estratificar por provincia es metodológicamente legítimo y se realiza habitualmente para obtener representatividad en cada uno de ellas por separado. Algunas provincias, como las de la Región Amazónica, tienen un número de entrevistados en el diseño muestral aplicado que no es suficiente para lograr un margen de error razonable en las mismas. Sin embargo, esto no debería afectar al total nacional, puesto que en el procesamiento suele aplicarse un mecanismo de ponderación que reconstituye la proporcionalidad del universo. (…)". (fs. 822 a 823).

e) El informe por el señor perito Dr. Luis Alcides Horna, nombrado por la señora Jueza de primera instancia en providencia de 14 de junio de 2011, para que "presente un informe debidamente sustentado sobre el procedimiento, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para el proceso de "exit poll" de la Consulta Popular y Referéndum 2011, realizado por la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA." En el acápite **I. ANTECEDENTES**, numeral **1. Consideraciones generales. Area de conocimiento pericial**, el perito expresa: "El "Exit Poll", término en Inglés, o encuestas de salida o a boca de urna tuvo su origen en Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de conocer en forma anticipada los resultados electorales, mediante una encuesta levantada a los votantes, tan pronto como emitieron sus votos. Si se ha diseñado técnicamente una muestra probabilística para levantar la encuesta, ésta sirve para monitorear la tendencia de la votación en la jornada electoral y luego obtener una estimación de los resultados finales, básicamente en proporciones, con cierto margen de error y nivel de confianza. Los estudios técnicos para realizar pronósticos electorales se basan en la disciplina de la Teoría de muestreo, rama de la Estadística, que se encarga fundamentalmente de la recopilación, organización y análisis de datos, con base en una muestra, con el fin de inferir sobre la población. El muestreo no es una ciencia exacta en el estricto sentido de la palabra, sino que se fundamenta en la Teoría de Probabilidades, lo que implica que sus resultados son válidos con cierta probabilidad, pues en este caso, los resultados de los proceso electorales son inciertos.(...)en este caso concreto se requería estimar la proporción que obtendrían las opciones o alternativas: SI, NO, BLANCO, NULO, en cada una de las diez preguntas de la Consulta del 7 de mayo de 2011. Cabe indicar que con esta estimación obtenida se hace un pronóstico de los resultados que probablemente ocurran. No puede hablarse de certeza en la ocurrencia de los resultados, pues esto implicaría hablar de probabilidad de ocurrencia. El pronóstico se considera en el ámbito técnico como el conocimiento anticipado de un suceso elemental (o un subconjunto de los mismos, llamado evento), siendo un suceso elemental una de las posibles opciones o alternativas que produce un experimento aletorio. En nuestro caso, las posibles opciones o alternativas, para cada una de las diez preguntas, que tiene un votante que asiste a una Junta Receptora del Voto son: SI, NO, BLANCO y NULO". En el numeral tres, "Comparaciones", el Dr. Horna expresa: "Hay que resaltar que los resultados definitivos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, disponibles en su página web son los valores reales de las proporciones a favor de la opción SI y de la opción NO, excluyendo los votos nulos y blancos. Se utilizan también los resultados divulgados en base a las estimaciones provenientes del Conteo Rápido, patrocinado por el Consejo Nacional Electoral, con el fin de comparar la calidad de los resultados obtenidos. Se debe recalcar que el Conteo Rápido se diferencia del "Exit Poll" en lo siguiente: si bien es una muestra probabilística

seleccionada de las Juntas Receptoras del Voto, pero, utiliza la votación total de las juntas electorales seleccionadas que han concluido con el escrutinio. La confiabilidad estadística es muy alta con este método, además que estima el nivel de participación de los votantes. En el Conteo Rápido se procesaron los resultados de aproximadamente, 3.900 juntas, a nivel nacional". En el acápite II. CONCLUSIONES, determina el perito respecto al tipo de muestreo aplicado que: "(...) no se especifica con claridad el tipo de muestreo utilizado, pues aparecen tres técnicas diferentes que pueden ser combinadas adecuadamente en un estudio que requiera levantar datos con encuestas: multietápico estratificado, sistemático y por conglomerados. (…) Los supuestos sobre el error máximo para la estimación de la proporción y el nivel de confianza son los recomendables, aunque no es una norma general. (...) La consideración de cuotas en la selección de los votantes en los recintos electorales pudo haber distorsionado los resultados del "Exit Poll". (…) El tamaño muestral y la asignación en los recintos electorales no son los adecuados. **ii. Respecto a las estimaciones** (…) El "Exit Poll" o encuesta a boca de urna, se ha diseñado con el enfoque probabilístico; es decir, considerando un margen de error máximo, con respecto al valor verdadero del parámetro de estudio y un nivel de confianza adecuado. Si con los datos fijados se hicieran 1000 jornadas electorales, se asegura que a 955 veces el valor verdadero del parámetro estará en el intervalo de confianza del 95,5%. En este caso no ocurrió tal situación, bajo los supuestos teóricos correctos. (…) En la divulgación de los resultados obtenidos con los datos arrojados por el "Exit Poll" la empresa siempre ha mencionado la ficha técnica de la encuesta." (fs. 830 a 836). Este informe fue presentado el día 22 de junio de 2011, a las 10h05 en la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fs. 840 a 842), se lo adjuntó al expediente conforme se observa del acta de la referida diligencia y fue entregado a las partes procesales, igualmente el perito realizó una presentación verbal del mismo. Finalizada la intervención del profesional, los abogados de las partes lo interrogaron. A fojas 849 a 850 consta la ampliación del informe presentado por el señor Dr. Luis Alcides Horna Huaraca, el mismo que fue presentado en la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento de fecha 27 de junio de 2011, a las 15h05. En la ampliación, manifiesta el perito como conclusiones que: "(...) 2. Se evidencia dos errores de estimación, el admitido para la determinación del tamaño muestral n=198 recintos electorales y los correspondientes al tamaño de votantes en cada provincia".

f) A fojas 631 del expediente, consta la comunicación AJ-74-2011 de 12 de junio de 2011, suscrita por el señor Enrique Arosemena Robles, Gerente General de la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A a través del cual se remite en lo principal: el Contrato suscrito el 16 de marzo de 2011, entre la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACÍFICO TELEDOS S.A (GAMATV) y el señor Santiago Pérez INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA; el Informe Final que contiene un CD del Resultado del Exit Poll, presentado por SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA. Se observa que en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN ELECTORAL PARA TELEVISIÓN consta el OBJETO del referido contrato según el cual "EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la propuesta técnica y económica presentada y aceptada por EL CONTRATANTE y, en consecuencia, deberá realizar las encuestas preelectorales extraoficiales para la difusión por televisión, proporcionando los resultados de las votaciones que se realizarán el día sábado 7 de mayo de 2011, en la República del Ecuador. Estos resultados se proporcionarán mediante reportes parciales del día sábado 7 de mayo de 2011. Adicionalmente entregará una encuesta preelectoral el día viernes 6 de mayo de 2011. (...)"

g) Obra del expediente a fojas 779 la comunicación S/N de fecha 13 de junio de 2011, suscrita por el señor Carlos Coello Bescke, MBA, Gerente de la Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A, mediante el cual remite: Contrato suscrito el 16 de marzo de 2011 entre CADENA ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C.A. (TCTV) y SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA.; Informe Final que contiene un CD del Resultado del Exit Poll presentado por SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA.; Oficio No. 151-S.P.-2011 de fecha 312 de mayo de 2011, con 3 CDS como anexos y Oficio No. 0156-S.P.-2011 de fecha 2 de junio de 2011. El documento que se refiere al contrato obra en copias simples.

El Pleno del Tribunal, observa de los medios probatorios, documentación y testimoniales que se han practicado y que obran dentro del expediente:

1. El exit poll fue realizado por parte de la empresa SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA, con autorización conferida por el Consejo Nacional Electoral, para el proceso de la Consulta Popular y Referéndum del 7 de mayo de 2011. La referida empresa, según consta del certificado de registro No. 2, de fecha 22 de marzo de 2011 y que obra a fojas 181 del expediente, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras Electores.

2. La empresa SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CIA. LTDA, ejecutó un exit poll para el proceso de la Consulta Popular y Referéndum del 7 de mayo de 2011, en base a las cláusulas estipuladas en los contratos suscritos con los canales de televisión GAMATV y CADENA ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C.A. (TCTV). COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACÍFICO TELEDOS S.A (GAMATV), que obran del expediente. No corresponde a los jueces en materia electoral, pronunciarse sobre el cumplimiento efectivo o no de los productos que debían ser entregados por el contratado a las contratantes.

3. De acuerdo a los criterios técnicos que han sido incorporados en el expediente y a las declaraciones testimoniales, colegimos que el "exit poll" es una "encuesta a boca de urna", sujeto a las variaciones probabilísticas, por tanto, el hecho del margen de error presente en el mismo y al que se han referido los expertos internacionales y nacionales que comparecieron a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento y que incluso fue admitido por el propio ciudadano denunciado señor Santiago Pérez Nieto, no es parte de los elementos de la infracción electoral tipificada en el artículo 303 de La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El margen de error calculado forma parte de las especificaciones para la publicación o difusión de encuestas o sondeos de opinión, establecidas en el artículo 9 letra g) del Reglamento para Empresas que

realicen pronósticos Electorales para el Proceso Electoral de Referéndum y Consulta Popular 2011, expedido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante resolución PLE-CNE-2-22-3-2011.

4. El denunciante señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, a quien le correspondía la carga de la prueba, no probó ni aportó en su anticipación de elementos probatorios ni durante las Audiencias Orales de Prueba y Juzgamento, cómo o en qué forma los representantes de la empresa denunciada, presuntamente incumplieron en la elaboración del exit poll, con los procedimientos "definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores". No probó que el hecho denunciado, tuviera vinculación directa y principal con lo dispuesto en el artículo 303 inciso segundo, del Código de la Democracia.

5. La Constitución de la República del Ecuador, establece en el numeral 3 del artículo 76 entre las garantías del debido proceso el que "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". Por su parte, la misma Constitución respecto a las competencias y facultades de los servidores públicos, determina en el artículo 226 que: "...las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencia y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…).

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, resuelve:

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor Ab. Abdalá Bucaram Pulley, en contra de la sentencia dictada el día 29 de julio de 2011 dentro de la causa No. 270-2011.

2. Ratificar en todas sus partes el contenido de la sentencia dictada por la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

3. Actúe el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral.

4. Notifíquese a las partes procesales con el contenido de la presente sentencia en todos los correos electrónicos y casilleros señalados.

5. CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Juez.

f.) Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez.

f.) Ab. Juan Paúl Ycaza Vega, Juez Suplente.

f.) Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza Suplente.

SENTENCIA

CAUSA 270-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 29 de julio de 2011, a las 10h00.- **VISTOS**: Agréguese al expediente: a) Los discos compactos que contienen las grabaciones en audio de las Audiencias Orales de Prueba y Juzgamiento realizadas los días miércoles 15 y miércoles 22 de junio de 2011 a las 10h00; y, lunes 27 de junio de 2011 a las 15h00.

En lo principal, por el sorteo respectivo, a la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa identificada con el número 270-2011, ingresada en Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral el día miércoles once de mayo de dos mil once, a las dieciséis horas con veinte y siete minutos, recibida en este Despacho el mismo día, mes y año, a las diecisiete horas con diecisiete minutos, por el presunto cometimiento de la infracción electoral contenida en el inciso segundo del artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, denunciado por el Ab. Abdalá Bucaram Pulley, en su calidad de Asambleísta Nacional, en contra del señor SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO, por sus propios y personales derechos y en contra de la empresa "SANTIAGO PÉREZ, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA." en la persona de su Gerente General y representante legal, señorita ANA ISABEL OÑA GUDIÑO.

Mediante auto de 19 de mayo de 2011, a las 16h00, se admite a trámite la presente denuncia ordenando la citación a los presuntos infractores, señalando como fecha de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento el día miércoles 15 de junio de 2011, a las 10h00 y se dispone que las partes anuncien las pruebas que creyeren necesarias en la presente causa; se les hace conocer las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador; y, se niega por improcedente las medidas cautelares solicitadas por el denunciante.

Al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167, 168 numeral tercero e inciso final del artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene jurisdicción para administrar justicia en materia de derechos políticos siendo sus fallos de última instancia. El artículo 221 numeral 2 de la Constitución establece la competencia de este Tribunal para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales, disposiciones que guardan relación con los artículos 18, 61, 70 numerales 5 y 13 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

b) De conformidad con el inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la Ley Orgánica citada, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a una de las juezas o jueces por sorteo

para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

c) En la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título Cuarto, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia se encuentra previsto el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, así como en los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral. En consecuencia, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza y el procedimiento previsto para el presente trámite.

d) En la sustanciación de la presente causa, se han observado las solemnidades esenciales que le son propias, por lo que se declara su validez, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.-

El expediente consta de ochocientas noventa y nueve (899) fojas, de las cuales se consideran los siguientes documentos:

1) Denuncia del Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, dirigida a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, en la que señala: **a)** Que la empresa **"SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", y su encuestador SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO** […] **NO** ha cumplido con su finalidad específica, esto es 'garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales', pues contratada con criterios de exclusividad, por los Canales de Televisión […] GAMATV y TC TELEVISIÓN para realizar el proceso de pronóstico electoral denominado "EXIT POLL" (sondeo a boca de urna), sus resultados, anticipados la tarde y noche del pasado sábado 7 de mayo de 2011, tras cierre de la jornada electoral, tuvieron un alto margen de error que publicitó un supuesto aplastante triunfo del SI en la Consulta, el cual horas mas tarde fue desmentido por el CONTEO RÁPIDO del Consejo Nacional Electoral, que pone en evidencia – salvo su error u omisión- una maniobra de desinformación que puede tener indicios, inclusive, de responsabilidad penal..."; **b)** Que dicha encuestadora "como es de conocimiento público, no ha garantizado información **veraz y seria** en su pronóstico electoral llamado exit poll, pues su trabajo no se ha sujetado a los procedimientos, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores, de conformidad con el inciso segundo del artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia..." **c)** Solicita se proceda "a **SANCIONARLA,** con la **INHABILITACIÓN POR EL SIGUIENTE PERIODO ELECTORAL, sin perjuicio de hacerla extensiva, también, a la persona natural que apareció ante la opinión ante la opinión pública (sic) como su real ejecutor, el señor SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO**..." Anexa dos fojas simples. (fs. 1 a 4)

2) Providencia de 12 de mayo de 2011, a las 16h25, que en lo principal dispone se remita por parte del Lcdo. Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral, copias certificadas de documentos correspondientes al presente proceso. (fs.7). En razón de ello se envían a este Tribunal: El Oficio No. 0002150 de 30 de abril de 2011, que contiene la Resolución PLE-CNE-2-29-4-2011, de los mismos día, mes y año; y, CERTIFICADO DE REGISTRO No. 2, Registro de Encuestadoras Electorales, que señala que SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA., se encuentra legalmente inscrito en el Registro Nacional de Encuestadoras Nacionales. (fs. 10 a 13).

3) Providencia de 26 de mayo de 2011, a las 10h47, en la que se ordena que la señorita Ana Isabel Oña Gudiño, acredite su comparecencia en la presente causa, y se toma en consideración la designación del abogado Carlos Aguinaga para que actúe a su nombre y representación, así mismo que a través de Secretaria General de este Tribunal, se le asigne un casillero contencioso electoral. (fs.35 a 38). Se presenta el documento que señala, a la mencionada ciudadana, como Gerente General de la compañía "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA." (fs. 41).

4) Escrito del licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral, a través del cual señala domicilio para futuras notificaciones, y designa a sus abogados patrocinadores (fs. 40). Consta la certificación realizada por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, de la designación como Presidente de dicho organismo. (fs. 39).

5) Escrito presentado ante este Tribunal, por el abogado Abdalá Bucaram Pulley, en el que anuncia la prueba a tomarse en cuenta en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. (fs. 45).

6) Oficio No. 002534 de 10 de junio de 2011, suscrito por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, recibido los mismos día, mes y año a las 14h43, (fs. 47); documentación que es presentada en copias certificadas y en la que constan los siguientes documentos:

- **i)** Oficios suscritos por la señorita Ana Isabel Oña Gudiño, en su calidad de Gerente General de "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA LTDA."; dirigidos al licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral para el registro respectivo de la empresa a la cual representa, (fs. 53 a 55); Documento Técnico de abril de 2011, (fs. 56 a 71); Escritura Pública de la Constitución de dicha Compañía, (fs. 72 a 84 y 88 a 94 vuelta); Registro Único de Contribuyentes- Sociedades (RUC), Registro Único de Proveedores, (RUP); y, Nómina del Personal perteneciente a la mencionada empresa, así como de sus clientes. (fs. 81 a 84 y 95 a 100).

- **ii)** Notificación No. 0000955 de 24 de marzo de 2011 suscrita por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral mediante la cual se da a conocer la resolución PLE-CNE-5-22-3-2011 en la que se resuelve disponer que si de cumplirse con los requisitos establecidos en el Reglamento para Empresas que Realicen Pronósticos Electorales

para el Proceso Electoral de Referéndum y Consulta Popular 2011, se proceda al registro correspondiente. (fs. 85). Oficio No. 007-DFFP-CNE-2011 de 25 de marzo de 2011, suscrito por el doctor Fabricio Cóndor Paucar Director de Fiscalización del Financiamiento Político, dirigido a la Señora Ana Isabel Oña en el que se le solicita remita documentos notariados correspondientes a su petición para ser parte de las empresas que realizan pronósticos electorales. (fs. 86). Se adjuntan los documentos solicitados. (fs. 87 a 181).

iii) Oficio No. 0002150 de 30 de abril de 2011, suscrito por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral dirigido a Ana Isabel Oña, en el que se da a conocer la resolución PLE-CNE-2-29-4-2011 que autoriza a SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA., para que realice el EXIT POLL, en el Referéndum y Consulta Popular 2011, que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2011. (fs. 182).

iv) Estudio cuantitativo para la divulgación de resultados generales extraoficiales de la convocatoria a enmienda constitucional y Consulta Popular, sábado 7 de mayo de 2011: Producto 1, 25 de abril de 2011 (fs. 183 a 196); Producto 2: encuesta pre electoral, de 6 de mayo de 2011 (fs. 197 a 210); Informe Final: Resultado Exit Poll de 10 de mayo de 2011 (fs. 211 a 239).

v) Copia certificada del Contrato de Prestación de servicios de Información Electoral para la televisión suscrito por el señor Carlos Coello Beseke, Gerente de TC Televisión, y Ana Isabel Oña, Gerente General de S.P. Investigación y Estudios Cía. Ltda. (fs. 240 a 243 vuelta). Se adjunta 3 CD´s que contienen resultados del escrutinio nacional del examen de las actas levantadas por las Juntas Provinciales Electorales; Producto Final Exit Poll; Monitoreo Electoral 2011-Conteo rápido Resultados Definitivos. (fs. 244 a 246).

7) Escrito presentado por el abogado Abdalá Bucaram Pulley, en su calidad de Asambleísta Nacional, mediante el cual señala la pertinencia de la prueba por él solicitada, en lo referente a la información de los contratos celebrados en el presente caso e insiste en que se revoque el contenido del Considerando SEXTO de la providencia de 8 de junio de 2011, a las 13h45, que consiste en que a los denunciados se les pueda preguntar y repreguntar sobre actos o hechos que se informen (fs. 264); con este escrito adjunta varios artículos de prensa. (fs. 248 a 263).

8) Oficios No. 0011-2011-VP-TCE y 0010-2011-VP-TCE de 8 de junio de 2011, suscritos por la doctora Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora encargada, dirigidos a los señores Eduardo Torres, Gerente Regional de TC Televisión-Quito y Enrique Arosemena, Gerente General de GAMATV-Quito, respectivamente, mediante los cuales se solicita den cumplimiento a lo ordenado en el auto de 8 de junio de 2011, a las 13h45, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 266 y 267). La fe de recepción consta en dichos oficios. Así mismo y en igual orden los oficios No. 0012-2011-VP-TCE y 0013-2011-VP-TCE de 13 de junio de 2011, en donde se solicita por tercera ocasión la documentación requerida, (fs. 276 y 277); la fe de recepción consta en ellos.

9) Escrito presentado por el doctor Carlos Aguinaga, abogado defensor de los denunciados, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta de este Tribunal, el día 12 de junio de 2011, a las 12h46; en el cual anuncia la prueba de la señorita Ana Isabel Oña Gudiño, la cual se contiene en los siguientes documentos: **i)** Prueba documental I: Documento Técnico, de abril 2011, que contiene: antecedentes, definición de Exit Poll, objetivos, metodología, operativo de campo, sistema de recopilación de datos, protocolos, cronograma, equipo técnico y eventualidades; (fs. 280 a 290); **ii)** Prueba documental II: Instructivo y protocolo para capacitadores/as de 18 de abril de 2011, que contiene: antecedentes, definición, objetivos y finalidad del Exit Poll, quienes hacemos el Exit Poll, capacitación, recomendaciones, datos de contacto y emergencia, (fs. 291 a 305); **iii)** Prueba documental III: Manual para encuestadores/as de 18 de abril de 2011, (fs. 306 a 316); **iv)** Prueba documental IV: Instrucciones para encuestadores/as de 7 de mayo de 2011, (fs. 317); **v)** Prueba documental V: Informe Final Exit Poll: Informe Final del Exit Poll, de 20 de mayo de 2011, (fs. 318 a 359); **vi)** Prueba documental VI: Producto 1 de 25 de abril de 2011, que contiene: justificación, objetivo del Exit Poll 2011, metodología, diseño de formulario, horarios de levantamiento de información, tipología, muestra de recintos, (fs. 360 a 373); **vii)** Prueba documental VII: Producto 2: encuesta pre electoral, de 6 de mayo de 2011, que contiene: justificación, objetivo del Exit Poll 2011, metodología, descripción de la encuesta preelectoral, muestra obtenida de la encuesta preelectoral, principales resultados, anexos digitales, (fs. 374 a 387); **viii)** Prueba documental VIII: Informe Final- Resultados Exit Poll, de 10 de mayo de 2011, que contiene: justificación, objetivos del Exit Poll 2011, metodología, descripción del Exit Poll, Simulacro- Encuesta preelectoral, día de las elecciones, recopilación de información, Anexo 1: Aspectos principales de la evaluación del operativo de campo y anexos digitales, (fs. 388 a 416; 590 a 618 y 785 a 813); **ix)** Prueba documental IX:Estudio cuantitativo para la divulgación de resultados generales extraoficiales de la convocatoria a enmienda constitucional y consulta popular, sábado 7 de mayo de 2011, Exit Poll: Producto 1, de 4 de mayo de 2011, (fs. 417 a 430); **x)** Prueba documental X: Producto 2, encuesta preelectoral de 6 de mayo de 2011, (fs. 431 a 444); **xi)** Prueba documental XI: Informe Final Resultados Exit Poll, de 10 de mayo de 2011, (fs. 445 a 473); Prueba documental XII: coordinadores y supervisores provinciales, (fs. 474 a 479); **xii)** Prueba documental XIII: Registro de encuestadoras electorales, Certificado de Registro No. 002, del señor Santiago Pérez Pazmiño; **xiii)** resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, y documentación notariada referente a otros procesos de Exit Poll, realizados por la empresa, (fs. 480 a 493); **xiv)** Documentación en la que consta la aceptación que hiciera el Tribunal Supremo Electoral, para que el señor Santiago Pérez Pazmiño, participe en el proceso electoral Referéndum Constituyente 2008, así como los resultados obtenidos de su encuesta, (fs.

494 a 511); **xv)** Prueba documental XV: Documentación relativa al proceso electoral Referéndum y Consulta Popular 2011, (fs. 525 a 536); **xvi)** Copia notariada y certificados de varios contratos realizados por la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", según los cuales ha habido el cumplimiento debido de las obligaciones contraídas, (fs. 537 a 551); **xvii)** Prueba documental XVIII: Copia notariada de varios contratos realizados con diferentes entidades del la empresa antes mencionada, (fs. 552 a 573); **xviii)** Prueba instrumental I: 2 CD´s del Primer Producto, Segundo Producto, Informe Final EXIT POLL;y, 2 CD´s del Informe Adicional de Análisis EXIT POLL; (fs. 574 y 575). Pruebas que han sido anexadas en el escrito presentado por el doctor Carlos Aguinaga, abogado defensor de la señorita Ana Isabel Oña Gudiño y del señor Santiago Pérez Pazmiño. (fs. 576 a 582).

10) Oficio No. 150-S.P.-2011, de 31 de mayo de 2011, dirigido a la Compañía Televisión del Pacífico TELEDOS S.A. (GAMA TV), suscrito por Ana Isabel Oña, representante legal de S.P. Investigación y Estudios Cía. Ltda., mediante el cual y en atención al pedido que se le hiciera, remite tres Cd's que contienen los reportes parciales y reporte final entregados el 7 de mayo de 2011: primer reporte de las 14h34, segundo reporte de las 14h05 y tercer reporte de Resultados Finales de las 16h10, entregados por Emily Utreras, Consultora de Comunicación de la empresa, a los señores Carlos Ochoa y Diego Armendáriz, productor del programa Ecuador Decide 2011; señala que en estos archivos están establecidos claramente las horas y la fecha de dichos reportes, que dan cumplimiento a la Cláusula SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, literal c), del contrato suscrito para realizar la "Prestación de servicios de información electoral para la Televisión". (fs. 585; 627 a 630 y 815 a 820). Consta la fe de envío, vía correo electrónico, (fs. 588); este texto tiene un alcance en el oficio No. 152-S.P.-2011, que señala que el primer reporte fue enviado a las 11h34 y no a las 14h34, como consecuencia de un error en el tipeo. (fs. 589 y 814)

11) Oficio AJ-74-2011, suscrito por Enrique Arosemena Robles, Gerente General y representante legal de la Compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A, dirigido a la doctora Tania Arias Manzano, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual, adjunta la siguiente documentación: Copia certificada del Contrato de Prestación de Servicios de Información Electoral para la Televisión, efectuado por el señor Enrique Arosemena Robles, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., y la señora Ana Isabel Oña Gudiño, representante legal de la empresa SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA, (fs. 619 a 626); Informe Final que contiene un CD del Resultado del Exit Poll, presentado por la empresa encuestadora y el oficio 150-S.P.-2011 de 31 de mayo de 2011, con 3 Cd's como anexos. (fs. 631). Igual texto señala el Oficio s/n de 13 de junio de 2011, suscrito por el señor Carlos Coello Beseke, Gerente de la Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. (fs. 778 a 784)

12) Providencia de 14 de junio de 2011 a las 18h30, mediante la cual se dispone nombrar como perito técnico al doctor PhD Luis Horna, a fin de que presente un informe debidamente sustentado sobre el procedimiento, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para el proceso de "exit poll" de la Consulta Popular y Referéndum 2011, realizado por la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA", concediéndole el plazo de ocho días para presentar el informe correspondiente, (fs. 634); a través del oficio No. 018-2011-VP-TCE de 14 de junio de 2011, es entregado personalmente dicha providencia. (fs. 635)

13) Acta de Posesión de Perito Técnico de 15 de junio de 2011, a las 10h10, suscrito por la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor PHD Luis Horna y la doctora Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora encargada. (fs. 638)

14) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento de la causa 270-2011, de miércoles 15 de junio de 2011 a las 10h10, realizada en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral, seguida por el Asambleísta Nacional abogado Abdalá Bucaram Pulley, en contra del Santiago Pérez Pazmiño y la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", con su representante legal, señorita Ana Isabel Oña; en ella, actúan como abogados patrocinadores los doctores Fausto Garcés, Carlos Aguinaga, respectivamente. (fs. 639 a 644). Copia de cédulas de identidad de los comparecientes, sus abogados defensores, testigos y perito. (fs. 645 a 659).

15) En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se hizo entrega de los siguientes documentos: **i)** Contestación a la denuncia, por parte de la señorita Ana Isabel Oña Gudiño, representante legal de "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA." (fs. 660 a 667 vuelta); **ii)** Conceptos de lo que significa una Encuesta Electoral, (fs. 668 a 687); **iii)** CD bajo el título "Personal de Planta, Personal Ocasional, (Consultores) mayo de 2011", (fs. 688); **iv)** Registro Único de Proveedores (RUP), del Sistema de Contratación Pública, perteneciente a SP INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS, como compañía limitada, con Ana Isabel Oña, como máxima autoridad o representante legal, con la descripción de los bienes, obras o servicios suministrados, así como la dirección de su domicilio principal, (fs. 689); **v)** Registro Único de Contribuyentes (RUC), razón social: Santiago Pérez Investigación y Estudios CÍA. LTDA., con su representante legal Ana Isabel Oña Gudiño, en donde como actividad económica principal se establece a la prestación de servicios de asesoría, investigación y estudios del sector público y privado en proyectos de comunicación y opinión (fs. 690); **vi)** Certificado de cumplimiento de las obligaciones que el empleador Santiago Pérez Investigación y Estudios Cía. Ltda., mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (fs. 691) **vii)** Escritura Pública de la Constitución de la Compañía denominada Santiago Pérez Investigación y Estudios Cía. Ltda., elevada ante el doctor Rubén Dario Espinoza, Notario Undécimo de Quito, (fs. 692 a 701); **viii)** Resolución No 08.Q.IJ.000618 de la Superintendencia de Compañías, suscrita por el doctor Eduardo Guzmán Rueda, Director del Departamento Jurídico de Compañías, en la que se resuelve aprobar la constitución de la compañía SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA., (fs. 702); **ix)** Recortes de prensa relativos a los resultados del exit poll, (fs. 703 a 728); **x)** Alegato

Técnico: Estudio cuantitativo para la divulgación de resultados generales extraoficiales de la convocatoria a enmienda constitucional y consulta popular 2011, de 7 de mayo de 2011, (fs. 729 a 778).

16) Oficio s/n de 16 de junio de 2011, suscrito por el señor Hugo Barber, Director General "PERFILES Opinión", dirigido a la doctora Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora encargada, a través del cual remite sus apreciaciones sobre aspectos del exit poll, realizados por la empresa Santiago Pérez y Asociados el día 7 de mayo de 2011. (fs. 822 y 823).

17) Oficio s/n de 16 de junio de 2011, suscrito por el señor Sebastián Corral, Gerente General Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., dirigido a la doctora Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora encargada, mediante el cual señala que existieron contrataciones con Santiago Pérez, Participación Ciudadana, y, Diderot Barreto, señalando que el objeto de los contratos fue cumplido, pero que CRATEL no tiene archivados los resultados. (fs. 824).

18) Oficio s/n de 16 de junio de 2011, suscrito por el señor José Alejandro Ortiz, Vicepresidente Regional de CANAL UNO, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual, se señala que NO se ha realizado ningún tipo de contrato con la Compañía Santiago Pérez Investigación y Estudios CIA. LTDA., por tal motivo no puede informar nada al respecto. (fs. 825).

19) Informe Pericial realizado por el doctor PhD Luis Horna Huaraca, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta de este Tribunal, en él se determinan: Antecedentes: 1. Consideraciones generales. Área de conocimiento pericial; 2. Método; Observaciones, y 3. Comparaciones; Cuadro de errores de los resultados del conteo rápido y del exit poll con respecto a los resultados definitivos del Consejo Nacional; y, Conclusiones. (fs. 830 a 839).

20) Acta de la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento de miércoles 22 de junio de 2011 a la 10h05, en la cual comparecen los abogados patrocinadores de las partes, el perito designado, y los denunciados, en la cual el Dr. Luis Horna, hace la exposición del informe pericial (fs. 840 a 842).

21) Escrito presentado por el doctor Carlos Aguinaga, abogado defensor de los denunciados, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, el cual realiza aportes respecto del Informe Pericial de 22 de junio de 2011. (fs. 843 a 845)

22) Acta de la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento de lunes 27 de junio de 2011 a la 15h05, en la cual comparecen los abogados patrocinadores de las partes, el perito designado, y los denunciados, en la cual el Dr. Luis Horna, da lectura a la ampliación del informe inicial. (fs. 846 a 848).

23) Alcance del Informe Pericial, presentado por el doctor PhD Luis Horna Huaraca, en el cual se realiza el respectivo análisis y conclusiones. (fs. 849 y 850).

24) Escrito presentado por el doctor Carlos Aguinaga, abogado defensor de los denunciados, dirigido a la doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, en el cual se da contestación a la denuncia a través de varios considerandos, entre los cuales realiza aportes a la prueba que ha presentado. (fs. 851 a 862). Adjunta impresiones de páginas de internet, (fs. 868 a 869). Además copia de la presentación "Muestreo Exit Poll", realizado por el matemático Edwin Galindo, Consultor Estadístico, cuyo contenido consiste en: definiciones básicas, el proceso de muestreo, tipos de muestreo, exit poll, y, tratamiento estadístico de los datos. (fs. 870 a 885).

TERCERO.- GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76, 167, 168 numerales 4, 5, 6, y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, que garantizan el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, se realizaron las siguientes diligencias:

a) La citación personal a los presuntos infractores, realizadas de acuerdo con el siguiente detalle: el día lunes 23 de mayo de 2011 a las 17h05 a la señorita Ana Isabel Oña Gudiño y el día martes 24 de mayo de 2011 a las 9h50 al señor Santiago Pérez Pazmiño, en donde se les hace conocer que deben designar abogado defensor y ejercer su derecho a la defensa. Se señala para el día miércoles 15 de junio de 2011, a las 10h00 la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento; y, se designa a la Dra. Marcela Borja, como Defensora Pública.

b) El día y hora señalados, se llevó a cabo la mencionada Audiencia, en la cual se tuteló el debido proceso garantizado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO.- IDENTIDAD DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES.-

De acuerdo con la denuncia presentada los presuntos infractores responden a los nombres de Santiago Pérez Pazmiño y Ana Isabel Oña Gudiño, Gerente General y representante legal de la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA."

QUINTO.- CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES.-

La denuncia presentada por el Asambleísta Nacional Ab. Abdalá Bucaram Pulley, menciona los siguientes hechos: **a)** Que la empresa **"SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CÍA. LTDA.", y su encuestador Santiago Pérez Pazmiño** […] **NO** ha cumplido con su finalidad específica, esto es 'garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales', pues contratada con criterios de exclusividad, por los Canales de Televisión […] GAMATV y TC TELEVISIÓN para realizar el proceso de pronóstico electoral denominado "EXIT POLL" (sondeo a boca de urna), sus resultados, anticipados la tarde y noche del pasado sábado 7 de mayo de 2011, tras cierre de la

jornada electoral, tuvieron un alto margen de error que publicitó un supuesto aplastante triunfo del SI en la Consulta, el cual horas mas tarde fue desmentido por el CONTEO RÁPIDO del Consejo Nacional Electoral, que pone en evidencia – salvo su error u omisión- una maniobra de desinformación que puede tener indicios, inclusive, de responsabilidad penal...”; **b)** Que dicha encuestadora “como es de conocimiento público, no ha garantizado información **veraz y seria** en su pronóstico electoral llamado exit poll, pues su trabajo no se ha sujetado a los procedimientos, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores, de conformidad con el inciso segundo del artículo 303 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia...” **c)** Solicita se proceda “a **SANCIONARLA,** con la **INHABILITACIÓN POR EL SIGUIENTE PERIODO ELECTORAL, sin perjuicio de hacerla extensiva, también, a la persona natural que apareció ante la opinión ante la opinión pública (sic) como su real ejecutor, el señor SANTIAGO PÉREZ PAZMIÑO**...”

SEXTO.- AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

6.1. AUDIENCIA DEL DIA MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2011, LAS 10H00:

a) Luego de realizada la citación personal a los presuntos infractores, se llevó a cabo la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, el día miércoles 15 de junio de 2011, a las 10H00, en el Auditorio del edificio en donde funciona el Tribunal Contencioso Electoral, situado en la calle José Manuel de Abascal N37-49 entre Portete y María Angélica Carrillo de la ciudad de Quito, con la presencia de las partes y de sus abogados defensores y con la presencia del Dr. Luis Horna, perito designado por esta autoridad.

b) De la grabación magnetofónica de la Audiencia, destacamos lo siguiente:

b.1. El Ab. Víctor Hugo Sicouret en representación del Ab. Abdalá Bucaram Pulley, en lo principal, manifestó lo siguiente:

i) Que el exit poll realizado por el Estado dio como resultado que los resultados se alejaron de la realidad de aquellos publicados por el CNE; **ii)** que el exit poll viene a ser un sondeo a la salida de los recintos electorales en donde se le pregunta al elector por quien votó en el caso de las votaciones unipersonales y pluripersonales; **iii)** que los elementos claves del exit poll, según estudios son: **a)**) El objetivo; **b)** El método lógico; **c)** el análisis que se hace; y **d)** la divulgación de resultados. **iv)** que del análisis del artículo 303 del Código de la Democracia, el Estado garantiza la veracidad y la seriedad de los exit poll y para ello se debe cumplir con los procedimientos de la información que sean definidas de acuerdo con la técnica y las ciencias sociales; **v)** que el exit poll, fue una farsa, una mentira y existen declaraciones de Santiago Pérez, quien dice que posiblemente falló por culpa del encuestado porque existían muchas preguntas. Esto dijo el señor Señor Santiago Pérez, entonces quiere decir que le falló uno de los elementos básicos y fundamentales que es el procedimiento metodológico para extraer del sujeto electoral, para decirle “yo voté en esa forma”, por lo tanto falló el análisis. Por qué no se esperó el conteo rápido que hizo el CNE, por qué no conjugar las dos cosas, pero esto no se esperó. A las 17h00 se hizo la declaración de que con el 62% ganaba el sí y con el 38% ganaba el no; **vi)** que en definitiva el resultado que se dio fue otro, fallaron todos los elementos y se dijo que existía un estrecho margen, a excepción del señor Santiago Pérez; **vii)** que se ha acudido al Tribunal Contencioso Electoral para denunciar, que no se ha acudido al fiscal, porque se espera que en la resolución se establezca algún dolo y al hacerlo, usted señora jueza, deberá comunicar al Fiscal este hecho.

b.2) El Dr. Carlos Aguinaga, defensor de los denunciados indicó lo siguiente:

i) Que contesta la denuncia formulada por el Ab. Abdalá Bucaram negando en forma absoluta los fundamentos de hecho y de derecho ya que pretende se transgredan derechos subjetivos constitucionales consagrados en los artículos 16 numeral 1, 18, 33, 66 numeral 6 y otros derechos como el buen nombre y la honra de los denunciados, así como la seguridad jurídica que en esencia es que se vulnere el principio de legalidad y en virtud de ello, solicita se aplique el numeral 1 del Art. 11 y 76 de la Constitución al momento de fallar; **ii)** Que plantea como excepciones: **a)** Improcedencia de la denuncia o de la acción, por cuanto no está tipificado en el código electoral los actos ejecutados por mi defendido, durante y después del exit poll. **b)** Existe falta de derecho del actor por no ser sujeto político como lo determina el Art. 244 del Código de la Democracia. **c)** Inexistencia de la infracción electoral, porque en los hechos expresados el 7 de mayo de 2011 no se configura ningún elemento constitutivo de infracción electoral. **iii)** Que en primer lugar se habla de una empresa que realiza pronósticos electorales, ya vamos a ver qué significa y qué es encuesta electoral. En segundo lugar atribuye cualidades a la persona natural Santiago Pérez como encuestador oficial del gobierno nacional. En tercer lugar habla de que ha sido contratado con criterios de exclusividad, lo cual no es cierto. En cuarto lugar, no está regulado como sanción ni como infracción ni penal ni de otra naturaleza el hecho de que se difunda un hecho derivado del exit poll, con un mayor o menor margen de error, pero también se esta acusando una maniobra de desinformación salvo error u omisión. **iv)** Que el tipo de infracción del Art. 303 tiene vacíos de fondo porque no han regulado las encuestas, los análisis políticos, en la legislación existen tres normas que regulan la actividad de las encuestadoras. La primera que se refiere al registro e inscripción de dichas encuestadoras para poder funcionar. La segunda prohibición de informar diez días antes de las elecciones a los medios de comunicación y, la tercera está mal concebida en el Código de la Democracia. **v)** que la sanción es doble, porque dice suspensión de la difusión y la inhabilitación para el próximo proceso electoral. Aquí es necesario analizar el núcleo de esta infracción: no ceñir su trabajo a la técnica y a la ciencias sociales. Cuál es el sujeto activo, mi defendida no realiza pronósticos electorales, como consta en el objeto social de la empresa. Además el sujeto pasivo el titular del bien lesionado es el Estado, el bien jurídico que se protege, pero qué afectación tiene cuando es una información no oficial. Cuál es el objeto material de esta infracción, los estudios y procedimientos, en cuanto al resultado no lo ha establecido el Art. 303; **vi)** que no está tipificado el error en los resultados obtenidos en el exit poll y peor su

información a la opinión. No existe vulneración de norma electoral. Se confunde encuesta con conteo rápido **vii)** Que la doctrina nos ayuda a explicar que no hay juicio sin ley previa, no hay sanción sin ley previa. **viii)** que la difusión del exit poll es una difusión ética porque se difundió votos válidos para contabilizar los resultados, y los resultados del CNE tuvieron las cuatro variables: si, no, nulos, y blancos, pero todos conocemos que el único que tiene facultad para proclamar resultados es el CNE en uso de su facultad constitucional y legal. **ix)** que sus actuaciones gozan de legitimidad y legalidad y por lo tanto pide se rechace las pretensiones del denunciante, por cuanto la empresa no realiza pronósticos electorales y al rechazar que se califique como maliciosa y se tomen en cuenta las pruebas que se aportó. Sobre mi defendido Santiago Pérez debo decir que no se encuentra dentro de la tipología del artículo 303 del Código de la Democracia.

b.3) El Dr. Fausto Garcés, abogado defensor del Ab. Abdalá Bucaram, manifestó:

i) Que cuando el denunciante solicitó la presencia de testigos, expresamente se pidió el nombre de las personas y los hechos sobre los que iban a testificar. **ii)** Que ante la premura no van a presentar testigos, sin embargo objeto el hecho de que a la contra parte se le da paso a la prueba testimonial pero no presenta el cuestionario para los testigos, consecuentemente, porque atenta contra el debido proceso, impugna y expresamente solicita no se realice ninguna diligencia testimonial porque se afecta el derecho de igualdad de las partes; **iii)** que no puede ser que a última hora la contra parte en menos de dos días, presente pruebas, que han dado lugar a varias providencias que se han expedido a última hora y esto afecta las garantías del debido proceso, por lo que impugnan la prueba testimonial por no haberse permitido la igualdad procesal.

b.4) La parte denunciada practicó prueba testimonial y llamó como testigos a los siguientes ciudadanos:

Ralph Douglas Murphine, quien señaló que es consultor por 44 años y miembro de consultores políticos en los Estados Unidos de Norteamérica, que ha participado en algunos exámenes políticos de países y gobiernos y conoce del tema. Sobre el exit poll del 7 mayo manifiesta que lo que ha leído en la prensa no es precisamente correcto, por cuanto hay errores estadísticos y nivel de confianza. Recomienda que el gobierno debe imponer una norma o ciertos requisitos como capacitación, experiencia en análisis estadístico. La encuesta tiene una curva de probabilidad y exactamente la misma reglas de margen de error y nivel de confianza.

La parte acusadora formuló las siguientes preguntas:

PREGUNTA: Cuál es el margen de error aceptable en un exit poll.

RESPUESTA: Esa es su decisión establecer este margen; normalmente es de 5% pero eso también puede ser erróneo según mi estimación.

Santa Arisveth Mora Rubio, manifestó que tiene una encuestadora en México con 10 años de experiencia y ha trabajado en 16 estados de ese país. Señaló que el exit poll es una herramienta sujeta a error y que la encuesta es un instrumento de investigación que orienta a lo que la gente piensa. Los pronósticos son probabilidades. El tema electoral lleva la idea de probabilidad. Algunas encuestadoras dieron pronósticos y todos dijeron que ganaría el sí y las distancias van de 64, 62, 55, algunas más y otros menos, pero que eso no importa por cuanto al final ganó el sí. Lo contrario sí hubiera sido un error.

PREGUNTAS PARTE ACUSADORA:

El Dr. Garcés, abogado de la parte denunciada, manifiesta que se tome en cuenta para efectos procesales que la testigo es amiga del señor Santiago Pérez y por lo tanto de la compañía y pregunta si tiene experiencia en este tipo de encuestas con diez preguntas. La testigo manifiesta que no tiene experiencia y aclara que no es amiga del señor Santiago Pérez, sino su colega como lo son otros encuestadores.

PREGUNTA: Cuál método se utiliza a boca de urna para tener la seguridad de que lo que le están preguntando y lo que contestó tiene la correspondencia debida, por lo tanto qué método se utiliza a boca de urna para tener seguridad de que la persona votó como votó.

RESPUESTA: no se trata de declarar un solo ganador porque hubo diez preguntas. La cuestión es preguntar por qué voto: por el sí o por el no. La muestra sigue siendo una sola.

PREGUNTA: Cuál es la consecuencia práctica de que hubo una diferencia del 22%.

RESPUESTA: en la nota metodológica se manejó un margen de error de mas menos de dos. No interesa el margen de error. El margen nos dice cuidado, es solo una estimación.

Francisco Xavier Rocha Romero al contestar la pregunta formulada por el abogado de la parte denunciada en el sentido de que le informe sobre las encuestas, respondió que Santiago Pérez ha sido identificado como encuestador oficial del gobierno y que esto tiene un peso y allí las percepciones cuentan. Este posicionamiento pudo haber causado recelo en la ciudadanía al contestar a la única persona que iba a realizar esta encuesta. El margen de error es el que se plantea como hipótesis antes de realizar la encuesta. Otro margen de error puede ser cuando pesan las percepciones.

PREGUNTAS DE LA DEFENSA:

PREGUNTA: ¿Puede fallar el exit poll por la conducta del ciudadano?

RESPUESTA: sí podría porque una encuesta política tiene que ver con lo público y la gente se cuida mucho. La influencia del gobierno pesa mucho y este es un factor exógeno y eso hace la diferencia.

PREGUNTA: ¿Las encuestas son el resultado final?

RESPUESTA: Las encuestas son la fotografía del momento y esa fotografía no significa que los fotografiados son

inmóviles. La información estadística no sustituye a los resultados electorales, porque además de ser técnico, ha de jugar el prestigio de las personas y los resultados de las encuestas pueden cambiar.

PREGUNTA: ¿Es conveniente prohibir o permitir los exit poll?

RESPUESTA: siempre es mejor permitir para tener libertad y se debe responder por lo que hacemos, en virtud de lo que hemos contratado, eso no significa que seamos infalibles, ya que la encuesta debe ser igual a los resultados finales.

PREGUNTAS PARTE ACUSADORA:

PREGUNTA: ¿En el exit poll, falló el método social?.

RESPUESTA: la falla del resultado, responde a que si es cuantitativo no toma en cuenta lo cualitativo; lo que no se puede medir es la voluntad de los ciudadanos, pero no hay una forma de medir una muestra, pero eso no la daña ni la descalifica; que hay una manipulación de las investigaciones de quienes ejercen el poder, tengo la convicción que sí, pero capaz que el resto de ciudadanos no tienen la misma percepción, pero lo que quiero decir es que hay temas del comportamiento humano que no nos permite predecir lo que va a pasar. Qué margen debería tener este comportamiento humano, eso depende de cómo se despierta. El problema es que hasta ahora no se puede medir este comportamiento.

PREGUNTA: Usted dice que en este tipo de encuestas pesa mucho el cliente. ¿Pesó el hecho de que los clientes son los canales de televisión incautados?

RESPUESTA: No, no he dicho que pesa el cliente, en este caso la forma de gobierno es la que pudo haber influido en una respuesta distinta a lo que realmente pasó.

Santiago Andrés Pérez Pazmiño hizo una breve presentación del trabajo efectuado y de las características técnicas para la realización del exit poll, en los días previos al 7 de mayo de 2011. Dijo que la empresa tiene experiencia y que se realizaron tres exit poll anteriores: en el 2007 (asambleístas), 2008 (referéndum) y 2009 (elecciones generales). Que en esos ejercicios se ha tenido grados de precisión, en algunos casos no se tuvo aciertos. Indica que el exit poll es una encuesta, un levantamiento con votantes a la salida de las urnas inmediatamente después de que hayan votado, es una herramienta que permite conocer el resultado general de la votación por los distintos segmentos de la población y si se requiere, y si ése es el objetivo del exit poll se puede hacer una indagación acerca del perfil de los votantes de cada partido o de cada opción. Este exit poll se realiza con una muestra probabilística y representativa del universo de los electores, es útil para ir midiendo a lo largo de la jornada electoral la tendencia de la votación y hacer una estimación del resultado oficial o final. Es de recalcar que el exit poll no es un resultado oficial, sino una estimación probabilística, esto se dijo insistentemente a los medios de comunicación a lo largo de los días previos al 7 de mayo. Se pregunta a las personas que han salido del recinto luego de votar, por qué opción votaron, con el apoyo de una copia no válida de la papeleta de la consulta, se complementa con información socio-demográfica, tales como edad, sexo y lugar de la votación. Que la empresa realizó una selección aleatoria de los recintos electorales que fueron seleccionados a partir del distributivo del padrón electoral entregado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Presenta un mapa con el número de recintos que fueron seleccionados para realizar el exit poll, lo cual ayudó para planificar el trabajo que se efectúo el 7 de mayo. Manifiesta que el equipo estuvo conformado por 198 encuestadores de campo, 37 supervisores y 17 coordinadores nacionales. Señala que el exit poll contó con la autorización explícita expedida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Da una explicación del organigrama del equipo técnico que trabajó en esa jornada, cada uno con funciones específicas conformado por profesionales multidisciplinario, siendo él su Director General Técnico, cuyo técnico principal es el matemático Edwin Galindo quien desarrolló la muestra probabilística para la realización y por lo tanto para el sorteo de los recintos que fueron seleccionados para el trabajo del operativo de campo y este trabajo es fundamental en términos técnicos puesto que orienta y dimensiona el trabajo en general de todo el exit poll.

Edwin Marcelo Galindo, manifiesta que trabaja en la empresa del señor Santiago Pérez como consultor estadístico y es personal externo. Explica cómo fue diseñada la muestra estadística, para lo cual empezó con unas definiciones básicas de un proceso estadístico, procesos de muestreo, tipos de muestreo de los que se puede implementar y el que se implementó en el exit poll, para terminar con el tratamiento estadístico de los datos que se dieron el día 7 de mayo. Define a la población señalando que para el caso particular, son todos los electores que se acercaron a votar ese día, por lo que se tiene que tomar una muestra que es un conjunto reducido de individuos de la misma población que permite obtener información que después se deberá generalizar hacia la totalidad de la población motivo de la investigación. Señala que se tiene varias formas de obtener información: el primero puede ser un censo que es un estudio de todos los elementos de la población, pero que el día de las elecciones sería imposible encuestar a todos los electores por lo que se toma un grupo reducido del cual se obtiene cierta información y con esta información se pasa a ver cuál sería la respuesta a nivel de la población, que sería el caso del exit poll. Explica que es la unidad muestral: cada uno de los orígenes de la información que se compone la muestra que, en este caso son los votantes, quienes proporcionan de manera voluntaria la información, situación que hay que tomar en cuenta ya que no se puede tener control sobre ellos, se confía en que éstos colaboren voluntariamente y digan la verdad, aspectos que están fuera del alcance de la empresa. Señala qué se debe tener en cuenta en una investigación por muestreo: a) el marco muestral que es la enumeración exhaustiva de todas las unidades muestrales, en este caso el marco muestral es el padrón electoral; b) el alcance de la muestra que son las limitaciones que pueden darse a la restricción del marco muestral, en el caso de la empresa, por ejemplo, es que no se puede tomar una muestra totalmente aleatoria, es decir, sortear a los individuos e irles a preguntar a ellos, porque el hecho de localizarlos nos impediría realizar un operativo exitoso. Señala que lo que se va a investigar, en el caso particular es el porcentaje de los electores que votaron por cada una de las opciones, para ello se usa un método que en este caso es una encuesta

llamada exit poll, Manifiesta que como no se trabaja con toda la población se tiene una muestra y aquí aparece una cuestión inherente a toda investigación que es la variación muestral, estas variaciones son de los estimadores que se deben a que se toma una muestra particular de las innumerables que pueden tomarse. Habla sobre el error de muestreo que es el asociado a la diferencia entre el valor que se obtuvo y el parámetro poblacional que se está investigando y que este también es inherente a todo proceso muestral. Dice que hay otro error que es el sistemático que sale de control de la parte estadística y es el asociado a aspectos independientes de la elección de la muestra, por ejemplo la no respuesta de la gente, la falsedad de la respuesta, la confusión al dar la respuesta, todos ellos son errores que se van acumulando y que no se las puede medir o controlar directamente debido al diseño muestral. Señala que para tener éxito en un proceso de investigación por muestreo, se requiere: que la muestra sea representativa de la población, es decir que se parezca a la población que se está investigando; segundo que los resultados sean sensatos, en el sentido que los estimadores a su vez se parezcan a los parámetros poblacionales que se está investigando y, por último, que si se siguen ciertas reglas se puede calcular matemáticamente a partir del estimador un valor aproximado de parámetro poblacional que se está investigando: por lo tanto no toda investigación por muestreo da el verdadero valor del parámetro, sino que se genera una idea de por dónde va el porcentaje que se está investigando. Explica que un proceso de muestreo debe constar de las siguientes partes: Definición de los objetivos de la encuesta, que en este caso son los votantes que asistieron a sufragar en el día de las votaciones, tiempo, marco muestral-padrón electoral. El procedimiento para obtener la información, dice es el método probabilístico y no probabilístico que se vaya a emplear. Existen varios diseños muestrales que la empresa puede utilizar y que se dará a conocer el ideal para luego señalar cuál utilizó la empresa. Así el ideal es el muestreo aleatorio simple en el cual tenemos el marco muestral y lo ideal sería elegir a los elementos mediante un procedimiento estadístico, un sorteo de número de aleatorios y la recepción sería ir a consultar en sus casas si es posible para que digan cuál es su decisión, pero eso no es posible, salvo cuando se tiene un perfecto control de la población. En el caso particular, como hay posibilidad y en la práctica es muy común, se eligió un muestreo por conglomerados, en este caso el marco muestral cambia porque ya no es el padrón electoral pues no se va a localizar a las personas, sino que este muestreo simplifica lo que hace un aleatorio simple, ya que se cambian las unidades de muestreo por grupos o conglomerados compuestos por varias unidades muestrales, dentro de esos conglomerados se eligen los elementos muestrales mediante muestreo aleatorio simple o por voto, en el caso en particular, los conglomerados son los recintos electorales en los que los votantes sufragaron el 7 de mayo, es decir, se eligió el recinto y allí se va a tomar la muestra. El muestreo por conglomerado debe cumplir ciertas condiciones que en el caso se cumplieron. El tamaño de cada conglomerado debe estar bien definido y el número de conglomerado debe ser relativamente pequeño y este fue el muestreo que a la empresa le convenía. Una vez seleccionados los conglomerados el procedimiento para tener la información de las personas que concurren a votar se lo realiza a través del muestreo por cuotas en los que los elementos muestrales a los cuales se les va a encuestar deben cumplir ciertas condiciones, edad, sexo. Este tipo de muestreo (conglomerados) se acerca al ideal que es el aleatorio simple y este modelo probabilístico de muestreo es el que se empleó porque reunía todos los requerimientos. En el caso de la empresa, no fue posible aplicar el aleatorio simple sino por conglomerados que son los recintos electorales y para elegir a los encuestados se realizó un muestreo por cuota. El tamaño de la población fue de 10'952.164 votantes, el total de recintos electorales fue de 2.702, el nivel de confianza de la encuesta fue del 95% y un nivel de tolerancia del 2%. Aplicando la fórmula para la determinación del número de conglomerados, se establece que el número de conglomerados fue el de 196 conglomerados y el número de entrevistas de 23.520 votantes.

Jonathan Michael Finlay Proaño, en su declaración informó sobre el sistema informático empleado dentro del exit poll y la metodología utilizada en ese proceso.

Diego Mauricio Arcentales Espinoza en su declaración expuso sobre el procedimiento del call center utilizado en el proceso de exit poll de la consulta popular y referéndum 2011.

Mares Gabriela Sandoval Vizcaíno, rindió su testimonio sobre los productos y documentos técnicos utilizados en el exit poll, recopilación de datos, objetivos, etc.; manifestó que primeramente se presentó una propuesta de estudio cuantitativo que permita contar con una información pre electoral; la propuesta contenía los objetivos, explicación de la metodología, productos a entregarse, alcance de recopilación de datos, protocolos de propiedad y entrega de información, propuesta económica, forma de pago y eventualidades, además, dos anexos en el que consta un pre diseño del universo de la muestra y del operativo de campo y, en un segundo anexo un documento técnico de investigación en el cual se establece la experiencia, la justificación del exit poll, los objetivos y metas a alcanzar, así como una descripción más amplia de la metodología, cronograma y equipo técnico que estaría involucrado en el estudio. En esta propuesta se planteó que se iba a utilizar una metodología cuantitativa para medir la intención del voto de los electores a través de una encuesta nacional pre electoral para establecer las tendencias de los electores y, en segundo lugar, una encuesta a boca de urna para lograr una aproximación a las respuestas de cada una de las preguntas. Dice que para la muestra, se establecieron 198 recintos electorales distribuidos en las 24 provincias del país. Que se diseñó la boleta en donde se iba a recoger la información. Que se elaboraron manuales e instructivos para el exit poll y que se hizo un simulacro de lo que iba a ser el 7 de mayo de 2011. Señala que el objetivo de esta encuesta pre electoral era realizar la comprobación del funcionamiento de cada uno de los componentes del exit poll. Que toda la información que se recogió del exit poll fue sistematizado en un informe y se presentaron los primeros resultados que arrojaron las encuestas que faltaban, como anexo se presentó unos resultados de la encuesta y se presentó un documento de base de datos. En cuanto a la encuesta a boca de urna, informa que ésta tenía como objetivo conocer el resultado general extraoficial de la votación de los electores de cada una de las preguntas. Que todos los resultados de esta encuesta se sistematizaron en un informe; y que además se hizo un análisis de resultados y margen de error

y otras actividades. Termina diciendo que se entregó un reporte de resultados a los medios de comunicación en un documento excel y finalmente la base de datos donde estaba toda la información que se recogió y que el último documento que se entregó fue un informe complementario.

María Magdalena Supliguicha Cárdenas rinde su testimonio sobre los procedimientos de capacitación, implementados en el exit poll, el número de personas que intervinieron, número de encuestadores, nivel de instrucción, requisitos para ser encuestadores. Indica que se realizó una encuesta pre electoral el día 5 de mayo de 2011 a las 17h00 y que el levantamiento de la información fue el día 6 de mayo. La encuesta se realizó en lugares cercanos a los recintos y que en el día de las votaciones, los supervisores recibieron un kit con ciertos documentos entre los cuales había una copia en blanco y negro de la papeleta de la consulta popular.

Emili Alexandra Utreras Ávalos, quien expone en su declaración sobre la comunicación del exit poll, manifestando que se trabajó en dos fases: el primero la coordinación con los medios contratantes, GAMATV y TC TELEVISION para la producción del programa especial ECUADOR DECIDE de la jornada del 7 de mayo de 2011 y, la segunda fase, fue la relación con los medios privados, públicos, internacionales pre y post exit poll 2011. En la fase uno, los dos canales de televisión formaron un equipo de coordinación encargados de toda la planificación y de llevar adelante el programa Ecuador Decide que se llevaría a cabo el 7 de mayo. El canal matriz, indica, fue GAMA TV. Dice que el equipo de trabajo de la empresa de Santiago Pérez, elaboraron un cronograma de reuniones previas a la jornada del 7 de mayo. Que durante estas reuniones se explicó a los canales de televisión que la encuesta boca de urna, proporciona una proyección de datos y que de ninguna manera estos constituían resultados oficiales. Que durante esa fase de coordinación se realizaron entrevistas previas en los informativos de los canales con el fin de explicar a la tele audiencia sobre el exit poll. Que los resultados se presentaron en votos válidos tal y como el Consejo Nacional Electoral hará la proclamación oficial y en números enteros, sin embargo los votos totales, es decir, votos por el sí, no, nulos y blancos están disponibles en la base de datos de la empresa. Que el día 6 de mayo se procedió a realizar el simulacro junto con el equipo técnico de producción del programa Ecuador Decide, durante el cual se tomó el tiempo entre la entrega de datos procesados y la elaboración de gráficos; que se trabajó con los tres presentadores del programa, con el fin de coordinar la transmisión de resultados a partir de las cinco de la tarde. El 7 de mayo empezó el trabajo en el canal matriz del programa Ecuador Decide a las 14h00 ajustando los detalles previos a la transmisión del programa. Afirmar que a las 17h00 se dio inicio a la transmisión en vivo de los resultados del exit poll realizado durante la jornada electoral con la presencia de Santiago Pérez y la supervisión en todo momento del equipo responsable de comunicación de la empresa en el canal. Refiriéndose a la segunda fase, manifiesta que fue la relación del trabajo con los medios de comunicación, dando la empresa la información oportuna a los medios nacionales e internacionales atendiendo sus requerimientos en forma transparente y honesta en todo momento. Que los días previos a la jornada del 7 de mayo, los medios de comunicación, así como diversos actores políticos generaron una serie de mensajes confusos en torno al exit poll que diseñó la empresa, surgiendo en los medios una confusión entre lo que es una encuesta a boca de urna del exit poll y el conteo rápido, por lo que el 3 de mayo la empresa ofreció una rueda de prensa en la que presentó a los medios de comunicación las limitaciones y alcances del exit poll y se entregó la información técnica de base para explicar este tipo de encuestas; se recalcó que la información del exit poll era una proyección de datos y que de ninguna manera constituía información oficial. La empresa respetó en todo momento la prohibición de difundir datos y encuestas pre electorales a partir de la fecha establecida por el Consejo Nacional Electoral. Que el 3 de mayo durante la rueda de prensa ofrecida por la empresa, asistieron canales de televisión nacionales como Ecuavisa, Teleamazonas, Telerama, RTU, Ecuador TV, medios impresos como El Universo, El Telégrafo, Expreso, canales contratantes y emisoras de radio, etc. Se envió información a las principales agencias internacionales de prensa que tienen corresponsales en el país. A partir del 8 de mayo se ha atendido todos los requerimientos de los medios de comunicación con explicaciones técnicas sobre los factores que pudieron influir en los resultados obtenidos en el exit poll en la jornada del 7 de mayo, se dieron ruedas de prensa para aclarar los cuestionamientos de los medios sobre estos resultados y se ha dado apertura para informar a los medios nacionales e internacionales sobre este proceso.

La señorita Ana Isabel Oña Gudiño no comparece a declarar, pese a haberlo solicitado su abogado defensor, ante lo cual la parte denunciante manifestó que era importante este testimonio para saber acerca de los contratos y por lo tanto acusa la rebeldía de la mencionada ciudadana y que no se tome en cuenta la prueba al respecto.

b.5) El abogado de los denunciados, indica que la materia de juzgamiento es el cometimiento de una infracción electoral y no de los valores económicos sobre los cuales se pactaron los contratos.

b.6) El abogado del denunciante, expresó que ni en el contrato celebrado con GAMATV y ni en el contrato suscrito con TC TELEVISION, existe una recepción de haber recibido la información del documento parcial y final y por lo tanto no existe evidencia de haber recibido los canales en esa fecha y que se tome en cuenta este particular al momento de resolver.

b.7) El abogado defensor, presentó prueba documental la cual fue añadida al proceso.

b.8) Se negó la inspección judicial solicitada por la defensa por innecesaria.

b.9) Se declaró en receso la audiencia, quedando las partes convocadas para el día 22 de junio de 2011, a las 10H00, fecha en la que el perito presentará su informe.

6.2. REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2011 A LAS 10H00:

A esta audiencia comparecieron el Dr. Fausto Garcés en representación del denunciante Ab. Abdalá Bucaram; el Dr. Carlos Aguinaga en representación de los denunciados,

señor Santiago Pérez y señorita Ana Isabel Oña Gudiño y Dr. Luis Horna, perito designado, con el fin de conocer el informe pericial realizado dentro de la presente causa.

De la transcripción de la grabación magnetofónica, se desprende lo siguiente:

El informe está estructurado en dos partes: 1. Antecedentes dentro del cual se aborda: Consideraciones generales. Área de conocimiento pericial; Método y Comparaciones; y 2) Conclusiones. Respecto de los antecedentes, el perito da una definición de lo que es el exit poll, manifestando que es una encuesta de salida o a boca de urna, con el fin de conocer en forma anticipada los resultados electorales, mediante una encuesta levantada a los votantes, tan pronto se emiten sus votos. Que se diseña técnicamente una muestra probabilística para levantar la encuesta y sirve para monitorear la tendencia de la votación en la jornada electoral y obtener una estimación de los resultados finales, en proporciones con cierto margen de error y confianza.

Dice que el muestreo no es una ciencia exacta, sino que se fundamenta en la teoría de las probabilidades, lo que implica que sus resultados son válidos con cierto grado de probabilidad, pues los resultados en los procesos electorales son inciertos. El pronóstico se considera como el conocimiento anticipado de un suceso elemental y para este caso la alternativa es un sistema aleatorio. En el caso de las diez preguntas, existían cuatro alternativas: si, no, nulo y blanco. Indica que el principal problema en el muestreo consiste en cómo escoger el subconjunto de la población de estudio que permita inferir sobre toda la población con un costo razonable y en un tiempo corto.

Dice que como no existen causas similares en el Ecuador sobre el caso de este peritaje, se basa en lo dispuesto en el artículo 303 del Código de la Democracia y lo que dispone el artículo 100 primer inciso de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Respecto del Método hace referencia primeramente al contrato celebrado con TC TELEVISION y la empresa SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA., y señala que la técnica que se menciona en dicho contrato para obtener la muestra es el muestreo multietápico estratificado, sin mencionar el máximo error permitido, ni el nivel de confianza determinado, siendo requisitos que debían constar en el contrato. Dice que generalmente el nivel de error es menor al 2% y que el nivel de confianza es del 95%.

Señala que existe un contrato similar con la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A. Gama TV. Hace referencia al documento Informe final/Resultados del Exit poll en cuyo numeral 4 se hace una descripción del exit poll y señala que para el exit poll se realizó un diseño muestral específico para el levantamiento de la votación en cada una de las preguntas y que la muestra se estableció mediante un muestreo aleatorio sistemático que permitía realizar una lectura de resultados a nivel nacional, provincial y de algunos cantones.

Explica que en la Audiencia Oral de prueba y Juzgamiento llevada a cabo el 15 de junio de 2011 a partir de las 10h00 de las presentaciones realizadas por los testigos, destaca la intervención del señor Santiago Pérez quien realizó una exposición de los pasos que siguieron para la ejecución de los servicios pactados y contienen los pasos fundamentales que se deben considerar en una encuesta como es determinación de objetivos, población de estudio, marco muestral, diseño de muestreo, método de medición, instrumento de medición, etc.

Manifiesta que en un exit poll el método de muestreo es esencial y que el matemático Galindo indicó que se ha utilizado el método de muestreo por conglomerados.

Manifiesta que cada tipo de técnica tiene sus propias fórmulas para el cálculo de la muestra, pero para utilizarla es necesario considerar ciertos datos de estudios, de lo contrario es imposible porque se necesita estudios realizados con anterioridad. Existen varias muestras como por ejemplo: la aleatoria simple que consiste en que todas las unidades tienen igual probabilidad de ser seleccionadas, para ello se requiere tener un listado de todas las personas y seleccionarlas aleatoriamente, pero eso no se lo puede hacer, es muy costosa y muy alta, pero todas las unidades de muestreo tienen la posibilidad de ser seleccionados. Luego se menciona el sistemático, también tiene una lista pero que se puede dividir en grupos iguales y vamos seleccionando en cada grupo uno aleatoriamiente hasta completar el tamaño de la muestra sistemático. El estratificado tenemos grupos pero dentro del grupo los elementos sean mas o menos homogéneos y entre grupos heterogéneos, ej. Hombres, mujeres. Conglomerado: internamente en el grupo son heterogéneos y entre grupos son homogéneos, al considerar conglomerados, se considera el género, la edad y que cada recinto tiene varias juntas receptoras de voto, en las rurales pueden ser pequeñas, pero en las ciudades grandes, hay recintos electorales que pueden tener centenas de Juntas Receptoras del Voto; existen dentro de los datos el número de recintos escogidos que son de 2702 de allí se eligen a 196 y a cada uno de los recintos electorales, independientemente de su tamaño se ha escogido a 120 votantes, dando un total de 23.520

En sus observaciones establece que la aplicación del muestreo por conglomerados se basa en que estos grupos entre sí deben ser homogéneos y dentro de cada uno de ellos los grupos deben ser heterogéneos, sin embargo los recintos electorales en el Ecuador se diferencian por su ubicación zonal y regional. Señala que el número de juntas receptoras del voto en los recintos es muy variado en tamaño, lo que distorsionaría la asignación de encuestados por recinto. Habló de una autoponderación, que es el calculo de ciertos factores que garantizan que las unidades seleccionadas tengan la misma probabilidad de selección. Dice que la población de la Costa es mayor que la de la Sierra y sin embargo hay más recintos electorales en la Sierra. El sistema de cuotas puede hacer tender los resultados en forma unidireccional y se dijo que se había tomado en cuenta el género (50% de hombres y 50% mujeres). Este sistema de cuotas pudo haber causado algún inconveniente. Dice que la parte técnica fue la mejor que se utilizó, con respecto a la transmisión de los datos señala que fue normal, así como los productos elaborados y entregados a los contratantes están en concordancia con las diferentes fases del estudio. La capacitación de todo el personal de campo está dentro de los requerimientos; y que la comunicación fue coordinada con los canales de televisión.

Indica los errores existentes con respecto a los resultados finales disponibles por el CNE, dice que el conteo rápido se diferencia del exit poll, ya que es una encuesta probabilística seleccionada de las Juntas Receptoras del Voto, los elementos donde se van a tomar los datos, no son las personas, sino las actas de cada Junta, aquí no hay subjetividad, en la otra sí existe. Siendo una muestra se tiene alrededor de 29.000 Juntas en tanto que el número de recintos seleccionados fue de 2702, pero utiliza la votación total y que han concluido con los escrutinios. La confiabilidad es muy alta y además estima la participación de los votantes, en el conteo se procesaron alrededor de 3900 juntas a nivel nacional.

Como conclusiones establece las siguientes: respecto del tipo de muestreo aplicado indica 1) que no se ha especificado el tipo de muestreo utilizado, pues aparecen tres técnicas diferentes que pueden ser combinadas adecuadamente: multietápico estratificado, sistemático y por conglomerados. 2) Que los supuestos sobre error máximo para la estimación de la proporción y el nivel de confianza, son los recomendables. 3) Que la consideración de cuotas pudo haber distorsionado los resultados del exit poll. 4) El tamaño muestral y la asignación en los recintos electorales no son los adecuados.

Respecto a las estimaciones: 1) que el exit poll, se ha diseñado con el enfoque probabilístico, es decir, considerando un margen de error máximo, con respecto al valor verdadero del parámetro de estudio y el nivel de confianza adecuado. 2) Que la empresa siempre ha mencionado la ficha técnica de la encuesta en la divulgación de los resultados obtenidos con los datos arrojados por el exit poll.

Respecto a las comparaciones: 1) que en los resultados del escrutinio definitivo del CNE se consideran los votos emitidos en el exterior. 2) El error máximo producido entre los resultados del CNE y los del conteo rápido ocurre en la pregunta 10, con un valor del 0,69. Mientras que el error mínimo se da en la pregunta 7, con un valor del 0.31%. 3) que el error máximo tiene lugar en la pregunta 9 con un valor del 9.32% y el error mínimo se presenta en la pregunta 1 con un valor del 7.51%. 4) Los resultados del exit poll a nivel provincial tienen comportamientos menos precisos en algunos casos. 5) En el conteo rápido se hacen estimaciones con datos reales obtenidos al final del escrutinio en cada una de las juntas seleccionadas. En el exit poll se hacen las estimaciones con los datos proporcionados por los votantes, luego de consignar su voto en la junta. La diferencia es muy marcada.

Respecto a la comunicación: la información generada por el exit poll es muy apreciada por todos los actores políticos cuando es realizado con altos estándares de calidad, confiabilidad y eficacia.

PREGUNTAS DE LA PARTE ACUSADORA:

PREGUNTA: ¿Qué significa el muestreo multietápico estratificado?

RESPUESTA: A manera de ejemplo se puede realizar un muestreo únicamente en una etapa, seleccionamos al elemento al que se va a investigar. Ese sería un muestreo de una sola etapa. Si nosotros queremos hacer multietápico, se lo hace con fines de ir disminuyendo el error. La idea es ir formando grupos y de ahí escoger elementos que le representen al grupo. A nivel nacional, a manera de ejemplo, tomamos el estrato hombres y el estrato mujeres tenemos dos estratos, tenemos una primera etapa. Ya dentro de un estrato, vamos a una segunda etapa, por ejemplo recintos electorales urbanos y rurales. La idea de la etapas es hacer una selección a ciertas unidades a ser seleccionadas, después vamos a otra etapa donde se toman otros elementos. Los estratos entre grupos son heterogéneos pero internamente son homogéneos.

PREGUNTA: ¿En el contrato se dice que la técnica es el sistemático aleatorio y lo que se utilizó es otro?.

RESPUESTA: Si es otro, son técnicas diferentes.

PREGUNTA. ¿Muestreo por conglomerados, difiere del muestreo aleatorio sistemático?

RESPUESTA: Son diferentes, hay cuatro técnicas. Simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Se pueden combinar estas técnicas, claro que sí, pero eso debe estar claro en los informes, porque se puede utilizar estratos y dentro de éste se puede utilizar el sistemático, pero todo debe estar sumamente claro, porque las fórmulas dependen de la técnica que vaya a utilizar. El muestreo no se puede hacer a todo el conglomerado, eso es imposible por eso ese escoge una muestra de cada conglomerado por asuntos de tiempo, de dinero, pero eso debe estar establecido en los informes técnicos, por cuestión de costos es mejor hacer conglomerados, pero por estratificado le mejora el error. Por conglomerados es el mas adecuado.

PREGUNTA: ¿Debió hacerse dos exit poll o uno solo?

RESPUESTA: No podría decirle, ya que me parece que no es posible que se hagan dos estudios, me parece que es imposible que una empresa se encargue de hacer dos estudios si el objetivo era único, estimar la proporción de votantes a favor del si o del no.

PREGUNTA: En la sierra hay mas recintos según lo que dice en el informe. Los resultados en la costa eran predecibles para el SI, y los resultados en la sierra eran predecibles para el NO tuvo esto ¿tuvo algo que ver?

RESPUESTA. No, no incidió en el resultado. Lo que se hizo es escoger los recintos.

PREGUNTA. Usted señala que el sistema de cuotas ocular, en una jornada electoral corta, puede hacer tender los resultados en forma unidireccional, lo que está en concordancia en las tres paradas reportadas. ¿Puede explicarme eso?

RESPUESTA: Sí, hay tres paradas, a las 10, 12 14 horas y las tendencias de como iban apareciendo los porcentajes, guardan la misma brecha. Por eso digo que aparentemente se mantenía esa tendencia.

PREGUNTA: ¿Considera usted que la información entregada en este proceso es incompleta y por lo tanto no puede hacer un informe porque la información es incompleta?

RESPUESTA: No me parecía tanto porque si yo escucho y si me hablan de tres técnicas de muestreo, me queda una inmensa duda. Se me ha entregado una copia del contrato al revisar los documentos entregados por la televisora dice en el punto dos y en el punto 4 se adjunta como anexo, pero aquí no constan anexos al contrato. Por eso he dicho que estos anexos no estaban en el contrato. No los he tenido. En la información que constaban en el informe no estaba la documentación.

PREGUNTA: Si es así, se puede pedir una ampliación. Hace una comparación entre los resultados oficiales entre el exit poll y el conteo rápido. ¿Significa que hubo errores y que la información no fue veraz, ratifica usted que está dentro de los parámetros pese a que no ha cumplido con los parámetros contratados?

RESPUESTA: Si hacemos un pequeño cálculo en función de la tabla, tenemos que el error máximo entre ellos creo que es del 0,6% si multiplicáramos por 15, llegaríamos al 9%; en el tamaño de la muestra que tenemos en el exit poll es de casi 200 si bien no es lineal, si multiplicáramos 200 tamaño de la muestra por 15 tendríamos 3000. El tamaño de la muestra debe reflejar el error.

PREGUNTA. ¿Lo aconsejable es del 2% y la confianza es del 95%?

RESPUESTA: Eso está planteado en la exposición que hizo el matemático Galindo. Está dentro del margen, sí.

PREGUNTAS DE LA DEFENSA:

PREGUNTA: Quisiera que me aclare respecto a la probabilidad uno. ¿Qué significa?

RESPUESTA: en términos de probabilidades un evento cierto es aquel que tiene probabilidad uno, por definición, es decir mañana va a llover esto tiene una probabilidad uno, pero si es un evento incierto, la probabilidad es cero. Si hablamos en términos probabilísticos, tenemos que definir lo que se conoce como un espacio muestral, lamentablemente muchas veces no se lo pone en teoría, debemos decir que el espacio muestral para este estudio es el siguiente: SI, NO, NULO BLANCO, esto tiene su probabilidad que ocurra. La suma de esas cuatro debe dar uno. Lamentablemente en los informes técnicos y en las propuestas técnicas no las ponemos.

PREGUNTA: Teniendo en cuenta lo que dijo, ¿le dieron a usted este documento técnico que es el que se presentó al CNE, con el cual se dio la autorización para ejecutar el exit poll?

RESPUESTA: No, no me dieron. Yo pedí que se me diera ese informe que estaba en la propuesta pero no me dieron. Ese es un documento fundamental para hacer mi análisis.

PREGUNTA: No es momento de debatir sobre el contrato realizado con las televisoras, sin embargo, se dice que hay distintos errores de muestreo, puede ser con la obtención del marco muestral, etc. En cuanto a los errores sistemáticos vamos a encontrar otros. Su informe está tomando un solo tipo de error, no toma la multiplicidad, siendo así ¿usted cree que el error se debió a otro tipo de errores?

RESPUESTA. Con toda razón usted ha enumerado toda la gama de posibles errores que en la práctica se cometen. En algunos casos se hace un excelente diseño, pero los resultados no fueron los esperados porque intervienen infinidad de errores, pero los más relevantes posiblemente se producen a la respuesta que han dado los votantes. Hay otros factores importantes como el número de preguntas, cuando hay pocas uno se acuerda fácilmente lo que contestó, pero habiendo muchas, lo más fácil es decir, yo voté todo sí o yo voté todo no. Si se analiza desde la pregunta 3 hasta la 9, la respuesta al SI es una sola (61%), la variación se da en la primera, segunda y décima, pero en las otras guardan una cierta armonía. El error se pudo haber dado por ese factor.

PREGUNTA: En el informe técnico entregado al CNE se dice que el método de selección es el método aleatorio sistemático, y el que se aplicó es el muestreo por conglomerados y dentro de cada recinto se hizo una muestra. Ahí se aplicó el método aleatorio sistemático. ¿Puede usted definir si su informe es realmente completo como para tener una valoración precisa del trabajo que realizó la encuestadora?

RESPUESTA: El elemento fundamental es el que dice así se va a ser el trabajo. Este no lo tuve, ya que allí se dice todo lo que se va a hacer (universo, unidad de muestreo, base de datos, software) pero en ese documento está especificado el nivel de error que se admite, inclusive si se hace una auditoría se dice cuáles son las fórmulas que se van a utilizar.

PREGUNTA: ¿Pueden operar los dos muestreos?

RESPUESTA. Sí, se pueden acoplar diferentes métodos. Es la ventaja. Podemos aplicar los dos y de hecho el estratificado lo podemos utilizar en el aleatorio simple, lo que debe quedar claro es los pasos que se deben hacer y cuál formula debe ser utilizada, ya que ellas nos permiten hacer una auditoría adecuada de lo que se está utilizando. Por lo tanto se pueden utilizar todos en etapas, si hago más etapas se puede complicar mas y se hace compleja la muestra. Ese es el problema.

PREGUNTA: ¿Cree usted que si se hubiera aplicado otro método, puede haber otros resultados o cree que los factores de error tiene que ver con el comportamiento de los votantes al momento de realizar la entrevista?

RESPUESTA: Me parece que si bien ha intervenido el comportamiento de la gente, también me parece que según se dijo el margen de error era del 2% y tomar una muestra de casi 200 no es coherente, según así lo dijo el matemático Galindo.

PREGUNTA: Si los votantes mienten, ¿qué pasa?

RESPUESTA: Los resultados no van a ser iguales.

PREGUNTA: ¿Este tipo de comportamientos inciden en cualquier método?

RESPUESTA. Sí, así es.

PREGUNTA: En cuanto a la comparación, el exit poll no está regulado, ni el conteo rápido ni el traking poll, no es posible comparar una encuesta de exit poll con un conteo rápido, estos son dos instrumentos distintos. Con esto, no se puede comparar los márgenes de error entre el exit poll y el conteo rápido. Lo que sí puede hacerse es entre encuestas. ¿Es así?

RESPUESTA: Sí, es así, el conteo es con muestras reales, la unidad de muestreo es el acta. En el exit poll la unidad de muestreo es el votante.

PREGUNTA: ¿No se puede comparar?

RESPUESTA: Es así. El exit poll es subjetivo, mientras que el conteo rápido es objetivo porque se cuenta con datos reales.

PREGUNTA: La regla de decisión mayoritaria dice que solo valen los votos válidos, no así los nulos y los blancos. El CNE sacó todos. Santiago Pérez sacó solo los válidos es por eso que no se debería llamar error sino diferencias porque no se pueden comparar. ¿Debería decir diferencia en vez de error?

RESPUESTA: No es comparable, pero si se calculó un margen de error, es lógico que se crea, porque si se hubiere dicho que el error es otro en cada provincia, se debería tener otras fórmulas para el tamaño muestral para cada provincia. Si aquí me dicen que es 196 obtuve 95% de nivel de confianza con el error del 0,02 se supone que de allí partió.

PREGUNTA: Usted dice en su informe que el supuesto de error y la confianza es lo más recomendable. ¿El error puede aumentar o hay un límite?

RESPUESTA: Depende de la figura que se realice y eso depende de lo que como encuestadora yo me ponga como error. Una encuesta está en función de su presupuesto, la fórmula para el tamaño muestral, en el estratificado está en función del presupuesto, pero no es una norma general. Depende del estudio que se hace.

PREGUNTA: ¿En qué se sustenta que el tamaño muestral no es adecuado?

RESPUESTA: porque se dice que el error es del 2%, si yo tengo un tamaño de 2700 porque se considera los conglomerados y le pongo una fórmula simple y 95% de confianza, con toda seguridad que no es el correcto. El tamaño de la muestra es poco para el error que se plantea, porque si me dice que es ese tamaño para un 8% pero si me dice que es el 2% no creo que sea el adecuado.

PREGUNTA: ¿Es muy pequeño el tamaño de la encuesta o es ideal?

RESPUESTA: Todo depende de la selección que se hace. Se está haciendo una selección de conglomerados y allí es de 2700 que es distinta del tamaño de la población que se va a hacer si yo elijo un conglomerado, la idea es encuestar a todos los elementos del conglomerado que es algo imposible.

PREGUNTA. ¿Se debe aplicar el otro, el aleatorio?

RESPUESTA: Sí, pero debe tomarse en cuenta que en el conglomerado, no existe proporcionalidad, porque no todos los recintos tienen igual Juntas receptoras del voto. La muestra es de 120 para dos mesas y lo mismo para 120 mesas. Faltó la proporcionalidad, porque no todos son iguales.

PREGUNTA: ¿Qué incidencia tiene estas encuestas anteriores al del exit poll si fueron aplicadas con las misma metodología?

RESPUESTA. Debe guardar la misma tendencia, no tendrá mayor variación, siempre y cuando los plazos no sean tan largos, es decir, tiene que haber coherencia.

PREGUNTA: ¿Piensa que la incidencia de la conducta del ciudadano es esencial en la labores de las encuestas?

RESPUESTA. Sí, no lo tomé en cuenta porque es posterior al 11 de mayo.

La señora jueza dispone el receso de la audiencia y convoca a las partes para el 27 de junio de 2011 a las 15h00 para la presentación de la ampliación del informe del perito.

6.3. REINSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA EL DIA LUNES 27 DE JUNIO DE 2011 A LAS 15H00:

A esta audiencia comparecieron el Dr. Fausto Garcés en representación del denunciante, Ab. Abdalá Bucaram; el Dr. Carlos Aguinaga en representación de los denunciados, señor Santiago Pérez y Ana Isabel Oña Gudiño y el Dr. Luis Horna, perito designado, con el fin de conocer la ampliación del informe pericial realizado dentro de la presente causa.

De la transcripción de la grabación magnetofónica, se desprende lo siguiente:

Luego de analizar el documento técnico, el perito dice que el método de selección de la muestra en cada provincia es el muestreo aleatorio sistemático y el universo de estudio está conformado por todos los ciudadanos que concurran a votar en los distintos recintos electorales del país.

Explica que se ha utilizado una misma fórmula para calcular el límite de error de estimación admitido por provincia, pues el tamaño muestral para cada provincia ya se había encontrado anteriormente. Dice que los márgenes de error calculados son diferentes para cada provincia, pues cada una de ellas tiene diferente cantidad de recintos electorales.

Realiza una explicación de los cuadros indicando que se han agrupado en tres partes a las provincia de la región oriental. En el cuadro constan en la primera columna las provincias, en la segunda el margen de error; en la tercera el número de recintos y en la cuarta el número de votantes.

Como conclusiones indica que se evidencian dos errores de estimación, el admitido para la determinación del tamaño muestral que es de 198 y los correspondientes al tamaño de votantes en cada provincia.

PREGUNTAS DE LA PARTE ACUSADORA

PREGUNTA: Este margen de error que hace alusión al número de votantes aparece una cosa que llama la atención en Guayas y Pichincha siendo el número de votantes mayor el error es menor, ¿tiene usted alguna posición que haga notar por qué en estas dos provincias que tienen mayor número de votantes hay menos errores?

RESPUESTA: Se utiliza la misma fórmula mediante la cual se calcula el tamaño de la muestra en base al error. El tamaño muestral es diferente, eso implica que el error es menor ya que es inversamente proporcional al error al cuadrado.

PREGUNTA.- ¿Se puede ponderar estos márgenes de error en el exit poll que hizo la empresa de Santiago Pérez al margen de error que salió en la consulta?

RESPUESTA. Siempre que se tienen los resultados en un trabajo estadístico, se puede estimar el margen de error cometido.

PREGUNTA: Pero, ¿se puede ponderar este mecanismo, como diciendo esto se va a mantener en el exit poll como error o esto se mantuvo desde el punto de vista suyo?

RESPUESTA: Técnicamente se mantuvo así. Una vez obtenidos los resultados también se puede obtener la estimación del límite de error cometido o sea a la inversa. Aquí el error está estimado en función del tamaño de la muestra, una vez que ya se han obtenido los resultados en el trabajo de campo, en el de investigación se puede encontrar mediante fórmulas el error cometido ya con los resultados alcanzados.

PREGUNTA: ¿Puede ponderarme este margen de error al muestreo en relación al conteo rápido inicial?

RESPUESTA: Sí, directamente este error no lo podríamos inmediatamente utilizar o ponderar porque recordemos que nosotros también tenemos un margen de error para la selección del tamaño muestral de 198, por eso se dice que existen dos errores y esos márgenes de error se van incrementando.

PREGUNTAS DE LA DEFENSA:

PREGUNTA: ¿Usted dice que hay dos errores de estimación: el admitido para la determinación del tamaño muestral, se refiere al admitido en su informe principal?

RESPUESTA. No, a lo expuesto por el matemático Galindo que dijo que tenía 2700 recintos electorales y que ahí se utilizaba el margen de error del 2% y un nivel de confianza del 95% entonces el error está ahí al fijar el tamaño de muestra.

PREGUNTA: ¿Por qué, porque el tamaño de la muestra es 198 de 2700 es un tamaño equilibrado para una muestra técnica de exit poll?

RESPUESTA: Claro por eso dice que el error es del 2% que es un error relativamente pequeño.

PREGUNTA: ¿Cuánto es el 2% de 2700 para establecer el tamaño?

RESPUESTA: La fórmula que está utilizando el matemático Galindo es la utilizada por muestreo por conglomerados, él pone la fórmula y dice que con esa fórmula y el error de 2% y el 95.% de confianza obtiene el tamaño 198, eso nos dice la teoría y en función de eso calcula. No podemos decir que debemos tomar un porcentaje de los 2700, lo que pasa es que la fórmula para calcular el tamaño está en función del tamaño de la población que es de 2700 recintos, el error que yo me impongo y el nivel de confianza que yo determino.

PREGUNTA: En su informe dice que hay un problema en el tamaño del conglomerado. El tamaño de la unidad muestral es el adecuado. Lo que no sé es de dónde saca esta conclusión que en la determinación del error muestral hay un error de estimación.

RESPUESTA: Eso lo determina el mismo técnico, él lo dice, ahí se ha fijado el error.

PREGUNTA: El técnico determina el error. ¿Es así?

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA: En el trabajo que usted analizó ¿hemos cumplido al diseñar previamente este estudio?

RESPUESTA: Sí, quizá no está claro en los informes porque tendría que decir que en una etapa se ha hecho selección de conglomerados que son los 198. Luego en cada uno de esos conglomerados, yo ya determiné que a cada provincia se había asignado el número de recintos electorales a cada provincia. Se tenía fijo el número de recintos que se iban a analizar. Ya se sabe el número de votantes a ser encuestados, entonces ahí se utiliza el muestreo sistemático donde va a seleccionar a 1080 votantes y el error que corresponde dentro de esa segunda etapa corresponde a 3.5 y así sucesivamente, porque el tamaño muestral ya está determinado ya que a cada provincia se le determinó un número de recintos y a cada recinto se le asignó 120 votantes. Esta es la segunda etapa que se hace utilizando el muestreo sistemático.

PREGUNTA: Con relación a la proporcionalidad la ponderación persigue equilibrar la proporción, es decir, tengo un grupo de 120, tengo otras de 1200 electores y otras de otra cantidad, pero la ponderación persigue equilibrar estos conglomerados que son de distintos tamaños. ¿Usted está de acuerdo?

RESPUESTA: Sí, eso se debería hacer. La idea de la autoponderación es recuperar la importancia de aquellos que están minimizados. En el informe eso no se nota porque se debería decir estos son los factores para que quede escrito y claro.

PREGUNTA: Un reglamento debería exigir estos temas y en el Ecuador no existe. El tamaño de la muestra de exit poll no puede ser menor a 2000 votantes como dice la doctrina. Aquí la muestra es de 23.000 votantes que fueron

consultados. Si la muestra es más grande el margen de error debe ser menor. ¿Usted cree que estas diferencias de resultados no comparativos entre el exit poll y el resultado oficial se debió al tamaño de la muestra?

RESPUESTA: No necesariamente. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que cuando se toma una proporción que se está estimando (si, no, éxito, fracaso) estuviéramos estimando cuatro proporciones y ese también es el problema que puede haber causado porque no es lo mismo decir voy a estimar una proporción que estimar cuatro proporciones, si bien la suma de las cuatro me da uno. Ese es un factor que también puede distorsionar, aunque no tanto pero sí lo hace. Además otro elemento adicional es el número de preguntas.

PREGUNTA: Usted no ha contado con los elementos necesarios como lo dice en su informe ampliatorio para hacer un análisis minucioso. Lamentablemente no quedó en físico la exposición del Sr. Galindo. Pero hablando de la técnica en términos generales, ¿la empresa cumplió con la técnica en el trabajo previo y de ejecución del exit poll?

RESPUESTA: En el informe están diferenciados las actividades que se han hecho. En el informe no consta en forma detallada todos los pasos que debieron haberse incluido en el informe técnico. Se habla de una primera etapa, luego de una segunda, pero no hay un nexo entre las dos. Eso no consta en el informe.

PREGUNTA: Hay errores no probabilísticos que nadie puede prever que son los errores de respuesta y que están fuera del ámbito técnico. ¿Está de acuerdo en eso?

RESPUESTA: Sí. Totalmente.

Las partes, expusieron sus alegatos finales ratificándose, el denunciante en los hechos expuestos en la denuncia; y, los denunciados en las excepciones planteadas, tal como consta de la grabación magnetofónica de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, instrumento que consta en el expediente; con lo que se declaró en receso la audiencia para reinstalarla el día en que se dé lectura a la sentencia, para lo cual las partes serán notificadas previamente.

Los hechos que se denuncian y las excepciones planteadas, serán materia de análisis en el siguiente considerando; sin embargo, cabe indicar que respecto a que el denunciante no es sujeto político, el Art. 280 del Código de la Democracia establece que "Se concede acción ciudadana a los electores y electoras para denunciar el cometimiento de las infracciones a las que se refieren los artículos de esta ley", por lo tanto, el Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley bajo esta norma podía presentar su denuncia como ciudadano, independientemente de que ostente la calidad de Asambleísta Nacional, por lo que esta excepción de la defensa carece de fundamento y por lo tanto se acepta lo manifestado por el abogado del denunciante al referirse a esta situación.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

7.1- Es obligación de esta jueza, determinar si los hechos denunciados se enmarcan o se corresponden con el presunto cometimiento de una infracción electoral, cuyo análisis examinará los hechos que constituyen la acción; la prueba que se ha practicado para probar tales hechos; y, si éstos se adecuan a la norma, es decir, al contenido del inciso segundo del artículo 303 del Código de la Democracia, el cual prescribe: **"...Asimismo, con la finalidad de garantizar la información veraz y seria de los estudios de las empresas que realicen pronósticos electorales, serán sancionadas con suspensión inmediata de la difusión de sus pronósticos e inhabilitación por el siguiente período electoral, las empresas que elaboran pronósticos electorales que no ciñan su trabajo a procedimientos, análisis, y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores."**

Al respecto se considera:

1.- De la norma citada se puede inferir que el sujeto activo o el destinatario de la norma imperativa (mandato o prohibición) de la infracción electoral es la "empresa que realiza pronósticos electorales". En el presente caso se trata de un autor cualificado, ya que el legislador ha determinado cualidades específicas o requisitos para que se configure como tal. Además, es la persona jurídica que puede ser autora de dicha infracción electoral. Con este argumento la ley pretende restringir la extensión de la norma, determinando taxativamente quién es el autor y señalando los demás elementos que configuran esta infracción.

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, llevada a cabo el día miércoles 15 de junio de 2011 a las 10h00 (Considerando Sexto), el abogado defensor de los denunciados, dedujo como una de sus excepciones que dicha empresa no es una compañía dedicada a efectuar pronósticos electorales, sino a realizar encuestas electorales. Estos dos términos difieren el uno del otro, por cuanto, según lo afirmó, el pronóstico es la "Señal por donde se conjetura o adivina algo futuro". En cambio que la encuesta es "una técnica de investigación social que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un reducido grupo de sus integrantes al que se denomina 'muestra'. Esta técnica se usa con frecuencia en las campañas electorales"[1]

Hay otras definiciones proporcionadas que señalan que un pronóstico puede referirse al conocimiento anticipado de algún suceso. En general, a lo que es probable que ocurra en el futuro, basándose en análisis y en consideraciones de juicio.

Por su parte las encuestas:

> "...no sirven para adivinar el futuro. Quienes trabajamos seriamente en el tema lo repetimos una y otra vez sin lograr evitar que, tras cada comicio, los medios digan que "las encuestas fracasaron" por que no cumplieron con algo que no pretenden. Los seres humanos somos felizmente imprevisibles y no podemos ser programados ni manipulados como computadoras.

[1] Definiciones extraídas del Diccionario de la Real Academia de la Lengua y del Diccionario Electoral, Tomo 1 de CAPEL, de Jaime Durán Barba (fs. 661 vta.)

> Las encuestas sirven para analizar la realidad y trasformarla. Los consultores políticos no usamos las encuestas para predecir el futuro si no para analizar lo que la gente opina, cree y siente en un día determinado, acerca de una serie de elementos que le conducen a votar en una u otra dirección en una elección o en consulta popular"[2]

El autor Jorge Lazarte R., expresa que entendemos por encuesta:

> "al conjunto de técnicas y procedimientos mediante los cuales -sobre la base de un cuestionario específico- se obtienen datos e información respecto a la opinión de un grupo representativo de encuestados, y cuyos resultados pueden ser generalizados al conjunto de la población. Utilizadas en los más distintos dominios de la actividad. Lo que nos interesa […] son las encuestas que se realizan durante los procesos electorales, incluyendo las del mismo día de las votaciones. En este último caso, lo usual es encuestar a quienes acaban de votar, por lo que a este tipo de encuesta se le denomina "boca de urna" o salida de urna" (exit poll)"[3]

Es decir, que el pronóstico se refiere a un hecho que puede o no ocurrir en el futuro, mientras que la encuesta viene a ser un instrumento científico, sistematizado en el que intervienen ciertos elementos como un cuestionario que se realiza para que una determinada persona responda sobre un tema específico y para ello se utiliza una muestra dirigida a un conjunto reducido de personas las cuales son escogidas para de ellas obtener cierta información.

En este sentido, podemos manifestar que el exit poll, es una encuesta, llamada por varios autores como una "Encuesta de salida"[4], siendo por lo mismo un estudio estadístico basado en la realización de entrevistas 'cara a cara' a personas que previamente emitieron su voto, llevada a cabo a la salida de ciertas mesas receptoras previamente seleccionadas en base a un esquema de muestreo probabilístico de secciones o áreas de la entidad en donde se está llevando a cabo la elección. La característica de estas encuestas, como lo señalan algunos autores, es que, no tiene como finalidad anticipar con exactitud los resultados de una votación.

Realizadas estas acotaciones, y adentrándonos en la materia que es nuestro análisis, el cual gira en torno a quién es el sujeto activo de la infracción electoral que se acusa, es menester señalar que, confrontando lo manifestado por el abogado defensor de los denunciados con la escritura de constitución de la compañía "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", en la que constan sus Estatutos, se puede apreciar que en la Cláusula Cuarta literal b) referente a su objeto social, se establece que el objeto principal de la compañía será:

> "...El desarrollo de metodología e implementación de trabajo de campo para censos, encuestas, estudios cuantitativos y cualitativos, recolección, procesamiento y análisis de la información; realización de estudios de opinión pública, sociales y económicos, diseño y ejecución de estrategias políticas y de comunicaciones para instituciones públicas, privadas, candidatos, partidos políticos, organismos electorales y de cooperación; el fortalecimiento de la cultura e identidad; procesos de concertación, participación política y veeduría ciudadana..."

De la revisión de todos los literales que conforman el objeto social, no se determina que la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", se dedique a realizar actividades relacionadas con pronósticos electorales, sino que su ámbito de acción se circunscribe a la realización de encuestas, entre otras actividades; y, por lo mismo, en el mes de marzo de 2011, el Consejo Nacional Electoral, emitió el certificado de Registro No. 02 de 22 de marzo de 2011, en el que se certifica que la empresa se encuentra legalmente inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras Electorales y por tal motivo se le autorizó para que realice el exit poll en el Referéndum y Consulta Popular 2011 que se llevaría a cabo el 7 de mayo de 2011, mediante resolución PLE-CNE-2-29-4-2011 de 29 de abril del mismo año, con base en el Reglamento para empresas que realicen pronósticos electorales para el proceso electoral de Referéndum y Consulta Popular 2011, aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE-2-22-3-2011, el cual regula sobre la publicación y difusión de pronósticos electorales, encuestas y sondeos de opinión, aunque no de manera clara, ya que se confunden los conceptos, se los utiliza de manera imprecisa y no se los define.

El denunciante, no ha probado en forma material, documental, ni testimonial, esta situación, pese a que tuvo el derecho de verificar su denuncia, por ello no existe certeza que la referida empresa se dedique a la realización de "pronósticos electorales", razón por la cual no se adecua el elemento normativo constitutivo del tipo de la infracción electoral.

2.- El denunciante afirma que la encuestadora electoral "SANTIAGO PÉREZ, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", y su encuestador Santiago Pérez, no ha garantizado información veraz y seria en su pronóstico electoral denominado exit poll, "pues su trabajo no se ha sujetado a los procedimientos, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales para este tipo de labores", conforme el inciso segundo del Art. 303 del Código de la Democracia.

2.1. Procedimiento y análisis:

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento llevada a cabo el día lunes 15 de junio de 2011 a las 10h00, el señor Santiago Pérez, en su testimonio dio a conocer las características técnicas para la realización del exit poll en los días previos al 7 de mayo de 2011. Indicó cómo se desarrolló el mismo, dando definiciones de lo que éste significa; mencionó la experiencia que ha tenido en la realización de estos procesos en los años 2007, 2008 y

---

[2] *Jaime Duran Barba, Las encuestas en las consultas populares, Documentos Electorales,* Tribunal Supremo Electoral, Consulta Popular 1997, publicación del Tribunal Supremo Electoral.

[3] Jorge Lazarete R., *Encuestas y Sondeos durante el Proceso Electoral* en Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, 2007, p. 836.

[4] Informe pericial, página 1, fs. 830 del expediente.

2009; la técnica utilizada en el exit poll del 2011; los recintos electorales escogidos; el equipo técnico; número de encuestadores; el diseño de la muestra probabilística, entre otros.

Para explicar cuál fue en sí el procedimiento utilizado en el exit poll del 7 de mayo de 2011 los denunciados en la referida Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, presentaron varios testimonios que estuvieron a cargo del equipo técnico que, a su vez, fueron llamados como testigos, los cuales han aportado para que esta autoridad conozca y se llene de información para tomar una decisión lo mas cercana a la verdad y a la justicia.

Según los testimonios, el procedimiento adoptado, fue el siguiente:

a) Diseño de la muestra estadística, Matemático **Edwin Galindo** quien dio una explicación de lo qué es la muestra (conjunto de individuos de la misma población que permite obtener información; las formas de obtener información (censo); la investigación por muestreo (exit poll); la unidad muestral (votantes); marco muestral (padrón electoral); parámetros poblacionales (porcentaje de electores); estimador (aproximación del parámetro poblacional); variación muestral; error de muestreo (asociado a la diferencia entre el valor que se obtuvo y el parámetro poblacional); error sistemático (asociado a aspectos independientes de la elección: no respuesta de las personas, falsedad de la respuesta, confusión al dar la respuesta); procedimiento para obtener la información (método probabilístico y no probabilístico); diseños muestrales: muestreo aleatorio simple (ideal); el utilizado por la empresa: muestreo por conglomerados (recintos electorales) que simplifica el aleatorio simple, se elige grupo o conglomerado compuesto por varios elementos muestrales que son los votantes mediante un muestreo aleatorio simple o por voto; tamaño del conglomerado (pequeño); muestreo por cuotas (procedimiento para obtener la información de esos conglomerados en base de la edad, sexo); tamaño de la población (10'952.164 votantes); total de recintos electorales (2.702); nivel de confianza de la encuesta (95%); nivel de tolerancia (2%); número de conglomerados a nivel nacional (196); y número de entrevistas (25.520 votantes).

b) Sistema informático, empleado dentro del exit poll y la metodología utilizada en ese proceso (testimonio rendido por el señor Johathan Michael Finlay Proaño).

c) Call center utilizado en el proceso de exit poll (testimonio del señor Diego Mauricio Arcentales Espinoza).

d) Productos y documentos técnicos utilizados en el exit poll, recopilación de datos, objetivos; propuesta de estudio cuantitativo que contenía: objetivos, explicación de la metodología, productos a entregarse, alcance y recopilación de datos, protocolos de propiedad, entrega de información; propuesta económica: forma de pago y eventualidades; diseño de manuales e instructivos; simulacro de encuesta pre electoral para verificar el funcionamiento de cada uno de los componentes del exit poll; documento de base de datos; encuesta boca de urna, (objetivo conocer el resultado general extraoficial de la votación de los electores en cada una de lasl preguntas); informe de resultados entregado a los medios de comunicación y base de datos e informe complementario (testimonio de la señorita Mares Gabriela Sandoval Vizcaíno)

e) Capacitación implementada en el exit poll: número de personas que intervinieron; número de encuestadores; nivel de instrucción; requisitos para ser encuestador (testimonio de la señorita María Magdalena Supliguicha Cárdenas)

f) Comunicación del exit poll: primera fase: coordinación con los medios contratantes GAMA TV y TC TELEVISIÓN para la producción del programa especial "Ecuador Decide" de la jornada de 7 de mayo de 2011 (canal matriz GAMA TV); cronograma de reuniones previas a las votaciones; entrevistas previas en los informativos de los canales para explicar sobre el exit poll; resultados solo por votos válidos; simulacro el día 6 de mayo; el 7 de mayo a las 17h00 se dio inicio a la transmisión en vivo de los resultados del exit poll; segunda fase: relación con los medios privados, públicos, internacionales, antes y después del exit poll (testimonio de la señora Emili Alexandra Utreras Ávalos).

2.2.1. INFORME PERICIAL:

El Dr. Luis Horna, perito designado por esta autoridad en su informe presentado el día 22 de junio de 2011, a las 10H00 durante la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, respecto del procedimiento, señaló lo siguiente:

i) El punto a) referido al diseño de la técnica, será analizado posteriormente, como un acápite especial, ya que merece un análisis más minucioso.

ii) Que "el técnico responsable de sistemas, ha expuesto en forma clara sobre el Hadware y Software adecuados utilizados para la transmisión de datos, captura de datos con control de calidad y el procesamiento de los mismos...". (punto b) sistema informático).

iii) Que en la transmisión de datos desde los recintos electorales en los tres instantes fijados hacia el 'call center' [...] no hubo novedades y que "se cumplió todo lo planificado a satisfacción". (punto c) call center).

iv) Que los productos elaborados y entregados a los contratantes "están en concordancia con las diferentes fases del estudio ejecutadas". (punto d) documentos técnicos).

v) Que la selección y capacitación del personal de campo, "está dentro de los requerimientos que se exigen para realizar las actividades planificadas (punto e) capacitación).

vi) Que siendo el 'Exit Poll' un producto de impacto inmediato dentro de un programa especial informativo de la televisión, los cuadros fueron elaborados en función de los resultados obtenidos de la encuesta, sin inconvenientes..." (punto f) comunicación del exit poll).

Con los testimonios de las personas que intervinieron como técnicos en el proceso del exit poll, se demuestra que cada uno de esos participantes cumplieron a cabalidad sus funciones para formar el todo que es la encuesta del exit

poll y que el procedimiento del mismo, cumplió con todos los protocolos o normas que se requieren para su desarrollo, ya que se detalló de manera exhaustiva dicho procedimiento, así como las normas que conforman el arte de la encuesta, llamada *lex artis* o ley del arte. Además, el perito designado, Dr. Luis Horna, en su informe corrobora esta apreciación.

Es necesario señalar que el denunciante en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, no pudo desacreditar ni restar credibilidad a la información que fue entregada por los señores: Ralph Douglas Murphine, Santa Arisveth Mora Rubio, Francisco Xavier Rocha, Edwin Marcelo Galindo, Jonathan Michael Finlay Proaño; Diego Mauricio Arcentales Espinoza; Mares Sandoval Vizcaníno, María Magdalena Supliguicha Cárdenas y Emili Alexandra Utreras Ávalos, ya que se demostró que son personas idóneas por sus mismas exposiciones y conocimientos al momento de responder el interrogatorio y el contra interrogatorio.

2.2.- TÉCNICA EMPLEADA POR LOS DENUNCIADOS DENTRO DEL EXIT POLL:

Se ha dejado este tema para análisis posterior, ya que el mismo revierte de cierta complejidad e importancia y merece un análisis más pormenorizado, por lo que empezaremos manifestando lo siguiente:

La técnica está definida como los procedimientos o recursos de una ciencia, un arte o actividad. En el caso en concreto se refiere a la estadística que es la recolección y obtención de datos y de su procesamiento o tratamiento para expresarlo numéricamente y poder extraer conclusiones a partir de ellos.

La empresa encuestadora "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", ha utilizado una técnica que es la estadística, ésta a su vez utiliza, para la recolección y el procesamiento de datos, una muestra que, de acuerdo con las explicaciones proporcionadas por los expertos (Matemático Edwin Galindo y Dr. Luis Horna), es el conjunto reducido de individuos o elementos de una población, escogidos para obtener información sobe los mismos y generalizarla al resto de la población, pero para obtener dicha información existen varios tipos de muestreos probabilísticos que pueden ser de varias clases para el caso de las encuestas (exit poll): 1) aleatorio simple, 2) aleatorio sistemático; 3) estratificado; 4) por conglomerados y otros más.

Según se desprende del informe pericial, el muestreo **aleatorio simple** consiste en que todas las unidades tienen igual probabilidad de ser seleccionadas, para ello se requiere tener un listado de todas las personas y seleccionarlas aleatoriamente; **aleatorio sistemático:** igualmente existe un listado de personas pero que se pueden dividir en grupos iguales y de ellos se va seleccionando en cada grupo uno aleatoriamente hasta completar el tamaño de la muestra; **estratificado:** se tienen grupos de personas pero dentro del grupo los elementos son más o menos homogéneos y entre grupos heterogéneos, ejemplo: hombres, mujeres; **por conglomerados**: internamente en el grupo son heterogéneos y entre grupos son homogéneos.

Con esta explicación, tanto el perito, Dr. Luis Horna, como el señor Edwin Galindo, manifestaron que la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", escogió la técnica o muestreo por conglomerados.

Según el testimonio del señor Edwin Galindo, en este muestreo los conglomerados constituyen los recintos electorales y dentro de ellos se eligen los elementos muestrales (personas) mediante muestreo aleatorio simple o por cuotas, que se refiere a ciertas condiciones que las personas deben cumplir como edad, sexo, es decir que este muestreo se acerca al ideal que es el aleatorio simple y que la empresa decidió emplearlo porque reunía todos los requerimientos.

El perito, Dr. Luis Horna, al contestar la pregunta formulada por la parte acusadora, en el sentido de que indique si el muestreo por conglomerados difiere del muestreo aleatorio simple, supo manifestar que son diferentes pero que se las puede combinar o utilizar las dos técnicas conjuntamente.

Sobre el hecho fijado por el denunciante Abdalá Bucaram Pulley, de que la técnica que se acordó en los contratos celebrados con GAMA TV y TC TELEVISÓN, conforme lo establece la claúsula segunda no fue la que se ofreció por parte de la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", esta jueza considera que este particular, escapa de la competencia de esta jurisdicción electoral, en razón de la materia, ya que el asunto que se está juzgando es la consumación o no de una infracción electoral, más no lo referente a los contratos que se hayan realizado en torno a la elaboración de la encuesta llamada "exit poll"

El presunto incumplimiento de los contratos a los que hace referencia el abogado de la parte denunciante, no es causa del cometimiento de la infracción electoral, por lo que serán los contratantes quienes solucionen este conflicto de responsabilidad contractual, en la vía que corresponda.

Por todo lo expuesto, dejando de lado el asunto contractual, que como se dijo no es materia de juzgamiento electoral por parte de esta jueza, con relación a la técnica o el tipo de muestreo probabilístico empleado dentro del exit poll, por las pruebas aportadas y por el informe técnico pericial, se infiere que la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA." y el señor Santiago Pérez Pazmiño, han cumplido con la presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales que se requiere para el exit poll.

7.2. El denunciante ha señalado en su denuncia que los denunciados "...tras el cierre de la jornada electoral, tuvieron un alto margen de error […] que pone en evidencia -salvo su error u omisión- una maniobra de desinformación que puede tener indicios, inclusive de responsabilidad penal..."

Con respecto a "alto margen de error," referido por el denunciante, cabe señalar que, a decir de la explicación de

los expertos, especialmente del señor Ralph Murphine, Santa Arisveth Mora Rubio, Francisco Rocha y Dr. Luis Horna, perito designado, éste es producto de una variable que no puede estar bajo control de la empresa y de los responsables de aquella, ya que depende de una situación subjetiva destinada a que la persona encuestada diga la verdad, puesto que ningún ser humano está en capacidad de dominar la voluntad de saber qué piensa otra persona.

En el caso que se juzga, el pedir la opinión del elector de cómo votó y la respuesta que dio, está sujeta al control que de dicha información tiene la persona encuestada, esto es, puede como no puede decir la verdad y el encuestador lo único que hace es describir la realidad tal como se la presenta sin ningún juicio o participación en el procesamiento de dicha información entregada por el encuestado, por lo que no es posible medir el error cuando esta circunstancia se presenta, sea cual sea la técnica utilizada.

Si bien en el exit poll la estimación realizada no coincide con la realidad, dado que los resultados no son datos oficiales y se han difundido luego de la jornada electoral, éstos no han influido en el proceso electoral ni en las votaciones del Referéndum y Consulta Popular 2011, situación que afecta única y exclusivamente al encuestador y a su compañía y no al proceso electoral, por lo que, como conclusión podemos decir que toda encuesta a boca de urna o exit poll, está sujeta a error, ya que la misma no arroja resultados exactos, sino estimados.

7.3. Sobre lo referido en el sentido de que se puede evidenciar "una maniobra de desinformación que puede tener indicios, inclusive de responsabilidad penal...", esta autoridad considera que el tema aludido, escapa de la esfera de la competencia electoral por razón de la materia.

7.4. Finalmente no puede dejar de señalarse que el denunciante, no ha aportado prueba suficiente para que esta autoridad determine con certeza los hechos que denuncia, por cuanto más que probar si el denunciado se ajustó o no al procedimiento y a la técnica requeridas en la norma electoral, su actuación en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se ciñó al posible incumplimiento de los contratos celebrados entre la empresa denunciada y los dos canales de televisión (GAMA TV y TC TELEVISIÓN), situación que, como se manifestó, no es competencia de esta jueza el resolverla. No obstante, se llama la atención a dichos medios de comunicación por la falta de celeridad en dar la información requerida por esta jueza, toda vez que las instituciones del sector privado y toda persona natural o jurídica tienen el deber de colaborar con las juezas y los jueces, y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los procesos, de conformidad con lo que establece el artículo 118 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral.

7.5. Por las consideraciones expuestas 1) al no ajustarse la empresa "SANTIAGO PEREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA", dentro de la cualificación determinada en la norma electoral, respecto del sujeto activo de la infracción; 2) al no existir adecuación de los hechos (acción) al tipo de la infracción electoral, no siendo antijurídica, ni culpable; 3) que dicha acción no ha configurado un resultado dañoso y por lo mismo no existe ninguna violación de ninguna norma, peor aun afectación de un bien jurídico o de algún derecho; 4) al haberse establecido que el trabajo realizado por el señor Santiago Pérez Pazmiño y la empresa "SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", dentro del proceso de exit poll del Referéndum y Consulta Popular 2011 se ha ceñido al procedimiento, análisis y presentación de la información definidos por la técnica y las ciencias sociales, conforme la prueba actuada, esto es aquella pedida, presentada, practicada y agregada a los autos por los denunciados; y, 5) por no existir prueba suficiente aportada por el denunciado, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** resuelve:

1. Desestimar la denuncia presentada por el Asambleísta Nacional Ab. Abdalá Bucaram Pulley en contra del señor Santiago Pérez Pazmiño, y en contra de la empresa "SANTIAGO PÉREZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CIA. LTDA.", en la persona de su Gerente General y representante legal señora Ana Isabel Oña Gudiño.

2. Dejar a salvo los derechos de los que se crea asistido el denunciante, Ab. Abdalá Bucaram Pulley, para ejercitarlos ante las autoridades competentes.

3. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, remítase copia certificada al Consejo Nacional Electoral para los fines legales pertinentes,

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Quito 29 de julio de 2011.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

RAZÓN: Siento por tal que el día viernes veinte y nueve de julio de dos mil once, a partir de las quince horas, procedía a dar lectura a la sentencia dictada dentro de la causa No. 270-2011 por la Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, de fecha 29 de julio de 2011 a las 10h00. Dejo constancia que en la lectura de la misma estuvieron presentes los señores: Santiago Pérez Pazmiño, Ana Isabel Oña Gudiño, acompañados de su abogado defensor Dr. Carlos Aguinaga; y las abogadas Silvia Rodríguez Moncayo y Ab. Amparo Esparza Paula en representación del Ab. Adbalá Bucaram Pulley, habiendo quedado las partes notificadas de su contenido.- Certifico.- Quito, 29 de julio de 2011.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0402-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia de Galápagos, viernes 13 de enero de 2012, las 16h00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 402-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-00961-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Raúl Enrique Salazar Herrera, portador de la cédula de ciudadanía número 17087092105 el día sábado siete de mayo de dos mil once a las nueve horas con treinta minutos, en el cantón San Cristóbal provincia de Galápagos en el lugar identificado como Recinto Electoral Escuela P.P Andrade, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales" Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley".

b) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver".

c) Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 98 a 106 .Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha tres de mayo de dos mil once, a las quince horas con doce minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Raúl Enrique Salazar Herrera, en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) Con fecha veinte y tres de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con cuarenta y un minuto, con anexo en cuatro fojas, dos impresiones de fotografías digitales y un disco compacto, acorde a la razón sentada por el Dr. Iván Escandón Montenegro, secretario relator del Tribunal Contencioso Electoral (Fojas 6,7,8,9,10,11,12,13)

b) En el parte policial suscrito por el señor mayor de policía Víctor Hugo Cárdenas, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-000961-2011-TCE al ciudadano con nombres Raúl Enrique Salazar Herrera por presuntamente infringir el numeral 5 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 3).

c) El día trece de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa identificada con el número 402-2011-trce, correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El día cuatro de enero de dos mil doce, a las once horas, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorpora a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor señor Raúl Enrique Salazar Herrera, en el domicilio ubicado en el sitio denominado Barrio Manzanillo de la ciudad de San Cristóbal provincia de Galápagos; señalándose el día viernes trece de enero de dos mil doce, a las nueve horas, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 15).

e) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad.hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 16 y vuelta).

f) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Paredes Paredes, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual certifica haber entregado la boleta de citación por interpuesta persona al ciudadano Raúl Enrique Salazar Herrera (fojas 17).

g) Providencia de fecha 03 de enero de 2011, las 09h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc (fojas 14).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-000961-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 09h30, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Raúl Enrique Salazar Herrera, con cédula de ciudadanía 17087092105, quien ha recibido y firmado esta Boleta.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el capitán de policía Víctor Hugo Cárdenas, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales" Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia, oral de prueba y juzgamiento se llevo a cabo con la presencia de las partes procesales, el día viernes trece de enero del año dos mil doce a las doce horas con cincuenta minutos, cuyo texto suscrito en acta correspondiente, se incorpora a los autos en todo su contenido, documentación que reposa en el expediente.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Del contenido de la boleta informativa así como del parte policial, suscritos por el Mayor de policía Víctor Hugo Cárdenas, se desprende que la infracción que se le imputa al presunto infractor es la contenida en el artículo 291 numeral 5 de la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia que manifiesta: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales", en razón de la norma trascrita es pertinente remitirse a la definición que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española respecto de las expresiones "perturbar"[1] y "alterar"[2]: "*perturbar: inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien; alterar: Cambiar la esencia o forma de algo. Perturbar, trastornar, inquietar. Enojar, excitar. Estropear, dañar, descomponer."*; de cuyas definiciones es de señalar que, el espíritu de la norma transcrita, revela la pretensión de sancionar a quien o quienes de una forma u otra ocasionaren los efectos que trae la acción del verbo alterar o perturbar al proceso electoral y su normal, correcto y adecuado desarrollo; en tal sentido el parte policial no determina con exactitud de que manera y si efectivamente la actuación del presunto infractor conllevó el "trastorno del orden", el "cambio o suspensión" de la esencia y desarrollo del proceso electoral; del contenido del parte policial no se determinan con exactitud las circunstancias de los hechos suscitados, esto es, que por sí solo el documento no conduce, a criterio de este jueza, determinar que este hecho haya ocasionado alteración o perturbación, más aún si tales hechos no fueron presenciados por el oficial de policía. De tal forma, la sola elaboración del parte policial, nada dice a esta juzgadora sobre el cometimiento de una infracción, que haya dado como resultado la "alteración o perturbación al desarrollo de las votaciones" dentro o fuera del recinto electoral, como señala la norma. El parte policial no detalla de manera específica e inequívoca de qué manera el presunto infractor ha causado perturbación o alteración en el desarrollo del proceso electoral y tampoco existen testimonios o documentos que así lo comprueben y se hayan presentado en esta audiencia. Siendo así, se considera que el parte policial es insuficiente para establecer la certeza en la alteración o perturbación del sufragio de consulta popular y

---

[1] Real Academia Española (2011). Diccionario de la lengua española (2001). (vigésimo segunda edición). (2 vols.). Madrid, España.

[2] Real Academia Española (2011). Diccionario de la lengua española (2001). (vigésimo segunda edición). (2 vols.). Madrid, España.

referéndum, acto electoral en el cual se origina el parte policial, tanto más que, el Mayor de Policía Víctor Hugo Cárdenas, quien ratificó su firma y rúbrica puestas en los documentos de la boleta informativa y parte policial, manifestó no haber presenciado los hechos, fue llamado para que entregue la boleta informativa y emita el parte policial; fue informado que hubo una "cierta descortesía por parte de quien estaba informando al público en el momento en que un menor de edad se acercó a preguntar sobre el sufragio". El defensor público en su intervención ratificó los argumentos que en su propia defensa hizo el presunto infractor, por lo que solicitó en su favor la declaración de inocencia, en razón además de que el niño menor de edad no fue atendido debidamente por la señorita de información. No se acompañan otros elementos probatorios o de convicción que hayan sido pedidos, ordenados y practicados, por lo que a criterio de este juzgado el disco compacto que consta en el expediente (foja 10), como las dos fotografías (fojas 12, 13) que no fueron ratificados como documentos probatorios en la audiencia oral de prueba y juzgamiento, no constituyen prueba, pues tampoco se demuestra con ellos la alteración o perturbación del acto electoral. Por estos antecedentes, en el presente caso no existe prueba plena que corrobore y que permita a esta juzgadora tener la certeza de la existencia de un comportamiento del presunto infractor que haya determinado exactamente la "alteración o perturbación" del acto electoral del siete de mayo del dos mil once, por tanto, al no contar con la certidumbre del contenido de estos instrumentos, no se puede formar un criterio convincente que lleve a señalar que el presunto infractor, se encontraba causando alteración o perturbación en el desarrollo de las elecciones. El Mayor de Policía Víctor Cárdenas, en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, bajo juramento se ratifica en el parte policial y reconoce que la firma que consta en dichos instrumentos es la que utiliza en sus actos públicos y privados y entrega una explicación adicional de los hechos ocurridos, que se contrae a señalar que fue asignado al recinto electoral de la Escuela Pedro Pablo Andrade de San Cristóbal en el día de la consulta popular y referéndum; que el día transcurrió sin novedad en el recinto y que a las dos de la tarde el señor encargado del recinto electoral por parte de la Delegación del Consejo Nacional Electoral le llamó para hacerle conocer de los hechos. Por tanto, no se ha demostrado elementos de convicción que determinen que el ciudadano Raúl Enrique Salazar Herrera haya causado alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones; en consecuencia, no hay justificación de la existencia de la infracción de la que se le acusa, siendo así tampoco procede establecer sanción alguna de un hecho o hechos que no se han demostrado con elementos probatorios validos y concluyentes, Por tanto, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria", por lo expuesto esta Jueza considera que al no existir prueba determinante, el señor Raúl Enrique Salazar Herrera no se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia".

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado, preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** de Raúl Enrique Salazar Herrera, por tanto, su conducta dejó de ser infracción electoral.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción inocencia del ciudadano Raúl Enrique Salazar Herrera portador de la cédula de ciudadanía número 17087092105.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

SENTENCIA

CAUSA 401-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia de Galápagos, viernes 13 de enero de 2012, las 17h00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 401-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-001921-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral cometida presuntamente por el señor Jorge Roni Vera Serrano, portador de la cédula de ciudadanía número 2000038568, el día viernes seis de mayo de dos mil once a las diez y ocho horas con veinte minutos, en el cantón San Cristóbal provincia de Galápagos en el

lugar identificado como Barrio Central Av. Ignacio Hernández y Teodoro Wolf , la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales.

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha tres de mayo de dos mil once, a las quince horas con doce minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano JORGE RONI VERA SERRANO, en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor sargento segundo de policía Robelt Pazmiño Monar, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-001921-2011-TCE al ciudadano con nombres JORGE RONI VERA SERRANO por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 3).

c) El día trece de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa identificada con el número 401-2011-trce, correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El día cuatro de enero de dos mil doce, a las diez horas, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorpora a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Jorge Roni Vera Serrano, en el domicilio ubicado en el sitio denominado Barrio Central e Ignacio Hernández de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Galápagos; señalándose el día viernes trece de enero de dos mil doce, a las quince horas, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 6).

e) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad.hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 6 vuelta y 7).

f) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Paredes Paredes, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual certifica haber entregado la boleta de citación en persona al ciudadano Jorge Roni Vera Serrano (fojas 12).

g) Providencia de fecha 03 de enero de 2011, las 15h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc (fojas 12).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuya sujeción se han realizado las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-001921-2011-TCE, de fecha viernes 6 de mayo de 2011, a las 18h15, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Jorge Roni Vera Serrano, con cédula de ciudadanía 2000038568, ha recibido y firmado esta Boleta.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el Sargento Segundo de policía Robelt Pazmiño Monar, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia oral de prueba y juzgamiento se realizó y fue suscrita el Acta correspondiente por el agente policial responsable de la entrega de la boleta informativa y emisión del parte policial, así como por el defensor público que actuó en defensa del presunto infractor, ausente, declarado en rebeldía. El Acta se ha agregado al expediente en todo su contenido, por lo que reposa en autos.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) De conformidad con el Acta de la audiencia de prueba y juzgamiento no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor, por no haberse presentado certificado médico o prueba científica alguna que demuestre el estado de embriaguez del presunto infractor, según lo alegado por el defensor público. El agente policial se remitió a ratificar el contenido del parte policial y la entrega de la boleta informativa. En consecuencia, al no existir prueba válida y concluyente, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena:"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria", esta Jueza considera que al no existir prueba determinante, el señor Jorge Roni Vera Serrano no se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado, preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** de Jorge Roni Vera Serrano, por tanto, su conducta dejó de ser infracción electoral.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción inocencia del ciudadano Jorge Roni Vera Serrano portador de la cédula de ciudadanía número 2000038568.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Puerto Baquerizo Moreno, 13 de Enero de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA No. 0897-2011-TCE

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta; Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta; Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza; Dr. Arturo Donoso Castellón; Juez; Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 16 de enero de 2012, las 16h45**.- VISTOS.-** Incorpórese a los autos el escrito presentado por

el señor Plácido Armando Aguilar, Asambleísta por la Provincia de Sucumbíos, ingresado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, el día martes 27 de diciembre de 2011, a las 14h39. Para notificaciones que le correspondan a esta autoridad, téngase en cuenta el correo electrónico:armando.aguilar@asambleanacional.gob.ec, asi como el Departamento de Documentación y Archivo de la Secretaría de la Asamblea Nacional, y la Oficina 301 ubicada en el Edificio DINAMEP, entre las calles Juan Murillo y San Gregorio, en la ciudad de Quito.

I. ANTECEDENTES

Del total de doscientas noventa y dos (292) fojas que conforman el expediente, en lo principal se consideran los siguientes documentos:

1. Oficio No. 142-IP-DPS-CNE-2011 de 21 de junio de 2011, suscrito por el Lcdo. Iván Piedra C., Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, dirigido al Lic. Omar Simon Campaña, en esa época, presidente del Consejo Nacional Electoral, por medio del cual comunica que "en las oficinas de Secretaria de esta Delegación Provincial de Sucumbíos-Consejo Nacional Electoral, fue presentado la solicitud de Revocatoria de Mandato del señor Plácido Armando Aguilar, Asambleísta por la provincia de Sucumbíos." Con el referido oficio, adjunta la siguiente documentación: Solicitud Revocatoria de mandato en original; Copia de cédula y certificado de votación del señor César Escudero; Copia del Plan de Trabajo del señor Dr. Plácido Armando Aguilar-Asambleísta; Resumen de Votación (Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior; Un CD, presentado por el señor César Escudero; Notificación de la Revocatoria del mandato; Certificación de la recepción de la Notificación; Oficio del señor César Escudero, presentado el día 21 de junio del 2011 a las 08h25, original; Certificación firmada por el Sr. Director y Sra. Secretaria de la Delegación Provincial de Sucumbíos, Original; Oficio dirigido al señor Dr. Armando Aguilar, en el cual se le adjunta varios requerimientos solicitados; 150 fojas sobre la documentación de IMPUGNACIÓN, presentada por el señor Dr. Plácido Armando Aguilar; Ley Orgánica de Educación Superior; Certificación de la recepción de la impugnación recibida. El referido Oficio fue recibido en el Archivo General del Consejo Nacional Electoral con fecha "2011 JUN 23 P 3:02" (fs. 14 a 217)

2. Escrito del señor César Humberto Escudero Chaulangui, dirigido al Dr. Omar Simon, Presidente del Consejo Nacional Electoral. El documento citado, fue recibido en el Archivo General del Consejo Nacional Electoral en fecha "2011 JUN 30 P 1:50". Mediante este escrito el señor César Humberto Escudero Chaulangui, pide que se realice el trámite pertinente respecto a su solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del Dr. Armando Aguilar, Asambleísta por la Provincia de Sucumbíos. (fs. 218)

3. Memorando Nº 1030-NCR-DAJ-CNE-2011 de 16 de agosto de 2011, dirigido al Lic. Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas, suscrito por la Dra. Natalia Cantos Romoleroux, Directora de Asesoría Jurídica, asunto: "FUNDAMENTACION PARA EL PEDIDO DE REVOCATORIA DEL MANDATO DEL DR. ARMANDO AGUILAR, ASAMBLEÍSTA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS". Mediante este documento, remite "el Oficio No. 177-IP-DPS-CNE-2011 de 11 de agosto del 2011, suscrito por el Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, al que adjunta la fundamentación para el pedido de revocatoria del mandato del **Dr. Armando Aguilar**, Asambleísta de la Provincia de Sucumbíos presentada por el señor César Humberto Escudero". (fs. 233 a 234)

4. Informe referente a la solicitud de revocatoria de mandato del Doctor Plácido Armando Aguilar, Asambleísta de la provincia de Sucumbíos, que presenta el ciudadano César Humberto Escudero Chaulangui, suscrito por la Dra. Natalia Cantos Romoleroux, Directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral; y cuadro de verificación de requisitos de revocatoria de mandato. (fs. 251 a 260)

5. Oficio No. 0003920, de 21 de septiembre de 2011, dirigido al señor César Humberto Escudero Chaulangui, mediante el cual el Secretario General del Consejo Nacional Electoral, Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, transcribe la resolución PLE-CNE-17-20-9-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre de 2011; y, Oficio No. 0003921, de 21 de septiembre de 2011,en el cual se comunica al Dr. Armando Aguilar, el contenido de la citada resolución. (fs. 261 a 264)

6. Oficio No. 0228-D-IPC-CNE-DPS-2011, de 18 de noviembre de 2011, dirigido al Lic. Omar Simon, Presidente CNE en esa época, suscrito por el Lic. Iván Piedra Castro, Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, en el cual se remite la "apelación que realiza el Sr. Humberto Escudero, para el Tribunal Contencioso Electoral, ante la negativa de admisibilidad por parte del CNE, en el pedido de revocatoria del Sr. Armando Aguilar, Asambleísta de la Provincia de Sucumbíos." (fs. 266 a 269)

7. Oficio Nº004681, de 22 de noviembre de 2011, dirigido a la Dra. Ximena Endara Osejo, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, a ese momento, Secretario del Consejo Nacional Electoral, a través del cual le remite "(…) el expediente que corresponde al Recurso Ordinario de Apelación, interpuesto por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, proponente de la Revocatoria de Mandato del doctor Placido (sic) Armando Aguilar, Asambleísta por la Provincia de Sucumbíos, constante en doscientas sesenta y nueve (269) fojas, así como un CD, con la leyenda "Armando Aguilar-Joffre Poma"; y razón de ingreso a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral. (fs. 270 a 271)

8. Auto de 5 de diciembre de 2011, a las 15h55 dictado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y razones de notificación. (fs. 272 a 273).

9. Escrito del señor César Humberto Escudero Chaulangui, ingresado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, el día 09 de diciembre de 2011, a las 11h45. (fs. 277 a 277 vlta)

10. Oficio N°0045 de 8 de diciembre de 2011, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del

Consejo Nacional Electoral, ingresado en la Secretaría General de este Tribunal el día 09 de diciembre de 2011, a las 19h30, con dos fojas certificadas. (fs. 278 a 280)

11. Oficio Nro. 0248-IPC-D-DPS-CNE-2011 de 8 de diciembre de 2011, suscrito por el Lic. Iván Piedra Castro, Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, ingresado en la Secretaría General de este Tribunal, el día 12 de diciembre de 2011, a las 16h40, con tres fojas simples del Oficio No. 0003920 y en tres fojas certificadas remite el Oficio No. 224-IP-DPS-CNE-2011 y Oficio No. 1172-P-OSC-CNE-2011. (fs. 281 a 287)

12. Auto de fecha 21 de diciembre de 2011, las 12h45, mediante el cual el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, admite a trámite el recurso ordinario de apelación interpuesto por César Humberto Escudero Chaulangui, y notifica al señor Dr. Plácido Armando Aguilar, Asambleísta por la provincia de Sucumbíos para que se pronuncie sobre el recurso y aclaración presentados por el señor César Humberto Escudero Chaulangui. (fs. 289 y vlta)

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano jurisdiccional de la Función Electoral, encargado de administrar justicia como instancia final en materia electoral, con el objetivo de garantizar los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 221 de la Constitución de la República del Ecuador. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 70 numerales 2 y 5; 72, inciso segundo; 268 numeral 1; 269 numeral 12 de este cuerpo legal; así como con las disposiciones contenidas en los artículos 13, 49 numeral 1 y artículos 50 a 56 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano competente para conocer, tramitar y resolver la presente causa.

El inciso tercero del artículo 244 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que "En el caso de consultas populares y referéndum, podrán proponer los recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia directa; en el caso de revocatorias del mandato, los que han concurrido en nombre de los ciudadanos en goce de sus derechos políticos para pedir la revocatoria, así como la servidora o servidor público de elección popular a quien se solicite revocar el mandato (...)"

En la sustanciación del recurso, se han observado las solemnidades esenciales que le son propias, por lo que se declara su validez.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

3.1 Interposición del recurso ordinario de apelación

a) El señor César Humberto Escudero, presentó el día 18 de noviembre de 2011, a las 09h13, en la Dirección Provincial Electoral de Sucumbíos, un recurso de apelación, conforme se observa a fojas 267 a 269 del expediente.

b) En su escrito de aclaración, el citado ciudadano manifestó que el recurso lo presenta específicamente "sobre el hecho del OFICIO No. 1172-P-OSC-CNE-2011, de fecha Quito, M (sic) 9 de noviembre de 2011".

c) A fojas 281 del expediente consta el Oficio No. 0248-IPC-D-DPS-CNE-2011, de 08 de Diciembre de 2011, suscrito por el Lic. Iván Piedra Castro, Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, mediante el cual remite a este Tribunal copia certificada del Oficio N° 1172-P-OSC-CNE-2011 de 9 de noviembre de 2011 " (…) con el recibido del señor César Humberto Escudero Chaulangui, y se informa que la fecha de notificación fue el 15 de noviembre de 2011" en forma personal al referido ciudadano.

d) En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se determina en el artículo 268, numeral 1 e inciso final que: "Ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se podrán interponer los siguientes recursos: 1. Recurso Ordinario de Apelación (…) Los recursos y acciones que se presenten ante el Tribunal Contencioso Electoral fuera del periodo de elecciones, tendrán un plazo máximo de duración de treinta días para su resolución". En tanto que en numeral 12 del artículo 269, se establece que el recurso ordinario de apelación se podrá plantear: "Contra cualquier otro acto o resolución que emane del Consejo Nacional Electoral o de las juntas provinciales electorales que genere perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación activa para proponer los recursos contencioso electorales, y que no tengan un procedimiento previsto en esta Ley".

El recurso fue interpuesto por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, dentro del tiempo establecido en el Código de la Democracia y el reglamento pertinente de la materia, en consecuencia el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, lo admitió a trámite.

3.2 Argumentos del recurrente

El señor César Humberto Escudero Chaulangui, interpone un recurso de impugnación para ante el Tribunal Contencioso Electoral, en el cual manifiesta:

a) Que con "fecha, Nueva Loja, 15 de noviembre del 2011, la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos me notifica el OFICIO N° 1172-P-OSC-CNE-2011, con fecha Quito M 9 de noviembre de 2011, con el siguiente contenido *"...en los artículos 30 y 31 disponen que las resoluciones del Consejo Nacional Electoral se ejecutarán una vez aprobadas y constarán en el acta respectiva; y, para ser consideradas necesitan el voto favorable de tres consejeras y consejeros, debiendo proponerse en la misma sesión o en la siguiente, y frente al caso de recibir en comisión general, el Pleno de este Organismo se constituirá en sesión y las personas naturales y jurídicas concurrirán a la misma, previa solicitud o en el caso de que este organismo cite a la parte interesada"*, lo que se considera una negativa pese al pedido formal realizado y al respecto de su mismo contenido de que ".....en relación a la petición que marca exclusivamente una exposición de motivación en relación a una decisión propia y exclusiva de este organismo, no viene en trámite administrativo", me

pregunto no violenta mis derechos constitucionales, con la decisión que debería tomar el soberano".

b) Que "Mediante RESOLUCIÓN DE OFICIO No. 0003920, de fecha Quito, 21 de septiembre de 2011, se me ha notificado con fecha 26 de septiembre de 2011, las 13h10 minutos, por medio de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, en la que textualmente dice *"RESUELVE.- Acoger el informe de la Directora de Asesoría Jurídica, y consecuentemente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus* ***atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,*** *no admite la solicitud de revocatoria de mandato (…....), por lo que dispone el archivo de la petición"*. Siendo que el informe lo emite la Dra. Natalia Campos, de Asesoría Jurídica del CNE, y el Pleno del Organismo lo acoge sin motivación alguna por parte de los señores Consejeros, donde no consta ni siquiera firma de respaldo.

c) Que "En lo esencial no resuelve la necesidad que esta resolución sea revisada por otra instancia, lo cual evitaría precisamente que la misma provoque daño, pues, de existir irregularidades de cualquier naturaleza en la decisión adoptada por la Directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, estas serían corregidas por otra instancia. Cabe recalcar que se me ha notificado a los cuatro meses de haber presentado la solicitud de revocatoria, y por lo tanto no existe un tempo (sic) en la que deben pronunciarse siendo de equidad realizar la impugnación".

d) Cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 1 del artículo 14.

e) Que se violenta sus derechos constitucionales y legales cuando no se da paso a "(...) que se entreguen los formularios para la recolección de firmas de los ciudadanos que serán quienes juzguen la conducta del señor asambleísta de quien solicito la revocatoria del mandato, para que así sea el soberano quien lo eligió lo cese en sus funciones con un debido proceso eleccionario, y no la Señora Directora de Asesoría Jurídica sea el ente juzgador para limitar mis derechos ciudadanos".

f) Cita el artículo 105 de la Constitución de la República del Ecuador y manifiesta que "Derecho que no se me ha dado paso sin por lo menos entregarme los formularios de la recolección de firmas de los ciudadanos que conocemos y convivimos en la provincia de Sucumbíos. Es decir existe una norma suprema que el señor Presidente Omar Simon lo reconoce y dice la Carta Magna".

g) Que "Se ha remitido al Consejo Nacional Electoral de manera clara y precisa todos los requisitos establecidos en la Constitución para que se me admita a trámite, documentos tales como: "He presentado el plan de trabajo del Dr. Armando Aguilar, asambleísta de Sucumbíos, en copias debidamente certificadas por la Delegación Provincial de Sucumbíos (*donde se observa el incumplimiento del plan de trabajo);* Un CD, que ni siquiera se ha tomado en cuenta para la demostración de las prohibiciones de los señores asambleístas, en la que se demuestra la confrontación del pueblo contra pueblo y el señor Dr. Armando Aguilar apoyando (sic) en un grupo la confrontación, situación que el pueblo de Sucumbíos lo tiene muy bien identificado"; Mi identidad y ciudadano que soy se ha comprobado con la copia de la cédula de ciudadanía que adjunté y el certificado de votación, en la que se nota mi derecho de participación actual; Para demostrar que no me encuentro inhabilitado he adjuntado la certificación otorgada por la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, y ahí manifiestan que no me encuentro inhabilitado; y, he demostrado de forma clara y precisa los motivos del incumplimiento del plan de trabajo del Dr. Armando Aguilar asambleísta por la provincia de Sucumbíos, solamente al manifestar sobre la Universidad Amazónica que hasta la actualidad no es una realidad, y al decir no ha cumplido con el ofrecimiento del plan de trabajo del Dr. Armando Aguilar asambleísta por la provincia de Sucumbíos, solamente al manifestar sobre la Universidad Amazónica que hasta la actualidad no es una realidad (…) Con el documento de la manifestación de los agricultores y sus dirigentes, se demuestra el incumplimiento del plan de trabajo nuevamente, situación que tampoco ha sido motivada ni analizada."

En el escrito presentado en el Tribunal Contencioso Electoral, el día 09 de diciembre de 2011, el señor César Humberto Escudero Chaulangui, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, respecto a la "ESPECIFICACIÓN DEL ACTO, RESOLUCIÓN O HECHO SOBRE EL CUAL INTERPONE EL RECURSO O ACCIÓN, señaló:

"Específicamente es sobre el hecho del OFICIO N° 1172-P-OSC-CNE-2011, con fecha Quito, M 9 de noviembre de 2011 (…) por lo tanto cabe mi pedido de apelación, debido a la violación de mis derechos constitucionales. (…) he acudido donde ustedes jueces con el único objetivo de que **SE ENTREGUE LOS FORMULARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LA CIUDADANÍA DE SUCUMBÍOS,** y sea el soberano que le dio el poder al señor Asambleísta el partícipe directo de nuestra democracia, dando cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador y no al pronunciamiento de la Directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral".

3.3 Pronunciamiento de la autoridad contra la cual se solicita la revocatoria del mandato

El Dr. Plácido Armando Aguilar, mediante escrito ingresado en la Secretaría General de este Tribunal el día 27 de diciembre de 2011, a las 14h39, dentro de la causa No. 0897-2011-TCE, expone:

a) Que (…) El recurrente César Humberto Escudero Chaulangui, al momento de presentar la solicitud de revocatoria de mi mandato ante la Dirección Provincial del Consejo Nacional Electoral de Sucumbíos no determinó de manera clara y precisa los motivos por los cuales solicitaba la revocatoria de mi mandato, al no justificar en forma clara y precisa los aspectos de mi Plan de Trabajo presentado en la inscripción de mi candidatura y que habrían sido incumplidos, tampoco justificó de forma clara y precisa la o las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana que se consideran incumplidas o violentadas y la descripción de las condiciones en las que se habría producido el incumplimiento o la violación legal, así como tampoco justificó en forma clara y precisa el

incumplimiento de mis funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley. Por las referidas consideraciones legales, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, de manera motivada, mediante Resolución **PLE-CNE-17-20-9-2011 del día veinte de septiembre del 2011 RESUELVE:** En lo principal: **"No admitir la solicitud de revocatoria de mi mandato planteada por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, por lo que dispone el archivo de la petición".**

b) Que (…) en su escrito de apelación no justifica de manera clara y precisa, lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 269 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; (…) Puesto que, en ninguno de los dos escritos presentados por el recurrente ante el Tribunal Contencioso Electoral, impugna o apela la Resolución del Consejo Nacional Electoral **PLE-CNE-17-20-9-2011 emitida el veinte de septiembre del 2011,** acto o resolución que debería ser materia principal de la apelación propuesta; así como tampoco, justifica el perjuicio que le estaría causando el acto o resolución que emane del Consejo Nacional Electoral y no de la Asesoría Jurídica del CNE, como de manera (…) ilegal está impugnando.

c) Que " (…) Los dos escritos de apelación presentados por el recurrente ante ustedes, tampoco contienen los requisitos mínimos establecidos en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 13 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Que "se oficie al señor Presidente del Consejo Nacional Electoral, (sic) remita al Tribunal Contencioso Electoral copias debidamente certificadas y foliadas de la Resolución **PLE-CNE-17-20-9-2011 emitida el veinte de septiembre del 2011** y del expediente que lo sustenta; a fin de que se tenga como prueba a mi favor".

e) Que "(...) se sirvan desechar el recurso ordinario de apelación interpuesto por César Humberto Escudero Chaulangui, por absurdo e improcedente; y, consecuentemente ratificar la resolución **PLE-CNE-17-20-9-2011 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el veinte de septiembre del 2011.**

3.4 De la solicitud de formularios de revocatoria del mandato.

Mediante Oficio Circular No. 0000133 de 20 de mayo de 2011 (fs. 4 a 4 vlta), dirigido a los Directores de las Delegaciones de las Provincias del C.N.E y a los Presidentes/as de las Juntas Provinciales Electorales, el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario en ese entonces del Consejo Nacional Electoral, remite la transcripción de la Resolución PLE-CNE-3-17-5-2011, modificada en sesión ordinaria de jueves 19 de mayo de 2011. En la referida resolución se dispuso: "Notificar a las y los ciudadanos que en uso de sus derechos de participación hayan solicitado los formularios para la recolección de firmas para proponer la revocatoria del mandato de una autoridad de elección popular y que se encuentren dentro del plazo de 180 días establecido por el derogado artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para que en el término de siete días contados a partir de la notificación, presenten al Consejo Nacional Electoral los requisitos de admisión de la solicitud dispuestos por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que regulan la revocatoria del mandato. De no cumplirse con dicho término se considerará que él o los peticionarios han desistido de continuar con el trámite de revocatoria del mandato y se procederá a su archivo. (...)"

El 23 de mayo de 2011, a través de Oficio Circular No. 000137, el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, a esa época, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, comunicó a los señores Directores de las Delegaciones Provinciales que "Por disposición del licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Organismo, en mi calidad de Secretario General del Consejo Nacional Electoral, hago conocer (…) que el término de siete días constantes en la Resolución PLE-CNE-3-17-5-2011, corren a partir de la publicación de dicha resolución en los diarios El Comercio y El Universo, de circulación nacional, realizada el jueves 19 de mayo del 2011, de ahí que dicho término concluye el lunes 30 de mayo del 2011 (...).

A fojas 6 a 7 del expediente constan las publicaciones realizadas en el periódico el Comercio y El Universo, de fecha 19 de mayo de 2011, de la Resolución PLE-CNE-3-17-5-2011.

3.5 Del procedimiento en la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos

El ciudadano César Humberto Escudero Chaulangui, el 08 de junio de 2011, presentó una solicitud para la entrega de formularios de revocatoria del mandato en contra del señor Asambleísta por la Provincia de Sucumbíos, Dr. Plácido Armando Aguilar, de la Organización Política Movimiento Patria Altiva i Soberana País, lista 35, al considerar que: "De la copia debidamente certificada, del plan de trabajo legislativo, presentado en la Delegación Provincial de Sucumbíos, se desprende que la Autoridad electa popularmente y que se encuentra en funciones, en el título de PROPUESTAS DE TRABAJO LEGISLATIVO Y FISCALIZADOR, entre otras cosas el numeral 7 expresa "...7.- Ley que crea la Universidad Amazónica de Sucumbíos". Han transcurrido más de dos años de que el referido Asambleísta esta en funciones y no ha dado cumplimiento a su plan de trabajo, pues no consta en las leyes ni en el Registro Oficial la Ley propuesta, y peor aún se encuentra creada en la provincia de la Universidad Amazónica de Sucumbíos, como expresamente lo indica en su plan de trabajo. De lo anotado se desprende que el referido Asambleísta, se encuentra inmerso dentro de las causales del Art. 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (…)"

El Director de la Delegación Provincial de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, Lcdo. Iván Piedra Castro, notificó al Dr. Plácido Armando Aguilar, Asambleísta con el contenido de la solicitud de revocatoria presentada por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, conforme se observa a fojas 32 a 34.

El Dr. Plácido Armando Aguilar, Asambleísta por la provincia de Sucumbíos, ante la solicitud presentada por el

ciudadano César Humberto Escudero, expresa que impugna "(...) documentadamente la referida solicitud, por no reunir los requisitos de admisibilidad y porque la solicitud no contiene la motivación que la respalda de manera clara y precisa (...)". En relación a la creación de la "Universidad Amazónica de Sucumbíos", el señor Asambleísta manifiesta: "(…) que el proceso de creación de universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares se encuentra claramente determinado en el Art. 354 Ibídem que dice: "**Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por ley previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema que tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación...".** La norma constitucional citada tiene concordancia con el artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación (…) CUARTO.- Conforme se desprende de las disposiciones constitucionales y legales anteriormente mencionadas, previo a la presentación y tramitación de un proyecto de ley para la creación de una universidad o escuela politécnica, debe cumplirse obligatoriamente con los presupuestos legales ya invocados; de tal manera que, el solicitante de mi revocatoria al intentar justificar la supuesta falta de cumplimiento de mi Plan de Trabajo Legislativo, por desconocimiento de la normativa constitucional y legal, cree erróneamente que es responsabilidad exclusiva de los asambleístas la creación de universidades y escuelas politécnicas, conforme se desprende del cuarto párrafo de dicha solicitud (…) para presentar este argumento como falta de cumplimiento de mi Plan de Trabajo Legislativo, NO HA JUSTIFICADO Y TAMPOCO HA DEMOSTRADO QUE EXISTEN LOS INFORMES PREVIOS Y VINCULANTES PARA TRAMITAR LA LEY QUE CREARÍA LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE SUCUMBÍOS; razón por la que, EL NUMERAL 7 DE MI PLAN DE TRABAJO NO HA SIDO INCUMPLIDO, PUESTO QUE INCLUSO CONFORME APARECE DEL REGISTRO DE VOTACIONES DEL PLENO No. 46 DE FECHA 4 DE AGOSTO DEL 2010, CON MI VOTO RESPONSABLE SE APROBÓ LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (…) que en su **Disposición Transitoria Décima Quinta,** establece "**Durante los cinco años posteriores a la promulgación de esta Ley no se creará ninguna nueva institución superior.** (...)"

Mediante Oficio No. 142-IP-DPS-CNE-2011 de 21 de junio de 2011, el Lcdo. Iván Piedra C, Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, remite al Licenciado Omar Simon Campaña, en ese tiempo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, la documentación correspondiente a la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del Dr. Plácido Armando Aguilar.

3.6 Del procedimiento en el Consejo Nacional Electoral

3.6.1 El Director de la Delegación Provincial de Sucumbíos, con fecha 11 de agosto de 2011, con el Oficio No. 177-IP-DPS-CNE-2011, remitió al entonces, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Lcdo. Omar Simon Campaña, otros documentos presentados ante ese organismos, por el ciudadano César Humberto Escudero, como respaldo al trámite de la revocatoria del mandato del señor Dr. Armando Aguilar, Asambleísta de Sucumbíos. Este oficio se remitió a través del Memorando N° 1030-NCR-DAJ-CNE-2011 de fecha 16 de agosto de 2011, al Lic. Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas.

3.6.2 La Directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, en esa época, Dra. Natalia Cantos Romoleroux, elaboró un INFORME REFERENTE A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE MANDATO DEL DOCTOR PLÁCIDO ARMANDO AGUILAR, ASAMBLEÍSTA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBíOS. En este informe, constan como acápites: Antecedentes, Contenido de lo Motivación, Contenido de la Impugnación, Base Legal, Verificación de los requisitos de Admisión y Conclusión.

3.6.3 Dentro de las conclusiones del Informe Jurídico, consta que: "(...) El solicitante está inscrito en el registro electoral de la circunscripción de la autoridad a la que se propone revocar el mandato, por tanto cumple con lo establecido en el artículo 25 reformado de la Ley de Participación Ciudadana. (…) El solicitante no presenta la declaración en la que juramenta no estar incurso en inhabilidades (…) La motivación no cumple con lo requerido en el artículo 27 reformado de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Artículo Innumerado añadido por la **LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS- CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA- Y A LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE REGULAN LA REVOCATORIA DE MANDATO,** luego del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y, tampoco se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14 del REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA A TRAVÉS DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTAS POPULARES, REFERENDUM Y REVOCATORIA DE MANDATO; puesto que: a) No justifica en forma clara y precisa los aspectos del plan de trabajo presentado en la inscripción de la candidatura y que habrían sido incumplidos por la autoridad contra quien se dirige la petición. b) No justifica en forma clara y precisa la o las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana que considera incumplidas o violentadas y la descripción de las condiciones en las que se habría producido el incumplimiento o la violación legal. c) No justifica en forma clara y precisa el incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley, referentes a la dignidad que ejerce la autoridad, y la descripción de las condiciones en las que se habría producido el incumplimiento. (…) Con la Base legal detallada, esta Dirección es del criterio que, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no admita la solicitud y disponga su archivo".

3.6.4 El Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre de 2011, adoptó la resolución PLE-CNE-17-20-9-2011, según la cual resolvió: "Acoger el informe de la Directora de Asesoría Jurídica, y consecuentemente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, no admite la solicitud de revocatoria de

mandato planteada por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, en contra del señor doctor Armando Aguilar, Asambleísta por la provincia de Sucumbíos, por cuanto el peticionario no ha justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria de mandato, de conformidad con lo establecido en la Ley, (…) por lo que se dispone el archivo de la petición. La resolución del Consejo Nacional Electoral, fue notificada a través del Oficio No. 0003920 de 21 de septiembre de 2011, dirigido al señor César Humberto Escudero Chaulangui, y del Oficio No. 00003921, de la misma fecha, dirigido al Dr. Armando Aguilar Asambleísta por la Provincia de Sucumbíos.

3.6.5 Con fecha 18 de noviembre de 2011, el señor César Escudero, presentó en la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos un recurso de apelación. Este documento fue remitido al Consejo Nacional Electoral por el Lic. Iván Piedra Castro, al Presidente del CNE, de esa época, mediante Oficio No. 0228-D-IPC-CNE-DPS-2011.

3.7 Análisis del recurso ordinario de apelación

De la revisión del expediente así como los argumentos presentados por el apelante y la autoridad cuestionada, este Tribunal colige:

1. La resolución PLE-CNE-17-20-9-2011, fue notificada oportunamente a las partes procesales, y se encuentra ejecutoriada.

2. La apelación del señor César Humberto Escudero Chaulangui, fue interpuesta, según lo expuesto por el propio recurrente en su escrito de aclaración, en contra del Oficio N° 1172-P-OSC-2011 de 9 de noviembre de 2011, notificado con fecha 15 de noviembre del 2011.

En este Oficio, el Licenciado Omar Simon, en la calidad que ostentaba como Presidente del Consejo Nacional Electoral, da contestación al oficio No. 212-IP-DPS-CNE-2011 de 18 de octubre de 2011 " (…) relativa a la petición formulada por el señor CÉSAR HUMBERTO ESCUDERO CHAULANGUI, respecto a no estar de cuerdo (sic) con la resolución dictada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre la solicitud de revocatoria de mandato a la dignidad de Asambleísta Provincial de Sucumbíos del señor Plácido Armando Aguilar, por lo que pide se le tome en cuenta para ser escuchado en el Pleno de este Organismo y motivar su pedido en audiencia." El entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral, en el referido documento motiva su contestación y considera: "(…) improcedente la solicitud presentada por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, por ilegal"

En este aspecto, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, estima que:

Se admitió el recurso ordinario de apelación, en aplicación de las garantías del debido proceso y de conformidad con lo previsto en el artículo 269 numeral 12 del Código de la Democracia, que permite presentar un recurso a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación activa contra: "Cualquier acto o resolución que emane del Consejo Nacional Electoral o de las juntas provinciales electorales que genere un perjuicio (…), y que no tenga un procedimiento previsto en esta Ley".

El acto que se impugna es el contenido en el Oficio NO. 1172-P-OSC-CNE-2011 de M' 9 de noviembre de 2011, suscrito por el entonces, Presidente del Consejo Nacional Electoral. En dicho oficio se expuso de manera clara cuál es la competencia que de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia corresponden al Consejo Nacional Electoral, una vez que adopta sus decisiones. Asimismo, se explicó el alcance del artículo 30 y 31 del Código de la Democracia referentes a la ejecución de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y sobre el pedido de reconsideración.

No obstante, el recurrente en sus escritos tanto de interposición del recurso como de apelación, argumenta:

a) Que se ha "violado sus derechos constitucionales". Al respecto, no consta en autos, prueba alguna, que confirmen sus afirmaciones o que permita a este Tribunal, colegir, en qué forma el órgano electoral o sus autoridades, vulneraron los derechos del recurrente, específicamente los artículos 105, 227 y 424 que cita el recurrente en su escrito, que obra a fojas 277 del expediente.

b) Que en su escrito de aclaración, invoca que su único objetivo es que "**SE ENTREGUE LOS FORMULARIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LA CIUDADANÍA DE SUCUMBÍOS"** que los jueces del Tribunal, den cumplimiento a la Constitución y no "al pronunciamiento de la Directora de Asesoría Jurídica". El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, considera que el Consejo Nacional Electoral, en atención a sus atribuciones constitucionales y legales dictó la resolución PLE-CNE-17-20-9-2011, que le fue notificada a través del Oficio No. 0003920 al señor César Humberto Escudero Chaulangui, en persona el día 26 de septiembre de 2011, y dentro del tiempo estipulado por la ley, resolución que no fue apelada por el referido ciudadano ante la justicia electoral. El señor César Humberto Escudero Chaulangui, posterior a la notificación de la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, envió una solicitud de audiencia para ser recibido por el Consejo Nacional Electoral; no obstante, con la presentación de esta petición, de modo alguno, se suspendía el efecto jurídico de la resolución adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que contiene el informe jurídico.

En cuanto a la referencia que se hace sobre el informe jurídico, este argumento por lo señalado anteriormente, no amerita pronunciamiento del Tribunal y deviene en improcedente, ya que no se está apelando a la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral. El informe jurídico como ya ha señalado este Tribunal en otros fallos, es un documento de carácter interno sujeto a la aprobación o no por parte del Consejo Nacional Electoral.

3. No se dio paso a la petición del Asambleísta por Sucumbíos, Dr. Plácido Armando Aguilar, para que se pida copia del expediente y la resolución PLE-CNE-17-20-9-2011 al Consejo Nacional Electoral, en consideración de que estos documentos ya fueron oportunamente remitidos por dicho órgano.

4. Por respeto al derecho de petición consagrado en la Constitución, este Tribunal admitió a trámite el presente

recurso de apelación y que se refiere a un Oficio enviado por el entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral al Director de la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, cuando la resolución del Consejo Nacional Electoral se encontraba ejecutoriada, y por lo mismo apelar del oficio en mención es irrelevante para los efectos que pretende el apelante.

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se rechaza por improcedente el recurso ordinario de apelación interpuesto por el señor César Humberto Escudero Chaulangui, en contra del Oficio N°. 1172-P-OSC-CNE-2011 de 9 de noviembre de 2011.

2. Ejecutoriada la presente sentencia, remítase a través de Secretaría General, copia certificada de la misma al Consejo Nacional Electoral y a la Delegación Provincial Electoral de Sucumbíos, en atención a lo previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

3. Actúe el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral.

4. CÚMPLASE y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Juez.

f.) Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez.

Certifico, que la presente sentencia fue dictada el día 16 de enero de 2012.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General.

SENTENCIA

CAUSA No. 0886-2011-TCE

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: DRA. XIMENA ENDARA OSEJO, JUEZA PRESIDENTA; DRA. AMANDA PÁEZ MORENO, JUEZA VICEPRESIDENTA; DRA. ALEXANDRA CANTOS MOLINA, JUEZA; DR. ARTURO DONOSO CASTELLÓN, JUEZ; AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO, JUEZ.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- VISTOS: Quito, Distrito Metropolitano, 19 de enero de 2012, las 15h30.

I.- ANTECEDENTES

De doscientos cuarenta y cinco (245) fojas que conforman el expediente, se consideran los siguientes documentos:

1) El día viernes treinta de septiembre de dos mil once, a las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, se recibe en la Secretaría General de este Tribunal, el expediente en ochenta (80) fojas, el cual contiene el recurso odinario de apelación interpuesto por los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño y Néstor Segundo Ibarra Andrade, proponentes de la revocatoria del mandato del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, provincia de Manabí, en contra de la resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre del 2011. A este expediente se le ha asignado el No. 0886-2011-TCE.

2) Copia del Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo de 2011, que contiene la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; y, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que regulan la Revocatoria del Mandato. (fs. 154 a 156).

3) Copia certificada del oficio circular No. 0000133 de 20 de mayo del 2011, dirigido a los Directores de las Delegaciones de las Provincias del C.N.E y Presidentes/as de las Juntas Provinciales Electorales, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, en ese tiempo Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual, como alcance al oficio circular No. 00131 de 18 de mayo de 2011, comunica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria del día jueves 19 de mayo del 2011, modificó la resolución PLE-CNE-3-17-5-2011, disponiendo que el texto definitivo de la misma, tenga la redacción que transcribe en el oficio señalado, respecto del establecimiento de los requisitos para admitir o negar una solicitud de revocatoria del mandato.(fs. 157 y vuelta).

4) Copia certificada del oficio circular No. 000137 de 23 de mayo del 2011, dirigido a los Directores de las Delegaciones Provinciales, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, en ese tiempo Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual hace conocer que el término de siete días constantes en la Resolución PLE-CNE-3-17-5-2011, corren a partir de la publicación de dicha resolución en los diarios El Comercio y el Universo, de circulación nacional realizada el jueves 19 de mayo del 2011. (fs. 158).

5) Publicación de la Resolución PLE-CNE-3-17-5-2011, en los diarios El Comercio y El Universo, de circulación nacional, realizada el jueves 19 de mayo del 2011, por lo que el término de siete días constantes en la resolución indicada concluye el lunes 30 de mayo del 2011.(fs. 159 a 160).

6) Registro Oficial No. 536 de fecha viernes 16 de septiembre del 2011, el que contiene el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, expedido por el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución No. PLE-CNE-8-22-8-2011. (fs. 162 a 166).

7) Oficio No.0239-D-JBM-CNE-DPEM, de fecha 10 de junio de 2011, dirigido al Lic. Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral en aquel tiempo, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, con el que hace conocer y emite los documentos presentados por las y los proponentes a la revocatoria del mandato de diferentes autoridades, entre las que consta la del señor Carlos Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, provincia de Manabí. (fs.167 y 168).

8) Acta de entrega -recepción de fecha 13 de junio de 2011, suscrita por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la Delegación Electoral de Manabí, mediante la cual entrega los documentos para la Revocatoria del Mandato de la autoridad antes señalada, recibido el 13 de junio de 2011, a las 9h43, en archivo general del Consejo Nacional Electoral. (fs. 169).

9) Escrito del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal del cantón Pedernales suscrito conjuntamente con su abogado defensor Dr. Jorge Acosta Cisneros, de fecha 7 de junio de 2011, dirigido al Lic. Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral en aquel tiempo, mediante el cual adjunta documentación y contesta la petición de revocatoria del mandato presentada por los proponentes Sres. Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero, recibido en la Delegación Provincial Electoral de Manabí el 08 de junio de 2011, a las 10h08. (fs. 170 y 171).

10) Credencial de Concejal Urbano del cantón Pedernales otorgado al señor Carlos Alfredo Cedeño por la Junta Provincial Electoral de Manabí. (fs. 174).

11) Notificación al Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, con la solicitud de revocatoria del mandato mediante oficio No. 024-S-PSM-CNE-DPEM de fecha 31 de mayo del 2011, suscrito por el Ing. Pedro Sánchez Macías, Secretario (E) del CNE-DPEM. (fs. 209).

12) Escrito de fecha 30 de mayo del 2011, dirigido al Lic. Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral, en aquel tiempo, suscrito por los Sres. Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Andrade y Eleodoro Angulo Cuero, en el que señalan que en virtud de la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, Art. 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y al oficio circular No. 000132 de fecha 18 de mayo del 2011, solicitan la Revocatoria del Mandato del Concejal del cantón Pedernales, señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, para lo cual manifiestan adjuntar los originales con firmas recolectadas en ciento cincuenta y dos (152) formularios, un CD de respaldo y copia de la solicitud de los formularios de fecha 29 de diciembre del 2010. (fs. 212 a 215).

13) Informe Jurídico suscrito por la Dra. Natalia Cantos Romoleroux, Directora de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, referente a la solicitud de Revocatoria de Mandato del Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, provincia de Manabí, que presentan los ciudadanos Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero. (fs. 219 a 223).

14) Oficio No. 003999 de fecha 21 de septiembre de 2011, dirigido al Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en aquel tiempo, mediante el cual comunica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre del 2011, adoptó la resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011. (fs. 225 y 226).

15) Notificación mediante oficio No. 004000 de fecha 21 de septiembre de 2011, dirigido a los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, en aquel tiempo, mediante el cual les comunica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre de 2011, adoptó la resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011, en la que " (...) no admite la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero, en contra del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, por cuanto los peticionarios no han justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria de mandato, de conformidad con lo establecido en la Ley, revocatoria que puede ser solicitada únicamente por las siguientes causales: Por incumplimiento del plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la Ley, correspondiéndoles a cada una de las dignidades de elección popular, por lo que se dispone el archivo de la petición,(...)".(fs. 227 a 229).

16) Notificación mediante oficio No. 004001 de fecha 21 de septiembre de 2011, dirigido al Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral en aquel tiempo, mediante el cual comunica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre de 2011, adoptó la resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011. (fs. 230 a 232).

17) Escrito, de los Sres. Ricardo Guzmán Mero Cedeño y Néstor Segundo Ibarra Andrade, recibido en el archivo general del Consejo Nacional Electoral el 29 de septiembre de 2011, a las P: 4: 41, el cual apelan de la decisión adoptada por ese Organismo en resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011, la cual no admite la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los recurrentes en contra del Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. (fs. 233).

18) Oficio No. 004222 de 30 de septiembre del 2011, dirigido a la Dra. Ximena Endara Osejo, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral en aquel tiempo, mediante el cual remite el expediente que corresponde al Recurso Ordinario de Apelación interpuesto por los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño y Néstor Segundo Ibarra Andrade, proponentes de la Revocatoria de Mandato del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. (fs. 234).

19) Mediante providencia de 28 de diciembre de 2011, a las 14h20, el Pleno de este Organismo, dispuso que se oficie al Dr. Domingo Paredes Castillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, a fin de que disponga a quien corresponda, que en el plazo de dos días certifique, cuándo, a quiénes y en qué forma se notificó el oficio No. 004000 de 21 de septiembre de 2011, dirigido a los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero; y, remita copia certificada de la razón de notificación de la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, efectuada a los señores antes nombrados. (fs. 237).

20) Razón de notificación en persona con el oficio No. 004000, de la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, adoptada por el Consejo Nacional Electoral, a los señores recurrentes y proponentes de la revocatoria del mandato del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, razón suscrita por la Srta. Alexandra Cevallos Solórzano, Secretaria (E) de la Delegación Provincial Electoral de Manabí. (fs. 243).

21) Oficio No. 00235 de 30 de diciembre de 2011, dirigido al Dr. Giovanny López Endara, Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, en aquel tiempo y suscrito por el Ab. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual remite la documentación solicitada por el Tribunal Contencioso Electoral, en providencia de 28 de diciembre de 2011, a las 14h20.(fs. 244).

II.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

2.1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano jurisdiccional de la Función Electoral, encargado de administrar justicia como instancia final en materia electoral, con el objetivo de garantizar los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 221 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 18, 61, 70, 72 y 268 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. En el artículo 269 se enumeran los casos en los cuales se podrá plantear el recurso ordinario de apelación. Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 70 numerales 1 y 2; 72, inciso segundo; 268 numeral 1; 269 numeral 12 de este cuerpo legal, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es competente para conocer, tramitar y resolver la presente causa.

El inciso tercero del artículo 244 del Código de la Democracia, dispone que: "En el caso de consultas populares y referéndum, podrán proponer los recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia directa; en el caso de revocatorias del mandato, los que han concurrido en nombre de los ciudadanos en goce de sus derechos políticos para pedir la revocatoria así como la servidora o servidor público de eleccción popular a quien se solicite revocar el mandato".

En la sustanciación del recurso, se han observado las solemnidades esenciales que le son propias, por lo que se declara su validez.

2.2 ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

2.2.1 La revocatoria del mandato.-

La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 103 a 105, garantiza el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la revocatoria del mandato.

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece en el numeral 5 del artículo 2, dentro de los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos, el "Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular", disposición concordante con lo dispuesto en el artículo 61 numeral 6 de la Constitución.

Los artículos 199 a 201, del mismo Código establecen los requisitos para la revocatoria del mandato de autoridades de elección popular.

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se dispone en el Título II. De la Democracia Directa, artículo 5, que "El Estado garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato; impulsa además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la Constitución y la Ley". En relación a la revocatoria del mandato, se observa que en el capítulo IV, consta este mecanismo de democracia directa a partir del artículo 25 al 28 de la misma ley, artículos que en virtud de la Ley publicada en el Registro Oficial No. 445 de miércoles 4 de mayo de 2011, también fueron reformados y sustituidos.

En el Reglamento para el Ejercicico de la Democracia Directa a través de la iniciativa popular normativa, Consultas populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato aprobado por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE-2-6-1-2011, publicado en el Registro Oficial No. 371 de miércoles 26 de enero de 2011, se determina el procedimiento para el proceso de la revocatoria del mandato.

2.2.2 Competencia del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral, conforme lo señala el artículo 25 numerales 2 y 3 del Código de la Democracia, tiene como funciones: "2. Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato". "3. Resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de su competencia".

En tal virtud, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria de martes 20 de septiembre del 2011, adoptó la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, que en la parte resolutiva dispone: "Acoger el informe de la Directora de Asesoría Jurídica, y consecuentemente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, no admite la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero, en contra del señor Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, por cuanto los peticionarios no han justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria de mandato, de conformidad con lo establecido en la Ley, revocatoria que puede ser solicitada únicamente por las siguientes causales: Por incumplimiento del plan de trabajo; de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la Ley, correspondientes a cada una de las dignidades de elección popular, por lo que se dispone el archivo de la petición. (...)".

2.2.3 El recurso ordinario de apelación

Interposición del recurso y argumentos de los recurrentes

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el plazo para interponer el recurso ordinario de apelación es de tres días; en la especie, los recurrentes Ricardo Guzmán Mero Cedeño y Néstor Segundo Ibarra Andrade, han presentado el recurso el 29 de septiembre de 2011 en archivo general del Consejo Nacional Electoral, habiendo sido notificados con el oficio No.004000, el 27 de septiembre de 2011, que contiene la Resolución PLE-CNE-40-20-9-2011.

Por lo expuesto, la interposición del recurso presentado por los apelantes, fue realizada dentro del tiempo determinado en la Ley.

b) Los apelantes han expresado que con la notificación de la resolución del Consejo Nacional Electoral antes señalada, se les informa la negativa de admisión de su solicitud de revocatoria en contra del Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, provincia de Manabí, por cuanto no han justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria de mandato y manifiestan los recurrentes, que en la referida resolución se invoca el Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato aprobado con posterioridad a su pedido, por lo que argumentan que se les está negando con requisitos y condiciones que no estaban vigentes a la época de su solicitud y en consecuencia sus legítimos derechos consagrados en los numerales 5 y 6 del artículo 61 de la Constitución de la República.

c) En su escrito los recurrentes indican que en su solicitud presentada el 30 de mayo de 2011, han expuesto de manera clara y precisa los motivos por los cuales solicitaban la revocatoria de mandato del Concejal Cedeño, habiendo cumplido con la presentación de las firmas necesarias para ello, por lo que consideran razones suficientes para que de acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la Revocatoria de Mandato, e incluso con la Ley Orgánica que las reformó, se dé paso a su legítima, legal y constitucional petición, admitiéndola, por que manifiestan que su cantón vive en total abandono de parte no solo de ésta sino de las demás autoridades, cuya revocatoria de mandato también han solicitado.

2.2.4 Consideraciones del Tribunal Contencioso Electoral

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, una vez que ha revisado en su integridad la documentación contenida en el presente expediente, así como los argumentos de los recurrentes, considera:

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75 señala que: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión(...). La misma Constitución en el artículo 76 numeral 7 literales a) y m) incluye como garantías básicas del debido proceso correspondientes al derecho a la defensa, los siguientes derechos:"a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento" y "m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que se decida sobre sus derechos".

Respecto a lo manifestado por los recurrentes, que el Consejo Nacional Electoral, en la resolución No. PLE-CNE-40-20-9-2011, les informa la negativa de admisión de su solicitud de revocatoria de mandato del Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, por no haber justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria; y para lo cual argumentan que se invoca una norma legal aprobada con posterioridad a su petición, cabe indicar que, la resolución señala claramente que no admite la solicitud de revocatoria, "(...) por cuanto los peticionarios no han justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria de mandato, de conformidad con lo establecido en la Ley, revocatoria que puede ser solicitada únicamente

por las siguientes causales: Por incumplimiento del plan de trabajo; de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la Ley, correspondientes a cada una de las dignidades de elección popular, (...)". La normativa legal invocada por el Consejo Nacional Electoral en la resolución recurrida, está establecida en el artículo 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que Regulan la Revocatoria de Mandato, publicada en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo de 2011, que dice:"**Art. 25.- Revocatoria del mandato.-** Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular."(...). Además, el artículo innumerado establecido a continuación del Art. 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que Regulan la Revocatoria de Mandato, establece los requisitos de admisibilidad y que son los siguientes: "1.- Comprobación de la identidad del proponente y que este en ejercicio de los derechos de participación; 2.- Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten; y, 3.- La determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria: (...)". Disposiciones legales concordantes con lo establecido en el Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato, que establece las formalidades que se deben cumplir para un proceso de revocatoria de mandato y que alegan los recurrentes. Más aún, el Consejo Nacional Electoral, al no admitir la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los Sres. Ricardo Guzmán Mero Cedeño, Néstor Segundo Ibarra Zambrano y Eleodoro Angulo Cuero, por no haber justificado en forma clara y precisa su pedido de revocatoria, procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 200 reformado de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que precribe; "La solicitud de revocatoria será rechazada si no cumple lo previsto en la ley que regula la participación ciudadana.(...)." En tal virtud, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral considera que la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2011, se ha fundamentado con pertinencia, de manera explícita y en acatamiento a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, por lo que se considera que deviene en impertinente lo expuesto por los apelantes.

Con estos antecedentes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, considera que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con el debido proceso y se ha motivado en legal y debida forma la decisión dictada, en el marco que señala el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, dicta la siguiente sentencia:

1) Desestimar por improcedente, el recurso ordinario de apelación interpuesto por los señores Ricardo Guzmán Mero Cedeño y Néstor Segundo Ibarra Zambrano, proponentes de la revocatoria del mandato del Sr. Carlos Alfredo Cedeño Dueñas, Concejal Urbano del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí, contra la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2011.

2) Ratificar en todas sus partes la resolución PLE-CNE-40-20-9-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral.

3) Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese con copia certificada al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia, así como a los recurrentes.

4) Continúe actuando en la presente causa el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral.

5) Cúmplase y notifíquese.

f.) Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Juez.

f.) Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez.

Lo certifico.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General TCE.

SENTENCIA

CAUSA No. 488-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 1 de febrero de 2012.- Las 17H00. - **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de “Sancionar por incumplimiento

de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 488-2011-TCE, seguida en contra del señor Jacinto Augusto Díaz Delgado.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h39.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. N°. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte policial suscrito por el SgtoS. de Policía, Valdiviezo Gaibor Octavio, en la ciudad de Portoviejo del día 06 de mayo del 2011, en relación a distribución de bebidas alcohólicas. (fs. 4)

d) Copia del Oficio No. 769-P-OS-CNE-2011 de 4 de mayo del 2011, suscrito por el Lic. Omar Simon Campaña, en esa época Presidente del Consejo Nacional Electoral. (fs. 5)

e) Copias simples de: la cédula de ciudadanía del señor Díaz Delgado Jacinto Augusto, licencia tipo E, del señor Aliatis Montesdeoca Romolo Celestino, cédula de ciudadanía del señor Zambrano Arteaga Carlos Adrián, matrícula del camión Chevrolet placa RBA1646; matrícula de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas del camión Chrevrolet placa GRW0202. (fs.10)

f) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014942-2011-TCE. (fs. 11)

g) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, a las 09h00 y razón de citación (fs. 13 y 15)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 1 de febrero de 2012, a las 14h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el Ab. Fabián Anton Zambrano, funcionario de la Defensoría Pública, el señor Sargento Segundo de Policía Valdiviezo Gaibor Octavio Eliceo; los abogados de la Defensoría del Pueblo: señor Alberto Antonio Macías Chilan y señora Jacqueline Monserrate Pro Pro. No compareció el presunto infractor, por tanto la audiencia se realizó en rebeldía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia. Las intervenciones efectuadas por las partes procesales constan en la correspondiente acta que obra del expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". En concordancia el artículo 123 del mismo Código señala que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público señaló como argumento de defensa: **1.** Que no existe prueba plena, ni detalle de cuál era la actividad ilícita que realizó el presunto infractor; **2.** Que el testimonio del policía no constituye prueba alguna mientras no se encuentre reafirmada la responsabilidad del infractor, esto es mientras no se hubiere probado que su defendido se encontraba distribuyendo alguna bebida alcohólica. **3.** Que no obra del expediente evidencias sobre el supuesto cometimiento del hecho, esto es fotografías o videos, solo se dice en el parte policial que su defendido se encontraba conduciendo un vehículo. **4.** Que al no existir prueba plena, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, que garantiza la presunción de inocencia, en concordancia con lo señalado en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual es un instrumento internacional que ha sido ratificada por el Ecuador, solicita que por todo lo expuesto, se declare a su defendido inocente.

b) El agente de la policía responsable de la elaboración del parte policial y de la entrega de la boleta informativa, manifestó que: **1)** El día 06 de mayo de 2011, al momento de realizar un patrullaje por la 20 de Julio y P. Moreira, constató que dos vehículos de la empresa PILSENER se encontraban distribuyendo cervezas, que trasladó a sus conductores al UPC y les indicó que su actividad se encontraba prohibida por la ley electoral, por tal motivo extendió la boleta al señor Díaz Delgado Jacinto Augusto. **2)** Terminada la intervención del miembro de la Policía Nacional, intervino el defensor público quien lo interrogó. El señor policía, ante las preguntas realizadas, manifestó en lo principal que el señor Diaz Delgado Augusto, estaba sentado en un vehículo de la empresa Pilsener. Señaló que había un documento de la empresa Pilsener que le indicaba al señor Díaz Delgado Jacinto Augusto, que se dirija a distribuir. Que cuando le entregó la boleta no había ningún abogado presente.

c) La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece en el artículo 123 la prohibición de la "distribución de bebidas alcohólicas", no obstante el artículo 291 numeral 3 del mismo Código tipifica y sanciona el "expendio y consumo" de bebidas alcohólicas, por tanto al no constar en este cuerpo legal, cuál es la sanción que se encuentra ligada a la referida prohibición legal establecida en el artículo 123 del Código de la Democracia respecto a la distribución de bebidas alcohólicas, considero que en aplicación del principio de legalidad y de la presunción de inocencia, no procede en el presente caso el aplicar la sanción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia al presunto infractor.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **DIAZ DELGADO JACINTO AUGUSTO**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría Pública y en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría del Pueblo.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 1 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 489-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 1 de febrero de 2012.- Las 17h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto

electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 489-2011-TCE, seguida en contra del señor Carlos Adrián Zambrano Arteaga.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h49.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. N°. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte policial suscrito por el SgtoS. de Policía, Valdiviezo Gaibor Octavio, en la ciudad de Portoviejo del día 06 de mayo del 2011, en relación a distribución de bebidas alcohólicas. (fs. 4)

d) Copia del Oficio No. 769-P-OS-CNE-2011 de 4 de mayo del 2011, suscrito por el Lic. Omar Simon Campaña, en esa época Presidente del Consejo Nacional Electoral. (fs. 5)

e) Copias simples de: la cédula de ciudadanía del señor Díaz Delgado Jacinto Augusto, licencia tipo E, del señor Aliatis Montesdeoca Romolo Celestino, cédula de ciudadanía del señor Zambrano Arteaga Carlos Adrián, matrícula del camión Chevrolet placa RBA1646; matrícula de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas del camión Chrevrolet placa GRW0202. (fs. 6-10)

f) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014941-2011-TCE. (fs. 11)

g) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, las 09h20 y razón de citación. (fs. 13 a 13 vuelta y fs. 15)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 1 de febrero de 2012, a las 14h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Carlos Adrián Zambrano Arteaga, acompañado del Ab. Fabián Anton Zambrano, funcionario de la Defensoría Pública, el señor Sargento Segundo de Policía Valdiviezo Gaibor Octavio Eliceo; los abogados de la Defensoría del Pueblo: señor Alberto Antonio Macías Chilan y señora Jacqueline Monserrate Pro Pro. Las intervenciones efectuadas por las partes procesales constan en la correspondiente acta que obra del expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". En concordancia el artículo 123 del mismo Código señala que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) Intervino el presunto infractor, señor Carlos Adrian Zambrano Arteaga, quien manifestó: **1.** Que él junto a otros compañeros el día 06 de mayo de 2011, estaban reunidos esperando órdenes del señor Aliatis, su jefe. **2.** Que fue el señor Aliatis, quien les manifestó que podían a distribuir la cerveza, que para tal efecto, les entregó un documento del CNE, que les autorizaba el realizar el transporte de cerveza. **3.** Que en el sector de San Pablo, llegó un policía, el cual les detuvo y entregó una citación del Tribunal, porque les manifestó que su actividad era prohibida, por tanto llamaron a su Jefe, quien concurrió a ese lugar. **4.** Que no había entregado ninguna cervezas, todas estaban en el camión, que reitera que ellos sólo circularon por disposición del señor Aliati.

b) El defensor público, manifiesta que luego de escuchar la intervención de su defendido y en atención a los documentos que constan del expediente: 1. Que efectivamente, el señor Carlos Adrian Zambrano Arteaga, estuvo por el sector de San Pablo, el día 06 de mayo de 2011, pero él no se encontraba distribuyendo las cervezas. **2)** Que se encontraba esperando una llamada de su Jefe, por tanto existía una orden superior que obligó a su defendido a salir a trabajar en esa fecha. **3)** Que no existe prueba plena sobre el cometimiento de la infracción. **4)** Que adjunta una fotocopia simple de un documento del Consejo Nacional Electoral, y manifiesta que éste documento será referencial, para que se compruebe que se trataba de una orden superior. **5)** Que se declare a su defendido inocente, de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución y artículo 8 numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

c) El señor policía responsable de la entrega de la boleta informativa y del parte policial, manifestó: **1)** Que el día 06 de mayo de 2011, se encontraba realizando un patrullaje y se percató que dos vehículos se encontraban distribuyendo cervezas, se acercó a los conductores y les manifestó que estaban irrespetando la ley seca. **2)** Que procedió a extender la boleta del Tribunal Contencioso Electoral, en donde se indica la prohibición de la ley. Que al momento que extendió la boleta se acercó un señor responsable de apellido Aliati, quien le entregó una autorización para los conductores, puedan distribuir. El defensor público interrogó al señor policía, ante este interrogatorio el señor policía, en lo principal contestó que: En el carro repartidor de cervezas se encontraban presentes dos o tres personas con el señor conductor, que solo le entregó la boleta al señor conductor del camión. Que el jefe de los conductores, le entregó en el UPC San Pablo un documento en el cual se indicaba que el órgano electoral autorizaba a transportar su carga.

d) La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece en el artículo 123 la prohibición de la "distribución de bebidas alcohólicas", no obstante el artículo 291 numeral 3 del mismo Código tipifica y sanciona el "expendio y consumo" de bebidas alcohólicas.

e) El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Guillermo Cabanellas de Torres, Tomo 3 (D-E), define al término expendio como: "Gasto o consumo (…) venta al por menor, estanco". El expendio requiere la contraprestación esto es un pago, situación que no fue comprobada en el presente caso. Por lo expuesto al no constar en el Código de la Democracia, cuál es la sanción que se encuentra ligada a la referida prohibición legal establecida en el artículo 123 del Código de la Democracia respecto a la distribución de bebidas alcohólicas, considero que en aplicación del principio de legalidad y de la presunción de inocencia, no procede en el presente caso el aplicar la sanción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia al presunto infractor.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **ZAMBRANO ARTEAGA CARLOS ADRIÁN**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría Pública y en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría del Pueblo.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 1 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 501-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 2 de febrero de 2012.- Las 14h20. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 501-2011-TCE, seguida en contra del señor José Esteban Quimiz Moreira.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 14h02.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Parte elevado al señor Comandante Provincial de la Policía Manabí No. 4 de fecha 07 de mayo de 2011, suscrito por el señor Subteniente de Policía Jorge Collantes Salazar. (fs. 4)

d) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014361-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, las 10h10. (fs. 7)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual se indica que "no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor **JOSÉ ESTEBAN QUIMIZ MOREIRA".**

g) Oficio No. 006-2012-J.AC-mfp-TCE de 13 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí.

h) Publicación del extracto de citación realizado en el periódico El Diario, el día sábado 28 de enero de 2012, en la página 16 A. (fs. 13)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 2 de febrero de 2011, a las 10h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública y el Ab. Obregón Meza Jonas Vespasiano, funcionario de la Defensoría del Pueblo. No comparece el agente de la policía responsable de la entrega de la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral, tampoco comparece el presunto infractor. Los alegatos presentados por las partes procesales constan al respectiva acta, que obra dentro del expediente No. 501-2011-TCE.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 5 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 5. "Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) No comparece el presunto infractor, por tanto la audiencia se realizó en rebeldía en atención a lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, su defensa fue asumida por la Defensoría Pública.

b) El Subteniente de Policía, responsable de la elaboración del parte policial no compareció a la audiencia, pese a que fue debidamente notificado, conforme consta de las razones que obran del expediente.

c) La defensora pública, en lo principal manifestó: **1.** Que se encuentra en representación del señor José Esteban Quimiz Moreira, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución para brindar asistencia a las personas que no pueden contratar a un defensor y también porque fueron conminados por el Tribunal Contencioso Electoral para representar al referido ciudadano. **2.** Que dentro de esta audiencia faltan los elementos principales para un juzgamiento, para vulnerar el principio de inocencia, esto es las pruebas que deben ser introducidas las pruebas, más de cargo que de descargo. **3.** Que no se cuenta con una persona que pueda decir lo contrario ni que que ponga en duda la conducta de su representado en las elecciones del 2011, por la cual ha sido llamado a esta audiencia, que a falta de elementos probatorios, se debe declarar la inocencia de su representado.

d) El representante de la Defensoría del Pueblo manifiesta que en el presente caso, su intervención se limita a ejercer la observancia y vigilancia del las garantías del debido proceso situación por la cual está presente en la sala, en representación de la Defensoría del Pueblo, y que se adhiere a la petición de la Defensora Pública.

e) No existen elementos que permitan colegir si la infracción denunciada fue cometida en el día y hora señaladas en la boleta informativa y en el parte policial que constan dentro del expediente, por parte del señor José Esteban Quimiz Moreira.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 5 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **JOSÉ ESTEBAN QUIMIZ MOREIRA**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría del Pueblo.

5. Notífiquese al señor José Esteban Quimiz Moreira, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría Pública.

6. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

7. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

8. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 2 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 500-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 2 de febrero de 2012.- Las 14h10. **VISTOS.-** Agréguese a los autos, el escrito presentado por el señor Fernando Alberto Velásquez, ingresado el día 2 de febrero de 2012, a las 10h49, con dos escritos originales y dos copias simples.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas

electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 500-2011-TCE, seguida en contra del señor Fernando Alberto Velásquez Arteaga.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 14h01.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del Parte elevado al señor Comandante Provincial de la Policía Manabí No. 4 de fecha 07 de mayo de 2011, suscrito por los señores Policías Araujo Guamán José Marcelo y Ruiz Nuñez Wilmer Leonardo, pertenecientes al UPC Mirador. (fs. 4)

d) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014422-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, las 10h00. (fs. 7 a 7 vlta)

f) Razón de citación para el señor Fernando Velásquez Arteaga, suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, funcionario citador-notificador del Tribunal Contencioso Electoral. (fs. 9)

g) Oficio No. 005-2012-J.AC-mfp-TCE dirigido al Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10 a 10 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 2 de febrero de 2011, a las 09h38, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, los señores policias nacionales: Araujo Guamán José Marcelo y Ruiz Nuñez Wilmer, asi como el Ab. Jorge Ribadeneira Sion, delegado de la Defensoría del Pueblo. No compareció el presunto infractor, señor Fernando Alberto Velásquez Arteaga.

Los alegatos presentados por las partes procesales, fueron incorporados en el acta que obra dentro del presente expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". En concordancia el artículo 123 del mismo Código señala que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) La audiencia se realizó en rebeldía, porque no compareció el presunto infractor, en tal virtud, asumió su defensa la representante de la Defensoría Pública, que estuvo presente en la presente audiencia.

b) La defensora pública, en lo principal argumentó: **1.** Que representa al presunto infractor cumpliendo las garantías del debido proceso, esto es lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador. **2.** Que en el parte policial, se dice que su defendido se encontraba bebiendo alcohol, que cuestiona este hecho, porque no existe en el expediente prueba contundente que determine que el señor Fernando Velásquez Arteaga, hubiere sido encontrado bebiendo y que adicionalmente, no existe prueba de alcohotest o alcoholemia, en consecuencia no hay nexo causal para determinar su reponsabilidad. **3.** Que los miembros del orden se encuentran al servicio del máximo organismo en las elecciones, esto es del Consejo Nacional Electoral. **4.** Que prevalece el principio de inocencia. Este tribunal no cuenta sino con la versión expuesta por los señores policías que elaboraron el parte policial.

c) El señor delegado de la Defensoría del Pueblo para la presenta audiencia, manifiesta que se debe privilegiar la citación en persona, que sería interesante, el mejorar el tema de la citación en las causas, en nombre de la verdad o la justicia, para que prevalezca el derecho a la defensa. Que se adhiere a lo expuesto por la Defensora Pública.

d) Interviene el señor Policía Araujo Marcelo, quien manifiesta: **1.** Que en el parte policial se equivocó en los rasgos que hizo en su firma, en el parte, pero que dicha firma sí le pertenece. **2.** Que estaba realizando un patrullaje de rutina aproximadamente unas dos horas desde las quinces horas hasta las diez y siete horas treinta, cuando se percató que por la calle Guayaquil, pasaba un señor en motocicleta, en se momento de detuvo al conductor, se le pidió su documentación, y pudo constatar que el ciudadano Fernando Alberto Velásquez Arteaga, llevaba una botella de caña manabita en una funda de color negro, por ese motivo, le pidió su cédula de identidad y llenó una boleta del Tribunal Contencioso Electoral indicándole que había vulnerado la ley seca. Enseguida el policía, fue interrogado por la abogada de la Defensoría Pública, ante estas preguntas el señora agente del orden manifestó: Que el señor Velásquez no estaba bebiendo cuando lo detuvo. Que se le hizo soplar para detectar si tenía aliento a licor, pero que no se le hizo, ninguna otra prueba más. El delegado de la Defensoría del Pueblo se abstiene de hacer preguntas.

e) Interviene el señor Policía Nacional Ruiz Wilmer, quien manifestó en lo principal: **1.** Que en la hora señalada en el parte policial, estaba patrullando en el sector de la Guayaquil, por las canchas, que pidió que parara la marcha a un señor que iba conduciendo una motocicleta, y que posteriormente se le hizo un registro y se le encontró una botella en la cintura, que su compañero de la policía, le preguntó a ese ciudadano, donde había comprado la botella, ante lo cual el señor Velásquez, manifestó que en otro sector y no identificó al vendedor. Señala que se le citó porque era prohibido el consumir alcohol, en esa fecha. **2.** La defensora pública, interrogó al señor policía, ante estas preguntas el policía expresó que: Su papel era conducir la motocicleta de la policía, que su compañero fue el que tomó los datos del ciudadano a quien se le entregó la boleta informativa. Que hace cinco años trabaja en la Policía Nacional y que conoce qué hacer cuando a una persona tiene aliento alcohólico, esto es, que debe efectuar una prueba de alcohotest.

f) Como ya se ha señalado, en otras sentencias, en cuanto al hecho señalado por el representante de la Defensoría del Pueblo sobre la citación a los infractores, esta Jueza, considera que al respecto se han cumplido las normativas vigentes en materia electoral respecto a la citación, por lo tanto deviene en improcedente, esta observación, adicionalmente, son los agentes del orden los que llenan las direcciones señaladas en los domicilios de los presuntos infractores, de acuerdo a los datos que éstos mismo les proporcionen.

g) En cuanto al escrito presentado fuera de la hora señalada para la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento fijada para la presente causa, es necesario señalar que fue presentado de manera extemporánea, pues si el presunto infractor, solicitaba el diferimiento de la audiencia, este pedido debía cumplir los requisitos señalados en el artículo 251 del Código de la Democracia. Para garantizar su defensa fue debidamente representado por una funcionaria de la Defensoría Pública, no obstante la presente sentencia también se notificará al abogado designado por el presunto infractor, en escrito de 2 de febrero de 2012, ingresado en la Secretaría Relatora de este Despacho, a las 10h49, en la ciudad de Portoviejo.

h) No existen elementos probatorios que de manera directa y principal vinculen al señor Fernando Alberto Velásquez Arteaga, como responsable del cometimiento de la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia, como consumidor de bebidas alcohólicas, el día 07 de mayo de 2011.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **VELÁSQUEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia, al señor Fernando Alberto Velásquez Arteaga, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado por la Defensoría Pública. Téngase en cuenta al Ab. Rubén Tumbaco García como abogado defensor del señor Fernando Alberto Velásquez Arteaga, asi como el casillero judicial No. 731 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Notifíquese la presente sentencia, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asignado a la Defensoría del Pueblo.

6. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

7. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

8. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 2 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 499-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 2 de febrero de 2012.- Las 14h00. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 499-2011-TCE, seguida en contra de la señora Tenaida de los Angeles Fernández.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 14h00.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. N°. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M, Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Parte elevado al señor Comandante Provincial de la Policía Manabí No. 4 de fecha 07 de mayo de 2011, suscrito por los señores Policías Araujo Guamán José Marcelo y Ruiz Nuñez Wilmer Leonardo, pertenecientes al UPC Mirador. (fs. 4)

d) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014421-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, las 09h40. (fs. 7 a 7 vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual informa que no pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación a la señora TENAIDA DE LOS ANGELES FERNÁNDEZ. (fs. 9)

g) Oficio No. 004-2012-J.AC-mfp-TCE de 13 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

h) Auto de fecha 23 de enero de 2012, las 10h00, y extracto de citación por la prensa. (fs. 11 y 12).

i) Publicación del extracto de citación, realizada en el periódico El Diario, efectuada el día sábado 28 de enero de 2012, en la página 14 A. (fs. 13)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 2 de febrero de 2011, a las 08h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, defensora pública; el Ab. Jorge Ribadeneira Sion, funcionario de la Defensoría del Pueblo, los señores policías Araujo Guamán Marcelo, y Ruiz Nuñez Wilmer. No estuvo presente en la audiencia la señora Fernández Tenaida de los Angeles.

Los alegatos presentados por las partes procesales, fueron incorporados en el acta que obra dentro del presente expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". En concordancia el artículo 123 del mismo Código señala que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se realizó en rebeldía, su defensa fue asumida por la Defensoría Pública.

b) La defensora Pública, en lo principal expresó que: **1.** Que de conformidad a lo señalado en el artículo 191 de la Constitución, asume la representación de la señora Fernández Tenaida de los Angeles. **2.** Que no existen elementos suficientes para poder determinar si la señora Tenaida de los Angeles Fernádez sea autora de la infracción, solo se cuenta con un parte policial, el mismo que no es determinante. **3.** Que las fuerzas armadas y policiales, están bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, durante el proceso electoral. **4.** Que para determinar si una persona es culpable, deben existir indicios varios, concordantes e inequívocos. **5.** Que ha su defendida le asiste el principio de inocencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 numeral 2, reafirmado con las articulados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. **6.** Que no existen pruebas que corroboren el cometimiento de la infracción tales como fotografías o facturas.

c) El señor policía Araujo Marcelo, señaló: **1.** Que el día 07 de mayo de 2011, día en que se llevó a cabo el Referéndum y Consulta Popular, efectuó un patrullaje de rutina por el sector del Mirador, calle Ayacucho. **2.** Que la señora Tenaida de los Angeles Fernández, se encontraba expendiendo bebidas alcohólicas, y por eso le extendió la boleta de citación por violar la ley seca, aproximadamente a las dos de la tarde de ese día. La abogada de la Defensoría Pública,interrogó al señor policía nacional, ante las preguntas formuladas, el policía respondió: Que no tomó fotografías, ni tuvo en su poder ningún recibo. Reitera que vio que la presunta infractora vendía bebidas alcohólicas y que había como dos personas consumiendo en el lugar de los hechos. Que había dos personas libando pero que a ellos tampoco les tomó fotos, que no tiene cámara fotográfica.

d) El abogado de la Defensoría del Pueblo, señaló que le llama la atención no consta muy detallado la dirección del domicilio de la presunta infractora, que le preocupa esta situación. El señor de la Defensoría del Pueblo, interrogó al señor policía. Finalmente, la Defensoría del Pueblo, comparte el criterio de la Defensoría Pública y se adhiere a su criterio.

e) Intervino el policía Ruiz Nuñez Wilmer, quien manifiesta: **1.** Que el día indicado en la boleta, en la calle Mariscal Ayacucho, se percató que en un local de caña se encontraban vendiendo bebidas alcohólicas, como su compañero es más antiguo, a él le correspondió el citar a la señora que se encontraba vendiendo. **2.** La defensora pública interrogó al agente de la policía, ante lo cual contestó: Que se encontraba trabajando en el UPC el

Mirador, señaló que en ese local donde trabaja la presunta vende comidas pero también licor. Que en ese local se encontraban unas seis u ocho personas, que le replicaron que no le citaran a la señora que la ayudaran. Que ya en la mañana se le había advertido a la señora que no efectuar esa actividad. **3.** El señor representante de la Defensoría del Pueblo, también interrogó al policía, a lo cual dio contestación el señor policía nacional.

f) El señor delegado por la Defensoría del Pueblo, para la presente audiencia, le preocupa el hecho de que tener cerca una botella es una situación circunstancial, por tanto se debe considerar que no existe una prueba de alcoholemia.

g) Respecto al hecho señalado por el representante de la Defensoría del Pueblo sobre la citación a los infractores, esta Jueza, señala que al respecto se han cumplido las normativas vigentes en materia electoral respecto a la citación, por lo tanto deviene en improcedente, esta observación, adicionalmente, son los agentes del orden los que llenan las direcciones señaladas en los domicilios de los presuntos infractores, de acuerdo a los datos que éstos mismo les proporcionen.

h) No existen elementos probatorios que de manera directa y principal vinculen a la señora Tenaida de los Angeles Fernández como responsable del cometimiento de la infracción tipificada en al numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra de la señora **FERNÁNDEZ TENAIDA DE LOS ANGELES**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

4. Notifíquese en el casillero judicial No. 411 a la señora Tenaida de los Angeles Fernandez, a través de la Ab. Enma Violeta Cedeño Velez, defensora pública; al Ab. Jorge Ribadeneira Sion, funcionario de la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 2 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 520-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 2 de febrero de 2012.- Las 17h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la

Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **1.4** El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 520-2011-TCE, seguida en contra del señor Branly Marconi Espinel García.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 14h21.

Dentro del expediente constan los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Parte elevado al señor Comandante Provincial de la Policía Manabí No. 4 de fecha 07 de mayo de 2011, suscrito por el señor Policía Nacional Oña Pilamunga Edison. (fs. 4)

d) Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-014541-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 13 de enero de 2012, las 11h00. (fs. 7)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual certifica que procedió a citar al señor Branly Marconi Espinel García. (fs. 8)

g) Oficio No. 008-2012-J.AC-mfp-TCE de 13 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 2 de febrero de 2011, a las 16H00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Branly Marconi Espinel García acompañado del señor Defensor Público, Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique y el señor Ab. Gonzalo Alfredo Cárdenas Cevallos, funcionario de la Defensoría del Pueblo. No compareció el agente de la policía responsable de la entrega de la boleta informativa al presunto infractor.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 5 dispone que "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 5."Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (...)". En el numeral cuarto del artículo referido se dice que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado de la Defensoría Pública, manifiesta en lo principal: **1.** Que dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, le corresponde el asumir la defensa del presunto infractor. **2.** Que existe la falta del elemento principal, esto es las pruebas de cargo, porque no se contó con la presencia del policía que realizó la boleta informativa, en tal virtud, el parte policial es meramente informativo. **3.** Que en el proceso no consta un examen de alcoholemia que pruebe que su defendido en el momento que se entregó la boleta tenía en su cuerpo alcohol. **4.** Que su defendido es inocente, por tanto debe aplicarse lo dispuestro en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, y lo señalado en el artículo 8 numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

b) El señor representante de la Defensoría del Pueblo manifestó en lo principal que comparece a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 191 de la Constitución y 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de garantizar el elemental respeto al debido proceso al que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas de la República del Ecuador. Señala como casilla judicial para recibir notificaciones el No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

c) No existen elementos que permitan determinar si el señor Branly Marconi Espinel García, en el día señalado en la Boleta Informativa y en el parte policial que obran del expediente, consumió alguna bebida alcohólica e infringió

lo dispuesto en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia. Adicionalmente no se pudo contrastar la versión del agente de la policía frente a la versión rendida por el infractor a través del abogado de la Defensoría Pública, que negó el cometimiento de la infracción por falta de prueba.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **BRANLY MARCONI ESPINEL GARCÍA**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí asignado a la Defensoría Pública, y en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, perteneciente a la Defensoría del Pueblo.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral

Certifico, Portoviejo, 2 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 462-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 14 de febrero de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-402-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16h00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 462-2011-TCE, seguida en contra del señor Jorge Eduardo Vélez Loor.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h13.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Oficio No. 2011-2172-CP-4 de 9 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M Carlos Orbe Fiallo, dirigido al Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. (fs. 3)

c) Copia del Parte Informativo elevado al señor Comandante Provincial de Policía Manabí No. 4 suscrito por el señor Policía Nacional Espinosa Naranjo Alexander. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-018671-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 18 de enero de 2012, las 08h30. (fs. 7-7 vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en donde certifica que no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor Vélez Loor Jorge Eduardo. (fs. 9)

g) Oficio No. 010-2012-J.AC-mfp-TCE de 18 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10-10 vlta)

h) Auto dictado el día 31 de enero de 2012, a las 11h10 y extracto de citación por la prensa. (fs. 11-12 y 12 vlta)

i) Publicación del extracto de citación realizada en el periódico El Diario, pág. 14 A, el día viernes 10 de febrero de 2012. (fs. 16)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 14 de febrero de 2012, a las 15h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el: la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, Defensora Pública y el Ab. Obregón Meza Jonas Vespasiano, funcionario de la Defensoría del Pueblo. No estuvieron presentes el presunto infractor ni el agente de policía responsable de la entrega de la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral.

Los alegatos presentados por las partes procesales constan en la correspondiente acta que obra en el expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) No compareció el presunto infractor, por tanto la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se realizó en rebeldía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, asumió su defensa la Defensoría Pública.

b) La abogada de la Defensoría pública, señaló se encontraba presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento para garantizar los derechos del presunto infractor. Manifestó que no existe pruebas para que su defendido sea juzgado, y que conforme lo señala el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en los instrumentos internacionales, como los señalado en el artículo 8 numeral 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vigentes, se debe ratificar la inocencia de su representado.

c) El artículo 253 del Código de la Democracia, dispone que: "En la Audiencia de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". En la presente causa, no concurrió a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, el señor Policía Nacional, que elaboró el parte policial informativo y que entregó la boleta del Tribunal Contencioso Electoral ni tampoco concurrió el presunto infractor, por tanto no se pudo conocer cuáles fueron sus versiones sobre los hechos presuntamente suscitados el día 07 de mayo de 2011. La defensora pública, por su parte sustentó su defensa en base al principio constitucional de la presunción de inocencia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo

291 numeral 3 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **VÉLEZ LOOR JORGE EDUARDO.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Vélez Loor Jorge Eduardo, a través de su Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 14 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 492-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 15 de febrero de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-403-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16h00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 492-2011-TCE, seguida en contra del señor Ronald Steven Mendieta Ossa.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h52.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por el señor Sargento Segundo de Policía René Cumbajin Viracocha y el señor Cabo Segundo de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015692-2011-TCE.

e) Auto de admisión a trámite dictado el día 18 de enero de 2012, a las 08h40; y extracto de citación por la prensa (fs. 7 y 8 vlta)

f) Oficio No. 011-2012-J.AC-mfp-TCE de 18 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

g) Publicación del extracto de citación por la prensa para el señor Ronald Steven Mendieta Ossa, efectuada en el periódico El Diario, el día sábado 28 de enero de 2012, en la página 26 A. (fs. 11)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 08h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, defensor público; Cabo Segundo de Policía Nexar Javier Carvajal Cedeño y el señor Ab. Rivadeneira Sion Jorge, funcionario de la Defensoría del Pueblo de Manabí. No acudió a la presente audiencia, el señor Ronald Steven Mendieta Ossa, pese a que fue debidamente citada conforme lo determina la normativa electoral.

Las intervenciones de las partes procesales constan en la correspondiente Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público manifestó: **1.** Que la defensa no ha contado con los medios suficientes para poder contactarse con el señor Ronald Steven Mendieta Ossa. **2.** Que en la boleta informativa, se indica que su defendido se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas en un periodo, en el cual se encontraba esta actividad prohibida por la Ley, sin embargo, de la revisión del expediente no consta prueba alguna que acredite que se produjo ese hecho. **3.** Que no existen otros medios probatorios que verifiquen la versión del policía, tales como testimonios, pruebas fotográficas. **4.** Que por todo lo expuesto, es inaudito que se quiera juzgar a su defendido por un parte policial, por tanto considera que su defendido es inocente y debería absolvérselo.

b) El abogado de la Defensoría del Pueblo, señaló que comparte lo señalado por el Defensor Público, y añade la premisa de que más allá de los testigos u otras pruebas, la prueba más importante era el alcohotest, prueba que no consta dentro del proceso.

c) El señor Cabo Segundo de Policía Nexar Javier Carvajal Cedeño expresó: **1.** Que se ratifica en el contenido del policial, que han transcurrido prácticamente un año, que recuerda que entregó boletas a varios ciudadanos. **2.** Que tenía como responsabilidad el control policial en la parroquia Crucita respecto al consumo y expendido de bebidas alcohólicas, el día del Referéndum y Consulta Popular. **3.** Que encontró al ciudadano Ronald Steven Mendieta Ossa, bebiendo, en una actitud arrogante, y que éste le manifestó que estaba bebiendo en su casa, por tanto le entregó la citación una vez que el referido ciudadano proporcionó sus datos. El abogado de la Defensoría Pública, interrogó al agente de la policía, ante lo cual contestó el señor policía: **i.** Que los infractores estaban en el sector del Malecón, que había envases de botellas de Zhumir durazno, por tanto hizo una detección física, por el olor. **ii.** Que el señor Ronald Steven Mendieta Ossa, a quien le entregó la boleta informativa, le indicó que era un ciudadano de otro país, de Canadá, ante lo cual el señor policía le contestó, que la ley no excusa a persona alguna. **iii.** Señaló que no había ningún abogado presente, que solo le indicó cuál era el procedimiento que se efectuaría en el Tribunal, por la flagrancia del delito.

d) El abogado de la Defensoría del Pueblo intervino nuevamente interrogando al señor policía. El agente del orden contestó que no había realizado ninguna prueba de alcohotest.

e) De lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige que no existen pruebas respecto al consumo de bebidas alcohólicas por parte del señor Ronald Steven Mendieta Ossa, el día sábado 07 de mayo de 2011, en la parroquia Crucita, en la Provincia de Manabí.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **RONALD STEVEN MENDIETA OSSA.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Ronald Steven Mendieta Ossa, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 15 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 493-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 08h30. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-409-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16H00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 493-2011-TCE, seguida en contra del señor Mendieta Brito Alexis José.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h53.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SGOS de Policía René Cumbajin Viracocha y CBOS de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015693-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite, dictado el día 18 de enero de 2012, las 14h50. (fs. 7-7vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual certifica que no pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor MENDIETA BRITO ALEXIS JOSE. (fs. 9)

g) Oficio No. 012-2012-J.AC-mfp-TCE de 18 de enero de 2012 dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

h) Auto de fecha 31 de enero de 2012, a las 11h50 y extracto de citación. (fs. 11-12)

i) Publicación del extracto de citación, realizada en el periódico El Diario, en la página 26 A, el día viernes 10 de febrero de 2012. (fs. 16)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 09h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Mendieta Brito Alexis José, acompañado del defensor público, Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique; el señor Cabo Segundo de Policía, Nexar Javier Carvajal Cedeño; y el señor Ab. Rivadeneira Sion Jorge, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Manabí.

Las intervenciones de las partes procesales constan en el Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento que se encuentra incorporada en el presente expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) En la intervención del abogado de la Defensoría Pública, manifestó en defensa del señor Mendieta Brito Alexis José: **1.** Que ha revisando el expediente y adicionalmente su defendido le ha manifestado que el sábado 07 de mayo de 2011, el señor Mendieta se encontraba conduciendo un vehículo acompañado de unos amigos. **2.** Que niega su defendido que hubiere estado bebiendo. **3.** Que a él innecesariamente se le entregó la boleta del Tribunal Contencioso Electoral, que consta dentro del proceso. **4.** Que no existe prueba que indique que el señor Mendieta efectivamente se encontraba consumiendo alguna bebida alcohólica, en fecha prohibida por la ley. **5.** Que la prueba fundamental, es la prueba de alcoholemia, la cual determina el grado de alcohol en la sangre. **6.** Que la Constitución de la República, garantiza la presunción de inocencia y por tanto solicita que se confirme su inocencia.

b) El señor abogado de la Defensoría del Pueblo, en su intervención manifestó: Que no existen elementos de convicción suficientes en la presente causa, por tanto se adhiere al alegato del Defensor Público.

c) El señor Cabo Segundo de Policía, expresó: **1.** Que se ratifica en el contenido del parte policial. **2.** Que el señor Mendieta Brito Alexis José presente en la sala de Audiencias, estaba junto a otras personas amigas o familiares, en la dirección mencionada en el parte policial, aparentemente ingiriendo bebidas alcohólicas, pues encontró botellas de vidrios de la marca Zhumir durazno, por lo cual le pidió sus datos, al encontrarse en ley seca en esa época, procedió a entregarle la boleta informativa. El señor defensor público interrogó al policía, quien contestó: **i.** Que constató el hecho del consumo porque encontró las botellas y porque percibió el olor de las mismas. **ii.** Que en el operativo encontró a un grupo de personas, junto a ellas localizó las botellas, por lo que les pidió que soplen. **iii**. Que no se realizó la prueba de alcohotest porque no existen esas máquinas en la parroquia Crucita, que generalmente este procedimiento no lo efectúan porque no existe la logística suficiente.

d) El abogado de la Defensoría del Pueblo, interrogó al policía, el cual manifestó ante la pregunta formulada: **i.** Que no existen testigos excepto la ciudadanía que llamó a reportar el hecho y sus compañeros de trabajo.

e) En consideración a todos los argumentos expresados en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se infiere que no existen elementos de prueba suficientes e inequívos, que determinen la responsabilidad del señor Mendieta Brito Alexis José, respecto a la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **MENDIETA BRITO ALEXIS JOSÉ**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Mendieta Brito Alexis José, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 494-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 08h40. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-405-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16h00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No.494-2011-TCE, seguida en contra del señor Danny Paúl Calderón Brito.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h54.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SgoS. de Policía René Cumbajin Viracocha y CboS. de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015694-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado el día 18 de enero de 2012, las 15h00. (fs. 7-7vlta).

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual certifica que no pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor CALDERÓN BRITO DANNY PAÚL. (fs. 9)

g) Oficio No. 013-2012-J.AC-mfp-TCE de 18 de enero de 2012, dirigido al Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

h) Auto dictado el día 31 de enero de 2012, a las 09h30 y extracto de citación. (fs. 11-12 a 12 vlta)

i) Publicación del extracto de citación para el señor Danny Paúl Calderón Brito, realizada el día viernes 10 de febrero de 2012, en el periódico El Diario, el día viernes 10 de febrero de 2012. (fs. 16)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 10h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, defensor público; Cabo Segundo de Policía Nexar Carvajal Cedeño; y el señor Ab. Jorge Rivadeneira Sion, funcionario de la Defensoría del Pueblo. No compareció el presunto infractor señor Calderón Brito Danny Paúl.

Las intervenciones de las partes procesales se encuentran incorporadas en la respectiva Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público, manifestó en su intervención: **1.** Que ejerce la defensa del señor Danny Paúl Calderón Brito. **2.** Que la madre de su defendido se encuentra presente en la sala de Audiencias, y que le ha comunicado que su hijo no se presentará a la diligencia, porque se encuentra enfermo. **3.** Que no existe prueba alguna, que corrobore el hecho de que su defendido, estuvo bebiendo en el tiempo en que la Ley no lo permitía. **4.** Que la simple versión del señor policía, no puede considerarse como prueba. **5.** Que no existe prueba de alcoholemia, que es la prueba fundamental para comprobar el cometimiento de la infracción. **6.** Que la Constitución garantiza la inocencia de su defendido, por tanto solicita se confirme su inocencia.

b) El abogado de la Defensoría del Pueblo, señaló: **1**. Que su intervención la realiza amparado en el numeral 4 del artículo 215 de la Constitución de la República, esto es efectuar la vigilancia del cumplimiento de las garantías básicas del debido proceso. **2.** Que ha observado que reiteradamente se insiste en la citación por la prensa, por lo que cree que se debe privilegiar la citación en persona. **3.** Que la Defensoría del Pueblo, podría hacer una alianza estratégica con el Tribunal Contencioso Electoral en este aspecto, para evitar que la regla general sea la ausencia de los imputados. **4.** Que se adhiere a la postura jurídica de la Defensoría Pública, porque cree que la sola versión de un agente de la policía, no es prueba suficiente para violentar el principio de inocencia.

c) El señor Cabo Segundo de Policía, expresó: **1.** Que se ratifica en el contenido del parte policial, manifiesta que el señor Calderón Brito Danny Paúl, se encontraba con las botellas de vidrio de la marca zhumir durazno, que se le hizo soplar, y que tenía aliento alcohólico. El abogado de la Defensoría Pública, interrogó al señor policía, ante las preguntas formuladas, contestó el referido agente del orden:

i. Que no se realizó prueba de alcoholemia simplemente, efectuó una constatación física del aliento alcohólico. El señor abogado de la Defensoría del pueblo interrogó al policía, ante la pregunta formulada, contestó que no tiene otras pruebas físicas como fotografías.

d) El hecho de la presunta enfermedad del infractor, no fue acreditada con un certificado médico válidamente otorgado. En este contexto la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se realizó en rebeldía del señor Calderón Brito Danny Paúl, en aplicación de lo previsto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

e) Como ya se ha manifestado en sentencias anteriores, respecto al argumento del representante de la Defensoría del Pueblo, sobre las citaciones y la localización de los presuntos infractores, es necesario señalar que éstas se efectúan de la manera prevista en la normativa electoral vigente, en las direcciones domiciliarias que fueron señaladas por los presuntos infractores a los agentes del orden. En caso de que no fuera posible citarlos en persona, ésta diligencia se efectúa a través de un extracto de citación por la prensa por una sola vez, en atención a lo que determina, el artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en concordancia con el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, por todo lo expuesto, deviene en improcedente este argumento.

f) No existe prueba suficiente e inequívoca respecto al cometimiento de la infracción electoral, tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor Calderón Brito Danny Paúl, el día sábado 07 de mayo de 2011, en la parroquia Crucita, en la Provincia de Manabí.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **CALDERÓN BRITO DANNY PAÚL**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Calderón Brito Danny Paúl, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 495-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 08h50. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-408-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16H00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso

Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 495-2011-TCE, seguida en contra del señor Gerardo Efraín Moreira Rezabala.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h55.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SgoS. de Policía René Cumbajin Viracocha y CboS. de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015695-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado el día 19 de enero de 2012, a las 08h50. (fs. 7)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual certifica que no se pudo dar la diligencia de citación al señor Moreira Rezabala Gerardo Efraín. (fs. 9)

g) Oficio No. 014-2012-J.AC-mfp-TCE de 19 de enero de 2012, dirigida al Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10-10vlta)

h) Auto de fecha 31 de enero de 2012, a las 09h20 y extracto de citación. (fs. 11-12)

i) Publicación del extracto de citación para el señor Gerardo Efraín Moreira Rezabala, realizada el día viernes 10 de febrero de 2012, en el periódico El Diario, en la página 15 A. (fs. 16)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 11h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron: el señor Moreira Resabala Gerardo Efraín, acompañado de su abogado defensor Ab. Espinales Santana Felipe Nery; el señor Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, Defensor público; el Ab. Rivadeneira Sion Jorge, funcionario de la Defensoría del Pueblo; y el señor Cabo Segundo de Policía Nexar Carvajal Cedeño. También comparece la señora Resabala Briones Gennily Teresa, en calidad de testigo.

Las intervenciones de las partes procesales constan en la respectiva Acta Oral de Prueba y Juzgamiento que se incorporó al expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado particular que representa al señor Moreira Resabala Gerardo Efraín, manifiestó: **1.** Impugna todo lo manifestado en el parte policial, por el señor agente del orden, el mismo fue realizado en una forma maliciosa.

2. Que su defendido Moreira Resabala Gerardo Efraín, se había acercado el día 07 de mayo de 2011, a una de las urna a receptar su voto, que una vez realizado este acto, él se ha trasladado a Crucita con el afán de llevar una ropa a un familiar. **3.** Que en Crucita, se le acercó un policía, solicitándole que le muestre sus documentos personales, luego le acusó de que ingirió alcohol. **4.** Que no se adjuntó la evidencia material, esto es las botellas de zhumir que presuntamente fueron consumidas. **5.** Que no consta prueba de sangre o alcoholemania, que compruebe que su defendido ingirió alcohol.

b) El señor Moreira Resabala Gerardo Efraín, manifesto que: **1.** Que el día de la votaciones el 07 de mayo de 2011, se trasladó donde su tía a Crucita, que llamó a unos amigos para que lo lleven, en el vehículo de ellos. **2.** Que lo detuvieron, porque un policía señaló que estaba bebiendo, que niega este hecho. **3.** Que le indicó al señor policía que no estaba incumpliendo la ley, pero igualmente procedió a pedirle sus datos, sin haber procedido a realizar una prueba de alcoholemia. **4.** Que es un hombre trabajador, que se tome en cuenta que se está dañando su imagen, por lo tanto acudió a la Audiencia para esclarecer las cosas y por esto vino a decir la verdad.

c) El señor abogado de la Defensoría del Pueblo expresó: **1.** Que se encuentra presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en cumplimiento de la misión y visión de la Defensoría del Pueblo, esto es de la vigilancia y respeto del debido proceso. Sostiene que el contenido de la hoja informativa que da inicio a este caso, no es suficiente para inculpar al presunto infractor, por tanto sostiene que está intacta la presunción de inocencia.

d) El señor Cabo Segundo de Policía, se ratificó en el parte policial. Manifiesta que: **1.** El señor Moreira Resabala, se encontraba en el sector del Malecón de Crucita, que al realizar el operativo percibió que tenía aliento a licor, por lo que procedió a pedir su documentación para llenar la boleta informativa al encontrarlo en delito flagrante. El abogado de la Defensoría del Pueblo interviene e interroga al señor policía, ante lo cual contestó el agente del orden que no realizó un test de alcoholemia, porque no se encuentra con ese equipo en la parroquia Crucita.

e) En la audiencia declaró una testigo a petición del abogado de la Defensa del presunto infractor. Esta persona ratificó la versión del señor Moreira Resabala Gerardo Efraín.

f) En su segunda intervención el abogado de la defensa, solicitó que no se imponga la sanción prevista por la Ley, al presunto infractor.

g) Esta Jueza observa que el documento de identidad presentado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, determina que en cuanto a la identidad de la persona infractora se aclara que el segundo apellido del presunto infractor es "Resabala" y no "Rezabala"

h) No existe prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor Moreira Resabala Gerardo Efraín.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **MOREIRA RESABALA GERARDO EFRAÍN**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Moreira Resabala Gerardo Efraín, a través de su Ab. Felipe Nery Espinales Santana, en el casillero judicial No. 160 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** A la Defensoría Pública en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **c)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 496-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 9h00. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-406-CP-4 suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16h00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 496-2011-TCE, seguida en contra del señor Edison Rolando Barcia Mera.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h56.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SgoS. de Policía René Cumbajín Viracocha y CboS. de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015696-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite de fecha 19 de enero de 2012, las 09h40; y razones de notificación. (fs. 7; 8 y 8 vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual certifica que no pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor **BARCIA MERA EDISON ROLANDO**. (fs. 9)

g) Oficio No. 015-2012-J.AC-mfp-TCE, de 19 de enero de 2012, dirigida al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10-10vlta)

h) Auto de 31 de enero de 2012, las 09h00 y extracto de citación por la prensa. (fs. 11 y 12-12vlta)

i) Publicación del extracto de citación realizada para el señor Edison Rolando Barcia Mera, en el periódico El Diario, el día viernes 10 de febrero de 2012, en la página 13 A.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 14h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Ab. Pico Fernando, defensor público y el señor Cabo Sargento Segundo de Policía, Cumbajín Viracocha René. No concurrió a la audiencia el presunto infractor, por lo tanto la audiencia se realizó en rebeldía, de conformidad a lo previsto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante

resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado de la Defensoría Pública, manifestó: **1.** Que se encuentra presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, por expreso mandato del artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador. **2.** Que cita el artículo 169 de la Constitución, destacando que de la revisión de los autos, se desprende que no existe nexo causal entre la infracción y la responsabilidad de su defendido. **3.** Que en el proceso no hay evidencia científica que acredite que su defendido tuviera algún grado de alcohol en su cuerpo. **4.** Que de acuerdo al artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, que se utiliza de forma supletoria en materia electoral en concordancia con el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, su defendido es inocente.

b) El Sargento Segundo de Policía, señaló en su intervención: **1.** Que se ratifica en el contenido del parte policial, y que es todo lo que puede informar. El Abogado de la Defensoría Pública, interrogó al agente de la policía; ante las preguntas formuladas el agente de la policía manifestó: **i.** Que vio al ciudadano tomando, pero que no tiene ningún implemento para que se realice la prueba de alcoholemia. **ii.** Que no retiró ninguna botella como evidencia.

c) De los alegatos presentados por las partes procesales se infiere que: No existe prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia por el señor Barcia Mera Edison Rolando.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **BARCIA MERA EDISON ROLANDO.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Barcia Mera Edison Rolando, a través de su Ab. Pico Fernando, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 497-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 09h10. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-407-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 07 de febrero de 2012, a las 11h49.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de

"transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 497-2011-TCE, seguida en contra del señor Raúl Antonio Montesdeoca Loor.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h57.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SgoS. de Policía René Cumbajin Viracocha y CboS. de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño.(fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015697-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado el día 19 de enero de 2012, a las 10h00. (fs. 7 y 7 vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual certifica que no se pudo dar cumplimiento a la diligencia de citación al señor Montesdeoca Loor Raúl Antonio. (fs. 9)

g) Auto de 31 de enero de 2012, a las 09h50 y extracto de citación por la prensa. (fs. 11- 12 a 12 vlta).

h) Publicación del extracto de citación para el señor Raúl Antonio Montesdeoca Loor, realizada en el periódico El Diario, en la página 10A, el día viernes 10 de febrero de 2012.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 15h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron: el señor Raúl Antonio Montesdeoca Loor, acompañado de su abogado defensor Vélez Bermello Carlos Hernán Vélez Bermello Carlos Hernán, el Ab. Fernando Pico, defensor público; el Sargento Segundo de Policía Cumbajín Viracocha René, y el Ab. Gonzalo Alfredo Cárdenas Cevallos, funcionario de la Defensoría del Pueblo.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado defensor manifiestó: **1.** Que el día 07 de mayo de 2011, luego de sufragar, se encontraba frente al restaurant Rey David, posteriormente se trasladó al Malecón, en ese lugar un policía le entregó una boleta del Tribunal. **2.** Que no se encontraba bebiendo, que el señor

policía no le hizo ninguna prueba de alcoholemia, que no existen otras pruebas que acrediten la supuesta infracción, como testimonios o fotografías.

b) El abogado de la Defensoría del Pueblo, expresó que se encuentra presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento para garantizar el cumplimiento del artículo 215 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la vigilancia del debido proceso.

c) En la segunda intervención del abogado particular manifiesta: Que no se ha probado el hecho del consumo de bebidas alcohólicas, y que se tenga en cuenta al momento de resolver el principio señalado en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución.

d) El señor Sargento Segundo de Policía, expresó que: **1.** Que se ratifica en el parte policial, que en esa fecha estuvo de servicio en Crucita. **2.** Que en el sector del Malecón, se constató que un grupo de ciudadanos estaba consumiendo alcohol por lo tanto procedió a entregarles las boletas informativas del Tribunal Contencioso Electoral. El abogado defensor interrogó al agente del orden, y contestó que: Los ciudadanos entre ellos el señor Montesdeoca, se encontraban consumiendo licor marca zhumir. Que estaba en la vereda la botella de zhumir, cerca de un grupo de personas junto a un vehículo. Que no cuenta con los implementos para hacer alcoholemia, que este instrumento solo existe en el SIAT, y no en Crucita, por tanto lo único que hizo fue revisar si el presunto infractor tenía aliento a licor. La señora Jueza pregunta si se le hizo la prueba de alcoholemia, a lo que contestó el policía que no.

e) No existe prueba suficiente e inequívoca para determinar si el señor Montesdeoca Loor Raúl Antonio, ha cometido la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, el día 07 de mayo de 2011.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **MONTESDEOCA LOOR RAÚL ANTONIO.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Montesdeoca Loor Raúl Antonio, a través de su Ab.Vélez Bermello Carlos Hernán, en el casillero judicial No. 550 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** A la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **c)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 498-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 09h20. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-404-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 07 de febrero de 2012, a las 11h49.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las

organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 498-2011-TCE, seguida en contra del señor Vicente Jessy Moreira Loor.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h59.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia del Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del parte elevado al Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 suscrito por los señores miembros de la Policía Nacional: SgoS. de Policía René Cumbajin Viracocha y CboS. de Policía Nexar J. Carvajal Cedeño. (fs. 4)

d) Boleta Informativa No. BI-015698-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado el día 19 de enero de 2012, a las 10h20. (fs. 7)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, mediante la cual certifica que no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor MOREIRA LOOR VICENTE JESSY. (fs. 9)

g) Oficio No. 017-2012-J.AC-mfp-TCE de 19 de enero de 2012, dirigido al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

h) Auto dictado el día 31 de enero de 2012, a las 10h56 y extracto de citación por la prensa (fs. 11 y 12)

i) Publicación del extracto de citación para el señor Vicente Jessy Moreira Loor, realizada en el periódico El Diario, el día viernes 10 de febrero de 2012, en la página 25 A. (fs. 16)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 15 de febrero de 2012, a las 16h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el Ab. Fernando Pico, defensor público; el señor Sargento Segundo de Policía Cumbajín Viracocha René; Ab. Gonzalo Alfredo Cárdenas Cevallos, funcionario de la Defensoría del Pueblo. No compareció el presunto infractor por tanto la Audiencia se realizó en rebeldía en aplicación de lo previsto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público manifestó: Que asiste por expreso mandato del artículo 191 de la Constitución, Cita el artículo 169 de la Constitución, que en ese sentido se puede verificar que no existe el elemento material para verificar el

cometimiento de la infracción, no existe prueba científica, ni hay elementos para justificar la responsabilidad de su defendido. No existen las botellas, solicita que confirme la inocencia de su defendido.

b) El Sargento Segundo de la Policía Nacional manifiesta que se ratifica en el parte, que existía un grupo de personas, en Crucita ingiriendo bebidas alcohólicas, consumiendo zhumir. La defensa no tiene preguntas que hacer.

c) El abogado de la Defensoría del Pueblo expresa que interviene en la presente audiencia para vigilar y garantizar el cumplimiento del debido proceso, conforme lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 215 numeral 4.

d) No existe prueba suficiente e inequívoca para determinar si el señor Vicente Jessy Moreira Loor, ha cometido la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **MOREIRA LOOR VICENTE JESSY**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Moreira Loor Vicente Jessy, a través de su Ab. Pico Fernando, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 473-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- 17h00. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 473-2011-TCE, seguida en contra de la señora Glenda Magaly Baque Muñiz.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h24.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Original del Oficio No. 2011-706-CSP-SR-J, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el Tnte. de Policía Oscar Franco Jiménez, Jefe del Comando Sectorial de Policía de Jipijapa (Acc.). (fs. 3)

c) Original del Parte elevado al señor Jefe de Tránsito de Jipijapa, suscrito por el señor Sbop. de Policía Gilberto Villegas Bonilla. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015601-2011-TCE. (fs. 5)

e) Auto de admisión trámite de fecha 19 de enero de 2012. Las 11h30. (fs. 7)

f) Razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, funcionario citador-notificador del Tribunal Contencioso Electoral. (fs. 9)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 16 de febrero de 2012, a las 10h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la señora Baque Muñiz Glenda Magaly, acompañada de su abogado defensor, Ab. Nixon Vera Quiñónez, el señor Suboficial Primero de Policìa Villegas Bonilla Gilberto Arcenio, la Ab. Jacqueline Monserrate Pro Pro y el Ab. Macías Chilan Alberto Antonio, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, funcionaria de la Defensoría Pública.

Las intervenciones de las partes procesales fueron incorporadas en el acta que obra dentro del expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 2 dispone que: “Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 2. Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha propaganda se encuentre prohibida por la ley”.

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” y “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. En el numeral cuarto del artículo referido se determina que “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado defensor de la señora Glenda Magaly Baque Muñiz, expresó: **1.** Que resulta indignante por decir lo menos el poder que detenta un funcionario público de elección popular, en el cantón Paján, el Alcalde Natael Morán, que recurra a este tipo de acciones, utilizando elementos de la fuerza pública para tratar de impedir un derecho consagrado en la Constitución. **2.** Que **l**a señorita Glenda Magaly Baque, haciendo uso de un derecho legítimo, pidió al Consejo Nacional Electoral, la autorización para que se le entregue los formularios para la revocatoria del mandato del Alcalde del cantón Paján. **3.** Que adjunta documentos que acreditan lo que afirma en defensa de la señorita Glenda Magaly Baque. **4.** Que no infringió disposición legal alguna. **5.** Que el recinto electoral que se menciona en el parte policial es cerrado y su defendida se encontraba a doscientos metros de ese lugar recogiendo firmas. **5.** Que impugna y rechaza el parte policial. **6.** Que el Tribunal Contencioso Electoral, debería analizar la situación de su defendida, porque dos días antes consultó respecto a este tema de la recolección de firmas al Consejo Nacional Electoral, respecto a si había algún tipo de contradicción o violación legal. **7.** Que en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se define en qué consiste la revocatoria del mandato y la consulta popular. **8.** Que en la documentación del Consejo Nacional Electoral, se hace constar que el plazo para la recolección de firmas es de ciento ochenta.

b) El Suboficial Primero de Policía, manifestó en lo principal en su intervención: **1.** Que se encontraba como jefe de operaciones el día 07 de mayo de 2011, y que a su mando se encontraban seis policías. **2.** Que recorriendo la zona a él asignada, localizó una caseta, en la cual había pancartas respecto a la revocatoria del mandato del Alcalde del cantón Paján**. 3**. Que por dos o tres ocasiones, le llamó la atención a la señorita Baque para que se abstuviera de ejecutar este acto, posteriormente procedió a retirar las pancartas, y las remitió a Jipijapa. El señor Abogado defensor interrogó al agente del orden, ante las preguntas formuladas el señor Suboficial Primero de Policía contestó: **i.** Que no recuerda el nombre de las personas que denunciaron el hecho. **ii**. Que en su grupo no se encontraba el Comisario ni los policías municipales.**iii.** Que el recinto electoral era cerrado y la señorita Baque se encontraba en los exteriores. **iv.** Que el Jefe cantonal del operativo, era un señor oficial, un Teniente. **v.** Que la señorita Baque estaba en ese lugar, pidiendo firmas para la revocatoria del mandato.

c) En señor representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que se encontraba presente en la sala de audiencias, para garantizar y vigilar el debido proceso, en atención a lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con lo señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

d) Intervino la señora Glenda Magaly Baque Muñiz, quien manifestó: **1.** Que por el derecho que le otorga la Constitución y el Código de la Democracia, en el mes de enero se aceptó en el CNE, su pedido de revocatoria y se le entregó los correspondientes formularios. **2.** Que dentro de ese plazo, no se indica cuáles son los días hábiles y cuáles no para recoger firmas. **3.** Que el día 07 de mayo de 2011, se encontraba dentro del periodo en el cual podía recoger las firmas. **4.** Que esta actividad la hizo a doscientos metros del recinto electoral. **5.** Que el día anterior al 07 de mayo del 2011, conversó con el Suboficial Villegas, y le consultó si podía recoger firmas el día de la consulta popular y que el mencionado ciudadano le dijo que no había problema, que también mantuvo una conversación telefónica con la Dra. Nora Guzmán, funcionaria del Consejo Nacional Electoral, y que ella le indicó que no existía impedimento, pero que no recibió ningún documento por escrito sobre este tema. **6.** Que el proceso de recolección de firmas, se realizó en Cascol, Campuzano, Guale y Lascano, que en esos lugares hubo algunos conflictos con las autoridades y las personas de su grupo que estaban recogiendo las firmas, que incluso les amenazaron sino se retiraban de allí. **7.** Que en ningún momento hizo propaganda electoral por la consulta popular. **8.** Que cuatro policías municipales junto con el comisario, llegaron al lugar donde ella recogía las firmas, que primero se acercaron los policías nacionales y le dijeron que estaba efectuando proselitismo. **9.** Que la Delegada del Consejo, le dijo que no había inconvenientes para su actividad. **10.** Que el señor Villegas les entregó la citación y tuvo que retirarse porque se sintió amenazada por todos los agentes del orden que llegaron al sitio en el cual se encontraba recolectando firmas.

e) Respecto a los argumentos presentados por las partes procesales, en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, es necesario señalar que:

e.1 La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 61, garantiza a las ecuatorianas y los ecuatorianos dentro de los derechos de participación: "4. Ser consultados"; y "6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular". En el artículo 199 a 201 del Código de la Democracia, se determina el procedimiento a seguir para la revocatoria del mandato.

e.2 De la documentación aportada por la defensa constan: **1.** Original de la solicitud de recolección de firmas para la revocatoria del mandato de fecha 11 de enero de 2011, suscrita por la señorita Magaly Baque Muñiz. **2.** Copia certificada del Informe No. 094-DOP-CNE-2011 de 15 de enero de 2011, suscrito por el Lcdo. Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas del CNE, dirigido al entonces Presidente del CNE, Licenciado Omar Simon Campaña. En el referido documento se dice que: "(…) **PROCEDE** la entrega de formato de formulario de Revocatoria de Mandato del ciudadano **NATAEL MORÁN C. Alcalde del Cantón Paján, Provincia de Manabí;** solicitada por la señora: **Magaly Baque Muñiz.** Además se informa a los peticionarios que a partir de la recepción del referido formato, tienen el plazo de ciento ochenta días para la recolección de los respaldos de firmas de conformidad con el Art. 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana." **3.** Original del Oficio No. 012-S-JBM-CNEM de 24 de enero de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, SECRETARIO DPEM-CNE, dirigido a la señora Magaly Baque Muñiz, en el cual se indica que adjunta: "…copia certificada del Informe No. 094-DOP-CNE-2011, emitido por la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, así como la hoja que contiene el formulario de revocatoria del mandato del señor **Natael Moran, Alcalde del cantón Paján;** 1 CD con la documentación requerida y un Manual de Usuario del Sistema de Registro de cédulas de Respaldo para Revocatoria de Mandato".

e.2 De las versiones rendidas por el Suboficial Primero de Policía y por la señora Baque, se colige que: **1.** El día 07 de mayo de 2011, la actividad ejecutada por la señora Glenda Magaly Baque Muñiz, fuera del recinto electoral del Colegio Paján, era exclusivamente para la recolección de firmas de una revocatoria de mandato. No hay pruebas que demuestren que la referida ciudadana utilizó material o propaganda electoral que influyera en la decisión de la ciudadanía por el sí o por el no en las preguntas que se formularon en la Consulta Popular y Referéndum. **2.** La prohibición establecida por el Código de la Democracia, en el artículo 291 numeral 2, correspondía a la propaganda efectuada respecto a la Consulta Popular y Referéndum proceso electoral que estaba en pleno desarrollo en esa época, la actividad de la señora Baque, fue un acto previo a un proceso que no se consumaba todavía.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. En aplicación del principio de legalidad, al no existir responsabilidad en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra de la señorita Baque Muñiz Glenda Magaly.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: **a)** A la señora Baque Muñiz Glenda Magaly, a través de su Ab.Nixon Vera Quiñonez, en el casillero judicial No. 11 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, asi como en el correo electrónico: ab_nixon_vera_q@live.com. **b)** A la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **c)** A la Defensoría

del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 474-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 16 de febrero de 2012.- Las 17h30. **VISTOS.-** Agréguese a los autos: el Oficio No. 2012-401-CP-4 de 2 de febrero de 2012, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 y anexos, ingresado en la Secretaría de este Despacho, en la ciudad de Quito, el día 06 de febrero de 2012, a las 16h00.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 474-2011-TCE, seguida en contra de la señora Aragundi Lucas Martha Fabiola.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h25.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Oficio Nro.-2011-386-SJCTSV-BC-CP-4 de 07 de mayo de 2011, suscrito por el señor Julio Navarrete Valladolid, Mayor de Policía, Jefe del Comando Sectorial Bahía de Caráquez. (fs. 4)

d) Original del Parte Informativo elevado al señor Jefe del Comando Sectorial Bahía de Caráquez, suscrito por el SGOS. de Policía Zenen Peñafiel Zambrano. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-018001-2011-TCE. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado el día 19 de enero de 2012, a las 14h00. (fs. 8 a 8 vlta).

g) Razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral. (fs. 10)

h) Oficio No. 019-2012-J.AC-mfp-TCE de 19 de enero de 2012, dirigida al Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta).

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 16 de febrero de 2012, a las 14h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron: la señorita Aragundi Lucas Martha Fabiola, en compañía del Ab. Vélez Bermello Carlos Hernán; la Ab. Jacqueline Monserrate Pro y el Ab. Macías Chilán Alberto Antonio, funcionarios de la Defensoría del Pueblo; la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, abogada de la Defensoría Pública; asi como el Sargento Segundo de Policía Zenen Eugenio Zambrano Peñafiel.

Las intervenciones de las partes procesales se incorporaron en el Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento que obra en el expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 290 numeral 1 dispone que: "Se sancionará con multa de tres remuneraciones mensuales básicas unificadas: "(…) 1. Quien injustificadamente retarde el envío o la entrega de los documentos electorales a las juntas respectivas".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El abogado defensor en su intervención manifestó: **1.** Que rechaza la actitud de los policías para con su defendida. **2.** Que el día 07 de mayo de 2011, la señorita Aragundi Lucas Martha Fabiola, cumplió con su deber democrático, como miembro de la Junta Receptora del Voto y que ella asistió a la capacitación para ejercer su cargo. **3.** Que el día de las elecciones, por necesidades biológicas abandonó la Junta, con el permiso de los otros miembros de la mesa, ese tiempo aprovechó para sufragar, posteriormente al regresar a la mesa, se encontró con la sorpresa de que un policía, le entregó una citación, indicándole que se había llevado unos certificados de votación. **4.** Que no existe en el Acta de la junta, tanto de instalación como de cierre, observación respecto a este hecho, no consta que se probara la existencia de retardo en el envío del material electoral ni denuncias sobre papeletas extraviadas. **5.** Que el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, garantiza el principio de la presunción de inocencia de su defendida.

b) El señor Sargento Segundo de Policía manifestó: **1.** Que el día 07 de mayo de 2011, se encontraba de servicio en la parroquia Charapotó. **2.** Que por un llamado que recibió de sus compañeros, tuvo que acudir a una mesa electoral, en donde encontró a unas personas que estaban reclamando, porque la señorita Aragundi Lucas Martha Fabiola no se encontraba en ese momento allí, por tanto se comunicó con su Jefe indicándole la novedad, ante lo cual le dispuso que le entregue la citación del Tribunal, esta orden la cumplió luego de que esperó unos quince minutos, tiempo en el cual retornó la señorita Arangundi. 3. La señorita Aragundi se había llevado involuntariamente en su cartera unos certificados de votación, que ella manifestó que se había ido a comer. El abogado de la Defensa interrogó al señor policía, ante las preguntas formuladas el agente del orden contestó que: **i.** No estuvo presente al final de la jornada electoral en el conteo de votos.

c) El representante de la Defensoría del Pueblo, intervino señalando que el proceso de juzgamiento se realizó con normalidad y que se encontraba presente en la audiencia para garantizar el debido proceso en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

d) En una segunda intervención, el señor Sargento Segundo de Policía, expresó que en el parte nada dice sobre falta de papeletas sino que este se refiere a la ausencia de la señorita Aragundi, en la mesa electoral.

e) Finalmente el abogado defensor, intervino en presentado un alegato final respecto a la tipificación de la infracción.

f) En la presente causa, esta Jueza colige que el mero hecho de una ausencia temporal de una Junta receptora del voto, no contribuye a la configuración de la infracción electoral, señalada en el artículo 290 numeral 1 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra de la señora **ARAGUNDI LUCAS MARTHA FABIOLA**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese el contenido de la presente sentencia: a) A la señora Aragundi Lucas Martha Fabiola, a través de su Ab. Vélez Bermello Carlos, en el casillero judicial 550 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **b)** A la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. **c)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 16 de febrero de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 554-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 28 de febrero de 2012, las 17h30.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 554-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033532-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral acusada presuntamente a la señora Mayra Papa Grefa sin conocer su cédula de identidad, infracción cometida el día viernes seis de mayo de dos mil once, a las diez horas con quince minutos, en la ciudad de Durán, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."* Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones: **PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- a)** Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales; **b)** Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular; **c)** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. **d)** El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez. Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa. **SEGUNDO: ANTECEDENTES.- a)** Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra de la ciudadana MAYRA PAPA GREFA en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5). **b)** En el parte policial suscrito por el señor sub teniente de Policía Darío Xavier Segarra, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033532-2011-TCE a la ciudadana con nombres MAYRA PAPA GREFA por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4). **c)** El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas

5). **d)** El treinta de enero de de dos mil doce, a las ocho horas con treinta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunta infractora MAYRA APA GREFA, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela renacer Manzana 33 villa 33; señalándose el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, a las ocho horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7). **e)** Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6). **f)** Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 8). **g)** La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica que en la dirección señalada, en la boleta informativa número BI-033532-2011-TCE, no da fe persona alguna de conocer a la presunta infractora. **h)** Providencia de Fecha 14 de febrero de 2012, las 12h15, mediante la cual ante la imposibilidad de citar a la señora Mayra Papa Grefa, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del articulo 85 del reglamento de trámites contencioso electorales, se ordena la citación por la prensa, a la presunta infractora en un periódico de la localidad por una vez. (Fojas 12). **i)** Extracto de publicación por la prensa públicado en el diario el telegrafo de la ciudad de Guayaquil; el día viernes 24 de febrero de 2012, mediante el cual se cita a la presunta infractora Mayra Papa Grefa.- **TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-** Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.".- **CUARTO: IDENTIDAD DE LA PRESUNTA INFRACTORA.-** De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33532-2011-TCE, de fecha viernes seis de mayo de 2011, a las 10h15, la presunta infractora que se identificó con el nombre de Mayra Papa Grefa, sin conocerse su cédula de identidad.- **QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DE LA PRESUNTA INFRACTORA.-** De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el Sub teniente de policía Darío Xavier Segarra, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."- **SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-** La audiencia se realizó, el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, a las ocho horas con cuarenta minutos en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Guayas ubicado en la Avenida de la Democracia y Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil, que fue señalada para este día y hora conforme se ordenó en providencia de 30 de Enero de 2012 las 08H30. La presunta infractora no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispuso se proceda a juzgarla en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales. En representación de la presunta infractora comparece el defensor público, Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola; comparece también el señor Subteniente de policía Darío Xavier Segarra**,** portador de la cédula de identidad número 0603409020, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033532-2011-TCE.- **SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.- a) Principio de Juez Natural.-** Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente, en el caso, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia", dentro del ámbito de la jurisdicción especial contencioso electoral, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos al momento del cometimiento de la presunta infracción de naturaleza electoral. Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella". Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material

probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral. La garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad. Es comprensible, al respecto, la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final. La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha del cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.- **b**) Se toma la versión del señor Subteniente de policía Darío Xavier Segarra**,** portador de la cédula de identidad número 0603409020, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033532-2011-TCE, quien en la audiencia oral de prueba y juzgamiento manifestó: "En la ciudadela El Recreo de la ciudad de Durán, la señora en mención, fue detenida por escándalo en la vía pública, y se le entregó una boleta informativa, la dirección de su domicilio se proporcionó por intermedio de una amiga, quien acudió a los calabozos de la policía de Durán; cabe mencionar que se extendió un certificado médico, como parte del procedimiento policial, que va dirigido al Comando Provincial de Durán por ser éste donde se cometió la infracción". De la versión proporcionada por el agente policial se desprenden las siguientes consideraciones, i) no se ha logrado esclarecer las circunstancias que propiciaron el presunto cometimiento de una infracción de tipo electoral, en vista de la relación de los hechos constante en el parte policial y ratificada en la versión del agente policial en la audiencia oral de prueba y juzgamiento, no se logra determinar la tipicidad de una infracción de carácter electoral, en este acto el agente policial hace relación a un procedimiento ajeno al estipulado en la tipicidad electoral. Por las circunstancias del hecho y la falta de enunciación de prueba por el mencionado agente de policía, las circunstancias descritas del presunto hecho punible no se han logrado esclarecer generando una ausencia de nexo causal entre el hecho presuntamente cometido y la tipicidad en la legislación electoral. El abogado defensor público, quien compareció en garantía del derecho a la defensa de la presunta infractora, manifestó: "Acudo en representación de la defensoría pública, de conformidad con el articulo 191 de la Constitución de la República, si bien es cierto, se elaboró un parte informativo en contra de la ciudadana Mayra Papa Grefa, sin embargo el seis de mayo la ciudad de Durán se encontraba en elecciones de Alcalde; la dirección señalada por la señora presunta infractora es ciudadela Renacer villa 3 manzana 33, esto es, en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto mi defendida desconocía que en el cantón Eloy Alfaro se esté celebrando una actividad electoral, por lo que solicito se absuelva a mi defendida, pues no actuaba con conciencia y voluntad de acuerdo con el Art. 34 (sic) del Código Penal." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones i) la norma invocada por el abogado de la defensa en su articulo 191 del la Constitución de la República; hace referencia a la naturaleza de la institucionalidad de la defensoría pública, como órgano del estado garante del acceso pleno a la justicia de las personas de las personas que por su estado de indefensión, condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. En referencia de la alegación por parte de la defensa respecto del desconocimiento de la presunta infractora de que en el cantón Eloy Alfaro se efectuaba acto electoral para elegir Alcalde, esta Jueza no lo considera por ser ajeno a la naturaleza de la presunta infracción. **c)** El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** de la señora Mayra Papa Grefa, en vista de que no se ha logrado determinar las circunstancias, en las que se cometió la infracción, ni la existencia veraz, objetiva y material del certificado médico enunciado por el señor subteniente de Policía Darío Xavier Segarra, puesto que este documento no consta dentro del expediente signado con la causa 554-2011-TCE. **d)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente de este proceso ninguna prueba material ni prueba válida y concluyente y se remitió a enunciar circunstancias ambiguas, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación formulada a la presunta infractora. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que determine la existencia de un nexo causal que determine, que la señora Mayra Papa Grefa, se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia de la ciudadana Mayra Papa Grefa.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 28 de febrero de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 570-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 28 de febrero de 2012, las 18H00. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia, con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.O 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la a la Ora Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 570-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI033581-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Orly Fabián Vilema Yunda el día sábado siete de mayo de dos mil once ; a las diez horas con cincuenta minutos, en la ciudad de Duran , la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011 , señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del

ciudadano Orly Fabián Vilema Yunda en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor sub teniente de Policía Julio Altamirano, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-0335812011-TCE al ciudadano con nombres Orly Fabián Vilema Yunda por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

e) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las once horas con diez minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Orly Fabián Vilema Yunda, en el domicilio ubicado en el cantón Duran, cooperativa Ismael Perez Castro Manzana 22 villa 22; señalando para el día martes seís de enero de dos mil doce, a las diez horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 10H52, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona al señor Orly Fabián Vilema Yunda.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 10, 11)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13)

TERCERO: GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33581-2011-TCE, de fecha sabado siete de mayo de 2011, a las 10H50, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Orly Fabián Vilema Yunda quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el sub teniente de policía Julio Altamirano, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día martes 6 de marzo de dos mil doce a las diez horas con treinta minutos, Al efecto, comparecieron: el señor Orly Fabián Vilema Yunda, en compañía de su abogado defensor, Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, así como el señor Subteniente de policía Julio Altamirano, portador de la cédula de ciudadanía número 091874145-5, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033581-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios

constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra , establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo la Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor Subteniente de Policía, Julio Altamirano quien manifestó "El Día en mención me encontraba de patrullaje en el sector arbolito, a las 10H00, pedían la colaboración de los oficiales ya que nosotros, teníamos las boletas informativas del TCE, en bloques de díez cada una, en donde el presunto infractor, se encontraba fuera de una tienda, con aliento a licor, no lo encontré con la botella en la mano, no sé si eran o no del señor o de días anteriores" al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos, que son tres elementos sustanciales o constitutivos de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción. Tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, respecto de la versión proporcionada por el señor Orly Fabián Vilema Yunda; quien manifestó "El día en que el cabo me detuvo, no me encontró con la botella, me encontró mareado, el problema era por la moto, lo que no permitía que la dueña de la moto, y esperemos hora y media para que llegue la CTG, y nunca llegó". Al respecto es manester realizar algunas consideraciones: analizar la versión y el reconocimiento tácito que hace el presunto infractor de haber cometido la infracción que se le imputa, así como analizar el aspecto normativo contenido en el artículo 123, de la ley Organica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que en su texto establece que Durante el día de las elecciones treinta y seis horas antes y doce despúes no se permitirá la venta, la distriución o el consumo de bebidas alcoholicas, es decir el ciudadano Orly Fabián Vilema Yunda, reconoce de manera directa que dentro de este periodo había ingerido bebidas alcohólicas, infrigiendo la prohibición vigente durante este periodo electoral, lo que me conlleva a remitirme, a la aplicación del axioma jurídico de que a confesión de parte relevo de prueba, en aplicación a este axioma y de la norma supletoria el artículo 1730 del Código Civil que manifiesta: “La confesión que alguno hiciere en juicio, por sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella , aunque no haya un principio de prueba por escrito”, en este caso la corroboración de los hechos realizada por el presunto infractor configura la infracción.

c) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:” (...) “2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** del señor Orly Fabián Vilema Yunda portador de la cédula de ciudadanía número 091881931-9

d) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso

deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente de este proceso ninguna prueba, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente de su parte, sin embargo el reconocimiento expreso que hace el presunto infractor ratifica el cometimiento de una infracción de carácter electoral; En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, pero en el presente caso la culpabilidad ha podido ser probada a confesión de parte, por lo que esta Jueza considera que la afirmación del presunto infractor constituye prueba determinante y concluyente de que el señor Orly Fabián Vilema Yunda se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara al señor Orly Fabián Vilema Yunda, portador de la cédula de ciudadanía No. 091881931-9; responsable de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada esto es ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se le aplica por, el principio de in dubio pro reo, y considerando que a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, se encontraba vigente el Decreto Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A. Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, mediante el cual se establece el valor del salario básico unificado para el año 2011, de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 264,00).

2) El valor de la multa deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral para que ejecute su cobro, para tal efecto, ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

3) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

4) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

5) CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.

f.) Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 06 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 555-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 28 de febrero de 2012, las 18H00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 555-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033531-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor David Clemente Velasco Carcelén el día jueves cinco de mayo de dos mil once, a las veinte y tres horas con cuatro minutos, en la ciudad de Guayaquil , la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano David Clemente Velasco Carcelén en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor sub teniente de Policía Darío Xavier Segarra, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033531-2011-TCE a la ciudadano con nombres David Clemente Velasco Carcelén por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las ocho horas con cuarenta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor David Clemente Velasco Carcelén , en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela el Recreo primera Etapa Manzana 158 villa 43 ; señalando para el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, a las diez horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona al señor David Clemente Velasco Carcelén.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas. 10, 11)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13)

j) Copia Simple de documento identificado como Contraseña de Resultado, emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Dr. Leopoldo Izquieta Peréz" (Foja 14)

k) Copia simple del documento identificado como Certificado Único de Calificación de Discapacidad (Fojas 15)

l) Copia simple del Certificado de Afiliación, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante el cual certifica que el señor Velasco Carcelén David Clemente con cédula de identidad número 0912229614, no registra aportes en el IESS (Fojas 16)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente

ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33531-2011-TCE, de fecha jueves cinco de mayo de 2011, a las 23h04, el presunto infractor que se identificó con el nombre de David Clemente Velasco Carcelén quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el sub teniente de policía Darío Xavier Segarra, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia se llevo a cabo, el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Guayas ubicado en la avenida de la Democracia y Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil , con la presencia de las partes procesales ; señor David Clemente Velasco Carcelén, en compañía de su abogado defensor público Jimmy Humberto Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Subteniente de Policía Darío Xavier Segarra**,** portador de la cédula de identidad número 0603409020, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033531-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor Subteniente de Policía Darío Xavier Segarra respecto del procedimiento policial sustanciado dentro de la presente causa en donde manifiesta "*En mi calidad de Jefe de control de la ciudadela El Recreo, recibimos la llamada al 101 de los moradores del sector. Por lo que avancé al lugar en donde pude constatar que el señor David Clemente Velasco Carcelén se encontraba libando en la vía pública con dos botellas de cerveza, procedí a solicitarle me entregue la cédula de identidad y emitir la boleta*

informativa", al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción adquiera una personalidad esencial, debe cumplir con algunos preceptos, que son res elementos sustanciales o constitutivos de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que no han sido manifestados ni evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción. No tienen relación con la tipificación de la infracción electoral que se acusa al presunto infractor los elementos de enfermedad y discapacidad del presunto infractor que ha aducido el señor defensor público, por lo que esta jueza se exime de tomarlos en cuenta.

c) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor David Clemente Velasco Carcelén portador de la cédula de ciudadanía número 091222961-4.

d) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente de este proceso ninguna prueba, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que determine la existencia de un nexo causal que determine, que el señor David Clemente Velasco Carcelén , se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano David Clemente Velasco Carcelén portador de la cédula de ciudadanía número 091222961-4.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 28 de febrero del 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 556-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 28 de febrero de 2012, las 18h30.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 556-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035007-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor William Alfredo Mieles Mendoza el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las dos horas con diez y nueve minutos, en la ciudad de Guayaquil , la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordanica con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Constencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimeinto de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con quince minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano WILLAM ALFREDO MIELES MENDOZA en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Cabo de Policía William Gonzalo Averos Mora, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035007-2011-TCE al ciudadano con nombres WILLAM ALFREDO MIELES MENDOZA por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las ocho horas con treinta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor WILLAM ALFREDO MIELES MENDOZA, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en la 22 AVA y Maracaibo; señalándose el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, a las doce horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (foja 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica que en la dirección señalada, en la boleta informativa número BI-035007-2011-TCE, no da fe persona alguna de conocer a la presunta infractora.

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035007-2011-TCE, de fecha sábado siete de mayo de 2011, a las 02h19, el presunto infractor que se identificó con el nombre de WILLAM ALFREDO MIELES MENDOZA.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el Cabo de Policía William Gonzalo Averos Mora, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia se llevo a cabo, el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Guayas ubicado en la avenida de la Democracia y Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil, con la presencia de, el Señor David Clemente Velasco Carcelén en compañia de su abogado defensor Público dejando constancia la ausencia del del señor Cabo Segundo de Policia William Gonzalo Averos Mora Responsable de la emisión de la boleta informativa número BI-035007-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor WILLAM ALFREDO MIELES MENDOZA. En relación con el relato que realizó el presunto infractor sobre la agresión que supuestamente le infringieron los policías y la versión de su esposa y su madre sobre el dinero supuestamente entregado al policía que conducía el

vehículo, esta jueza no se pronuncia, dejando a salvo los derechos de que se crea asistido para que el presunto infractor los ejerza ante la autoridad que corresponde.

c) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente de este proceso ninguna prueba, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que determine la existencia de un nexo causal que determine, que el señor William Alfredo Mieles, se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano William Alfredo Mieles Mendoza portador de la cédula de ciudadadanía número 091229371-9.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 28 de febrero de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

CAUSA 0409-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Tulcán, 29 de febrero de 2012.- Las 13h03.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0409-2011-TCE; en 15 (quince) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano WILSON ARTURO CAMPUEZ CARLOSAMA, con cédula de ciudadanía 040145455-8; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Tulcán, el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 17h25. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo**. TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 20 de enero de 2012, y celebrada el día 29 de febrero de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las 09h11, en las instalaciones de la Delegación Provincial de la Provincia de Carchi, ubicada en la Av. Coral y Venezuela, dentro de la causa número 0409-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Dr. Luis Andrés Nazate Castillo, como abogado de la Defensoría Pública; y el señor Agente de Policía Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar del Comando Provincial de Policía "Carchi N.10", Primer Distrito Plaza Tulcán. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran el Agente de Policía y el Defensor Público. Se deja constancia de que esta audiencia se instala sin la comparecencia del presunto infractor, por lo que se la realiza en rebeldía, sin dejar de garantizarle su derecho a la defensa por la comparecencia de su abogado defensor público. Se verifica que la citación fue debidamente realizada por la prensa, el día viernes 17 de febrero de 2012, a través del Diario Nacional "El Comercio", pág. 16 del cuaderno 2, tomando en cuenta que se había realizado una audiencia oral de prueba y juzgamiento el día primero de diciembre de 2011, pero al no haberse citado al presunto

infractor en legal y debida forma, se señaló, mediante auto de 20 de enero de 2012 un nuevo día y hora para que la realización de la presente diligencia y evitar así posibles nulidades. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en particular el proceso que se llevará en rebeldía del presunto infractor, es decir el artículo 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Una vez leído el parte policial de la causa, el Sr. Juez pregunta al Dr. Nazate si tiene algún reparo en la realización de esta audiencia o cree que existe algún vicio de nulidad a lo que el Dr. Nazate indica que no. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar el señor Agente de Policía Vásquez Padilla Samer Amilcar que fue previamente juramentado y advertido de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: el día de elecciones, sábado 7 de mayo de 2011, hubo un comunicado de personas que se encontraban libando en un vehículo, nos a cercamos y efectivamente el vehículo estaba parqueado con tres ciudadanos en el interior, así mismo habían botellas de cerveza en el interior del vehículo, como estaban con aliento a licor se les dijo que les iba a entregar las boletas informativas del Tribunal Contencioso Electoral, se pudo constatar que eran los Sres. Campuez Carlosama Wilson Arturo de 28 años de edad domiciliado en la ciudad de Quito, así mismo se pudo tomar contacto con la Sra. Casarez Narváez Bertilde Isabel que manifestó que los tres ciudadanos llegaron en el vehículo, se parquearon en la parroquia 27 de septiembre barrio la Victoria, los mismos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, los otros dos ocupantes son Puentestar Jaime Elías domiciliado en la ciudad de Ibarra, de igual forma el Sr. Ibarra Campus Carlos Andrés de 24 años de edad domiciliado en la ciudad de Quito, posterior a esto se le retiró los envases vacíos y con licor y haciéndoles retirar del lugar, motivo por el que se realizó el parte informativo del cual se tiene conocimiento. El Sr. Juez pregunta al Agente de policía si es su firma la que consta en el parte, a lo que responde que Sí, el señor Juez pregunta si desea añadir algo más, a lo que indica que No. La defensoría pública no tiene preguntas al agente policial. Se da la palabra al Defensor Público que en lo principal expresa: comparezco a esta audiencia a favor de mi defendido y en primer lugar impugno el parte policial porque no se asemeja a la realidad de los hechos tal y como sucedieron y por cuanto no existen una prueba técnica que pueda justificar el estado de embriaguez de mi defendido, por lo que solicito que se dicte sentencia absolutoria a mi defendido. El señor Juez dispone que se tenga como prueba el parte policial y el testimonio rendido por el señor Agente de Policía Vásquez Padilla Samer Amilcar. Siendo las 09h40, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 13h00 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor de oficio y el Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa al señor WILSON ARTURO CAMPUEZ CARLOSAMA, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** Habiéndose citado en legal y debida forma, el procesado no ha comparecido a la audiencia de juzgamiento, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, la audiencia se realiza en rebeldía del procesado. **5.2.** Los hechos materia del proceso constan en el parte policial elevado por el agente de policía a sus superiores, habiendo entregado la boleta de citación al hoy procesado, determinándose en dicho parte que la infracción corresponde a la conducta tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, lo que implica que el acto infraccional consiste o bien en expender bebidas alcohólicas o consumirlas. En dicho parte policial se detalla en forma concreta, que el procesado en compañía de otras personas fue encontrado infraganti en el interior de un vehículo por parte de elementos de la policía, quienes constataron que tales personas presentaban aliento a licor, en el caso cerveza, y que en tal vehículo se encontraron varias botellas, unas vacías y otras llenas, lo cual constituye evidencia de consumo de tales bebidas alcohólicas en el día en que existía la prohibición de tal consumo. Es de resaltar, el hecho de que la tipificación infraccional se refiere únicamente al hecho de consumir bebidas alcohólicas, distinto al caso del numeral cuarto del artículo 291 del antes referido cuerpo legal, que tipifica la conducta de quien ingresa al recinto electoral o se presenta a votar en estado de embriaguez, por lo que nos encontramos ante hechos que establecerían distintas formas probatorias; pero en la especie, se recalca, la conducta se refiere simplemente al hecho del consumo de bebidas alcohólicas. **5.3.** Durante la audiencia se practicó la prueba documental, esto es el parte policial incorporado como prueba, porque quien lo suscribe, reconoció la firma constante en el documento, dándole plena validez y luego se practicó la prueba testimonial, habiendo el testigo Sargento Primero de policía Vásquez Padilla Samer Amilcar narrado en forma concreta y detallada los hechos que constituyen materia de este juzgamiento. **5.4.** Si bien el Sr. defensor público argumentó que no se había practicado una prueba técnica respecto a las bebidas alcohólicas, no se trata en la especie del numeral cuarto del artículo 291 del Código de la Democracia, esto es lo que tiene que ver con estado de embriaguez, sino lo tipificado en el numeral 3 ibídem, es decir la constancia suficientemente comprobada en la audiencia del consumo de bebidas alcohólicas en días prohibidos.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. WILSON ARTURO CAMPUEZ CARLOSAMA culpable de la

infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará al procesado y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Carchi, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Carchi y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Tulcán, 29 de febrero de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

CAUSA 0410-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Tulcán, 29 de febrero de 2012.- Las 13h17.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0410-2011-TCE; en 15 (quince) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano PUENTESTAR CARLOSAMA JAIME ELÍAS, con cédula de ciudadanía 040131714-4; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Tulcán, el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 17h25. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo**. TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 20 de enero de 2012, y celebrada el día 29 de febrero de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las 10h09, en las instalaciones de la Delegación Provincial de la Provincia de Carchi, ubicada en la Av. Coral y Venezuela, dentro de la causa número 0410-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Dr. Luis Andrés Nazate Castillo, como abogado de la Defensoría Pública; y el señor Agente de Policía Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar del Comando Provincial de Policía "Carchi N.10", Primer Distrito Plaza Tulcán. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes a esta diligencia a lo que indica que se encuentran el Agente de Policía y el Defensor Público. Se deja constancia de que esta audiencia se instala sin la comparecencia del presunto infractor, por lo que se la realiza en rebeldía, sin dejar de garantizarle su derecho a la defensa por la comparecencia de su abogado defensor público. Se verifica que la citación fue debidamente realizada por la prensa, el día viernes 17 de febrero de 2012, a través del Diario Nacional "El Comercio", pág. 16 del cuaderno 2, tomando en cuenta que se había realizado una audiencia oral de prueba y juzgamiento el día primero de diciembre de 2011, pero al no haberse citado al presunto infractor en legal y debida forma, se señaló, mediante auto de 20 de enero de 2012 un nuevo día y hora para que la realización de la presente diligencia y evitar así posibles nulidades. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en particular el proceso que se llevará en rebeldía del presunto infractor, es decir el artículo 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Una vez leído el parte policial de la causa, el Sr. Juez pregunta al Dr. Nazate si tiene alguna observación en la realización de esta audiencia o cree que existe algún vicio de nulidad a lo que el Dr. Nazate indica que no. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar el señor Agente de Policía Vásquez Padilla Samer Amilcar que fue previamente juramentado y advertido de

las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: en la presente causa me ratifico a lo contenido en el parte policial. Eso es todo, Sr. Juez. El señor Juez pregunta al defensor público si desea interrogar al agente de policía, a lo que el Dr. Nazate indica que sí, y formula la siguiente pregunta: ¿Usted constató que el Sr. Puentestar Carlosama Jaime Elías estaba bebiendo?, a lo que el agente de policía indica que no sino que constató que se encontraban con aliento a licor y habían muchas botellas vacías en el vehículo. Se da la palabra al Defensor Público que en lo principal expresa: comparezco a esta audiencia a favor de mi defendido y en primer lugar no me encuentro de acuerdo a lo expuesto por el Sr. policía y tampoco con el parte informativo, ya que solamente se constató que estaba en el vehículo, mas no que estaba consumiendo licor, pues estaba solamente acompañando a sus amigos o familiares, por lo que solicito que se dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Siendo las 10h35, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 13h15 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor de oficio y el Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** Habiéndose citado en legal y debida forma, el procesado no ha comparecido a la audiencia de juzgamiento, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, la audiencia se realiza en rebeldía del procesado. **5.2.** Los hechos materia del proceso constan en el parte policial elevado por el agente de policía a sus superiores, habiendo entregado la boleta de citación al hoy procesado, determinándose en dicho parte que la infracción corresponde a la conducta tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, lo que implica que el acto infraccional consiste o bien en expender bebidas alcohólicas o consumirlas. En dicho parte policial se detalla en forma concreta, que el procesado en compañía de otras personas fue encontrado infraganti en el interior de un vehículo por parte de elementos de la policía, quienes constataron que tales personas presentaban aliento a licor, en el caso cerveza, y que en tal vehículo se encontraron varias botellas, unas vacías y otras llenas, lo cual constituye evidencia de consumo de tales bebidas alcohólicas en el día en que existía la prohibición de tal consumo. Es de resaltar, el hecho de que la tipificación infraccional se refiere únicamente al hecho de consumir bebidas alcohólicas, distinto al caso del numeral cuarto del artículo 291 del antes referido cuerpo legal, que tipifica la conducta de quien ingresa al recinto electoral o se presenta a votar en estado de embriaguez, por lo que nos encontramos ante hechos que establecerían distintas formas probatorias; pero en la especie, se recalca, la conducta se refiere simplemente al hecho del consumo de bebidas alcohólicas. **5.3.** Durante la audiencia se practicó la prueba documental, esto es el parte policial incorporado como prueba, porque quien lo suscribe, reconoció la firma constante en el documento, dándole plena validez y luego se practicó la prueba testimonial, habiendo el testigo Sargento Primero de policía Vásquez Padilla Samer Amilcar narrado en forma concreta y detallada los hechos que constituyen materia de este juzgamiento. **5.4.** El Sr. defensor público, durante la práctica de la prueba testimonial, preguntó al testigo si le constó que el procesado consumía bebidas alcohólicas a lo cual el testigo respondió que tenía aliento a licor correspondiente a los envases de cerveza que estaban en el vehículo en que con otras personas se encontraban consumiendo la bebida prohibida en tal día, por lo que este Juzgador da plena validez probatoria sobre el consumo que es la conducta infraccional tipificada, materia del presente juzgamiento.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. PUENTESTAR CARLOSAMA JAIME ELÍAS culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará al procesado y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Carchi, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Carchi y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Tulcán, 29 de febrero de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

CAUSA 0411-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Tulcán, 29 de febrero de 2012.- Las 13h39.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0411-2011-TCE; en 15 (quince) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano IBARRA CAMPUS CARLOS ANDRÉS, con cédula de ciudadanía 040159491-6; puede encontrarse

incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Tulcán, el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 17h25. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo. **TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 20 de enero de 2012, y celebrada el día 29 de febrero de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial de la Provincia de Carchi, ubicada en la Av. Coral y Venezuela, dentro de la causa número 0411-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Dr. Luis Andrés Nazate Castillo, como abogado de la Defensoría Pública; y el señor Agente de Policía Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar del Comando Provincial de Policía "Carchi N.10", Primer Distrito Plaza Tulcán. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes a esta diligencia a lo que indica que se encuentran el Agente de Policía y el Defensor Público. Se deja constancia de que esta audiencia se instala sin la comparecencia del presunto infractor Carlos Andrés Ibarra Campus, por lo que se la realiza en rebeldía, sin dejar de garantizarle su derecho a la defensa por la comparecencia de su abogado defensor público. Se verifica que la citación fue debidamente realizada por la prensa, el día viernes 17 de febrero de 2012, a través del Diario Nacional "El Comercio", pág. 16 del cuaderno 2, tomando en cuenta que se había realizado una audiencia oral de prueba y juzgamiento el día primero de diciembre de 2011, pero al no haberse citado al presunto infractor en legal y debida forma, se señaló, mediante auto de 20 de enero de 2012 un nuevo día y hora para que la realización de la presente diligencia y evitar así posibles nulidades. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en particular el proceso que se llevará en rebeldía del presunto infractor, es decir el artículo 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Una vez leído el parte policial de la causa, el Sr. Juez pregunta al Dr. Nazate si ha tenido ocasión de revisar el expediente, a lo que el abogado indica que no, así mismo el señor Juez pregunta si tiene alguna objeción en la realización de esta audiencia a lo que el Dr. Nazate indica que no hay ninguna causa que afecte a la validez de esta diligencia. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, preguntando al agente de policía si está dispuesto a rendir su declaración de los hechos, manifestando que sí, posterior a esto interviene en primer lugar el señor Agente de Policía Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar que fue previamente juramentado y advertido de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: en la presente causa me ratifico a lo contenido en el parte policial. El señor Juez pregunta al defensor público si desea interrogar al agente de policía, a lo que el Dr. Nazate indica que sí, y formula las siguientes preguntas: el día de los hechos usted ¿Observó que el Sr. Ibarra Campus Carlos Andrés estaba ingiriendo sustancia alcohólica?, respondiendo que sí, yo observé que tenía un vaso con cerveza. Otra pregunta, ¿Cómo se dio cuenta que mi defendido estaba en estado etílico?, el Sargento Primero indica: como consta en el parte se encontraba con aliento a licor y pude constatar por medio del olfato. El Sr. Juez pregunta al agente de policía si desea agregar algo más a su declaración, respondiendo que no. Se da la palabra al Defensor Público que en lo principal expresa: en la presente causa no me encuentro de acuerdo a lo expuesto por el Sr. policía y tampoco con el parte informativo, ya que mi defendido solo ha tenido en sus manos un vaso de cerveza, por lo que no se puede justificar de forma acertada que él estaba en total estado etílico, por lo que solicito que se dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Siendo las 11h24, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 13h30 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor de oficio y el Sargento Primero Vásquez Padilla Samer Amilcar, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** Habiéndose citado en legal y debida forma, el procesado no ha comparecido a la audiencia de juzgamiento, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, la audiencia se realiza en rebeldía del procesado. **5.2.** Los hechos materia del proceso constan en el parte policial elevado por el agente de policía a sus superiores, habiendo entregado la boleta de citación al hoy procesado, determinándose en dicho parte que la infracción corresponde a la conducta tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, lo que implica que el acto infraccional consiste o bien en expender bebidas alcohólicas o consumirlas. En dicho parte policial se detalla en forma concreta, que el procesado en compañía de otras personas fue encontrado infraganti en el interior de un vehículo por parte de elementos de la policía, quienes constataron que tales personas presentaban aliento a licor,

en el caso cerveza, y que en tal vehículo se encontraron varias botellas, unas vacías y otras llenas, lo cual constituye evidencia de consumo de tales bebidas alcohólicas en el día en que existía la prohibición de tal consumo. Es de resaltar, el hecho de que la tipificación infraccional se refiere únicamente al hecho de consumir bebidas alcohólicas, distinto al caso del numeral cuarto del artículo 291 del antes referido cuerpo legal, que tipifica la conducta de quien ingresa al recinto electoral o se presenta a votar en estado de embriaguez, por lo que nos encontramos ante hechos que establecerían distintas formas probatorias; pero en la especie, se recalca, la conducta se refiere simplemente al hecho del consumo de bebidas alcohólicas. **5.3.** Durante la audiencia se practicó la prueba documental, esto es el parte policial incorporado como prueba, porque quien lo suscribe, reconoció la firma constante en el documento, dándole plena validez y luego se practicó la prueba testimonial, habiendo el testigo Sargento Primero de policía Vásquez Padilla Samer Amilcar narrado en forma concreta y detallada los hechos que constituyen materia de este juzgamiento. **5.4.** El defensor público representando al procesado, preguntó al testigo, esto es el agente de policía que suscribe el parte, si el hoy procesado estaba ingiriendo licor cuando se produjo la intervención policial, a lo que el testigo respondió en forma detallada que vio al hoy procesado sosteniendo en las manos un vaso y una botella de cerveza, además del aliento a licor que percibió en el procesado, lo cual a criterio de este Juzgador se constituye en prueba de que dicho procesado se encontraba efectivamente consumiendo una bebida alcohólica, en este caso cerveza en un día prohibido para tal consumo.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. IBARRA CAMPUS CARLOS ANDRÉS culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará al procesado y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Carchi, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Carchi y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Tulcán, 29 de febrero de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 558-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 29 de febrero de 2012, las 17H00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 558-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035005-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Ernesto Chiristian Jimenez Quimi, portador de la cédula de ciudadanía número 092096772-6 el día viernes seis de mayo de dos mil once, a las tres horas con treinta minutos, de la madrugada en la ciudad de Guayaquil, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales

corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Ernesto Chiristian Jimenez Quimi en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Teniente de Policía Carlos Mauricio Fernández Castillo, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035005-2011-TCE a la ciudadano con nombres Ernesto Chiristian Jiménez Quimi por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las nueve horas con diez minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Ernesto Chiristian Jiménez Quimi , en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles 44 ava y Rosendo Aviles ; señalando para el día miércoles veinte y nueve de febrero de dos mil doce, a las ocho horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h20, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona al señor Chiristián Jiménez Quimi.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 14 y vuelta)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Foja 15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-35005-2011-TCE, de fecha viernes seís de mayo de 2011, a las 03H30, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Christián Ernesto Jiménez Quimi portador de la cédula de ciudadanía número 092096772-6 quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el señor Teniente de Policía Carlos

Mauricio Fernandéz Castillo, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia oral de prueba y juzgamiento se realizó el día miércoles 29 de febrero de dos mil doce a las ocho horas con cuarenta minutos, con la presencia de la jueza sustanciadora Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral, y el infrascrito Secretario Relator ad-hoc, que certifica, Ab. Paúl Mena Zapata, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Guayas, en contra del presunto infractor señor Ernesto Christian Jiménez Quimi**,** con cédula de ciudadanía 092096772-6 señalada para este día y hora conforme fue ordenada en providencia de 30 de Enero de 2012 las 09H10. Al efecto, comparecieron: el señor Ernesto Christian Jiménez Quimi**,** en compañía del defensor público, Abogado Jimy Delgado; la señora jueza dejó constancia la no comparecencia del señor Agente de policía Teniente de Policía Carlos Mauricio Fernández Castillo.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente en este caso contemplado en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador " Código de la Democracia" ; dentro del ámbito de la jurisdicción vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral,respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, este derecho se ha garantizado de manera efectiva dentro de la sustanciación de la presente causa, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** del señor Ernesto Chiristián Jimenez Quimi portador de la cédula de ciudadanía 092096772-6,

c) Respecto de la versión de los hechos que ha dado presunto infractor por intermedio y observancia de sus derechos y previa solicitud del abogado defensor público quien solicita que intervenga el señor Ernesto Chiristián Jiménez Quimi, con cédula de ciudadanía número. 092096772-6, quien intervenino de forma directa y

manifiesto: “Mi nombre es Chiristian Ernesto Jiménez Quimi, la mañana del día jueves estuve libando con unos compañeros de la universidad, habia comprado unas cervezas, por un vuelto que me tenian que dar me quedé hasta la madrugada del viernes en la calle, me encontré con la policia, me dirigía a devolver las botellas, esto sucedió en el sector de Chambers y 44 ava, aproximadamente a las tres de la madrugada, mi intención era devolver las botellas para recuperar el vuelto que tenían que darme, el policía me dijo que tenía aliento a licor, le expliqué que sí pero que había bebido en el día anterior, me entregaron la boleta, y todo fue sin mayores contratiempos.” al respecto esta jueza considera, analizar la versión y el reconocimiento tácito que hace el presunto infractor de haber cometido la infracción que se le imputa, es menester realizar algunas consideraciones de caracter normativo, el artículo 123, de la ley Organica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, establece que durante el día de las elecciones treinta y seis horas antes y doce después no se permitirá la venta, la distriución o el consumo de bebidas alcohólicas, es decir el ciudadano Chiristián Ernesto Jiménez Quimi, reconoce de manera directa que dentro de este periodo había ingerido bebidas alcohólicas, infrigiendo la prohibición vigente durante este periodo prohibición electoral, lo que me conlleva a remitirme, a la aplicación del axioma jurído a confesión de parte relevo de prueba, en aplicación a este axioma y como norma supletoria el artículo 1730 del codigo civil que maifiesta Art. 1730.- La confesión que alguno hiciere en juicio, por sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito, en este caso la corroboración de los hechos realizada por el presunto infractor, así como la ratificación que hace el abogado de la defensa quien manifiesta “El señor Ernesto Jiménez, a quien represento, quien ha manifestado que no ha infrigido la ley seca, lo que presenció el policía son rezagos de lo que ocurrió en días anteriores, es obligación del agente de policía venir a esta diligencia y ratificar su contenido, solicito que por secretaría se declare la inasistencia del agente de policía y se declare inocente a mi defendido”, es decir que si bien la infracción no se ha logrado determinar que se cometió en el acto mismo en que se emitió la boleta informativa, esta a confesión de parte se perpetuo durante el periodo de prohibición electoral, lo que a le da a esta juzgadora los elementos necesarios materiales y formales, para determinar la veracidad y la existencia del hecho cometido.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara al señor Ernesto Christián Jiménez Quimi, portador de la cédula de ciudadanía No. 092096772-6 responsable de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada esto es ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se le aplica por, el principio de in dubio pro reo, y considerando que a la fecha de cometimiento de la infracción electoral, se encontraba vigente el Decreto Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, mediante el cual se establece el valor del salario básico unificado para el año 2011de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 264,00)

2) El valor de la multa deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral para que ejecute su cobro, para tal efecto ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

3) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

4) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

5) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 29 de febrero de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

CAUSA No. 003-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL- Quito, 20 de enero de 2011.- Las 13h10.- **VISTOS:** Con fecha miércoles doce de enero de dos mil once, a las dieciséis horas con doce minutos, ingresa a la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, el oficio No. 037-DPMS-11 de 11 de los mismos mes y año, suscrito por el Ing. Jimy Gualán, dirigido a la Dra. Tania Arias Manzano, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual remite en copias simples "...la denuncia presentada por el Ing. Luis Alejandro Heras Calle, Alcalde del Cantón Palora”, conjuntamente con tres documentos.- Realizado el sorteo respectivo, correspondió a esta Jueza el conocimiento y trámite de la presente causa a la que se le ha signado con el número 003-2011, de cuya revisión se desprende: **I.- ANTECEDENTES:** El Ing. Luis Heras Calle, Alcalde del Gobierno Municipal de Palora, con fecha 6 de enero de

2011, presenta ante el Ing. Jimy Gualán, Presidente del Consejo Nacional de Morona Santiago (sic) una denuncia en los siguientes términos: **a)** Que "Con las imágenes que adjunto, pongo en su conocimiento de la propaganda política que están utilizando los proponentes de la revocatoria de mi mandato, con los cuales se podrá dar cuenta claramente que están utilizando imágenes, términos y frases atentatorias contra la dignidad de mi persona como Alcalde, y consecuentemente perjudiciando la imagen del pueblo de Palora..."; **b)** Que a través de Internet, se están enviando imágenes calumniosas que denigran su honorabilidad; y, **c)** Que "...estos hechos están rebasando los límites de la tranquilidad y la forma de hacer campaña que inclusive atentan contra la Democracia...", por lo cual solicita que de forma inmediata se tomen los correctivos necesarios a fin de establecer las "...sanciones legales en contra de estos malos elementos que están maquinando esta deshonrosa campaña". Adjunta tres documentos que hacen alusión a la publicidad que se está realizando respecto de la revocatoria del mandato del Alcalde.- **II) CONSIDERACIONES JURIDICAS.- PRIMERO.- i)** El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral 3; y numerales 1 y 2 e inciso final del artículo 221 de la Constitución de la República, tiene la atribución de conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, así como sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones a las normas electorales, **ii)** De conformidad con el numeral 13 del artículo 70 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral tiene, entre sus funciones, la de "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en esta ley"; y, al amparo del inciso tercero y cuarto del artículo 72 del cuerpo legal mencionado, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de los jueces o juezas por sorteo para cada proceso; y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.- **SEGUNDO.- i)** El denunciante en su escrito indica que en la propaganda política los "proponentes de la revocatoria" de su mandato están utilizando "imágenes, términos y frases atentatorias contra la dignidad de mi persona", sin identicar nominalmente a la o las personas que presuntamente son los autores, cómplices o encubridores de la supuesta infracción denunciada. Al mencionar que son "los proponentes de la revocatoria", deja abierta la posibilidad de que éstos puedan ser aquellos que presentaron la solicitud de revocatoria o todas aquellas personas cuyas firmas han sido validadas por el Consejo Nacional Electoral para dicho proceso, por lo que la falta de identificación expresa de la o los responsables de la presunta infracción, impide que pueda iniciarse un juzgamiento para determinar la inocencia o culpabilidad de lo que se acusa, **ii)** Por otra parte, en el presente caso se denuncia "que están utilizando imágenes, términos y frases atentatorias contra la dignidad de mi persona como Alcalde, y consecuentemente perjudicando la imagen del pueblo de Palora. Así mismo, a través del Internet, están enviando imágenes por demás calumniosas que denigran mi honorabilidad", lo cual no constituye una infracción electoral, tipificada en el Código de la Democracia; por lo tanto, de lo expresado por el señor Luis Alejandro Heras Calle, podría inferirse la existencia de una presunta infracción penal, cuyo conocimiento, trámite y resolución, no es de competencia de esta Jueza por razón de la materia, por lo que se deja a salvo los derechos de los que se crea asistido el denunciante, para ejercitarlos ante los organismos competentes, **iii)** Finalmente, el inciso final del artículo 121 del Código de Procedimiento Civil señala que *"Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema"*. En el caso materia del presente auto, se constata que la Delegación Provincial Electoral de Morona Santiago, remitió al Tribunal Contencioso Electoral, en copias simples, la denuncia presentada por el Ing. Luis Heras Calle, Alcalde del Gobierno Municipal de Palora, descrita en el punto "I.- "Antecedentes", documento que al no estar certificado, carece de valor jurídico y por lo tanto mal puede iniciarse el trámite o el juzgamiento de la infracción denunciada. **iv)** Por las consideraciones expuestas, esta jueza se **INHIBE** de conocer y dar trámite a la denuncia formulada. Una vez ejecutoriado el presente auto, precédase al archivo de la causa. **TERCERO.-** Por no haber señalado el denunciante domicilio legal o electrónico, notifíquese con el contenido del presente auto, en las oficinas donde funciona el Municipio del cantón Palora en la provincia de Morona Santiago. **CUARTO.-** Actúe la Dra. Sandra Melo Marín, en calidad de Secretaria Relatora de este Despacho. **QUINTO.-** Publíquese el presente auto, en la página web www.tce.gob.ec y exhíbase en la cartelera visible de este Tribunal.- **CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.-**

f.) Dra. Ximena Endara Osejo, Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Quito, 20 de enero del 2011.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0238-2011-TCE.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 29 de febrero de 2012. Las 17h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública; copias simple de las credenciales del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes y del cabo segundo Cristhian Noel Torres Ponce.

Dado el sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0238-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) Para el juzgamiento de las infracciones electorales, existen dos instancias, la primera corresponde llevarla adelante a una de las juezas o jueces, por sorteo; y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Estas normas aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día sábado 7 de mayo de 2011, a las 12h50, en la prevención de policía de esa unidad, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008034-2011-TCE, al señor **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030052468-3, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008034-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 9h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA**, a través de la prensa, por desconocer su domicilio; en dicho auto se señaló que el día martes 28 de febrero de 2012, a las 09h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA,** fue citado a través del Semanario "El Espectador", el día sábado 18 de febrero de 2012, (fs. 10), haciéndole conocer que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa; concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) El teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No.003-SMM-P-TCE-2012 se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Cañar, se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Jenny Calle Tello (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el martes 28 de febrero de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según la boleta informativa al presunto infractor se lo identifica con el nombre de **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030052468-3.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 28 de febrero 2012, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Luís Chimbay Vega, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: Que el día sábado 7 de mayo de 2011, encontrándose en la prevención de policía, el cabo segundo Cristhian Torres, del grupo motorizado, pidió su colaboración para entregar la boleta informativa No. 008043-2011-TCE, al señor Luis Domingo Chimbay Vega por infringir la ley seca, el cual se encontraba con aliento a licor. A pedido del teniente de policía Edgar Vinueza Reyes, se recepta el testimonio del señor cabo segundo de policía Cristhian Torres, quien manifestó: Que al momento en que se hallaba de patrullaje en el terminal nuevo se acercó a un grupo de personas, percatándose que se encontraban ingiriendo licor, por lo que se les trasladó a la prevención para que reciba la citación. La abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública del señor Luis Chimbay Vega, manifestó lo siguiente: **i)** Que la Constitución establece que no se puede dejar en indefensión, que al no comparecer su defendido a la audiencia se le está dejando en esa calidad, al no contar con su versión de los hechos; **ii)** Que nunca se le llevó a ningún centro de salud para verificar si estaba en estado etílico, sólo se pensó que se encontraba en ese estado; y, **iii)** Que para imputar una contravención es necesario que exista un certificado médico que indique que se encontraba alcoholizado, el cual no existe. El teniente de policía Edgar Paúl Vinueza intervino manifestando: **a)** Que la ley no dice que se le deba trasladar a un centro de salud, o se le realice una prueba; y; **b)** Que la ley indica, que comete infracción quien consume bebidas alcohólicas, no es requisito que se le traslade a un centro médico. La abogada Jenny Calle en su contra réplica manifestó: Que la Constitución establece la presunción de inocencia, por lo que al no existir una prueba en la que se demuestre el estado etílico en el que se hallaba, solicitó, que se considere el hecho de que su defendido no cometió infracción alguna, basándose en el principio de inocencia.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, es claro que el testimonio del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien reconoce el contenido del parte y boletas informativas, no ha sido desvirtuado por los alegatos de la abogada de la defensa, ya que si bien en el presente caso, el que suscribe el parte policial, no ha presenciado los hechos que le fueron referidos por el cabo segundo de policía Cristhian Noel Torres Ponce, sin embargo él sí pudo constatar que el presunto infractor tenía un fuerte aliento a licor al momento de la entrega de la boleta informativa. La prohibición constante en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas; y, la ingesta de estas bebidas, tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor. Por tanto la ingesta de dichas bebidas puede ser detectada sin necesidad de consultar con un médico. Dado que el presunto infractor está ausente y no puede desvirtuar, de manera fundamentada, lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral del presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por tanto, las afirmaciones del teniente de policía Edgar Vinueza Reyes corroboradas por el cabo segundo de policía Cristhian Torres Ponce, quien si presenció los hechos que se denuncian, nos conduce a considerar que el señor Luis Domingo Chimbay Vega tiene

responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **LUIS DOMINGO CHIMBAY VEGA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030052468-3, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 29 de febrero de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0239-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 29 de febrero de 2012. Las 17h30. **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública; copias simple de las credenciales del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes y del cabo segundo Cristhian Noel Torres Ponce.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **BALTAZAR BURI HUMALA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0239-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato del artículo 217 en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 7 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, suscribe el parte informativo, en el que consta que el día sábado 7 de mayo de 2011, a las 12h30, en la prevención de policía de esa unidad, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008035-2011-TCE, al señor **BALTAZAR BURI**

HUMALA, portador de la cédula de ciudadanía número 030089495-3, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3)

b) El referido parte y la boleta informativa No. BI-008035-2011-TCE, son remitidos por la delegación Provincial Electoral del Cañar, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011 al Tribunal Contencioso Electoral, el que es recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) El entonces Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año 2011, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Mediante auto de 10 de enero de 2012, a las 10h00, se admitió a trámite la presente causa; y se ordenó la citación al señor **BALTAZAR BURI HUMALA**, con domicilio en el sector de Guapán, parroquia Guapán, provincia del Cañar; se señaló que el día martes 28 de febrero de 2012 a las 11h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral del Cañar; y, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo con las garantías del debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **BALTAZAR BURI HUMALA,** fue citado en su domicilio, recibió la citación la señorita Teresa Buri Juncal, hija del presunto infractor, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 17h33, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10)

b) Conforme consta a fojas 8 del proceso y con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el teniente de policía Edgar Pául Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día 18 de enero de 2012, a las 16h00.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Jenny Calle Tello, en calidad de defensora pública (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el martes 28 de febrero de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la boleta informativa al presunto infractor se lo identifica con el nombre de **BALTAZAR BURI HUMALA,** portador de la cédula de ciudadanía número 0300894951-3.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 28 de febrero de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicadas en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo señalado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Baltazar Buri Humala, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, ya que se contó del defensor público. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día sábado 7 de mayo de 2011, la central de radio patrulla, le había pedido que colabore con el cabo segundo de policía Cristhian Torres, quien le había manifestado que en el terminal nuevo se encontraban personas consumiendo bebidas alcohólicas; **ii)** Que se constató la presencia de varias personas, entre ellas, el señor Buri Humala Baltazar, a quién se le entregó la boleta No. 008035. A solicitud del señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, se receptó la versión del cabo segundo de policía Crithian Noel Torres Ponce, quien manifestó: Que como dice en el parte, el teniente Vinueza había colaborado en la entrega de la boleta al señor Baltazar Burri Humala, a quién se le trasladó a la prevención por hallarse con fuerte aliento a licor. La Ab. Jenny Calle Tello en su calidad de defensora pública del señor Baltazar Buri Humala manifestó: Que tomando en consideración el artículo 72 de la Constitución que establece la presunción de inocencia, y al ser el parte policial meramente referencial así como la intervención de los señores policías, y al no existir una certificación científica de que su defendido se haya encontrado en estado etílico, no se le puede imputar la infracción, más aun cuando no se halla presente para rendir la versión de los hechos, por lo que alega la inocencia del señor Baltazar Buri Humala. Interviene el teniente de policía Edgar Vinueza para indicar que la ley electoral es clara en establecer que es prohibido ingerir bebidas alcohólicas en los días de elecciones, no indica que deba existir prueba científica para extender la boleta informativa, además los únicos que conocieron como

sucedieron los hechos es el policía y el infractor, el cual lamentablemente no se encuentra presente. La Ab. Jenny Calle, manifestó que en una audiencia de juzgamiento se debe demostrar con prueba científica y documentada que dicho acto se cometió.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El Código de la Democracia, en el artículo 123, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, concordando con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas señaladas se aplican al presente caso, ya que el parte policial informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, está contemplado el juzgamiento de estas infracciones, siendo éste un procedimiento oral. El artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

A la luz de estas normas y analizando los hechos de la presente, es claro que el testimonio del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien reconoce el contenido del parte y boletas informativas, no ha sido desvirtuado por los alegatos de la abogada de la defensa, testimonio que ha sido ratificado por el cabo segundo de policía Cristhian Noel Torres Ponce, quien constató que el presunto infractor se encontraba con aliento a licor al ser llevado a la prevención. La norma del Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas; la ingesta de estas bebidas, tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, las afirmaciones del teniente de policía Edgar Vinueza Reyes y del cabo segundo Cristhian Torres Ponce, nos conduce a determinar que el señor Baltazar Buri Humala tiene responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **BALTAZAR BURI HUMALA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030089495-3, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral

Certifico.- Azogues, 29 de febrero de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0240-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 29 de febrero de 2012. Las 18h00. **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública y copia simple de la credencial del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0240-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales, por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) El día 7 de mayo de 2011, se realizó el referéndum y consulta popular convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces, por sorteo; y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo con los incisos tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, se realizará conforme al procedimiento previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día sábado 7 de mayo de 2011, a las 13h15, en el Colegio Luis Cordero de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008036-2011-TCE, al señor **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO**, portador de la cédula de ciudadanía número 090400628-5, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3)

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008036-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 10h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO**, a través de la prensa, por desconocer su domicilio; en dicho auto se señaló que el día martes 28 de febrero de 2012, a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO,** fue citado a través del Semanario "El Espectador", el día sábado 18 de febrero de 2012, (fs. 10), haciéndole conocer que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa; concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) El teniente de policía Edgar Pául Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Jenny Calle Tello, en calidad de defensora pública (fs. 7).

d) El día martes 28 de febrero de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la boleta informativa al presunto infractor se lo identifica con el nombre de **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO,** portador de la cédula de ciudadanía número 090400628-5.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 28 de febrero de 2012, a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De la audiencia se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Luis Alberto Bermeo Barrionuevo, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, ya que se contó con la presencia de la Defensora Púbica. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día 07 de mayo de 2011 a las 13h15, por disposición de la central de radio patrulla se dirigió al Colegio Luis Cordero, donde se tenía información que existía una persona con aliento a licor, el cual quería votar; y, **ii)** Que al llegar contacto al mencionado ciudadano quien tenía fuerte aliento a licor y que sus pupilas estaban dilatadas y no podía expresarse bien, por lo que se le entregó la boleta. La Ab. Jenny Calle Tello en su calidad de defensora pública del señor Luis Alberto Bermeo Barrionuevo, manifestó: **i)** Que no se encuentra de acuerdo con el parte ni con la versión del señor policía por ser meramente referenciales; **ii)** Que no existe en el expediente documento o certificado que pruebe que su defendido haya ingerido bebidas alcohólicas. En su alegato final solicita que se resuelva de acuerdo con el principio de presunción de inocencia a que tiene derecho su defendido. El teniente de policía Edgar Vinueza Reyes, solicita la palabra para manifestar: Que está de acuerdo que no existe prueba material de la infracción, sin embargo aclaró que la boleta informativa le fue entregada al ciudadano, quién firmó y dio sus datos personales, con lo cual asumió la infracción cometida.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

En el artículo 123 del Código de la Democracia, se indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma citada, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Estas normas citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas, en el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Para esta jueza, el parte informativo constituye información relevante ya que, el miembro de la policía responsable de la emisión del mismo, esto es, el teniente de policía, señor Edgar Paúl Vinueza Reyes ha concurrido a la audiencia oral de prueba y juzgamiento y ha reconocido como suyos el parte informativo y la boleta informativa. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia oral de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria, más aún cuando es el testimonio de uno de los agentes del orden a quienes se les ha encomendado informar sobre el presunto cometimiento de infracciones electorales, teniendo en este caso, presunción de veracidad, más aún cuando el presunto infractor no las ha refutado ya que no ha concurrido a está audiencia, a pesar de las citaciones realizadas. En este caso se ha determinado la identidad del presunto infractor y se ha corroborado su participación en los hechos que se le imputan, esto es, en el cometimiento de la infracción determinada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **LUIS ALBERTO BERMEO BARRIONUEVO**, portador de la cédula de ciudadanía número 090400628-5, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 29 de febrero de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

CAUSA 0246-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Ibarra, 1 de marzo de 2012.- Las 13h47.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0246-2011-TCE; en 9 (nueve) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ REYES, con cédula de ciudadanía 100199819-2; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Ibarra, el día jueves 5 de mayo de 2011 a las 20h00. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo. **TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 26 de enero de 2012, y celebrada el día 1 de marzo de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, al primer día del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de la Provincia de Imbabura, ubicada en la Av. Jaime Roldós 1162 y Sánchez Cifuentes, dentro de la causa número 0246-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece la Ab. Torres Jaramillo Virginia Margarita, como abogada de la Defensoría Pública; y la Agente de Policía Mayor Doris Viteri Paspuel del Comando Provincial de Policía "Imbabura N.12", Primer Distrito Plaza Ibarra. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran la Agente de Policía, la Defensora Pública y el señor Juan Carlos Rodríguez Reyes, presunto infractor de la infracción electoral. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar la Mayor Doris Viteri Paspuel que fue previamente juramentada y advertida de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: estábamos de control en la zona 1, una zona muy conflictiva, al pasar en una tienda se detectó que dos personas estaban libando, pasamos más despacio para ver si estaban bebiendo, en eso nos dimos cuenta de que habían botellas debajo del asiento y él estaba con un vaso. Él estaba acompañado de una señora, esos fueron los hechos sucedidos Sr. Juez. El señor Juez pregunta a la Defensora Pública si desea hacer una pregunta a la agente de policía, indicando que no. El Sr. Juez da la palabra a la abogada de oficio que en lo principal manifiesta: Yo vengo aquí como defensora pública señor Juez y al respecto en los minutos que usted nos permitió conversar he hablado con mi defendido y el señor Rodríguez Reyes Juan Carlos desea hablar primero y luego voy a intervenir otra vez yo. El señor Rodríguez Reyes Juan Carlosen su exposición expresa: Voy a empezar diciendo que he tenido varias llamadas de personas diciéndome que mienta al respecto de los hechos sucedidos, pero no lo voy a hacer, no es justificación, pero yo recién estoy acá un año porque vivía en España, y la verdad no veo noticias porque solo hay malas noticias y no me gusta er ese tipo de noticias. Bueno tenemos una loza y tengo un negocio, yo vivo en Otavalo, era un día muy caluroso pasamos por una tienda, hacía mucho calor y compramos una cerveza, me senté en la vereda, luego pasó la policía nos tomó fotos y luego se bajó y nos explicó que infringíamos la Ley. Pero después de ello devolvimos la cerveza porque la destapamos y no la tomamos. Reitero que no es justificativo, pero yo no vivo aquí, es más yo ni siquiera voto aquí, no tengo lugar de votación, yo lo hago en Barcelona, yo no tomo señor Juez y eso es lo que ocurrió. Toma la palabra la defensora pública que en lo principal indica: Mi defendido ha actuado de una forma honesta y hoy he tomado comunicación con el señor Juan Carlos Reyes, solo destapó la cerveza, no la tomó, y mi defendido no tiene antecedentes de este hecho; solicito que ello se tome en cuenta el momento de resolver. El señor Juez pregunta al presunto infractor si la persona que le vendió la cerveza no le indicó que estaba prohibido, a lo que responde que no, que está seguro que tampoco sabía porque era una persona mayor, incluso después conversamos por lo sucedido. El señor Juez manifiesta que la persona que le vendió claramente estaba incursa en una infracción electoral, a lo que el presunto infractor responde que ella tenía la audiencia a las 11 de la mañana. El Sr. Juez le pregunta a la Mayor si quiere aclarar algo, a lo que responde que no, que lo que se dijo fue lo que había

ocurrido y que ciertamente el muchacho tuvo un buen comportamiento y la verdad, esas son cosas que pasan. El Sr. Juez le pregunta a la defensora de oficio si desea hacer alguna exposición más, a lo que ella afirma y manifiesta lo siguiente: Sr. Juez quiero que quede claro que el Sr. Reyes no fue realizado ningún examen de sangre o de alcocheck, tampoco hay pruebas que diga que él estaba ingiriendo alcohol, él vino y dijo lo que había sucedido la verdad señor juez, eso es todo lo que debo decir. El señor Juez dispone que se tenga como prueba el parte policial y el testimonio rendido por la Agente de Policía Mayor Doris Viteri Paspuel. Siendo las 09h40, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 15h00 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, la abogada defensora de oficio, el presunto infractor, la agente de policía Mayor Doris Viteri Paspuel, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa al señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ REYES, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** En el presente caso la infracción electoral se encuentra tipificada en el art. 291 numeral 3 del Código de la Democracia, esto es la conducta prohibida de consumo o expendio de bebidas alcohólicas durante el tiempo de la prohibición por razones electorales. **5.2.** Durante la audiencia de juzgamiento, el procesado aceptó el hecho imputable con lealtad y franqueza, teniendo en cuenta que por sus propias expresiones no observó la norma legal que afirmó desconocer, pero que por determinación jurídica no excusa su conducta, puesto que la norma de derecho se presume conocida por todos sobre aquellos que impera. Este hecho concuerda con la evidencia que presentada y practicada como prueba ante este Tribunal, confirma la comisión de la infracción, tanto descrita en el parte policial, es decir prueba documental reconocida por quien suscribe dicho documento, como por el propio testimonio de la Mayor Viteri Paspuel quien, sucribe dicho parte y narró detalladamente los hechos, indicando que había dos personas en el lugar de los hechos, y que habían botellas de cerveza debajo del asiento y que el hoy procesado estaba con un vaso y acompañado de una señora, sin que la defensa haya impugnado o controvertido los dichos de la testigo. **5.3.** La defensa del procesado argumentó en el sentido de que la aceptación por parte de dicho procesado de las situaciones dadas en materia de este juzgamiento, manifiestan una actitud franca que debe ser tomada en cuenta por el Juzgador. **5.4.** En materia electoral es fundamental garantizar el normal desenvolvimiento de una jornada electoral, evitando cualquier situación que atente contra lo que debe ser una jornada cívica de participación ciudadana, por lo que, entre otras disposiciones, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, en forma clara prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, justamente para lograr el objetivo de una armónica consecución de la jornada electoral. En este sentido la conducta infraccional se remite simplemente al hecho del expendio o consumo de bebidas alcohólicas y, la norma legal en esta materia electoral contempla una pena pecuniaria concreta y determinada, que no puede ser modificada por el Juzgador y que consiste en una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, obviamente referida a la vigente en el momento de la comisión de la infracción, sin que pueda aplicarse atenuantes de ninguna clase.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ REYES culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará al procesado y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Ibarra, 1 de marzo de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

CAUSA 0247-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Ibarra, 1 de marzo de 2012.- Las 14h07.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0247-2011-TCE; en 12 (doce) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que la ciudadana ADRIANA DE JESÚS CRUZ HERRERA, con cédula de ciudadanía 10017800-8; puede

encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Ibarra, el día jueves 5 de mayo de 2011 a las 20h00. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo**. TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 26 de enero de 2012, y celebrada el día 1 de marzo de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, al primer día del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 10h09, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de la Provincia de Imbabura, ubicada en la Av. Jaime Roldós 1162 y Sánchez Cifuentes, dentro de la causa número 0247-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece la Dra. Garzón Guamán María Cristina, como abogada de la Defensoría Pública; y la Agente de Policía a ese entonces Capitán de Policía, hoy, Mayor Doris Viteri Paspuel del Comando Provincial de Policía "Imbabura N.12", Primer Distrito Plaza Ibarra. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran la Agente de Policía, la Defensora Pública. Se deja constancia de que esta audiencia se instala sin la comparecencia de la presunta infractora, por lo que se la realiza en rebeldía, sin dejar de garantizarle su derecho a la defensa por la comparecencia de su abogada defensora pública. Se verifica que la citación fue legal y debidamente realizada de acuerdo consta en el expediente, en tal virtud, y dando cumplimiento a lo establecido en autos, se realizó la citación por la prensa, el día viernes 24 de febrero de 2012, a través del Diario Regional Independiente "El Norte", pág. 7. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento en particular el proceso que se llevará en rebeldía del presunto infractor, es decir el artículo 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El señor Juez le pregunta a la abogada defensora pública si desea hacer alguna exposición acerca de alguna observación o posibles nulidades en este proceso a lo que responde que sí y en uso de la palabra manifiesta en lo principal lo siguiente: Señor Juez siendo cierto lo manifestado por la señorita secretaria, el art. 257 inciso segundo del Código de la Democracia dice que será responsabilidad de los jueces velar por el estricto cumplimiento de las normas constitucionales, la Constitución es la norma suprema y en el art. 76 numeral 7 literal a y c expresamente dice que nadie podrá ser privado de su defensa y esta se hará en el momento oportuno y de forma igualitaria. Además en el artículo 424 de la Constitución indica la supremacía de este cuerpo legal, y es por ello que se debe velar por respetar los derechos concebidos en la Constitución. Siendo cierto que hay una publicación por la prensa estamos violando un derecho y no le estamos tratando de forma igualitaria porque no sabemos si realmente la señora fue citada, por ello la defensa se opone a que se dé paso a la realización de esta audiencia señor. El señor Juez interviene diciendo: La misma Constitución establece procedimientos para realización de audiencias sin la comparecencia de los procesados como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos de lesa humanidad, en tal virtud los legisladores que han establecido estos casos excepcionales, también han realizado una salvedad en el Código de la Democracia, como lo está establecido en el artículo 251; además yo como Juez debo aplicar lo que dice la Constitución y la Ley, es por ello que si en la misma Constitución hay esa salvedad, en materia electoral que también hay una excepción ya que se necesita de un proceso ágil porque no se pueden detener los procesos electorales, doy paso a la presente audiencia oral de prueba y juzgamiento. El señor Juez pregunta a la Mayor si está dispuesta a rendir su declaración, a lo que expresa que sí, el Sr. Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar la Mayor Doris Viteri Paspuel que fue previamente juramentada y advertida de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: en el lugar Bartolomé García y Rafael Larrea esquina existe un bar-karaoke ya que mediante el patrullaje se verificó que este estaba en funcionamiento, no recuerdo cuántas personas había en el lugar, pero yo entré y las personas salieron, en ello la Sra. Cruz Herrera dijo que no era la dueña pero que era la administradora, y yo le dije que porqué habían cervezas servidas en las mesas, y le pregunté si sabía que iban a ser las elecciones y ella dijo que sí. El Sr. Juez pregunta a la abogada defensora si desea hacer preguntas a la agente de policía, a lo que responde que sí y cuestiona diciendo: Mayor Viteri, en su versión dijo que la Sra. Cruz Herrera no era la dueña sino la administradora, ¿Tiene documentos que justifiquen que la señora era la administradora y no la dueña? Respondiendo que no posee documentos, y que no es su función pero después de hacer varias preguntas a la señora Cruz Herrera parecía la dueña y no la administradora. La defensora pública formula otra pregunta a la Mayor Viteri: ¿Usted tiene documentos que acrediten que habían más personas en el lugar? Respondiendo la agente de policía que no, en realidad yo había tomado fotografías pero no pensé que se iba a necesitar ahora y no las traje, estaba en un operativo y había un compañero mío que conducía y yo que me bajé del

carro e ingresé al lugar y en cuánto me vieron, los que estaban ahí salieron. El señor Juez da el uso de la palabra a la defensora pública que en lo principal indica: Soy defensora pública por tanto no tengo pruebas de descargo, pero tal como dice la Mayor no se ha demostrado que la persona sea la administradora o dueña, y es más tampoco se ha demostrado si existe si quiera el bar-karaoke, siendo que venimos a una audiencia de prueba y juzgamiento aquí es donde se debe demostrar la existencia de alguna infracción y las pruebas no las trajo, eso es todo señor Juez. El señor Juez dispone que se tenga como prueba el parte policial y el testimonio rendido por la Agente de Policía Mayor Doris Viteri Paspuel. Siendo las 10h37, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 15h30 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, la abogada defensora pública, la agente de policía Mayor Doris Viteri Paspuel, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa a la señora ADRIANA DE JESÚS CRUZ HERRERA, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** Para garantizar el normal y cívico desenvolvimiento de una jornada electoral, es preciso establecer un comportamiento armónico y sereno de los ciudadanos, lo cual no se consigue si de por medio se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas, que por su propia naturaleza producen conductas desinhibidas y en una gran cantidad de casos se traducen en manifestaciones agresivas contra personas y bienes. Por ello el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante el tiempo legal de prohibición en relación de actividades electorales. **5.2.** En el presente caso, se trata del expendio de bebidas alcohólicas, lo cual para este Juzgador establece una relación causal con la otra conducta prohibida que es el consumo de tales bebidas alcohólicas, puesto que si no hubiera tal expendio, es obvio que se reduciría drásticamente el consumo de licor. **5.3.** Si bien la defensora pública, actuando por la procesada, manifestó que el debido proceso por el principio de inmediación, exige el juzgamiento en presencia del procesado, no es menos cierto, como expresamente deja constancia este Juzgador, que la propia Constitución vigente en el artículo 233 establece excepciones para determinados casos, en que el Juzgamiento puede hacerse en ausencia del procesado, como lo es para el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad y, así también, en la materia específica electoral con rango constitucional como función autónoma, es fundamental garantizar que los eventos electorales tengan plena realización ágil, soberana y sin dilaciones, por lo que el Código de la Democracia prevé en el artículo 251 el juzgamiento en rebeldía del procesado. **5.4.** La Mayor de policía Viteri Paspuel al rendir su testimonio que practicado en legal y debida forma, ha sido incorporado como prueba, ratificó y reconoció el contenido del parte policial suscrito por ella, es decir se constituye en forma legal la prueba documental, todo lo cual demuestra la existencia de la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia, debiéndose notar entre otras, las afirmaciones de la testigo, de que la procesada estaba en el lugar de los hechos, sitio en el que había varias cervezas servidas y que varias personas salieron del local dejándolas allí, comprobación inequívoca de que en ese bar o local de karaoke, a decir de la testigo, existía una conducta de expendio de tales bebidas alcohólicas. A las preguntas de la defensora pública, respecto a si a la testigo le consta que la procesada era propietaria o administradora del local, este hecho para este Juzgador es irrelevante, porque no se trata de una infracción propia imputable al propietario o administrador de un local, sino basta la mera conducta de cualquier persona de expender bebidas alcohólicas en días prohibidos, lo cual reafirma la calidad probatoria de las afirmaciones de la testigo; tampoco es relevante, porque el testimonio tiene plena validez, que las fotografías que afirmó la testigo se tomaron en el lugar y día de los hechos, no hayan sido remitidas a este Tribunal, ni anunciadas ni presentadas ni practicadas como prueba para ser incorporadas durante la audiencia, porque lo afirmado por la testigo es prueba suficiente de la existencia de la conducta prohibida materia del presente juzgamiento.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara a la Sra. ADRIANA DE JESÚS CRUZ HERRERA culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará a la procesada y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Ibarra, 1 de marzo de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc

CAUSA 0248-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Ibarra, 1 de marzo de 2012.- Las 14h37.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0248-2011-TCE; en 12 (doce) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que la ciudadana MARÍA ELISA PANTOJA BURBANO, con cédula de ciudadanía 10063785-8; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Ibarra, el día jueves 5 de mayo de 2011 a las 20h00. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo**. TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 26 de enero de 2012, y celebrada el día 1 de marzo de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, al primer día del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 11h07, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de la Provincia de Imbabura, ubicada en la Av. Jaime Roldós 1162 y Sánchez Cifuentes, dentro de la causa número 0248-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Ab. Marco Franklin Pineda Rivera, como abogado de la Defensoría Pública; y la Agente de Policía a ese entonces Capitán, hoy, Mayor Doris Viteri Paspuel del Comando Provincial de Policía "Imbabura N.12", Primer Distrito Plaza Ibarra. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran la Agente de Policía, el Defensor Público y la señora María Elisa Pantoja Burbano, presunta infractora de la infracción electoral. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento y de la infracción que se le imputa, esto es expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Se suspende la audiencia por unos minutos para que el abogado defensor público converse y revise el expediente junto con su defendida, la señora Pantoja; se reinstala la audiencia siendo las 11h25. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar la Mayor Doris Viteri Paspuel que fue previamente juramentada y advertida de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: en este caso estábamos circulando, tiene relación con el primer caso de esta mañana, en un micromercado, un señor, no recuerdo si el señor estaba con una o dos botellas de cerveza, le preguntamos que quien le vendió la cerveza y dijo que la persona de ese micromercado, a lo que procedí a entrar y entregarle la boleta señor Juez. El señor Juez pregunta al Defensor Público si desea hacer una pregunta a la agente de policía, indicando que sí y pregunta: ¿Vio usted que la señora vendió la cerveza al señor Reyes? Respondiendo la Mayor: no yo no observé, el señor Reyes me dijo que la señora de ese micromercado le vendió. Otra pregunta: ¿Vio si en el micromercado habían un menor de edad vendiendo en el local? la Mayor responde que no. El Sr. Juez da la palabra al abogado de oficio que en lo principal manifiesta: En mi calidad de abogado patrocinador de la señora Pantoja impugno en todas sus partes el parte de la Mayor Viteri ya que el hecho se dio el jueves 5 de mayo de 2011, debo decir que mi patrocinada jamás vendió licor porque estaba delicada de salud, por lo que su nieto que responde a los nombres de Diego Santacruz le ayudó ese día en el micromercado, el adolescente de 15 años ayudó a su abuelita, lo que sucedió fue que un señor vino y le pidió que le venda cerveza y el después le dijo a su abuelita que estaba en la parte de adentro descansando, como podemos ver señor juez, aquí no hay mala fe o dolo, ya que ella no vendió la bebida alcohólica, sino que esto ocurrió por desconocimiento. Además señor Juez solicito se recepte la declaración de Diego Santacruz, menor de edad que se encuentra aquí presente. Ante esta petición el señor Juez Dr. Arturo Donoso Castellón realiza una intervención manifestando en lo principal lo siguiente: Es obligación de un Juez garantizar la protección de los derechos constitucionales en dos aspectos fundamentales, primero las normas básicas del derecho al debido proceso y sus garantías y en segundo lugar los menores de edad son personas vulnerables y no se les puede exponer a situaciones que les podría acarrear responsabilidades a ellos mismos, por lo que esta vez y para mejorar criterio de este Juzgador voy a receptar lo solicitado, mas no se hará con juramento la siguiente declaración. El menor Diego Santacruz expresa: Vino un señor a la tienda yo estaba viendo televisión y le fui a preguntar a mi abuelita que cuánto costaba la cerveza y de ahí mi abuelita dijo que no podía vender la cerveza y ella se levantó y retiró la cerveza y yo regresé a seguir viendo televisión. El abogado hace una pregunta al adolescente: ¿en algún momento su abuelita le autorizó vender la cerveza? A lo que respondió: no, yo no sabía yo le fui a preguntar a mi abuelita y de ahí ella se levantó a quitar la cerveza. Otra pregunta, ¿Sabía que en esos días era prohibido vender licor? a lo que responde que no. La presunta infractora, Pantoja Burbano María Elisa, en su intervención manifiesta: yo estaba delicada de salud y estaba descansando adentro, va mi nieto a la tienda y dice yo le ayudo hasta que usted descanse, en ello va mi nieto y me pregunta cuánto cuesta y le dije que no había cómo vender. De ahí llego la Capitana y yo le rogaba que por

favor que no sabía que no quería hacer daño, porque antes las elecciones eran el domingo y esta vez fue sábado, por eso fue la confusión doctor, porque yo nunca he tenido estos problemas, disculpe por esta vez, si me hace sanción yo quiebro porque mi tienda es bien pequeñita, le rogaría doctor que vea los modos posibles como ayudarme en esto. El defensor en su intervención dice que de ninguna manera existió mala fe o dolo, ya que la señora no tenía predisposición de vender bebidas alcohólicas el jueves 5 de mayo, así mismo de la declaración del adolescente no fue la señora, que vendió la cerveza, por ello señor Juez solicito que se deje sin efecto la citación que pesa en su contra para que no sea sancionada de ninguna manera, porque la señora es una persona humilde y de escasos recursos, hasta aquí mi intervención. El Juez dice que siendo este el momento propicio dentro de la audiencia, no puedo dejar de señalar señora Pantoja los menores de edad no pueden consumir bebidas alcohólicas ni tener acceso a ellas porque la Ley expresamente prohíbe estas conductas a los menores de edad, dejo en claro esto, aunque no es el campo propio pero debo hacer notarlo. El señor Juez dispone que se tenga como prueba el parte policial y el testimonio rendido por la Agente de Policía Mayor Doris Viteri Paspuel. Siendo las 11h53, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 15h45 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor público, la presunta infractora, la agente de policía Mayor Doris Viteri Paspuel, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa a la señora MARÍA ELISA PANTOJA BURBANO, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** Para garantizar el normal y cívico desenvolvimiento de una jornada electoral, es preciso establecer un comportamiento armónico y sereno de los ciudadanos, lo cual no se consigue si de por medio se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas, que por su propia naturaleza producen conductas desinhibidas y en una gran cantidad de casos se traducen en manifestaciones agresivas contra personas y bienes; es decir, desde el punto de vista jurídico hay un deber de las personas dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas, que se constituye en una conducta exigible de abstención de tal expendio, es decir que las personas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas, tienen una auténtica posición de garantes, para colaborar en el desarrollo armónico de la actividad electoral, evitándose así el consumo de tales licores. Por ello el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas durante el tiempo legal de prohibición en relación de actividades electorales. **5.2.** En el presente caso, la procesada se encontraba en tal posición de garante, incumpliendo su deber de abstenerse de vender bebidas alcohólicas, al tenerlas en su local a disposición de quien lo solicite, como sucede en la especie, más aún si dejó el local a cargo de un menor de edad, que por disposiciones jurídicas de vulnerabilidad por minoría de edad, no puede estar expuesto a la situación descrita, más aún si, como en este caso esto desencadenó el que una persona esté en posición y ocasión de consumir las bebidas alcohólicas que se ofrecían en el local de la procesada. **5.3.** La conducta infraccional se encuentra debidamente comprobada por el parte policial suscrito, reconocido y ratificado por testimonio debida y legalmente actuado como prueba durante la audiencia de juzgamiento, durante el cual la Mayor Viteri Paspuel relató la forma en que se produjeron los hechos y la entrega de la boleta de citación correspondiente, ya que como se expresó en dicho testimonio la cerveza llegó a manos de una persona, porque se la entregaron para que pueda consumir dicho licor, lo cual demuestra la conducta infraccional de expendio de bebidas alcohólicas en días prohibidos. **5.4.** La alegación de la defensa en el sentido de que la procesada no expendió personalmente las bebidas alcohólicas, no puede ser aceptada como válida, porque, como ya se indicó dicha procesada se encontraba en posición de garante respecto a que en su local no se expendan bebidas alcohólicas en los días prohibidos, y, por el contrario permitió que sea incluso un menor de edad el que expenda dichas bebidas, con lo cual configuró su conducta a lo tipificado en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara a la Sra. MARÍA ELISA PANTOJA BURBANO culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará a la procesada y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Ibarra, 1 de marzo de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 561-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, jueves 01 de marzo de 2012, las 15H00 - **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 561-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035358-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Sixto Guillermo Gualpa, portador de la cédula de ciudadanía número 090636344-4 el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte y dos horas con quince minutos; en la ciudad de Guayaquil, en las calles Guerrero Valenzuela y el Oro, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Sixto Guillermo Gualpa en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Sargento Segundo de Policía Wilson Peralta Peñafiel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035358-2011-TCE a la ciudadano con nombres Sixto Guillermo Gualpa por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las nueve horas con cuarenta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Sixto Guillermo Gualpa portador de la cédula de ciudadanía número 090636344-4, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Tercer Callejón P-Entre 26 y 27 ; señalando para el día miércoles veinte y nueve de febrero de dos mil doce, a las diez y seis horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h25, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, quien certifica haber entregado en persona la citación al señor Sixto Guillermo Gualpa (Foja 9)

h) Providencia de fecha 13 de febrero de 2012, las 09h10, en la cual se hace constar que de la revisión del expediente existe un lapsus calami (Foja 12)

i) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 14, y 15)

j) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Foja 16, 17, 18,19)

k) Documento identificado como certificado de asistencia suscrito por la señora Flor María Moran en su calidad de Jefa de personal de la empresa Telerama S.A y anexos (fojas 20, 21, 22)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-35358-2011-TCE, de fecha sábado siete de mayo de 2011, a las 22H15; el presunto infractor que se identificó con el nombre de Sixto Guillermo Gualpa portador de la cédula de ciudadanía número 090636344-4 quien ha recibido la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el señor Sargento de Policía Wilson Peralta Peñafiel, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día miércoles 29 de febrero de dos mil doce a las 16h40 minutos; con la presencia de la jueza sustanciadora Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Guayas, al efecto, comparecieron: el señor Sixto Guillermo Gualpa**,** en compañía de su abogado defensor abogado Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor sargento de policía Wilson Peralta Peñafiel, portador de la cédula de identidad número 0301409645, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035358-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural.

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente en este caso contemplado en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia"; dentro del ámbito de la jurisdicción vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser

oída por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, este derecho se ha garantizado de manera efectiva dentro de la sustanciación de la presente causa, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** del señor Sixto Guillermo Gualpa portador de la cédula de ciudadanía 090636344-4,

c) En la versión del señor Agente de policía Wilson Peralta Peñafiel, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035358-2011-TCE, se encuentra lo siguiente: "Me ratifico en el contenido del parte policial como de la boleta informativa del TCE; el día y hora indicados en el parte policial, el presunto infractor se encontraba libando en la vía pública, tengo que indicar que el lugar de los hechos constan en el parte policial, el presunto infractor y algunas personas más, el presunto infractor manifestó que era padre de un agente de policía, y conforme el procedimiento establecido en la ley procedí a citarlo"; en el desarrollo de la referida Audiencia, en uso del derecho a la réplica el agente policial manifestó: "Señora jueza puedo solicitar a la CAE, en donde se puede comprobar, la hora en donde se produjeron los hechos, y darán fe de la hora donde se desarrolló el procedimiento, tengo que decir, que estaba patrullando, cuando vi que el señor Gualpa estaba con un vaso tomando, no recuerdo si era un vaso de cerveza o un vaso de wisky, eso no recuerdo, lo que debo decir es que la ley no dice de la cantidad dice que no se debe tomar en ley seca". Al respecto, esta jueza considera analizar la versión realizada en la carga probatoria de los hechos ratificados en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento con el procedimiento policial ejecutado, así como de la constatación del agente policial del cometimiento de la infracción con carácter de flagrante. Es menester tomar en cuenta algunas consideraciones de doctrina en el proceso del conocimiento, en los términos que hace referencia el Profesor Leonardo Polo[1], para diferenciar la inintencionalidad del acto mediante el cual, en el caso, el presunto infractor infringe la norma y la intención objetiva y subjetiva de conocimiento de la ley y los efectos de su aplicación, así como el propósito y voluntad en la realización del acto consciente por parte del señor Sixto Guillermo Gualpa, presunto infractor en esta causa. La intencionalidad dice el autor que cito, reside en el acto y antes de él, en la voluntad de la persona, esto es, en la operación cognoscitiva que conmensura su objeto, en donde no es necesario ningún acto constituyente anterior, pues los actos voluntarios han de ser constituidos. De otra parte, la pasividad de la voluntad en cumplir la ley impide la operación por sí sola de la voluntad si no hay la presencia, la cooperación de los hábitos del intelecto práctico, esto es, la intención en el acto para que éste se convierta en voluntario, que tiene origen en la facultad para ejercer dicho acto, en tanto ésta (la facultad) le pertenece al sujeto en pleno conocimiento de la norma legal vigente en el momento del cometimiento de la infracción mediante conciencia y voluntad, me conduce a considerar los elementos que configuraron la materialidad de la infracción en relación con el conocer la prohibición determinada en la "ley seca", la naturaleza de la norma y la tipicidad de la infracción, situación en la que no se ha omitido el carácter inintencional del acto y la estructura del horizonte limitado del campo objetivo de la percepción[2]; en el caso, el presunto infractor conocía de la vigencia de la ley seca, al manifestar, inquirido por el agente de policía en los hechos: "que no pasa nada y que él también es padre de un policía", esto es, tenía plena conciencia del acto o de su direccionalidad constitutiva. "*Lo que mueve a la voluntad que en derivación se traslada a los objetos y a las notas percibidas que se abarcan en un horizonte de percepción real y material es la intención*, analiza el autor que menciono*; … No hay acto de conciencia sin especificación objetiva y a la inversa, según lo que la doctrina valida en la*

---

1. POLO LEONARDO, "La voluntad y sus actos II", Cuadernos de Anuario Filosófico, Madrid, 1998, p. 57.

2. POLO, LEONARDO, Op. Cít.

ciencia del derecho y que se denomina axioma. En la Teoría del Conocimiento se traslada la objetivación del acto como tal y si no hay fisuras entre acto y objeto es porque ambos se ajustan sin residuos, se conmensuran al realizar el acto, de tal modo que en él se hace presente el correlato objetivo".[3] Señala al respecto Raquel Sandoz, en su análisis del Código Civil argentino en el tema de "Los hechos jurídicos", que: "*La ausencia de intención se caracteriza por la discordancia entre el fin o propósito del acto y el resultado que éste produce. Cuando hay concordancia entre el fin del acto y el resultado obtenido, entonces el acto es intencionado. Aquí puede usarse una comparación expresiva. La intención del agente es como la flecha que lanza el tirador hacia el blanco y que alcanza su objetivo…* la analogía por tanto, es pertinente, *…pues la intención que es el impulso interno que mueve a la voluntad para la consecución de un fin, puede asemejarse a la flecha que es disparada por el arco para alcanzar el blanco. Cuando existe discordancia entre el propósito del acto y el resultado efectivamente logrado, el acto es inintencionado: es la flecha que no da en el blanco.*[4] A criterio de esta jueza, el acto de infringir la ley seca, se configura, sin tomar en cuenta un porcentaje o gramaje alguno de venta o expendio de bebidas alcohólicas, lo que me remite a la versión del agente policial, es decir, considerando la inintencionalidad, el acto de infringir la ley, sin embargo, fue percibido material y formalmente por el agente policial, en vista de la flagrancia, como consta en el parte policial. Con relación a la versión del presunto infractor el cual manifestó: "Mi Nombre es Sixto Guillermo Gualpa, el día en mención trabajé de cinco de la mañana hasta las siete de la noche, fui a visitar a mi madre en las calles el Oro y Valenzuela, fui a la tienda en donde había algunas personas más, quiero recalcar que el señor sargento dice que la infracción fue a las diez de las noche, cuando yo estuve aproximadamente a las siete de la noche, en el lugar de los hechos, yo le dije al sargento que no pasaba nada, que yo también tengo un hijo policía, quiero decir que yo no tomo ni fumo solicito que se ingrese como prueba el certificado de haber laborado entre las cinco y treinta y seis de la mañana hasta las siete y veinte y siete de la noche, emitido por mi lugar de trabajo"; y, sobre la intervención del señor defensor público, quien dijo: "Mi defendido ha rechazado de viva voz, sobre el contenido de esta presunta infracción, el jefe de recursos humanos certifica que el señor Gualpa estaba trabajando, así como el reporte del guardia que da claridad y lucidez de que él no pudo estar participando de esta infracción, el agente de policía no ha demostrado los hechos que se le acusan a mi defendido", respecto de los hechos narrados, el certificado suscrito por parte de la señora Flor María Morán en su calidad de jefa de recursos humanos de la empresa Telerama S.A, la cual certifica que el presunto infractor laboró el día sábado siete de mayo en jornada desde las 05h36 hasta19H27, ingresado como prueba por parte del presunto infractor no se la considera como tal, en vista que la valoración de la misma, en aplicación de la sana critica, no es relevante al proceso ya que la objetividad y el acto mismo se realizó conforme consta en el parte policial y boleta informativa suscrito por el señor Sargento Primero de Policía, Wilson Peralta Peñafiel, a las 22H15 y constituyen únicos documentos habilitantes con carácter probatorio que determinan el escenario físico real y material de la relación de los hechos, lo que determina la existencia de un nexo causal, material, real y formalmente aceptable de que el presunto infractor Sixto Guillermo Gualpa, estuvo presente en el lugar de los hechos y vulneró la norma electoral.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara al señor Sixto Guillermo Gualpa, portador de la cédula de ciudadanía No. 090636344-4, responsable de la infracción electoral tipificada en el articulo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa del cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada vigente en el año 2011 en que se cometió la infracción y por amparo del principio *indubio pro reo*, que equivale a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se aplica en función del Acuerdo Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 358 de 8 de enero de 2011, que deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral, para que ejecute su cobro, para tal efecto ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator ad-hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral

Certifico.- Guayaquil 28 de febrero de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

---

3. POLO, LEONARDO, Op. Cít.

4. Sandoz, Raquel, Asesora de la Cámara de Diputados República Argentina, en "los hechos jurídicos", http://raquelsandoz.com.ar/node/179

SENTENCIA

CAUSA 0241-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 01 de marzo de 2012. Las 17h00. **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública y copia de la credencial del señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL**. Esta causa ha sido identificada con el número 0241-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 7 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El parte informativo, suscrito por el teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, da a conocer que el día sábado 7 de mayo a las 13h20, en el Colegio Luis Cordero, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008037-2011-TCE, al señor **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL**, portador de la cédula de ciudadanía número 030273494-2, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008037-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) En la Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, se procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 11h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL**, a través de la prensa, por desconocer su domicilio; en dicho auto se señaló que el día miércoles 29 de febrero de 2012, a las 09h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL,** fue citado a través del Semanario "El Espectador", el día sábado 18 de febrero de 2012, (fs. 10), haciéndole conocer que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa; concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) Con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Jenny Calle Tello, en calidad de defensora pública (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la boleta informativa al presunto infractor se lo identifica con el nombre de **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL,** portador de la cédula de ciudadanía número 030273494-2.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Con el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo señalado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Henry Fabricio Peñafiel Coronel, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día sábado 7 de mayo de 2011, la central de radio, había avanzado hasta el Colegio Luis Cordero, en donde el personal militar le manifestó que el señor Henry Peñafiel quería sufragar; y, **ii)** Que al tomar contacto, notó su aliento a licor, con las pupilas dilatadas y que no podía coordinar las palabras, razón por la cual le entregó la boleta informativa No. 008037, en la cual consta su firma y rubrica. La Ab. Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública del señor Henry Fabricio Peñafiel Coronel, manifestó: **a)** Que a su defendido le asiste el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 72 de la Constitución; **b)** Que el señor policía manifiesta que su defendido firmo la boleta, sin embargo eso no significa que asumiera la comisión de la infracción, si firmó, lo hizo por respeto a la autoridad; y, **c)** Que el parte policial es meramente referencial y que en el expediente no consta prueba alguna que demuestre que haya ingerido bebidas alcohólicas, por lo que solicita que se juzgue positivamente a su defendido considerando el principio de presunción de inocencia.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El Código de la Democracia, en su artículo 123, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. El artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal, textualmente señala que: "Se sancionará con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: … 3) Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción, supuestamente cometida, es haber consumido bebidas alcohólicas. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Todas estas normas han servido para analizar los hechos de la presente causa y podemos señalar que en este caso, la ausencia del presunto infractor pese a estar citada en legal y debida forma, no permite desvirtuar de manera fundamentada lo dicho por el señor policía. En este caso el parte informativo constituye prueba toda vez que el miembro de la policía responsable de la emisión del mismo, esto es, el subteniente de policía, señor Edgar Paúl Vinueza Reyes ha concurrido a la audiencia oral de prueba y juzgamiento y ha reconocido el parte y la boleta informativa. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia oral de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria, por lo tanto el testimonio del agente del orden, tiene presunción de veracidad, ya la Función Electoral le ha dado la obligación y responsabilidad de informar sobre el presunto cometimiento de infracciones electorales. Por las consideraciones expuestas, para esta jueza, lo actuado en la audiencia lleva a afirmar que el señor Henry Fabricio Peñafiel Coronel, cometió la infracción señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **HENRY FABRICIO PEÑAFIEL CORONEL**, portador de la cédula de ciudadanía número 030273494-2, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 01 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 564-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, jueves 01 de marzo de 2012, las 17H30. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 564-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035353-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor José Washington Duarte Requena; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."* Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con doce minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano José Washington Duarte Requena, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-03535-3-2011-TCE

al ciudadano de nombres José Washington Duarte Requena por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 10h10, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor José Washington Duarte Requena, en el domicilio ubicado en Guayaquil, las calle 22 y Callejón Parra; señalando para el día viernes nueve de marzo de 2012, a las 15H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 12h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la cual entrega la boleta de citación por interpuesta persona. (foja 7)

h) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

i) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 10, 11)

j) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece*: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso*"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."*

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035353-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 20H20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de José Washington Duarte Requena quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."*

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día jueves 01 de marzo de dos mil doce a las 15H00,El presunto infractor no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, comparecen: en representación del señor: José Washington Duarte Requena**,** su abogado defensor Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, comparece el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número BI-035352-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la

jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que *"toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella"*.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos, en primer lugar se considera la entregada por el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6 responsable de la emisión de la boleta informativa número 035354-2011-TCE, quien manifiesta: "Reconozco, mi firma y rubrica constante en el parte policial, así como en la boleta informativa, el día siete de mayo de dos mil once me encontraba haciendo patrullaje preventivo, en las calles 22 y callejón Parra, en donde pude percatarme que varios ciudadanos estaban libando en la vía pública, debo indicar que lugar donde estas personas estaban libando es un domicilio que funciona como bar clandestino, yo pude constatar que las personas estaban libando al interior y al exterior del mismo, ingresé al lugar y pude evidenciar, que estaba instalada la venta de bebidas alcohólicas, solicité a la señora presunta dueña del bar los permisos de funcionamiento a lo que respondió que no los tenía, procedí a citar a la presunta dueña de este domicilio y a las seis personas que se encontraban allí". Al respecto, esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción describen un escenario donde presuntamente se cometió una infracción electoral, y no la identificación de la presencia física del presunto infractor y su participación en los hechos descritos por el agente policial - Respecto de los alegatos proporcionados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien realizó un interrogatorio al agente policial, en donde se precisan algunas aseveraciones y conclusiones: i) La dueña del lugar permitió el acceso a su domicilio al agente policial; ii) Se constató la presencia de seis personas al interior del lugar de los hechos pero no las identificaciones de las mismas y las circunstancias en las que se encontraban; argumento en que se basó la defensa, para desvirtuar la carga probatoria, e invocar el principio constitucional de presunción de inocencia; lo que lleva a remitirme a las normas y garantías del debido proceso, que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor José Washington Duarte Requena. **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: *"El recurrente o accionante*

deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor José Washington Duarte Requena, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano José Washington Duarte Requena portador de la cédula de ciudadanía número 090447917-7.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 03 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0242-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 01 de marzo 2012, a las 17h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la abogada Jenny Calle Tello, en su calidad de defensora pública; copia simple de la credencial del señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes; cédula de ciudadanía del presunto infractor; y, copias de la cédulas de ciudadanía de los señores Eugenio David Espinoza Vizhñay y Luis Enrique Eras Morocho, quienes actúan como testigos del señor José Luis Arévalo Gallegos.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS**. Esta causa ha sido identificada con el número 0242-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución, señalan que el Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, siendo sus fallos de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) El día 07 de mayo de 2011, se realizó el referéndum y consulta popular, convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto.

d) Si se recibe la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) Las infracciones electorales, se juzgan conforme al procedimiento previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, y señalan el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía, Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día sábado 07 de mayo a las 13h20, en el Colegio Luis Cordero, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008038-2011-TCE, al señor **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS**, portador de la cédula de ciudadanía número 030152676-0, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta

informativa No. BI-008038-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 11h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS**, con domicilio en Barrio Nuevo, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día miércoles 29 de febrero de 2012, a las 11h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS,** fue citado en persona el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El teniente de policía Edgar Pául Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Jenny Calle Tello (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según la boleta informativa al presunto infractor se lo identifica con el nombre de **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS,** portador de la cédula de ciudadanía número 030152676-0.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con el parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, contando con la presencia del presunto infractor.

b) De la realización de la audiencia se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día 07 de mayo de 2011, se encontraba de oficial de control de la ciudad y que por disposición de la central de radio patrulla se dirigió al Colegio Luis Cordero por una novedad que se había presentado; **ii)** Que al llegar tomó contacto con el señor José Arévalo Gallegos, el cual se encontraba con aliento a licor, con las pupilas dilatadas y sin coordinar palabra alguna, razón por la cual se le entregó la boleta informativa, en la cual consta su firma y rubrica. La señora Jueza concede la palabra al presunto infractor señor José Luis Arévalo Gallegos; quien a sus generales de ley responde ser ecuatoriano, de 24 años de edad, estudiante, domiciliado en Barrio Nuevo, calles Primero de Mayo de la ciudad de Azogues; en cuanto a los hechos indica que el día de las elecciones venía de viaje desde Quito y que al acercarse a la mesa a sufragar, una persona le dijo que no podía sufragar por estar aparentemente tomado. Manifestó que no se encontraba tomado sino trasnochado y que en ese momento los policías se acercaron y le dijeron que se retire y que firme el documento. La Ab. Jenny Calle Tello en su calidad de defensora pública, del señor Luis Alberto Bermeo, manifestó: **a)** Que no se puede juzgar a su defendido por apariencias, no estuvo alcoholizado, tuvo una mala noche, una persona en ese estado no tiene la misma apariencia; **b)** Que en el expediente no consta ninguna prueba que se le haya realizado; y, **c)** Que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia se juzgue de esa manera, teniendo en cuenta que el parte es únicamente referencial. A solicitud de la defensora pública se recepta el testimonio del señor Eugenio David Espinoza Vizhñay, quien a sus generales de ley, responde ser ecuatoriano, portador del número de cédula de ciudadanía No. 030240342-3, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en el sector la playa, calle F. Córdova de la ciudad de Azogues; al interrogatorio formulado por la defensora pública, responde: **1)** ¿El día 7 de mayo usted se encontraba con el señor José Luís Arévalo?: Respuesta: Sí, nos encontramos a la una de la tarde, llegaba de Quito; **2)** ¿Le acompañó usted a que sufrague? Respuesta: Sí; **3)** ¿Relate lo que sucedió al momento en que se a cercó a sufragar el señor Arévalo?

Respuesta: llegaba de Quito casi por el medio día, cuando se acercaba a sufragar el encargado de la mesa le dijo que estaba mareado, luego se acercaron los oficiales y le dijeron que firme los papeles porque si no lo llevaban detenido. La señora Jueza recepta el testimonio del señor Luis Enrique Eras Morocho, quién a sus generales de ley responde: sus nombres son los ya indicados, ecuatoriano, de 23 años de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 030214728-5, domiciliado en el Barrio La Travesía en la Av. 24 de Mayo de la ciudad de Azogues. Al interrogatorio formulado por la defensa responde: **1)** ¿Puede decirnos si conoce al señor José Luis Arévalo Gallegos? Respuesta: Sí; **2)** ¿El día 7 de mayo de 2011, usted se encontraba en el Colegio Luis Cordero, cuando el señor José Arévalo Gallegos acudió a sufragar? Respuesta: Sí; **3)** ¿Relate lo que pasó ese día? Respuesta: Ese día me encontré con unos amigos, nos fuimos a sufragar, topándonos cerca de la una de la tarde en el colegio, cuando llegó para sufragar, la persona encargada de la mesa, le dijo que estaba borracho y no le permitieron votar, se acercaron los policías le hicieron firmar un papel y le dijeron que firme, que si no le llevaban preso; y, **4)** ¿Usted dice que no estaba tomado? Respuesta: No, el venía de Quito, estaba resfriado, mal anochado por el viaje. La señora Jueza concede la palabra al teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, para manifestar que el Código de la Democracia no indica que se deba realizar prueba alguna, sólo que se entregue la boleta a quienes infrinjan la ley seca, y como ya lo había manifestado no podía coordinar palabra y percibía aliento a licor. La señor Jueza interviene para preguntar al presunto infractor lo siguiente: **1)** Quiénes fueron los que le dijeron que se retire? Respuesta: Los de la mesa; **2)** ¿Qué hizo usted? Respuesta: Yo esperé un rato y luego vinieron los policías y me dijeron que le dé los datos y que firme una hoja, eso fue en la mesa, cerca de llegar a la puerta; **3)** Los militares estaban? Respuesta: No, solo los encargados de la mesa; **4)** Le dejaron votar? Respuesta: No; **5)** Le retiraron la cédula? Respuesta: Sí para que le dé los datos.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Concordando con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Estas normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas en los días exista tal prohibición. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente deducimos que, el testimonio del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien reconoce el contenido del parte y boleta informativa, no puede ser totalmente corroborado, ya que, al ser contrastado con las declaraciones de los testigos, éstos son claros en afirmar que el señor Luis Arévalo Gallegos, no se encontraba alcoholizado, sino cansado por el viaje y resfriado. Por otro lado los integrantes de la mesa electoral, no han sido convocados a esta audiencia y no pueden corroborar el testimonio del señor policía quien actuó bajo su pedido, ya que fueron ellos quienes señalaron que el presunto infractor se hallaba alcoholizado y no le permitieron sufragar; así, el testimonio del señor policía, se convierte en un testimonio referencial, lo cual determina que no existan indicios que hagan presumir fehacientemente el nexo causal entre la infracción electoral y el presunto responsable, ya que para esto, los indicios deben ser varios, unívocos, concordantes y directos, de tal manera que conduzca lógica y naturalmente a una sola conclusión, el haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. En este caso, la sola versión del policía no constituye prueba plena y contundente que conduzca a esta autoridad a establecer la responsabilidad, por lo que no es posible probar fehacientemente que el señor José Luís Arévalo Gallegos tenga responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **JOSÉ LUIS ARÉVALO GALLEGOS,** portador de la cédula de ciudadanía número 030152676-0.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 01 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0243-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 01 de marzo de 2012. Las 18h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente: copia simple de la credencial profesional del Dr. Jorge Richelieu Mantilla Crespo, en su calidad de abogado defensor; copia simple de la credencial del señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.; y, copias simples de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del señor Wilson Iván Urgilés Urgilés, quién actúa en calidad de testigo del señor Abad Peñafiel Christian Bayar Martines.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES**. Esta causa ha sido identificada con el número 0243-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía, Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día sábado siete de mayo a las 13h30 minutos en la prevención de policía de esa unidad, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008039-2011-TCE, al señor **ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES**, portador de la cédula de ciudadanía número 030167343-0, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008039-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año 2011, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 12h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES**, a través de la prensa, por desconocer su domicilio; en dicho auto se señaló que el día miércoles 29 de febrero de 2012, a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES,** fue citado a través del Semanario "El Espectador", el día sábado 18 de febrero de 2012, (fs.10), haciéndole conocer que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa; concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) El teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar

No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, constante a fojas 7 del proceso. En la audiencia se conto con la presencia del Dr. Jorge Richelieu Mantilla Crespo, en su calidad de abogado defensor del presunto infractor.

d) El día y hora señalados, esto es el miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 15h10 minutos, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES,** portador de la cédula de ciudadanía número 030167343-0, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 29 de febrero de 2012, a partir de las 15h10 minutos, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues. Se cuenta con la asistencia del presunto infractor.

b) De lo señalado en la audiencia destacamos lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día 07 de mayo de 2011, se encontraba de oficial de control de la ciudad y que por disposición de la central de radio patrulla se dirigió a colaborar con el policía Hidalgo, quien le manifestó que había traslado al presunto infractor, por haber infringido la ley seca; **ii)** Que al tomar contacto con el ciudadano le entregó la boleta de citación No. 008039, en la cual consta la firma y rubrica; **iii)** Que no realizó el procedimiento, sino fue el cabo Hidalgo quién le manifestó que en terminal se percató que el ciudadano estaba con aliento a licor. La señora Jueza procede a tomar las generales de ley al señor Chistian Eduardo Abad Peñafiel, quien dice que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriano, de 28 años de edad, de estado civil casado, empleado privado, con domicilio en la calle Emilio Abad y Tenemasa s/n, la ciudad de Azogues. El Doctor Jorge Mantilla Crespo, en su calidad de abogado defensor del señor Chistian Abad Peñafiel, manifestó: **a)** Que el parte policial adjuntado al proceso es meramente referencial e informativo, el cual se encuentra lleno de falencias y además se hace constar a una persona con diferentes nombres y apellidos distintos al del compareciente; **b)** Que no existe prueba de alcoholemia dentro del proceso que verifique tal hecho, por lo que impugna el parte, por cuanto no se puede determinar que haya infringido la ley; **c)** Que el policía suscriptor del parte manifiesta que no presenció el hecho, ni estuvo presente, sino quien tomo procedimiento fue el cabo Hidalgo, que fue el que lo trasladó a la prevención; **d)** Que la apreciación del señor policía no tiene valor jurídico, puesto que el ingerir alguna medicina puede variar el olor y no existe prueba alguna del cometimiento de la infracción. El abogado de la defensa solicita la versión de la parte acusada, del testigo que presenció los hechos y reproduce como prueba la tarjeta índice, la cédula de ciudadanía y el certificado de votación. La señora Jueza concede la palabra al presunto infractor, para manifestar que ese día bajaba a su casa con un compañero y ve a sus compañeros con unos policías y que al acercarse a preguntar lo que pasaba, le dijeron que estaban infringiendo la ley, y que él también lo hacía; le dije que me haga la prueba, pero me subieron al patrullero, y en la prevención le entregaron la boleta. A pedido de la defensa la señora Jueza receptó la versión del señor Wilson Iván Urgilés Urgilés, quien a sus generales de ley, responde que sus nombres y apellidos son los ya señalados, indica ser ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030210873-3, de 30 años de edad, de ocupación albañil, casado, domiciliado en Shishiquin. Al interrogatorio formulado por el abogado de la defensa el testigo responde: 1) Indiqué si el día 7 de mayo de 2011 el señor Chistian Eduardo Abad Peñafiel en la hora que fue detenido estuvo ingiriendo licor? Respuesta: Fuimos a sufragar en Bayas. Bajamos ya sufragando, cuando observamos a un grupo de amigos que estaban con la policía, él se acercó y preguntó qué pasaba. El señor policía le dijo que estaban infringiendo la ley seca y le dijo que el también va detenido. 2) ¿Podría afirmar si el señor Chistian Eduardo Abad Peñafiel estuvo ingiriendo licor? Respuesta: No. El teniente de policía interviene para indicar que, quien puede informar sobre cómo ocurrieron los hechos y el traslado a la prevención sería el cabo Hidalgo, ya que él no estuvo presente. En los alegatos finales el abogado de la defensa reitera que en el expediente no existe prueba que determine que su defendido haya infringido la ley, por lo que pide se valore las pruebas aportadas y que se considere el hecho de que el policía no constató lo hechos, por lo que solicita se absuelva a su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El Código de la Democracia en su artículo 123 indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte

informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas en el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en EL Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos presentados en esta causa, encontramos: **1)** Hay un error de identificación del presunto infractor ya que en el parte policial figura como ABAD PEÑAFIEL CHRISTIAN BAYAR MARTINES, pero en realidad su nombre es CRHISTIAN EDUARDO ABAD PEÑAFIEL, de acuerdo con la documentación presentada; **2)** De la misma exposición del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes se desprende que él no presenció los hechos que corroborarían la ingesta alcohólica por parte del presunto infractor, sino el cabo de policía Hidalgo; **3)** El presunto infractor y el testigo niegan el cometimiento de la infracción. Ante el error en la identificación y los testimonios surge la duda, por lo que no podemos señalar que se ha probado fehacientemente ni la identidad ni el cometimiento de la infracción.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **CHRISTIAN EDUARDO ABAD PEÑAFIEL**, portador de la cédula de ciudadanía número 030167343-0.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 01 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

CAUSA 0249-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Ibarra, 2 de marzo de 2012.- Las 11h47.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0249-2011-TCE. Agréguese al expediente la documentación presentada por el presunto infractor en la audiencia oral de prueba y juzgamiento en un total de siete fojas. De un total de 17 (diecisiete) fojas útiles, el expediente contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano TIRADO CLERQUE HÉCTOR VINICIO, con cédula de ciudadanía 100156242-8; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, el que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez, hecho ocurrido en la ciudad de Ibarra, parroquia Caranqui, el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 07h20. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo. **TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 26 de enero de 2012, y celebrada el día 2 de marzo de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, ubicada en la Av. Jaime Roldós 1162 y Sánchez Cifuentes, dentro de la causa número 0249-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Ab. Rivera Salazar Ronald Jesús, como abogado de la Defensoría Pública; y el Agente de Policía Teniente Ávila Estévez Walter Paúl del Comando Provincial de Policía "Imbabura N.12", Primer Distrito Plaza Ibarra. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran presentes el presunto infractor Tirado Clerque Héctor Vinicio, el abogado defensor público Ab. Rivera Salazar Ronald Jesús y el agente de Policía Teniente Ávila Estévez Walter Paúl. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento y de la infracción que se le imputa, esto es el que ingrese al

recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez, tipificada en el Art. 291 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El señor Juez pregunta al presunto infractor si se encuentra de acuerdo con la defensa del abogado defensor, a lo que el Sr. Tirado responde que se encuentra de acuerdo; así mismo el señor Juez pregunta al abogado defensor si tiene alguna observación con respecto a la realización de la presente diligencia, respondiendo que no tiene ninguna observación. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar el Teniente Ávila Estévez Walter Paúl que fue previamente juramentado y advertido de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: me ratifico en el parte únicamente, no sé si se llamaron a los testigos del presunto hecho del hoy acusado. El señor Juez pregunta si tiene algo más que añadir a lo que el Teniente responde que no tiene nada más que añadir. Solo se actuó de acuerdo a las indicaciones y capacitaciones recibidas previas al evento electoral. El señor Juez pregunta al Defensor Público si desea hacer una pregunta a la agente de policía, indicando que si, a lo que cuestiona lo siguiente: Teniente ¿Estaba usted en el lugar de los hechos? A lo que el teniente responde que sí; otra pregunta ¿Estaba mi cliente en estado de embriaguez? Respondiendo que no puede indicarle que estaba en estado de embriaguez pero sí estaba con aliento a licor. El señor Juez da la palabra al abogado defensor público que en lo principal manifiesta: Comparezco a esta diligencia y me permito señalar que ese día mi patrocinado si estaba en estado etílico, pero debo indicar q mi patrocinado desde el año 2000 sufre de alcoholismo, y desde hace cinco años ha intentado salir de este problema y usted sabe señor juez que los alcohólicos caen en decadencia, y no actuó ese día con voluntad y conciencia, en la Constitución en el artículo 35 se habla de una atención especializada a aquellas personas vulnerables entre ellas las que sufren de enfermedades catastróficas garantizando protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad, es decir un trato especial, y el alcoholismo es una enfermedad catastrófica señor juez, así mismo deseo invocar el artículo 11 numeral 5 de la misma Constitución que dice que los servidores y servidoras deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia en materia de derechos y garantías. Por lo expuesto y ya que mi patrocinado no actuó con voluntad y conciencia solicito que sea absuelto. Así mismo solicito se incorpore al expediente la siguiente documentación, constante en siete fojas útiles. El señor Tirado, en uso de la palabra expresa lo siguiente: Lamentablemente no desearía que a ningún ser humano le pase lo que estoy pasando, llevo casi diez años luchando contra la enfermedad del alcoholismo, he pasado por muchas clínicas, psiquiatras y no se puede con esta enfermedad, las drogas y el alcohol. No niego que ese día estaba con aliento a licor, pero cuando yo tomo es de dos a tres días y por patriota fui a votar, me presenté y me detectaron que estaba en esa situación y me dieron esa citación, yo le pido que me perdone, por esta semana santa, el Presidente perdonó recién al Gran Hermano, yo fui policía, soy jubilado, pero por una mala mujer caí en esa enfermedad, pero se necesita voluntad. El señor Juez pregunta al presunto infractor hace cuántos años e jubiló de la policía, respondiendo que hace 4 años. El señor Juez le pregunta al señor Tirado que cuál es su ocupación actual, a lo que manifiesta que solo tiene la pensión de la Institución, ya no trabajo porque me da miedo ir a trabajar, por mi problema mismo, tengo una niña, y le enfermé a la mamá. Le paso 400 mensuales y lo demás lo tengo para subsistir, porque la mamá me obliga a que por lo menos le pase los 400 porque en la tabla no le da pues solo es una niña. El señor Juez interviene preguntando al señor Tirado si la niña vive con él, respondiendo que no, que vive con su madre. Yo vivo en Caranqui solito. El señor Juez cuestiona nuevamente al presunto infractor y le pregunta que el día de los hechos ¿cuántos días estaba usted bebiendo?, como dos o tres días, mis hermanos militares me hablan bien feo como a guagua a causa de este problema. Las mujeres son malas, con sus excepciones, mi mujer no le interesa mi problema le interesa el mensual, y debo reponerme, mi mamá ordena que me guarden la plata y no me gaste la plata que me dieron por jubilación, a la clínica pagué 1500 dólares, gasté, recaí y me puse a otra clínica, y vuelta recaí. Yo pienso y le he dicho que quiero vivir con ella para que me cuide, porque de la lectura del doble AA dice que soy niño y que ella debía cuidarme y todo, pero no quiere, pero como es guayaquileña es mala, como no puedo tomar, me da problemas de conducta, a la mujer mía se le hace despechar, y hay problemas con mi mujer y después sale eso de violación y eso, entonces llega la policía y dice que me vaya a la otra casa, pero yo soy bien querido por todos los policías. El señor Juez indica al abogado defensor si desea añadir algo más a lo que responde que sí, en primer lugar solicito se reproduzca como prueba documental y el testimonio todo lo favorable para mi cliente, ya que después de escucharlo denota que tiene un gran problema de alcoholismo, es por ello que pido se valore y resuelva de acuerdo a la sana crítica. Siendo las 09h59, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 13h00 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor público, el presunto infractor y el agente de policía, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa al señor TIRADO CLERQUE HÉCTOR VINICIO, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 4. El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** La presente causa se refiere a la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, esto es la conducta prohibida de presentarse en estado de embriaguez a votar o ingresar a un recinto electoral en tal estado, lo que implica que quien infringe la norma debe haber realizado la ingesta de licor hasta llegar al estado de embriaguez, con conciencia y voluntad es decir pleno ejercicio de la libertad y en ese ejercicio decidir la transgresión de la norma de prohibición. **5.2.** Durante la audiencia de juzgamiento, el Teniente de Policía que suscribe el parte policial que da origen a esta causa, al rendir su testimonio propio, se ratificó en el contenido de dicho parte, reconociendo la firma y rúbrica constantes en él, y señalando, además, que la entrega de la boleta de citación por infracción electoral, se realizó en

presencia como consta en el parte, de otros miembros de la fuerza pública y del Coordinador del Recinto Electoral, por lo cual la prueba testimonial debidamente practicada durante la audiencia de juzgamiento, confirma la validez a la prueba documental, esto es el parte policial, todo lo cual se incorpora como prueba en esta causa, con lo que la materialidad de la infracción se encuentra establecida. **5.3.** El defensor público al interrogar al testigo, preguntó si le constaba que el procesado se encontraba en estado de embriaguez, respondiendo el testigo que no puede indicar si se encontraba en tal estado pero tenía aliento a licor. Con referencia a tal respuesta, la defensa argumentó que el procesado padece de alcoholismo y que ha recibido cinco años de tratamiento, encontrándose actualmente en decadencia y señalando que no tenía voluntad ni conciencia cuando sucedieron los hechos materia del juzgamiento, y, solicita al Tribunal se tome en cuenta las normas constitucionales que obligan al Estado a brindar el tratamiento necesario a quienes padecen enfermedades catastróficas, por lo que pide la absolución para el procesado. Este Juzgador durante la presentación de la defensa escuchó al procesado quien manifestó que lleva diez años luchando contra el alcoholismo, desde cuando se encontraba en la Policía Nacional en servicio activo, y que para llegar a esta audiencia ha hecho un especial esfuerzo para no alcoholizarse y, señaló a una pregunta del Juez que llevaba dos o tres días bebiendo con anterioridad al día en que se produjeron los hechos materia de este juzgamiento. La defensa solicitó que se incorpore como prueba varios documentos en un total de siete fojas útiles y que demuestran que efectivamente el procesado padece de alcoholismo, lucha contra él y se encuentra varias veces en tratamiento. **5.4.** Si bien la norma electoral no hace distinciones respecto al hecho de encontrarse en estado de embriaguez en los días prohibidos, aunque se encuentra debidamente comprobada la existencia de la infracción, si la propia norma legal ha previsto una audiencia oral de prueba y juzgamiento, es obligación de este Juzgador analizar la imputabilidad del procesado al momento de la comisión de la infracción, esto es el alcance y grado de la propia libertad y el autocontrol personal para decidir y efectuar la conducta prohibida. En el caso, el procesado, evidentemente, padece de alcoholismo que se convierte en una enfermedad catastrófica de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, por lo que en relación a los antecedentes incluso familiares como consta en la prueba legalmente actuada en la audiencia, demuestran que la conducta del procesado no se ha producido con pleno control personal de la libertad y por lo mismo es inimputable. Es preciso aclarar que no se puede aplicar como norma supletoria la regla del artículo 37 del Código Penal que consideraría como agravante la responsabilidad del ebrio consuetudinario, en primer lugar porque esa disposición es anticientífica y, en segundo lugar agravaría la situación del procesado quien no está siendo sometido a un proceso penal, sino al juzgamiento de una infracción electoral que no es meramente administrativa sino judiciable a la luz del Derecho. Además, este Juzgador acogiendo la alegación de la defensa, tiene la obligación de aplicar en forma directa y prevalente las normas constitucionales en concordancia con los artículos 11 numeral 5, 35 y, en particular las normas constitucionales del inciso dos del artículo 424 que determina que las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público y, que según el inciso tercero del artículo 425 de la misma Constitución dispone que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, los jueces y demás autoridades administrativas y públicas deben resolver los asuntos sometidos a su decisión mediante la aplicación de la norma jerárquica superior, en este caso de rango constitucional, más aún si este Juzgador tiene la convicción establecida por el acervo probatorio de que el procesado padece del alcoholismo por situación derivada de fuerza mayor, por lo que su conducta es totalmente inimputable.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. TIRADO CLERQUE HÉCTOR VINICIO exento de responsabilidad imputable, en el momento y lugar del hecho infraccional previsto en el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia, por lo que ratificándose su presunción de inocencia, no se le impone sanción alguna, más aún si corresponde al Estado la atención prioritaria en casos como el que es materia del presente juzgamiento. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Ibarra, 2 de marzo de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

CAUSA 0250-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Ibarra, 2 de marzo de 2012.- Las 12h39.- **VISTOS.-** Llega a conocimiento de este despacho el expediente identificado con el N° 0250-2011-TCE; Agréguese al expediente los documentos presentados durante la audiencia oral de prueba y juzgamiento. De un total de 14 (catorce) fojas útiles, que contiene un parte policial, de cuyo contenido se presume que el ciudadano Encalada Tamayo Leslye Manuel, con cédula de ciudadanía 170590028-8; puede encontrarse incurso en una infracción electoral, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en los que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, hecho ocurrido en la ciudad de Otavalo, el día sábado 7 de mayo de 2011 de 10h30 a 11h00. **PRIMERO.-** Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para la

Consulta Popular, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, se encuentra vigente. Según el artículo 72 inciso tercero y cuarto de esta normativa electoral, el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, corresponde en primera instancia a uno de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, el procedimiento a seguir será el previsto en los artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, ya que las normas de competencia determinan para cada caso en qué momento se producen los hechos juzgados y la norma aplicable es la vigente a esa fecha, para garantizar el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa con las normas tipificantes vigentes a esa fecha. **SEGUNDO.-** Revisado el expediente se observa que el mismo se ha tramitado con sujeción a la normativa electoral, siendo válido el mismo**. TERCERO.-** Dentro de la Audiencia Oral de Juzgamiento, fijada mediante auto de fecha 27 de enero de 2012, y celebrada el día 2 de marzo de 2012, cuya acta forma parte de esta sentencia que a continuación se transcribe: "En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a los dos días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 10h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, ubicada en la Av. Jaime Roldós 1162 y Sánchez Cifuentes, dentro de la causa número 0250-2011, ante el Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien corresponde la sustanciación de la presente causa y de la Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica, comparece el Ab. Ángel Medardo Estrada Ochoa, como abogado de la Defensoría Pública; y el Agente de Policía Cabo Segundo Torres Guamán Bolívar Marcelo del Comando Provincial de Policía "Imbabura N.12", Primer Distrito Plaza Otavalo. El señor Juez pregunta a la Secretaria Relatora Ad-hoc que sujetos procesales se encuentran presentes para esta diligencia a lo que indica que se encuentran presentes el presunto infractor Encalada Tamayo Leslye Manuel, el abogado defensor público Ab. Estrada y el agente de Policía. El señor Juez indica a la Secretaria que lea el parte informativo que da lugar a esta audiencia. Así mismo el Sr. Juez dispone que por Secretaría se dé lectura a las normas legales que regulan el procedimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento y de la infracción que se le imputa, esto es quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas, tipificada en el Art. 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El señor Juez pregunta al presunto infractor si se encuentra de acuerdo con la defensa del abogado defensor, a lo que el Sr. Encalada responde que se encuentra de acuerdo; así mismo el señor Juez pregunta al abogado defensor si tiene alguna observación con respecto a la realización de la presente diligencia, respondiendo que no tiene ninguna observación. El señor Juez concede la palabra a las partes procesales, interviniendo en primer lugar el Cabo Segundo Torres Guamán Bolívar Marcelo que fue previamente juramentado y advertido de las penas de perjurio; en lo principal manifiesta: el sábado a eso de las 10h30 se acercó un hombre de etnia indígena y me dijo que había un señor en estado etílico queriendo cobrarle un dinero en su local, me reporté a la central de radio patrulla en Otavalo y le llevé al cuartel y le indiqué que en ese momento regía el Código de la Democracia, de ahí le dije el procedimiento que había que seguir y eso es todo señor Juez. El señor Juez pregunta si tiene algo más que añadir a lo que el Cabo Segundo Torres Guamán Bolívar Marcelo responde que no tiene nada más que añadir. El señor Juez pregunta al Defensor Público si desea hacer una pregunta al Agente de Policía, indicando que sí, a lo que cuestiona lo siguiente: Cabo indica en su declaración que el hecho sucedió a las 10h30, indica que habían más personas en el lugar, ¿cuántas personas más había en el lugar? Bueno, son amigos míos estaba el señor Raymundo, la esposa y dos hijitas. El abogado defensor hace otra pregunta, Cabo usted indica que el señor estaba con aliento licor ¿tiene más pruebas de eso? A lo que responde que No, que no le llevó a hacer una prueba de sangre a una clínica. El abogado defensor nuevamente cuestiona al agente de policía y formula la siguiente pregunta, en su parte usted indica que hubo un escándalo, pero ¿ello no sería un escándalo público y había que detenerlo y llevarlo a la autoridad competente? A lo que el Cabo responde que no dice que hay un escándalo público y aparte en ese momento regía el Código de las Democracia, y en un caso extremo lo llevaba detenido por escándalo público, pero no fue ese el caso. El señor Juez da la palabra al abogado defensor público que en lo principal manifiesta: Sr. Juez en el documento que se ha extendido como citación hay un error, ya que indica que el hecho paso el viernes 6 de mayo a las 10h00 en esta ciudad de Ibarra, segundo indica el señor Cabo de policía que firma dicho parte que el señor Encalada se encontraba con aliento a licor, sin que exista una prueba plena para determinar con certeza dicha infracción. Así mismo en el testimonio rendido por el Cabo, indica que tampoco realizó un examen médico, el cual hubiese sido importante para tener la certeza de que mi defendido ha incurrido en la infracción tipificada en el art. 291 punto 3 que indica quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo, al hacer las preguntas se considera que no existe prueba plena ni certeza de la supuesta infracción cometida por mi defendido señor Juez, por lo que existe gran duda de la misma y en este caso no se podría aplicar una sanción a mi defendido. El señor Magistrado indica al presunto infractor que si él desea, previamente a consultar con su abogado defensor puede hacer uso de la palabra. El Sr. Encalada manifiesta en lo principal lo siguiente: como evidencia tengo la papeleta de votación que yo en plenos cabales sufragué, en segundo lugar yo radico en la ciudad de Otavalo y mis labores soy electricista de construcción y el día viernes yo estuve trabajando en la casa del señor Raymundo por lo cual es normal que a partir de las 5 de la tarde nos alzamos, entonces yo me acerqué a la casa para decirle que me pague, y él no estaba, estaba la esposa, le dije a ella que me pague, al principio la señora me dijo que le espere y después me cansé de esperar y me fui. Hay una contradicción del señor policía porque en el informe que me hace a mí manifiesta que el hecho fue el viernes aquí en Ibarra, hay una sola persona no soy dos soy uno, yo le pregunto en qué cantina o qué lugar él me vio. El señor Juez interviene diciéndole al presunto infractor que se dirija al Tribunal. El señor Encalada continúa diciendo: Si el señor me pagaba ese día no pasaba nada, pero el señor con palabras medias fuertes me dijo que me vaya y el señor me coge el día sábado y en el informe dice que fue el viernes y aquí en Ibarra. El señor Juez indica al Cabo Segundo que aclare al respecto de esto y él indica que: Las calles Atahualpa y Juan Montalvo es en la ciudad de

Otavalo, además es la única boleta que entregué y el único procedimiento de ese tipo. El abogado defensor interviene diciendo: Señor Juez, al iniciar la intervención indiqué que el error es en la citación. Por favor que quede claro con respecto a eso que yo indiqué eso al inicio de la intervención. El Señor Juez indica que hay que corregir un lapsus calami en el expediente del Tribunal. Se devuelve la palabra a la defensa y en su intervención final indica que: Para terminar se ha presentado certificado de votación del Sr. Encalada, ya que si hubiese estado en estado etílico no hubiera podido sufragar, y prueba de ello es que realizó su derecho a la votación. Por lo tanto señor Juez por no existir material de la infracción tampoco puede existir la responsabilidad, solicito se ratifique la inocencia y no se le sancione por lo expuesto en el art. 291 numeral 3. Siendo las 11h05, se suspende la presente audiencia de juzgamiento hasta las 13h30 en que se leerá la resolución correspondiente. Para constancia, firman la presente acta el señor Juez, Dr. Arturo J. Donoso Castellón, el abogado defensor público, el presunto infractor y el agente de policía, en presencia de la señora Secretaria Relatora Ad-hoc que certifica." **CUARTO.-** De los hechos descritos se puede colegir que la infracción electoral que se le imputa al señor Encalada Tamayo Leslye Manuel, corresponde a los hechos tipificados en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que establece: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **QUINTO.-** Con tales antecedentes este Juzgador, efectúa las siguientes consideraciones: **5.1.** La presente causa corresponde a la infracción electoral, tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, que se refiere concretamente a la mera conducta infraccional referida a expendio o consumo de bebidas alcohólicas en los días en que exista la prohibición de tal expendio o consumo. **5.2.** Durante la audiencia de Juzgamiento el Cabo de Policía que rindió su testimonio propio, reconoció la firma y rúbrica constantes en el parte policial, y detalló a continuación la forma en que tuvo conocimiento de los hechos materia de este proceso, habiendo acudido a una llamada de auxilio a un local comercial en el que el procesado se había presentado para reclamar un pago, incidente en el cual el testigo constató que dicho procesado tenía aliento a licor, por lo que procedió a entregar la boleta de citación por la infracción electoral tipificada en el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia, ya que encontrándose en período electoral regían las normas electorales de prohibición de consumo de tales bebidas alcohólicas, inclusive explicó, a la pregunta del defensor público que se encontraban en ese local el propietario, la esposa de este y dos hijitas, por todo lo cual, este Juzgador confiere plena validez a la prueba documental y testimonial legal y debidamente actuadas. **5.3.** La defensa hizo notar el error constante en el expediente del Tribunal respecto a la fecha y hora de la infracción, lo cual evidentemente es un lapsus calami irrelevante al momento de juzgar los hechos materia de este proceso. En cuanto a la alegación de que no existe otra prueba respecto al consumo de licor, por parte del procesado, es importante señalar que siendo la prueba documental y testimonial válidas y sustentadas, la materialidad de la infracción electoral se encuentra debidamente comprobada, al tenor de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 291 del Código de la Democracia que se reduce al hecho constatado de que el hoy procesado había transgredido la disposición antes citada, sin que enerve dicha prueba el que dicho procesado haya sufragado el día de las elecciones, como consta en la copia de la papeleta de votación que se incorporó al expediente durante la audiencia de juzgamiento.- Por todas las consideraciones antes expuestas y motivadas **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: I** Se declara al Sr. Encalada Tamayo Leslye Manuel culpable de la infracción electoral prevista en el numeral 3 del artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y, en consecuencia se le impone el pago de la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, entonces vigente, equivalente a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para cuya recaudación se notificará al procesado y en el caso de no cumplir con la sanción impuesta se iniciará el proceso de cobro coactivo que corresponda a través de las autoridades competentes para tal efecto. Una vez cumplida la sanción el monto de la misma se depositará en la cuenta correspondiente a la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, en conformidad con el oficio N° 1220-P-OS-CNE-2011 de 23 de noviembre de 2011 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. **II** Actúe en la presente causa la Abogada María Gabriela Puertas Indarte en su calidad de Secretaria Relatora Ad-hoc.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- La lectura de esta sentencia es suficiente notificación en persona, sin perjuicio de su publicación en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral, así como en la página web del mismo Organismo, la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y en los domicilios judiciales señalados en cuanto corresponda.

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Miembro del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Ibarra, 2 de marzo de 2012.

f.) Ab. María Gabriela Puertas Indarte, Secretaria Relatora Ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0244-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 02 de marzo de 2012. Las 17h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público y copia de la credencial del señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY**. Esta causa ha sido identificada con el número 0244-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, siendo sus fallos de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales, de acuerdo al artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución.

b) El día 07 de mayo de 2011, se realizó el referéndum y consulta popular, convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, se recibe la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, está previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, y señalan el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El parte informativo, suscrito por el teniente de policía, Edgar Paúl Vinueza Reyes, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, señala que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h30, en la prevención de policía de esa unidad, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008040-2011-TCE, al señor **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY**, portador de la cédula de ciudadanía número 030244467-4, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008040-2011-TCE, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 4).

c) En la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, se procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las12h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY**, con domicilio en Polígono de Tiro, cantón Azogues, provincia del Cañar, se señala que el día jueves 01 de marzo de 2012, a las 09h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY,** fue citado a través de la señora María Leonila Gualpa Verdugo, abuela del presunto infractor, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 15h00, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador-notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10)

b) El teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 7).

d) El jueves 01 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY,** portador de la cédula de ciudadanía número 030244467-4, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Por el contenido del parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día jueves 01 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Diego Patricio Landin Paguay, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al señor teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien manifestó: **i)** Que el día sábado 7 de mayo de 2011, aproximadamente a las 13h30, la central de radio patrulla le comunicó que avance a la prevención, para que tome contacto con el cabo Hidalgo, quien le informó que en el terminal nuevo, se encontraban varias personas libando; **ii)** Que la tomar contacto con el presunto infractor Diego Landin Paguay, el mismo se encontraba con fuerte aliento a licor, sus pupilas se hallaban dilatadas y no coordinaba las palabras, por lo cual se le había entregado la boleta. A las peguntas formuladas por la señora jueza responde: **1.- ¿**Cuándo usted concurrió a la prevención pudo observar que el señor ingería bebidas alcohólicas? Repuesta: Yo no presencie el hecho. Lo que pudo observar es que el ciudadano tenía fuerte aliento a licor, la manera de expresarse no era normal y que sus pupilas se encontraban dilatadas; **2.-** ¿En su criterio, tiene usted la experiencia para distinguir cuándo una persona ha ingerido bebidas alcohólicas? Respuesta: El señor tenía aliento a licor, no a ninguna otra sustancia. El Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público del señor Diego Patricio Landin Paguay interviene formulando la siguiente pregunta: ¿Tiene usted la experiencia suficiente y estudios para dar una información si el señor se encontraba o no ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Si estaba ingiriendo o no, no lo pude presenciar lo que sí pude percibir es que estaba con aliento a licor, se le hizo una prueba psicosomática que determinó que tenía las pupilas dilatadas y no coordinaba las palabras. Como alegato final el abogado de la defensa indicó que no existen pruebas suficientes para juzgar como la prueba de alcoholemia, por lo que solicita se juzgue en base al principio de inocencia determinado en la Constitución.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. El artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, es claro que el testimonio del teniente de policía Edgar Paúl Vinueza Reyes, quien reconoce el contenido del parte y boletas informativas, no ha sido desvirtuado por los alegatos de la abogada de la defensa. La prohibición constante en el Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas; la ingesta de estas bebidas, tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, las afirmaciones del teniente de policía Edgar Vinueza Reyes, el cual de manera detallada indicó que al tomar contacto con el presunto infractor se encontraba con aliento a licor, pupilas dilatadas, sin poder coordinar palabras, todos estos indicios nos conduce a determinar, que se encuentra probada la materialidad de la infracción y la responsabilidad del señor Diego Patricio Landin Paguay, en la comisión de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **DIEGO PATRICIO LANDIN PAGUAY**, portador de la cédula de ciudadanía número 030244467-4, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 02 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 566-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, viernes 02 de marzo de 2012, las 17H00. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 566-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035355-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor César Augusto Labre Martínez; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos , en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano César Augusto Labre Martínez, en base a los siguientes documentos: 1.- Dos Oficios 2- 1 Parte informativo y 3.- 1 Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

Policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035351-2011-TCE al

ciudadano de nombres César Augusto Labre Martínez por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 10H30, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor César Augusto Labre Martínez, en el domicilio ubicado en las calles 22 y callejón Parra, señalando para el día viernes 02 de marzo de 2012, a las 11H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08H27, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la; certifica haber citado por interpuesta persona la citación al ciudadano de nombres César Augusto Labre Martínez (foja 11)

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.12, 13)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 14,15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035355-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 20h20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de César Augusto Labre Martínez.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día viernes 02 de marzo de dos mil doce a las 11H00,El presunto infractor no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, comparecen: en representación del señor: César Augusto Labre Martínez**,** su abogado defensor Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, comparece el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número BI-035355-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6 responsable de la emisión de la boleta informativa número 035355-2011-TCE, quien manifiesta "Reconozco, mi firma y rúbrica constante en el parte policial así como en la boleta informativa, me ratifico, el día siete de mayo de dos mil once me encontraba haciendo patrullaje preventivo, en las calles 22 y callejón Parra, en donde pude percatarme que varios ciudadanos estaban libando en la vía pública, debo indicar que el lugar donde estas personas estaban libando es un domicilio que funciona como bar clandestino, yo pude constatar que las personas estaban libando al interior y al exterior del mismo, ingresé al lugar y pude evidenciar, que estaba instalada la venta de cervezas, las jabas estaban arrimadas en la pared del interior del domicilio y habían mesas y sillas para tomar bebidas alcohólicas, solicité a la señora presunta dueña del bar los permisos de funcionamiento a lo que respondió que no los tenía, procedí a citar a la presunta dueña de este domicilio y a las seis personas que se encontraban allí" ;Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción describen un escenario donde presuntamente se cometió una infracción electoral, y no la identificación de la presencia física del presunto infractor y su participación en los hechos descritos por el agente policial - Respecto de los alegatos proporcionadados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien manifestó "A nombre y representación del señor Cesar Agusto Labre Martínez, quien ha sido citado en legal y debida forma como presunto infractor con anterioridad, el señor Cesar Augusto Labre Martínez goza de presunción de inocencia, la persona que ha emitido el boletín informativo que respalde la información que se le ha dado, no existe prueba alguna que determine que el señor Labre Martínez haya cometido el acto por lo que solicito, se le absuelva.".; lo que me lleva a remitirme a las normas y garantías del debido proceso; que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor César Augusto Labre Martínez. **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y

concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor César Augusto Labre Martínez, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano César Augusto Labre Martínez portador de la cédula de ciudadanía número 090570716-9

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 03 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0252-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 02 de marzo de 2012, a las 17h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Edgar Renato Rivera Sarmiento, en su calidad de abogado defensor; copia de la credencial del señor cabo segundo de policía Ángel Silva; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor y de la señora Mariana de Jesús Cabrera González, quien actúa en calidad de testigo del señor Álvaro Sagitario Espinoza Mora.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0252-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el cabo segundo de policía, Ángel Silva, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes seis de mayo a las 20h30 minutos en la UPC-Bayas, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007921-2011-TCE, al señor **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030202448-4, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007921-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la

Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año 2011, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las13h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA**, con domicilio en el sector la Playa, cantón Bayas, provincia del Cañar, se señala que el día jueves 01 de marzo de 2012, a las 11h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA,** no pudo ser citado en la dirección descrita en la boleta informativa, conforme se desprende de la razón sentada el día miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, a las once horas con cincuenta minutos, por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral, (fs.10); por lo que mediante auto de 31 de enero de 2012 a alas 11h30, se dispone la citación por la prensa. Tal citación se publica en el Semanario "El Espectador" de 18 de febrero de 2012, conforme consta a fojas 16 del expediente, en ella se le hace conocer al presunto infractor que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa, concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señala, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) El cabo segundo de policía Ángel Silva, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 01 de febrero de 2012 a las 13h00, conforme consta a fojas 13 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 31 de enero de 2012, y con oficio No. 012-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, constando a fojas 14 del proceso, habiéndose contado con la presencia del Ab. Edgar Renato Rivera Sarmiento, en calidad de abogado defensor del presunto infractor.

d) El día y hora señalados, esto es e jueves 01 de marzo, a partir de las 11h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030202448-4, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día jueves 01 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, asistió a la audiencia el presunto infractor.

b) De la audiencia se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al cabo segundo de policía Ángel Silva, quién manifestó: **i)** Que siendo las 20h30 minutos del día viernes 6 de mayo del 2011, encontrándose de patrullaje en el sector de la iglesia en el canchón se encontró un Vitara rojo en el cual se hallaba el señor Álvaro Sagitario Mora y otro ciudadano; **ii)** Que al percatarse de la presencia de los agentes del orden, procedieron a esconder unas botellas; y, **iii)** Que al registrar el vehículo observaron que tenían en su poder una botella de Zhumir, por lo cual se le procedió a entregar la boleta, por estar bebiendo alcohol. El Ab. Edgar Renato Rivera Sarmiento, en su calidad de abogado defensor del señor Álvaro Sagitario Espinoza Mora, quien manifestó: **a)** Que su defendido no se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas; **b)** Que el policía dice que se encontraba dentro del vehículo consumiendo una botella de Zhumir, que tal aseveración debe realizarse con pruebas, las cuales deben ser emitidas por un centro hospitalario; **c)** Que no existe prueba que demuestre la culpabilidad o responsabilidad de su defendido, el parte policial es referencial, no constituye prueba plena; **d)** Que impugna, rechaza y objeta la boleta No. 007921 por ser ajena de la realidad de los hechos, así como también el parte por encontrarse lleno de errores y falencias; **e)** Que de conformidad con el artículo 72 numeral 2 de la Constitución se considere el principio de inocencia, toda vez que no existe prueba científica como la alcoholemia o de sangre, y pide que a fin de demostrar la inocencia de su defendido se recepte la versión de un testigo. La señora Jueza concede la palabra al presunto infractor, quien a sus generales de ley, responde llamarse Álvaro Sagitario Espinoza Mora, ecuatoriano, de 22 años de edad, estado civil soltero, de ocupación digitador, domiciliado en el sector Shirincay, extensión de la calle Bolívar, provincia del Cañar; en cuanto a los hechos

manifestó que se encontraba con un amigo y la suegra e hija del amigo, la cual se encontraba en estado de gestación, y que en ese día no tenía ninguna bebida alcohólica, posteriormente llegó la policía y le extendió el papel por haber infringido la ley. La señora Jueza procede a receptar el testimonio de la señora Mariana de Jesús Cabrera, quien a sus generales de ley responde que sus nombres son los ya indicados, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 030116836, de 40 años de edad, de estado civil divorciada, de ocupación empleada pública, con domicilio en la calle Bolívar, sector Chirincay, ciudad Azogues; ante el interrogatorio formulado por la defensa responde: **1.-** ¿Indique si el día 5 de mayo de 2011 aproximadamente a las 20h30 se encontraba con el señor Álvaro Sagitario Espinoza? Respuesta: Sí, se hallaba con él y su hija, la cual se encontraba en estado de gestación; **2.-** ¿El señor estaba consumiendo bebidas alcohólicas? Respuesta: No. La señora Jueza interviene para preguntar **1)** ¿Qué día estuvieron en el lugar? Respuesta: Fue un día o dos antes de las elecciones, no recuerdo; **2)**.- ¿Sí estaban algunas personas, por qué a todos no les dieron la boleta? Respuesta: Mi hija se encontraba en estado de gestación, no podía beber, yo tampoco, el señor Espinoza tampoco estaba bebiendo; **3)** ¿Usted estaba dentro del vehículo? Respuesta Si; **4)** ¿Le consta que estaban con bebidas¿ Respuesta Mi hija estaba con agua y nada más. A pedido de la señora Jueza se pide al agente de policía aclare los hechos, para lo cual realiza las siguientes preguntas: **a)** ¿Si usted observó la presencia de todos, por qué no les emitió la boleta? Respuesta: Como se indicó, había una señora en estado de gestación, la cual tapaba la botella; **b)** ¿Usted confiscó la botella? Respuesta: Si; **c)** ¿Usted entregó personalmente las boletas en ese lugar? Respuesta: Sí, les pedí los datos y los llenaron, la música estaba en alto y se presume que estaban libando por la botella que se encontraba allí. En los alegatos finales el abogado de la defensa impugna el parte policial por ser ajenos a la realidad de los hechos, tomándose en cuenta el principio de presunción de inocencia, y tomando en consideración que el agente del orden no ha demostrado que su defendido estaba libando y al no existir elementos de convicción que demuestren la responsabilidad, solicita que tomando en cuenta el principio pro reo, en caso de duda, se dicte sentencia a favor de su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En la presente causa la declaración de la testigo no es clara, precisa, contundente, es más, ni siquiera puede recordar el día en que sucedieron los hechos descritos por el señor policía, la debilidad de este testimonio hace prevalecer lo manifestado por el agente del orden, quien con su declaración corrobora lo ya expuesto en el parte policial y la boleta informativa. Contrastando los testimonios rendidos en esta audiencia, la versión del agente del orden se sostiene y su testimonio constituye prueba de que el señor Álvaro Sagitario Espinoza Mora, cometió la infracción señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **ÁLVARO SAGITARIO ESPINOZA MORA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030202448-4, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 02 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 557-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado tres de marzo de 2012, las 10h00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 557-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-001861-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor EDER CARLO CHALACAMÁ MERINO el dia jueves cinco de mayo de dos mil once, a las doce horas con cuarenta minutos, en la ciudad de Guayaquil, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecaudor, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.".- Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo del 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha del cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano EDER CARLO CHALACAMÁ MERICO en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor sargento de Policía Luis Enrique Sánchez Ríos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-001861-2011-TCE al ciudadano con nombres Eder Carlos Chalacamá Merino, por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las nueve horas, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno número PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Eder Carlos Chalacamá Merico, en el domicilio ubicado en el ciudad de Guayaquil en las calles Guerrero Martínez 2812-A y Azuay; señalando para el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, a las diez y seis horas con treinte minutos, para la realización de la Audicencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08h20, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entrgado la citación por interpuesta persona al señor Eder Carlos Chalacamá Merino.

h) Acta de la audiencia oral de prueba y juzgamiento (Fojas 13, 14).

l) Copia certificadas de las cédulas de ciudadanía de las partes procesales (fojas 15, 16).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales a ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-001861-2011-TCE, de fecha jueves cinco de mayo del 2011, a las doce horas con cuarenta minutos, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Eder Carlos Chalacamá Merico quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el señor sargento de policía Luis Enrique Sánchez Ríos, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia se llevo a cabo, el día martes veinte y ocho de febrero de dos mil doce, en las instalaciones de la Delegación Provincial electoral del Consejo Nacional electoral de la provincia del Guayas ubicado en la avenida de la Democracia y Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil, con la presencia de el señor Eder Carlos Chalacamá Merico, en compañía de su abogado defensor público Jimmy Humberto Delgado Barzola. La señora jueza dejó constancia de la no comparecencia del señor Intendente de Policía Abogado Julio Quiñónez quien fue debidamente notificado para la comparecencia a esta diligencia, comparece el Sargento de policía Luis Enrique Sánchez Ríos, portador de la cédula de ciudadanía número 170685745-3, responde de la emisión de la boleta ionformativa número 001861-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga

equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Eder Carlos Chalacamá Merino portador de la cédula de ciudadanía número 093020348-9.

b) Respecto de la versión receptada por esta jueza en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento por parte del señor sargento de policía Luis Enrique Sánchez, portador de la cédula de ciudadanía número 170685745-3 responsable de la emisión del Parte Informativo que tuvo su origen en la emisión de la boleta informativa número BI 001861-2011-TCE, quien manifestó "Me ratifico en el contenido del parte policial a la hora y en lugar indicado llegó el señor Intendente de Policía, quien me solicitó elaborar un parte policial por la novedad suscitada", quien por requerimiento de esta Jueza dejó constancia que el agente de policía no presenció el hecho de manera real, formal y material que le permita rendir una versión que le dé a esta juzgadora los elementos necesarios para determinar la existencia real y material de la presunta infracción ya que la carga probatoria recae en la persona que suscribió la boleta informativa número BI-001861-2011-TCE, que como se desprende, de la boleta informativa constante a foja cuatro del expediente, ésta fue elaborada por el abogado Julio Quiñonez, en su calidad de Intendente de Policía de la provincia del Guayas, el cual no acudió a rendir su versión en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento por lo que no ha ratificado las circunstancias en las que se cometió el acto, y por ende la existencia real y material de la infracción. Respecto de la versión receptada en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento por parte del presunto infractor quien manifestó "Ese día como de costumbre salí a trabajar, saliendo de la fábrica a las 07h15 am del día cinco de mayo, a todos nos entregaron un salvoconducto para entregar la cerveza, el salvoconducto que decía que sí podemos trabajar, ese salvoconducto tenía un sello de cervecería, a las doce del día cuando estábamos terminando de cobrar y poner las jabas vacías en el carro, llega el Intendente, donde pregunta que quién estaba encargado el carro, quiero decir que yo soy el cobrador no estoy encargado del vehículo y tenemos un salvoconducto que el Intendente lo leyó y dijo que no servía, se quiso llevar el carro, me pidió mi cédula y me citó le expliqué que soy un empleado más, llegó el distribuidor señor Carlos Murriagui al igual que yo empleado de la cervecería, leyó el salvoconducto y dijo que no valía, quiero manifestar que nunca me dieron la boleta informativa, sin embargo la firmé". Es procedente realizar algunas consideraciones al respecto, de conformidad con el articulo Art. 123 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia" el cual manifiesta. Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, el acto del que presuntamente se le acusa al presunto infractor no recae, en ninguna de estas tres causales, que determinan la forma constitutiva de una infracción por ley seca, ya que de su versión se desprende que estaba recaudando los valores inherentes al negocio para el cual trabaja, respecto del tema del presunto salvoconducto entregado por parte de cervecería, no se logra demostrar la existencia real y material del mismo en vista de este no consta en el expediente, ni ha sido incorporado al mismo en la audiencia oral de prueba y juzgamiento por lo que este documento queda como enunciación.

b) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente de este proceso ninguna prueba, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que determine la existencia de un nexo causal para establecer que el señor Eder Carlos Chalacamá Merino, se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Eder Carlos Chalacamá Merino portador de la cédula de ciudadanía número 093020348-9.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f.) Dra. Amanada Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 3 de marzo del 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 559-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 10H35.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 559-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035006-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor José Manuel Mendoza Gamboa con cédula de ciudadanía 0902163559 el día viernes seis de mayo de dos mil once, a las tres horas con treinta minutos, en la ciudad de Guayaquil, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano José Manuel Mendoza Gamboa en 2 oficios, 1 parte informativo y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor teniente de Policía Carlos Fernández Castillo, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035006-2011-TCE al ciudadano con nombres José Manuel Mendoza Gamboa por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las nueve horas con veinte minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno número PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor José Manuel Mendoza Gamboa, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Chambers y 43 AVA; señalándose el día miércoles veinte y nueve de febrero de dos mil doce, a las diez horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las 08h23, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Javier Jiménez León, Citador-Notificador, quien certifica el haber hecho la entrega de la citación por interpuesta persona.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 13,14)

i) Copias de las cédulas de ciudadanía de las partes procesales.

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-35006-2011-TCE, de fecha viernes seis de mayo de 2011, a las 03H30, el presunto la presunta infractora que se identificó con el nombre de José Manuel Mendoza Gamboa, con cédula de ciudadanía número 0902163559.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el teniente de policía Carlos Fernández Castillo, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevo a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el miércoles 29 de febrero de dos mil doce a las diez horas treinta minutos, con la presencia de, Al efecto, comparecieron: el señor José Manuel Mendoza Gamboa, en compañía del Abogado Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Teniente de Policía Carlos Mauricio Fernández Castillo, portador de la cédula de identidad número 1715323687, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035006-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley

b) De la versión del señor Teniente de Policía Carlos Fernández Castillo**,** portador de la cédula de identidad número 1715323687, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035006-2011-TCE, quien en la audiencia oral de prueba y juzgamiento manifestó "Reconozco mi firma y rúbrica y me ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa suscritos por mi persona con fecha seis de mayo de dos mil once a las tres horas con treinta minutos de la madrugada, el presunto infractor manifestó haber vendido cervezas, a una persona que se encontraba en las afueras del domicilio del señor José Manuel Mendoza Gamboa, en vista de que aquel había indicado que las llevaría a su domicilio y que no existía problemas para venderlas, quiero manifestar que el lugar donde se expendió las bebidas alcohólicas, es uno de los lugares clandestinos de venta de licor en la ciudad de Guayaquil"; de la versión proporcionada por el agente policial y corroborada por la resolución preguntas realizadas hacia el agente policial en el desarrollo de la audiencia se realizan las siguientes consideraciones: i) Se ha logrado esclarecer las circunstancias que propiciaron el presunto cometimiento de una infracción de tipo electoral, en vista de la relación de los hechos que se refieren en el parte policial, lo que fue ratificado en la versión del agente policial en la audiencia oral de prueba y juzgamiento, se logra determinar la tipicidad de la infracción de carácter electoral, por las circunstancias del hecho, respecto de la argumentación realizada por parte del abogado de la defensa, quien dijo: "A nombre de mi defendido debo manifestar que no se niega que el día y hora señalados mi defendido haya recibido unas botellas y haya entregado un vuelto al señor Chiristian Jiménez, no se ha materializado lo que estipula el artículo 291.3 del Código de la Democracia, más aún la parte que emite la boleta informativa haya presentado prueba concluyente, en vista de que no existe prueba alguna que le incrimine y dé fe pido que no se sancione a mi defendido". Al respecto esta jueza considera, analizar la versión y la afirmación que hace el abogado defensor de que su defendido, el señor José Manuel Mendoza Gamboa efectivamente entregó un "vuelto" a cambio de las botellas de cerveza que vendió, por lo que es menester realizar algunas consideraciones de carácter normativo, el artículo 123 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, establece que durante el día de las elecciones treinta y seis horas antes y doce después no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, es decir el ciudadano José Manuel Mendoza Gamboa, dentro de este periodo expendió bebidas alcohólicas desde su domicilio, infringiendo la prohibición vigente durante el periodo de prohibición que establece la disposición electoral. La afirmación del abogado defensor, a nombre y en representación del presunto infractor me remite a la aplicación del axioma jurídico *a confesión de parte relevo de prueba*y de la norma supletoria del artículo 1730 del Código Civil, que establece: "Art. 1730.- La confesión que alguno hiciere en juicio, por sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito", en este caso la corroboración de los hechos realizada por el presunto infractor por intermedio de su abogado defensor, es decir que se logró determinar que la infracción se cometió en el período de prohibición de consumo y venta de bebidas alcohólicas y que por ello se emitió la boleta informativa, pues el agente policial encontró en flagrancia el fin de la transacción, esto es, la entrega del "vuelto" por el retorno de las botellas cuyo contenido de cerveza se vendió. La confesión de parte que releva la prueba da cuenta del hecho de prohibición de venta de bebidas alcohólicas que se perpetuó durante el periodo que la ley electoral prohíbe hacerlo, lo que a le da a esta juzgadora los elementos necesarios materiales y formales, para determinar la veracidad y la existencia del hecho cometido.

c) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** del señor José Manuel Mendoza Gamboa.

b) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía ha corroborado con su versión y reconoció el parte policial, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor y prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad ha podido ser probada por la parte acusadora; esta Jueza considera que existe prueba determinante y concluyente y nexo causal para concluir que el señor José Manuel Mendoza Gamboa, se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara al señor José Manuel Mendoza Gamboa, portador de la cédula de ciudadanía No. 090216355-9 responsable de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada esto es ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se le aplica por el principio de in dubio pro reo, y considerando que a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, se encontraba vigente el Decreto Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A. Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, mediante el cual se establece el valor del salario básico unificado para el año 2011, de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.(USD 264,00).

2) El valor de la multa deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral para que ejecute su cobro, para tal efecto, ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

3) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

4) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

5) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 03 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 560-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 11H00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 560-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035357-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se desprende una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Washington Gerónimo Larrea con cédula de identidad 090696642-9 el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte y dos horas con quince minutos, en la ciudad de Guayaquil, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano WASHINGTON GERÓNIMO LARREA en 2 oficios, 1 parte informativo y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Sargento Segundo de Policía Wilson Peralta Peñafiel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035357-2011-TCE a el ciudadano con nombre WASHINGTON GERÓNIMO LARREA por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las nueve horas con treinta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno número PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación del presunto infractor WASHINGTON GERÓNIMO LARREA, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Guerrero Valenzuela y El Oro; señalándose el día miércoles veinte y nueve de dos mil doce, a las doce horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las 08h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y la citación al presunto infractor (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, haber citado al presunto infractor por interpuesta persona (Foja 9)

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y juzgamiento (14, 15)

i) Copias de cédulas de identidad de las partes procesales (fojas 16, 17)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se

asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035357-2011-TCE, de fecha sábado siete de mayo de 2011, a las 22h15, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Washington Gerónimo Larrea, con cédula de identidad 0906966429.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el Sargento Segundo Wilson Peralta Peñafiel, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día miércoles 29 de febrero de 2012 a las 12H30,en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Guayas, Al efecto, comparecieron: el señor Washington Jerónimo Larrea, en compañía de su abogado defensor abogado Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, así como el señor Agente de policía Wilson Peralta Peñafiel, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035357-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural.- Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente esto es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador "Código de la Democracia" dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos, al momento de cometimiento de la presunta infracción de naturaleza electoral Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, este derecho se ha garantizado de manera efectiva dentro de la sustanciación de la presente causa, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** del señor Washington Gerónimo Larrea Zambrano portador de la cédula de ciudadanía 090696642-9.

c) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el presunto infractor por intermedio y observancia de sus derechos y previa solicitud del abogado defensor público quien solicita que intervenga el señor Washington Gerónimo Larrea Zambrano, con cédula de ciudadanía número. 09069642-9, quien manifiesto: "Yo soy Washington Jerónimo Larrea, ese día yo llegaba cumpliendo con mis labores, me brindaron un vasito de cerveza, yo soy uniformado, pertenezco a una institución, cuando llegó el sargento llamó la atención a mis familiares, me acerqué al sargento le pedí disculpas, el sargento cogió y me citó", versión que fue corroborada por parte de su abogado defensor público quien manifestó "A nombre y representación de mi defendido, quien reconoce ser miembro de la Comisión de Tránsito del Guayas como sargento segundo, en labores de patrullaje en la calle, manifiesta que él ha llegado a su domicilio a ver unos a unos familiares quienes sí se encontraban en ese momento libando" al respecto esta jueza considera, analizar la versión y el reconocimiento tácito que hace el presunto infractor de haber cometido la infracción que se le imputa, es menester realizar algunas consideraciones de carácter normativo, el articulo 123, de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, establece que Durante el día de las elecciones treinta y seis horas antes y doce después no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, es decir el ciudadano Washington Gerónimo Larrea Zambrano, reconoce de manera directa que dentro de este periodo había ingerido bebidas alcohólicas, infringiendo la prohibición vigente durante este periodo prohibición electoral, lo que me conlleva a remitirme al axioma jurídico *a confesión de parte relevo de prueba,* y la aplicación de la norma supletoria el artículo 1730 del Código Civil que establece: "Art. 1730.- *La confesión que alguno hiciere en juicio, por sí, o por medio de apoderado especial, o de su representante legal, y relativa a un hecho personal de la misma parte, producirá plena fe contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito*", en este caso, la corroboración de los hechos realizada por el presunto infractor, así como la ratificación que hace el abogado de la defensa, sobre la intención del acto por parte del presunto infractor, quien en el horizonte material, real y formal, al cometimiento de la infracción actuaba con plena conciencia y voluntad; respecto de la materialidad formal y objetiva del lugar de los hechos, fue proporcionada por el agente de policía, quien manifestó: "Señora Jueza, reconozco y ratifico el parte elaborado por mi persona, me encontraba en servicio de patrullaje normal donde pude percatarme que el señor Washington Gerónimo Larrea tenía en la mano un vaso de cerveza junto con otras personas se encontraban libando en la vía pública por lo que procedí a entregarle la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral", que sumado a la confesión de parte esta infracción se perpetuo y consumo durante el periodo de prohibición electoral, lo que da a esta juzgadora los elementos necesarios materiales y formales, para determinar la veracidad y la existencia de infracción electoral con carácter de flagrante, de los hechos considerados, esta juzgadora encuentra los elementos necesarios, para determinar un nexo causal pleno, real material y formal entre las versiones proporcionadas en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento y la confesión de parte realizada por el señor Washington Gerónimo Larrea Zambrano.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1.- Se declara al señor Washington Gerónimo Larrea Zambrano, portador de la cédula de ciudadanía No. 090696642-9, responsable de la infracción electoral tipificada en el articulo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa del cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada vigente en el año 2011 en que se cometió la infracción y por amparo del principio *indubio pro reo*, que equivale a ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se aplica en función del Acuerdo Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A. Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 358 de 08 de enero de 2011, que deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral, para que ejecute su cobro, para tal efecto ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

2.- Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3.- Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator ad-hoc.

4.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 3 de marzo del 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 565-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 12H00. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 565-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033354-2011-TCE,

instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Jorge Francisco Salas Modesto, el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos, en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "*Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."* Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales.Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Jorge Francisco Salas Modesto, en base a los siguientes documentos: 1.- Dos Oficios 2- 1 Parte informativo y 3.- 1 Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035354-2011-TCE al ciudadano de nombres Jorge Francisco Salas Modesto por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 10h20, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Jorge Francisco Salas Modesto, en el domicilio ubicado en las calles 22 y callejón Parra, señalando para el día viernes 02 de marzo de 2012, a las 09H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la; certifica haber citado por interpuesta persona la citación al ciudadano de Nombres Jorge Francisco Salas Modesto (foja 11).

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 12, 13).

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 14,15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece*: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento*

del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."*

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035354-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 20h20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Jorge Francisco Salas Modesto quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."*

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día viernes 02 de marzo de dos mil doce a las 09H10,El presunto infractor no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, comparecen: en representación del señor: Salas Modesto Jorge Francisco**,** su abogado defensor Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, comparece el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número 035354-2011-TCE

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) **Principio de Juez Natural**

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6 responsable de la emisión de la boleta informativa número 035354-2011-TCE, quien manifiesta "Reconozco, mi firma y rubrica constante en el parte policial, así como en la boleta informativa, el día siete de mayo de dos mil once me encontraba haciendo patrullaje como JP- CRISTO "B", distrito Portete en un procedimiento preventivo, en las calles 22 y callejón Parra, en donde pude percatarme que varios ciudadanos estaban libando en la vía pública, debo indicar que lugar donde estas personas estaban libando es un domicilio que funciona como bar clandestino, yo pude constatar que las personas estaban libando al interior y al exterior del mismo, ingresé al lugar y pude evidenciar, que estaba instalada la venta de bebidas alcohólicas, solicité a la señora presunta dueña del bar los permisos de funcionamiento a lo que respondió que no los tenía, procedí a citar a la presunta dueña de este domicilio y a las seis personas que se encontraban allí". Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción describen un escenario donde presuntamente se cometió una infracción electoral, y no la identificación de la presencia física del presunto infractor y su participación en los hechos descritos por el agente policial - Respecto de los alegatos proporcionados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien realizó un interrogatorio al agente policial, en donde se precisan algunas aseveraciones y conclusiones: i) Por el tipo de procedimiento, el agente policial no ha adjuntado fotos ni ninguna evidencia de carácter físico a más del parte informativo, argumento en que se basó la defensa, para desvirtuar la carga probatoria, por eso es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Jorge Francisco Salas Modesto.**c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: *"El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita"*. En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Jorge Francisco Salas Modesto, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Jorge Francisco Salas Modesto portador de la cédula de ciudadanía número 090548871-4

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 03 de marzo del 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 562-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 12H01. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 562-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035351-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Pedro Guillermo Chalen Villao; el día sábado siete de mayo

de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos , en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."* Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez. Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Pedro Guillermo Chalen Villao, en base a los siguientes documentos: 1.- Dos Oficios 2- 1 Parte informativo y 3.- 1 Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035351-2011-TCE al ciudadano de nombres Pedro Guillermo Chalen Villao por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 09H50, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Pedro Guillermo Chalen Villao, en el domicilio ubicado en las calles 22 y callejón Parra, señalando para el día jueves 01 de marzo de 2012, a las 09H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 08H26, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la; certifica haber citado por interpuesta persona la citación al ciudadano de nombres Pedro Guillermo Chalen Villao (foja 11).

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 12, 13)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 14, 15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: *"Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"*; en

cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "*En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.*"

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035352-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 20h20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Pedro Guillermo Chalen Villao.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "*Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.*"

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día jueves 01 de marzo de dos mil doce a las 09H00. El presunto infractor no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales. En representación del señor Pedro Guillermo Chalen Villao, interviene el abogado Ab. Jimmy Delgado Barzola, en calidad de defensor público y comparece el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número BI-035351-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constitutye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Asimismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos, en primer lugar, la entegada por el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6 responsable de la emisión de la boleta informativa número 035351-2011-TCE, quien manifiesta: "Reconozco mi firma y rubrica, constante en el parte policial y boleta informativa, el día en mención en servicio

de patrullaje regular como JP-Cristo, pude observar y percatarme que varios ciudadanos se encontraban libando en la vía pública, quiero manifestar que fue un procedimiento regular sin mayores contratiempos, respecto de los ciudadanos presuntos infractores, existió un inconveniente con la propietaria del lugar la cual no colaboró con el procedimiento policial, sin embargo recibió la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral." Al respecto, esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción electoral debe contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados, mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción, tienen relación con la tipificación de la infracción electoral y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia de la infracción de tipo electoral. Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción describen un escenario donde presuntamente se cometió una infracción electoral, y no la identificación de la presencia física del presunto infractor y su participación en los hechos descritos por el agente policial.- Respecto de los alegatos que hizo el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien manifestó "Desconozco el motivo por el cual el señor Pedro Guillermo Chalén Villao no ha comparecido a esta diligencia ni desigando su abogado defensor de confianza, comparezco en representación de la defensoría pública, avoco (sic) la presunción de inocencia de acuerdo con los tratados de derechos humanos suscritos por el Ecuador, alego falta de prueba por parte del señor agente de policía, pido se absuelva a mi defendido". Lo que me lelva a remitirme a las normas y garantías del debido proceso, derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principio de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Pedro Guillermo Chalen Villao. **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar l aresponsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; lo medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso elctorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso, el agente de policía no ha incorporador al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Pedro Guillermo Chalen Villao, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, ENNOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1.- Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadado Pedro Guillermo Chalen Villao portador de la cédula de ciudadanía número 092770222-5.

2.- Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3.- Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator A d-Hoc.

4.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 03 de marzo del 2012.

f.) Ab. Paul Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 563-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 12H30. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el

No. 563-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035352-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Carlos Walton Chalen Villao; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos , en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."* Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Carlos Walton Chalen Villao, en base a los siguientes documentos: 1.- Dos Oficios 2- 1 Parte informativo y 3.- 1 Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-035352-2011-TCE al ciudadano de nombres Carlos Walton Chalen Villao por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 10H00, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Carlos Walton Chalen Villao, en el domicilio ubicado en las calles 22 y callejón Parra, señalando para el día jueves 01 de marzo de 2012, a las 11H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11h02, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la; certifica haber citado por interpuesta persona la citación al ciudadano de nombres Carlos Walton Chalen Villao (foja 11).

h) Providencia de fecha 13 de febrero de 2012, las 09H05; mediante la cual se hace constar un "lapsus calami"; en la fecha de realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas. 12, 13)

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 14, 15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: *"Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso";* en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."*

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035352-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 20h20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Carlos Walton Chalen Villao

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Guido Elias Pazmiño Esquivel, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice*: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."*

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día jueves 01 de marzo de dos mil doce a las 11H00, El presunto infractor no comparece a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y de acuerdo con el Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, comparecen: en representación del señor: Carlos Walton Chalen Villao**,** su abogado defensor Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, comparece el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número BI-035352-2011-TCE

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que *"toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella"*.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Asimismo la Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Con relación a la versión de los hechos, se considera, la entregada por el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6 responsable de la emisión de la boleta informativa número 035354-2011-TCE, quien manifiesta "Reconozco, mi firma y rúbrica constante en el parte policial, así como en la boleta informativa, el día siete de mayo de dos mil once me encontraba haciendo patrullaje preventivo, en las calles 22 y callejón Parra, en donde pude percatarme que varios ciudadanos estaban libando en la vía pública, debo indicar que lugar donde estas personas estaban libando es un domicilio que funciona como bar clandestino, yo pude constatar que las personas estaban libando al interior y al exterior del mismo, ingresé al lugar y pude evidenciar, que estaba instalada la venta de bebidas alcohólicas, solicité a la señora presunta dueña del bar los permisos de funcionamiento a lo que respondió que no los tenía, procedí a citar a la presunta dueña de este domicilio y a las seis personas que se encontraban allí". Al respecto, esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción electoral debe contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados, mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción, tienen relación con la tipificación de la infracción electoral y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia de la infracción de tipo electoral. Respecto de los alegatos manifestados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien realizó un interrogatorio al agente policial, en donde se precisan algunas aseveraciones y conclusiones i) La dueña del lugar permitió el acceso a su domicilio del agente policial ii) Se constató la presencia de seis personas al interior del lugar de los hechos pero no las identificaciones de las mismas y las circunstancias en las que se encontraban; argumento en que se basó la defensa, para desvirtuar la carga probatoria, e invocar el principio constitucional de presunción de inocencia; lo que lleva a remitirme a las normas y garantías del debido proceso, derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "*En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Carlos Walton Chalen Villao .**c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: *"El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita"*. En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Carlos Walton Chalen Villao, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Carlos Walton Chalen Villao portador de la cédula de ciudadanía número 092623000-4.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 03 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 567-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sabado tres de marzo de 2012; las 13h00.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza

le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 567-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-035356-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las veinte horas con veinte minutos, en la ciudad de Guayaquil, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice : "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la Repúbl ica, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

e) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordanica con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Constencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de2011 , señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimeinto de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Salazar Modesto Jorge Francisco en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. Bl035356-2011-TCE a la ciudadana con nombres Rosa Francisca Sánchez Calderón por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las ocho horas con cuarenta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra.Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Cesar Augusto Labre Martínez, en el domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles 22 y callejon Parra (esquina); señalando para el día viernes dos de Marzo de dos mil doce, a las once horas , para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 de Enero de 2011, a las 08h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Javier Jiménez León Citador Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona (fojas 9).

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 11, 12).

i) Copias de cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 13, 14).

TERCERO: GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso";en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden , se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-035356-2011-TCE, de fecha sabado siete de mayo de 2011, a las 20H20, la presunta infractora que se identificó con el nombre de Rosa Francisca Sánchez Calderón portadora de la cédula de ciudadanía quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por Cabo Segundo de policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día viernes 2 de marzo de dos mil doce a las quince horas, Al efecto, comparecierón: la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón, en compañía de su abogado defensor Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de ciudadanía número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número 0353562011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que “toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella” .

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) De la versión del señor Cabo Segundo de Policía Guido Elías Pazmiño Esquivel, portador de la cédula de identidad número 171577135-6, responsable de la emisión de la boleta informativa número D35356-2D11-TCE; el cual manifestó "Reconozco mi firma y rúbrica constante en el parte policial así como en la boleta informativa y me ratifico, el día siete de mayo de dos mil once me encontraba haciendo patrullaje preventivo como JP-CRISTO "B", en las calles 22 y Callejón Parra , en donde pude percatarme que varios ciudadanos estaban libando en la vía pública, se les indicó que iban a ser citados con las boletas informativas del TCE, debo decir que el lugar donde estas personas estaban libando es un domicilio que funciona como bar clandestino, yo pude constatar que las personas estaban libando al interior y al exterior del mismo, ingresé al lugar y pude evidenciar, que estaba instalada la venta de cerveza, las jabas estaban junto a la pared, solicité a la señora presunta dueña del bar los permisos de funcionamiento a lo que respondió que no los tenía, procedí a citar a la presunta dueña de este domicilio y a las seis personas que se encontraban allí", lo que a criterio de esta jueza determina el escenario real y material del lugar de los hechos donde se produjo el acto, objeto del presente juzgamiento, el cual fue ratificado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento; respecto de la versión de la presunta infractora, señora Rosa Francisca Sánchez Calderón con cédula de ciudadanía 091553375-6 quien manifestó "Ese día estaban los peloteros del barrio jugando en la calle, ese día cerraron la calle, los policías fueron a abrir la calle , no estábamos tomando en la calle , más de tres personas estaban allí, lo viejitos sacaron una cerveza, yo estaba vendiendo chuzos, ellos entraron a la casa , era algo ilegal , quiero decir que todo el barrio estaba tomando y sólo se fijaron en mi persona y a tres señores ya mayores, ellos dieron su cédula me consta, no es cierto que estaba vendiendo cerveza tengo en mi casa cinco mesas, que me sirven para mi negocio, tengo dos congeladores uno blanco de mi propiedad y otro de propiedad de Pilsener, yo sí vendo cerveza", lo que me determina hacer algunas consideraciones sobre la carga de la prueba, antes señalando que se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. En la versión que dio la presunta infractora y que fue receptada por esta jueza, a petición del abogado de la defensa, se colige la aplicación del axioma jurídico a *confesión de parte relevo de prueba*, y de la norma supletoria del artículo 1730 del Código Civil que establece: "Art. 1730.-*La confesión que alguno hiciere en juicio, por sí,* o *por medio de apoderado especial,* o *de su representante legal,* y *relativa* a *un hecho personal de la misma parte, producirá plena* fe *contra ella, aunque no haya un principio de prueba por escrito."* **b)** Del parte policial y de la boleta informativa 81: 035356-2011-TCE, sobre de los cuales el agente de policía responsable de la elaboración y entrega de estos documentos reconoció su firma y rúbricas, así como de la versión proporcionada en la audiencia oral de prueba y juzgamiento por este mismo agente policial, en donde se relataron las circunstancias en que se desarrolló el hecho, se determinó que en el lugar se expendía y consumía bebidas alcohólicas. Se toma como prueba el parte policial y el testimonio del agente de policía, con apego al artículo 76, numeral 4 constitucional para establecer que la prueba actuada en esta causa no ha sido obtenida con violación de la Constitución de la República y la Ley, y por cuanto se cumple con lo determinado en el articulo 35 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que dispone: "La prueba deberá ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica y deberá observar los principios de constitucionalidad , legalidad, proporcionalidad, celeridad, pertinencia, oportunidad, publicidad y otros aplicables en derecho electoral", por lo que se declara su validez. El Defensor Público en representación de la presunta infractora no impugnó ni la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral ni el parte policial; asímismo la presunta infractora ha comparecido y expresamente ha reconocido el hechoocurrido en todas sus circunstancias como consta en autos, por lo que existe el nexo directo y causal para determinar el cometimiento de la infracción electoral por lo que la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón es responsable de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

c) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el arto 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presumió la inocencia** de la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón, con cédula de ciudadanía 091553375-6.

d) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. Con apego al arto 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con

la presunción de inocencia; por cuanto la culpabilidad ha podido ser probada por la parte acusadora y ratificada en el horizonte formal, real y material por la presunta infractora y su abogado defensor, lo que proporciona a esta jueza los elementos necesarios para determinar prueba determinante y concluyente de que la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón, ha incurrido en los preceptos legales de una infracción electoral normada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara a la señora Rosa Francisca Sánchez Calderón, portadora de la cédula de ciudadanía número 091553375-6; responsable de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada esto es ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se le aplica por, el principio de in dubio pro reo, y considerando que a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, se encontraba vigente el Decreto Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A. Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, mediante el cual se establece el valor del salario básico unificado para el año 2011, de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 264,00).

2) El valor de la multa deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral para que ejecute su cobro, para tal efecto, ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

3) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

4) Actúe en la presente causa el Abogado Paul Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

5) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Cetifico.- Guayaquil 03 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 568-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 03 de marzo de 2012, las 13H30.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 568-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033534-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por la señora María LUCILA HUEBLA CUTIOPALA; el día viernes seis de mayo de dos mil once, a las trece horas con cincuenta y seis minutos, en la ciudad de Durán, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordanica con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Constencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el

procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimeinto de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra de la ciudadana Lucila Huebla Cutiopala, en 2 oficios, 1 parte policial y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Subteniente de Policía Xavier Segarra, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033534-2011-TCE a la ciudadana con nombres Maria Lucila Huebla Cutiopala; por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 4).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las ocho horas con cuarenta minutos, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación a la presnta Infractora María Lucila Huebla Cutiopala, en el domicilio ubicado en Primera Etapa del Recreo a la altura de los Sauces MZ.L, sin número, de la ciudad de Durán, señalando para el día sábado tres de Marzo de dos mil doce, a las once horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 7).

e) Providencia de fecha 29 de Enero de 2011, a las 08h01, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Miltón Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta, persona citación a la señora María Lucila Huebla Cutiopala. (Fojas 9)

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 12, 13)

i) Documentos identificados como nota de venta "Queso Doña Fanny", número 0000091y 000090. (Fojas 14, 15).

j) Copias de cédulas de ciudadanía, matrícula profesional y credencial Policial de las partes procesales. (Fojas 16, 17).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-033534-2011-TCE, de fecha viernes seís de mayo de 2011, a las 13H56, la presunta infractora se identificó con el nombre de María Lucila Huebla Cutiopala.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el Subteniente de Policía Xavier Segarra, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día sábado 03 de marzo de 2012, a las 08h40. Al efecto, comparecieron la señora María Lucila Huebla Cutiopala en compañía de su defensor Abogado Alberto Otto García Alarcón; el señor Subteniente de Policía Xavier Segarra, portador de la cédula de ciudadanía número 0603409020, responsable de la emisión del parte policial y de la boleta informativa número 033534-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derechos que deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

De otro lado, también es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de las versiones proporcionadas por las partes en la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde el agente de policía responsable de la elaboración de la Boleta Informativa BI-33534-2011-TCE manifestó: "Me ratifico en el parte policial, en el día y hora indicados cité a la presunta infractora en cumplimiento de un procedimiento netamente policial, reconozco en esta audiencia que entregué la boleta informativa a la señora Maria Lucila Huebla Cutiopala, quien se encuentra presente en esta audiencia, quien no quiso firmar la boleta informativa; se incautó los cartones de vino a los jóvenes que se encontraban en la tienda comprando."

b) El debido proceso es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** de la señora María Lucila Huebla Cutiopala**,** con cédula de ciudadanía 070253670-4.

c) En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, la presunta infractora negó haber recibido del agente policial la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral con la cictación sobre el cometimiento de la infracción electoral tipificada en el Art. 291.3 del Código de la Democracia, hecho que fue replicado por el agente de policía, quien ratificó que fue a la presunta infractora señora María Lucila Huebla Cutiopala, fue la persona a quien citó y entregó la boleta informativa pero que no quiso firmarla; los documentos de las notas de venta que tienen en su parte inferior fecha de impresión del 8 de julio de 2011, que el abogado defensor pidió incorporar como prueba, dan cuenta de una compra venta de queso en la ciudad de Penipe el día 6 de mayo de 2011, esto es, antes de que el organismo tributario ordenara la impresión de las facturas, y no son demostrativos de que la presunta infractora viajó a la ciudad de Riobamba el día anterior al 7 de mayo de 2011 y, por tanto no se encontraba en el lugar de los hechos ni tampoco la frecuencia de viajar todos los fines de semana, como

aseveró ella misma y el abogado de la defensa, se consideran improcedentes; se toma en cuenta la afirmación de la presunta infractora que en su negocio se vende abarrrotes, cerveza y vinos; se toma en cuenta la versión de la señora María Sonia Bucay, como tercera interesada, quien confirmó que unos jóvenes se acercaron a comprar el vino de cocina (sic) que usualmente se vende en la tienda de abarrotes de la presunta infractora, cuyos cartones fueron retenidos por el agente policial; la defensa no entregó prueba de que en la tienda de abarrotes, lugar de los hechos, no se vende bebidas alcohólicas lo que remite a esta jueza establecer la existencia de prueba determinante y concluyente de venta de este producto en el periodo de prohibición de bebidas alcohólicas establecido por el Código de la Democracia, lo que determina la existencia del nexo causal entre los hechos suscitados que constan en el parte policial, ratificados por el agente responsable, las afirmaciones de la presunta infractora y la tercera interesada y la tipicidad de la infracción electoral que establece el Código de la Democracia, por lo cual la señora María Lucila Huebla Cutiopala, ha incurrido en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara a la ciudadana María Lucila Huebla Cutiopala portadora de la cédula de ciudadanía número 070253670-4. responsable de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada esto es ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 132,00), valor que se le aplica por el principio de in dubio pro reo, y considerando que a la fecha del cometimiento de la infracción electoral, se encontraba vigente el Decreto Ministerial número 00249 de fecha 23 de diciembre de 2010, dictado por el B.A. Richard Espinoza Guzmán, Ministro de Relaciones Laborales y publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, mediante el cual se establece el valor del salario básico unificado para el año 2011, de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.(USD 264,00).

2) El valor de la multa deberá ser depositado en la cuenta de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la Provincia del Guayas, de conformidad con el oficio número 1220-P-OS-CNE-2011; en el caso de no cumplirse con esta decisión, se conmina al Consejo Nacional Electoral para que ejecute su cobro, para tal efecto, ofíciese a través de la Secretaría de este despacho.

3) Ejecutoriado que sea este fallo, archivese la causa.

4) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

5) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Guayaquil 03 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0233-2011

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 03 de marzo de 2012. Las 17h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de Defensor Público; copia de la credencial del subteniente de policía Jorge Ortiz; copia de la cédula de ciudadanía del presunto infractor y copia de la cédula de ciudadanía del señor Mario Hernando Palomeque Sáenz, quien actúa en calidad de testigo del señor Víctor Leonel Vázquez Salto.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **VÍCTOR LEONEL VÁZQUEZ SALTO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0233-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y

106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El subteniente de policía, Jorge Ortiz, perteneciente al Comando Provincial del Cañar No. 15, Tercer Distrito, Plaza de Azogues, suscribe el parte informativo en el que señala que el día sábado 7 de mayo de 2011, a las 20h11 en las calles Bolívar y Tenemaza de la ciudad de Azogues, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008026-2011-TCE, al señor **VÍCTOR LEONEL VÁZQUEZ SALTO**, portador de la cédula de ciudadanía número 030185869-2, por supuestamente contravenir el artículo 291 numeral 3) del Código de la Democracia, esto es, expender o consumir bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas (fs. 3).

b) El referido parte y la boleta informativa No. BI-008026-2011-TCE, fueron remitidos por la Delegación Provincial Electoral del Cañar al Tribunal Contencioso Electoral, mediante oficio No. 080-CNE-DPC-D de 09 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo de dos mil once, a las catorce horas con diecisiete minutos (fs. 1 a 5).

c) El día martes 10 de mayo del año 2011, en la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, se procede a sortear la causa, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza.

d) Con auto de 28 de octubre de 2011, a las 10H30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación del señor Víctor Leonel Vásquez Salto, en su domicilio ubicado en la calle Ingapirca, Barrio Polígono, cantón Azogues, provincia del Cañar, señalándose como fecha de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento el día viernes 02 de diciembre de 2011, a las 09h00. Con fecha 01 de diciembre de 2011, a las 9h17, el señor Víctor Leonel Vásquez Salto, presenta escrito suscrito con su abogado defensor, solicitando diferimiento de la audiencia oral de prueba y juzgamiento, señalada para el día 02 de diciembre de 2011 a las 09h00. Con providencia de 01 de diciembre de 2011, a las 11h30, se suspende la misma; y con de auto de 11 de enero de 2012 a las 13h30, se señala como fecha de audiencia oral de prueba y juzgamiento para el día viernes 02 de marzo de 2012 a las 09h00, en las oficinas de la Delegación Provincial Electoral del Cañar, y se le hace conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 19).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **VÍCTOR LEONEL VÁZQUEZ SALTO**, fue citado en su domicilio el día miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, a las quince horas, recibiendo la citación la señora Blanca Saltos Vásquez, madre del presunto infractor, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora-notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 23).

b) El subteniente de policía Jorge Ortiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 21 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinador/a de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón (fs. 20).

d) El día y hora señalados, esto es el viernes 02 de marzo de 2012, a partir de las 09h00 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **VÍCTOR LEONEL VÁZQUEZ SALTO,** portador de la cédula de ciudadanía número 030185869-2, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 02 de marzo de 2012, a partir de las 09h00, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicadas en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo actuado en la audiencia se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concede la palabra al teniente de policía Jorge Ortiz quien manifestó: Que el día 07 de mayo de 2011 a las 20h11, por disposición de la central de radio patrulla, se trasladó hasta las calles Bolívar y Tenemaza constatando que se encontraba el ciudadano Víctor Vázquez, el cual se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo cual se lo trasladó al Hospital Homero Castanier Crespo, para que se le extienda certificado médico y luego llevarle a la prevención para entregarle la boleta. El señor Víctor Leonel Vázquez Salto, acompañado del defensor público manifestó, a sus generales de ley que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030185869-2, de 26 años de edad, de profesión médico, de estado civil divorciado, domiciliado en la calle Ingapirca de la ciudad de Azogues. En cuanto a los hechos manifestó: Que se encuentra en desacuerdo con lo que dice el parte y el policía, por no ser lo que realmente pasó, que no ingirió bebidas ni tenía en su vestimenta algún tipo de bebida; esa noche se encontraban perseguidos por una familia y bajaban a buscar a la policía, llegando en ese momento la policía y le dijeron que se subiera por haber ingerido bebidas alcohólicas, yo le dije que me llevara a practicarme la prueba, me llevaron al hospital Homero Castanier Crespo, en donde se verificó que no estaba en estado etílico, posteriormente fue trasladado a la prevención para ser recluido en un calabozo. A pedido de la defensa se recepta el testimonio del señor testigo de nombres Mario Fernando Palomeque Sáenz, a sus generales de ley responde que sus nombres y apellidos son los ya señalados; ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030088076-2, de 47 años de edad, de estado civil divorciado, de ocupación empleado público, domiciliado en Biblián en la calle Alberto Ochoa; al interrogatorio formulado por la defensa respondió: 1) ¿El día 7 de mayo de 2011, usted estuvo presente? Respuesta: Yo pasaba por la calle Bolívar y vi a los jóvenes que estaban con la policía aparentemente conversando, eso es lo que vi; 2) ¿Usted observó que estaban en estado de embriaguez? Respuesta: No, estaban sobrios; 3) ¿Usted les vio a los señores tomando? Respuesta: No; 4) ¿Vio el procedimiento que realizó el policía? Respuesta: Ellos estaban cumpliendo su trabajo, todo fue normal, no le faltaron a la autoridad. Al interrogatorio formulado por la señora Jueza respondió: 1) ¿A qué distancia se encontraba usted? Respuesta: Yo estaba a una distancia suficiente para observar lo que sucedía, más o menos a seis metros; 2) ¿Usted se detuvo? Respuesta: Sí, vi lo que estaba sucediendo, los jóvenes estaban normal. El Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público, ingresa como prueba copia certificada del parte elevado al señor Comandante provincial de la policía Nacional Cañar No. 15 y la boleta de libertad, con los cuales prueba que su defendido fue detenido y procesado por un comisario del cantón Azogues; en cuanto a los hechos manifestó que dentro del expediente no existe prueba de alcoholemia, razón por la cual no se le puede sancionar por presuntamente ingerir bebidas alcohólicas, que no existiendo prueba y tomando en cuenta el principio constitucional non bis in idem, solicita que al momento de resolver se tomen en cuenta los hechos para que se emita una resolución absolutoria para su defendido. El teniente policía interviene para indicar que de parte de los moradores entró una llamada a la central de radio, al trasladarse al lugar verificó el cometimiento de la infracción, se apreciaba el olor a alcohol, trasladándolo al hospital, el galeno dejó constancia que se encontraba en estado etílico.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, señala que no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después. El artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, indica que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

A la luz de las normas enunciadas, el testimonio del subteniente de policía Jorge Ortiz, quien reconoce el contenido del parte y boleta informativa, no puede ser totalmente corroborado ya que al ser contrastado con la declaración de un testigo y la del presunto infractor se observa algunas imprecisiones, en primer lugar los antes mencionados niegan que el denunciado haya ingerido bebidas alcohólicas; en segundo lugar llama la atención que en el expediente no se encuentre el examen médico que el

señor policía dice que se le ha practicado en el hospital, ya que el mismo lo trasladó hasta la casa de salud y luego lo llevó detenido; en tercer lugar se señala que fue detenido hasta el día siguiente, lo cual no es el procedimiento que debió observarse y tampoco consta esto en el respectivo parte policial; estas discrepancias entre la versiones del señor agente orden, los testimonios y los documentos que reposan en el expediente, no nos permiten considerar que se hayan probado fehacientemente que el señor Víctor Leonel Vázquez Salto haya cometido la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **VÍCTOR LEONEL VÁZQUEZ SALTO**.

2) Se ordena el archivo del presente expediente.

3) Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4) Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5) **CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.**

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, **Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.**

Certifico.- Azogues, 03 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, SECRETARIA RELATORA.

SENTENCIA

CAUSA 0254-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 03 de marzo de 2012. Las 17h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copias simples de la cédula de ciudadanía y de la credencial del señor suboficial de policía José Ruiz; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE**. Esta causa ha sido identificada con el número 0254-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, señalan que el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneraciones de normas electorales.

b) Para el día 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, está previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial de policía, José Ruiz, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 22h30, en la parroquia Guapán, sector Cachipamba, se

procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007981-2011-TCE, al señor **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE**, portador de la cédula de ciudadanía número 030205398-8, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007981-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año del dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 09h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE**, con domicilio en Guapán Centro, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar, se señala que el día viernes 02 de marzo de 2012, a las 11h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE,** con cédula de identidad No. 030205398-8, fue citado en persona, el día miércoles dieciocho de enero de dos mil doce a las doce horas, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El suboficial de policía José Ruiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012, se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública del Cañar, que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 7).

d) El viernes 02 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE,** portador de la cédula de ciudadanía número 030205398-8, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 02 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se cuenta con la presencia del presunto infractor.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: Se lee el parte policial de la causa, y su contenido es reconocido por el agente del orden. Se concede la palabra al suboficial segundo de policía José Ruiz, el cual se ratifica en el parte policial, en vista de que ese día se encontraba patrullando en el sector de Guapán, lugar en el que se observó a un grupo de cinco personas libando en la calle. El señor Edwin Oswaldo Guamán Monje, acompañado de su defensor público, respondió que sus nombres y apellidos son los que ha señalado, ecuatoriano, de 26 años de edad, de estado civil casado, de ocupación albañil, domiciliado en Guapán Calera. En cuanto a los hechos manifestó que ese día estaban saliendo de una cena con unos amigos, y al trasladarse a sus hogares, a la altura de Cachipamba, el patrullero los detuvo y a todos les hicieron subir al vehículo, los llevaron al UPC, afuera le entregaron la boleta y al ver que sus amigos no salieron se fue a la casa. A las preguntas formuladas por la defensa respondió: **1)** ¿Al momento que le detuvieron, pasó algo más? Respuesta: Nos pusieron de boca contra el piso y uno de los policías, nos apuntaba con una pistola, no le vi la acara del oficial; **2)** Les dijeron por que les detenían? Respuesta: Nos dijeron que era por la ley seca; **3)** ¿Les hicieron alguna prueba de alcoholemia? Respuesta: No. El Ab. Víctor Hugo Sarmiento, en calidad de defensor público manifestó: Que

no se ha observado el procedimiento que manda la ley, en vista de que en ese momento se le debió entregar la boleta que le daba a conocer el cometimiento de la infracción y no trasladarles a la UPC, y que tomando en cuenta que no hay prueba de alcoholemia o de sangre, se resuelva tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia. El agente del orden intervino para manifestar que no se le hizo prueba alguna, por cuanto en la UPC, no disponen de esos medios; al interrogatorio formulado por la señora Jueza respondió: **4)** ¿A las cinco personas les encontraron en la calle? Respuesta: Sí, y les trasladaron a la UPC; **5)** ¿Les llevaron en el carro de la policía? Respuesta SÍ, a las cinco personas; **6)** ¿Por qué no les dieron las boletas a las señoras? Respuesta: Ellas no aparentaban estar tomadas. La señora Jueza pregunta al señor agente del orden si desea ampliar la versión, señalando que no, que se ratificaba en el día y hora del parte policial. La señora jueza pregunta al señor agente del orden si desea ampliar su declaración y él señala que no, que se ratifica en el día y hora del parte policial.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 254 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, el testimonio del suboficial segundo de policía José Ruiz, es demasiado escueto y a pesar de la insistencia de la jueza no es ampliado, por lo que no hay una explicación lo suficientemente clara, precisa, concreta, contundente que describa los hechos y nos dé los elementos de convicción suficientes para afirmar sin dudas que el señor Edwin Oswaldo Guamán Monje, infringió el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **EDWIN OSWALDO GUAMÁN MONJE**, portador de la cédula de ciudadanía número 030205398-8.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 03 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0255-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 03 de marzo de 2012. Las 18h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copias simples de la cédula de ciudadanía y de la credencial del señor suboficial segundo de policía José Ruiz; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN**. Esta causa ha sido identificada con el número 0255-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales, de acuerdo al artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución.

b) El día 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, está previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial segundo de policía, José Ruiz, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011, a las 22h30, en la parroquia Guapán, sector Cachipamba, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007982-2011-TCE, al señor **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN**, portador de la cédula de ciudadanía número 030250254-7, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007982-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 10h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN**, con domicilio en Guapán Allillacu, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día viernes 02 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN,** fue citado a través del señor Edwin Guamán Monje, amigo del presunto infractor, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 12h10, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El suboficial segundo de policía José Ruiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE se ofició al Coordinador/a de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el viernes 02 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN,** portador de la cédula de ciudadanía número 030250254-7, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Por el contenido del parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 02 de marzo de 2012 a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del

Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, asistió a la audiencia el presunto infractor.

b) De lo actuado en la audiencia se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden. Se concede la palabra al suboficial segundo de policía José Ruiz, el cual se ratifica en el parte policial, en el cual se indica la fecha y lugar del cometimiento de la infracción. El señor Juan Pablo Galabay Guamán, debidamente asistido por su defensor público, al contestar las generales de ley manifestó que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en Guapán, parroquia Guapán, cantón Azogues; con relación a los hechos manifestó: Que ese día se trasladaban en un carro, percatándose que los señores policías les decían que se detengan, el amigo que conducía detuvo el carro y les bajaron a la fuerza, les pusieron contra el piso y con una arma les apuntaron. A las preguntas formuladas por la señora jueza respondió: **1)** ¿Estaba a pie o en vehículo? Respuesta: Estaban en carro; **2)** ¿Cuántas personas estaban? Respuesta: Mas o menos unas cinco; **3)** ¿Iban por la carretera? Respuesta Sí; **4)** ¿Cometieron alguna infracción de tránsito? Respuesta: No, se dirigían a dejar a las muchachas; **5)** ¿El vehículo era una auto cerrado o una camioneta o camión? Respuesta: Era un auto cerrado; **6)** ¿A qué hora sucedió? Respuesta: Eran las 22h30; **7)** ¿De qué día? Respuesta: Del día 6 de mayo de 2011, como consta en el parte; **8)** ¿A dónde les llevaron? Respuesta: Nos llevaron primero a la UPC y luego a la prevención; **9)** ¿Qué paso con las chicas? Respuesta: A ellas les dejaron; **10)** ¿Sólo fueron los hombres? Respuesta: Sí, al que manejaba también los llevaron con ellos; **11)** ¿Qué pasó con el vehículo? Respuesta: No se qué pasó con el vehículo, estuve unos veinte minutos hasta que me entregaron la boleta. A la aclaración solicitada por la defensa de que cual fue el tiempo que le llevaron a la UPC, respondió que sería más o menos unos cuarenta minutos. Al ser preguntado por la señora jueza al agente del orden, si desea aclarar o ampliar lo dicho anteriormente, contesta que no. En sus alegatos finales el defensor público manifestó, que tomando en cuenta que no existe prueba del cometimiento de la infracción, que se le acusa y que de acuerdo con el principio de inocencia se absuelva a su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, el testimonio del suboficial segundo de policía José Ruiz, no puede ser totalmente corroborado ya que al ser contrastado con la declaración del presunto infractor, no se logra establecer con toda precisión la descripción circunstanciada de los hechos; el señor policía tampoco señala qué lo llevó a concluir que el presunto infractor había consumido bebidas alcohólicas. Por tanto en el presente caso no es posible tener la certeza que el señor Juan Pablo Galabay Guamán, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad. Para esta jueza, en caso de duda hay que aplicar el principio "indubio pro reo".

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **JUAN PABLO GALABAY GUAMÁN**, portador de la cédula de ciudadanía número 030250254-7.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 03 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0253-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 03 de marzo de 2012. Las 19h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del

Ab. Jhoe Rolando Coronel Ramírez, en su calidad de abogado defensor; copia simple de la credencial del señor cabo segundo de policía Ángel Silva; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor; y copias de las cédulas de ciudadanía de la señora Carlota de la Nube Cabrera González y señor Javier Eugenio Cáceres Aucancela, quienes actúan en calidad de testigos.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ**. Esta causa ha sido identificada con el número 0253-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, tal como señala el artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador y, para sancionar por vulneraciones de norma electorales, siendo sus fallos de última instancia.

b) El día 07 de mayo de 2011, se realizó el proceso de referéndum y consulta popular convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad con el inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el cabo segundo de policía, Ángel Silva, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes seis de mayo a las 20h30, en la UPC-Bayas, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007922-2011-TCE, al señor **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 0302166327, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007922-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 10 de enero de 2012, a las 13h30 se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, a través de la prensa, por desconocer su domicilio; en dicho auto se señaló que el día jueves 01 de marzo de 2012, a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ,** fue citado en persona, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h20, conforme consta de la razón sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El cabo segundo de policía Ángel Silva, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Jhoe Rolando Coronel Ramírez, en calidad de abogado defensor (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el jueves 01 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la

Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ,** portador de la cédula de ciudadanía número 0302166327, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) El día jueves 01 de marzo de 2012, se llevo a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se conto con la presencia del presunto infractor.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al cabo segundo de policía Ángel Silva, quién manifestó: Que encontrándose en el sector de la iglesia de Flores pudo observar un vehículo con algunas personas que escuchaban música; al notar su presencia escondieron una botella de licor, por lo que procedieron a revisar el carro encontrándose la misma, razón por la cual se procedió a llenar la boleta con los datos proporcionados. A las pregunta formulada por la señora Jueza responde: **1.-** ¿Cuántas personas estaban? Respuesta: En el sector estaba el señor Álvaro Espinoza y el señor aquí presente, además una de las dos señoras, la una en estado de gestación; **2.-** ¿Habían otro vehículos? Respuesta: No. El Ab. Jhoe Rolando Coronel Ramírez, en su calidad de abogado defensor del señor Esteban Gastón Vásquez González, manifestó: **i)** Que se debe indicar que el día del incidente fue el jueves 5 de mayo de 2011, no como aparece en el parte y boleta citación, 6 de mayo de 2011 fecha que no corresponde al día en que ocurrió el incidente; **ii)** Que impugna el parte y boleta, por ser ajenos a la realidad de los hechos; **iii)** Que ese día su defendido se encontraba bajando hacia su domicilio acompañado de su esposa, la cual se encontraba de ocho meses de gestación, y que a la altura de la iglesia del Flores, se encontró con un amigo y le dijo que se suba para llevarlos a su casa; **iv)** Que cuando iba a subirse al vehículo, llegó la policía, les dijeron que infringieron la ley seca, y procedieron a revisar el carro y les tomaron los datos y le entregaron la boleta; **v)** Que la esposa de su defendió se puso nerviosa por lo que tuvo que ser llevada a una casa de salud para ser atendida, para lo cual adjunta la partida de nacimiento del hijo de su defendido para probar el estado de gestación, certificado médico del día en que fue atendida y solicita se recepten las versiones de testigos; y, **vi)** Que se archive el proceso por no haberse probado que se hubiere infringido la ley seca o hayan consumido o expendido bebidas alcohólicas. Los documentos presentados son agregados al expediente y se procede a receptar el testimonio de la señora Carlota de la Nube Cabrera González, quien a sus generales de ley responde que sus nombres son los ya señalados, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 030141917-2, de 37 años de edad, de estado civil divorciada, de ocupación quehaceres domésticos, domiciliada en el sector del parque del Señor de Flores; al interrogatorio formulado por la defensa responde: **1.-** ¿Diga usted en dónde se encontraba usted el día jueves 5 de mayo de 2011, relate lo que observó? Respuesta: Mi casa está ubicada de la iglesia más abajo, me encontraba en la azotea y vi que había un carro con cuatro personas, en ese instante llegó la policía, les hizo bajar, la señora embarazada se puso mal, por lo que me bajé a darle un vaso con agua; **2.-** ¿Diga usted si estaba el señor aquí presente y con aliento a licor? Respuesta: No. Al interrogatorio formulado por la señora Jueza, respondió: **1)** ¿Usted pudo ver el color del vehículo? Respuesta: Era de color rojo; **2)** ¿Habían otros carros? Respuesta: No; **3)** ¿El carro estaba estacionado? Respuesta: Estaba estacionado; **4)** ¿Es común que estén vehículos en ese sitio? Respuesta: No a esa hora, pero ahí pasan bastantes carros; **5)** Usted a más de socorrer a la señora, pudo ver alguna otra manifestación del señor? Respuesta: El señor estaba preocupado por la señora que estaba embarazada. Se llama al señor Javier Eugenio Cáceres Aucancela, quien en su calidad de testigo, a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030139269-0, de 28 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación empleado privado, domiciliado en la Av. Galo Plaza Lasso y vía a las antenas; al interrogatorio de la defensa contestó: **a)** ¿El día jueves dónde se encontraba y que observó? Respuesta: Ese día me encontraba en el sector Bayas para ver a una hermana, antes de llegar me detuvo a comprar en una tienda y vi que el señor bajó con la señora que estaba embarazada y saludaron; luego se encontraron con alguien en un carro, se quedaron conversando, posterior a eso llegó la policía y a los pocos minutos se marcharon; Se acercó a preguntar y notó que estaban tensos, la señora nerviosa y se sentía mal; y; **b)** ¿Usted pudo percibir que tenía aliento a licor o estaba ebrio? Respuesta: No tenía aliento a licor, estaba sobrio. Al interrogatorio formulado por la señora jueza contestó: **c)** ¿Cuándo se acercó al grupo estaban afuera o dentro del carro? Respuesta. Estaba afuera; **d)** ¿Las personas estaban en un carro recuerda el color? Respuesta: No; **e)** ¿Cuándo usted se acercó, preguntó que sucedía? Respuesta: No, la señora estaba alterada y se puso delicada, se acercó una señora a darle un vaso con agua y se retiró; **f)** ¿Usted pudo notar que estaba borracho? Respuesta: No. Acto seguido interviene el agente de policía para indicar que en el lugar donde se encontraban no es un parque, sino un canchón y que por allí no hay tiendas, recalcando que había una botella, ante la pregunta formulada por la señora jueza, de qué cual era la fecha en que ocurrieron los hechos responde que fue el día 6 de mayo del 2011, como consta en la boleta. Acto seguido se procedió a preguntar al presunto infractor las generales de ley, respondiendo que se llama Esteban Gastón Vásquez González, ecuatoriano, de 25 años de edad, de ocupación empleado público, estado civil divorciado, domiciliado en el barrio 5 esquinas, en el cantón

Azogues, al interrogatorio respondió: **1)** ¿Usted estaba dentro del vehículo? Respuesta: En ningún momento subí al carro, les encontré y me iban a dejar en la casa, se acercaron los policías y nos dijeron que estábamos tomando, ante lo cual mi esposa se sintió mal, por lo que le llevé al centro de salud; ¿Cuándo sucedieron los hechos? Respuesta: Fue el día 5 de mayo de 2011, no fue el 6 como está en el parte.

Luego de esta intervención se declaró en receso la audiencia, la misma que se reanudaría el viernes 02 de marzo de 2012 a partir de las 18h00. Previo a la reanudación de la audiencia, mediante providencia de 2 de marzo de 2012 a las 15h44, se llamó al Dr. Florencio Guallpa para que reconozca la firma y rúbrica impuesta en el certificado médico y rinda su testimonio al respecto.

El día 02 de marzo de 2012 a las 18h15 se reanudó la audiencia con la presencia del presunto infractor, acompañado de su abogado defensor Dr. Edgar Rolando Ávila Chimbo. La jueza solicitó se agregue al expediente todo lo actuado en la causa 0252-2011-TCE, dado que, de acuerdo con el parte policial, los presuntos infractores estuvieron en el mismo lugar, día y hora. La señora jueza pregunta al señor Esteban Gastón Vásquez González si desea modificar o ampliar su declaración rendida el día anterior, ante lo cual señala que sí, ya que los hechos ocurrieron el día y hora señalados por el señor policía, excepto en la parte que afirmó que estaban consumiendo bebidas alcohólicas lo cual niega.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

Para resolver esta causa se tendrá en cuenta el artículo 123 del Código de la Democracia, que señala que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. También se aplicará el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual unificada a: ...3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Estas normas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

La rectificación del testimonio del presunto infractor permite desechar las declaraciones de los testigos y corroborar lo expresado por el agente de policía, con lo cual existen elementos de convicción suficientes para tener la certeza de que el señor Esteban Gastón Vásquez González sí cometió la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **ESTEBAN GASTÓN VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 0302166327, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 03 de marzo de 2012

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0256-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 04 de marzo de 2012. Las 10h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público y copia de la credencial del señor suboficial segundo de policía José Ruiz.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0256-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces, por sorteo para cada proceso; y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, está previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial segundo de policía, José Ruiz, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011, a las 22h30, en la parroquia Guapán, sector Cachipamba, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007983-2011-TCE, al señor **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO**, portador de la cédula de ciudadanía número 030181526-0, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007983-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de enero de 2012, a las 10h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO**, con domicilio en Guapán Alliyacu, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día sábado 03 de marzo de 2012 a las 09h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO,** fue citado a través del señor Edwin Guamán Monje, amigo del presunto infractor, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 12h05, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El suboficial segundo de policía José Ruiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el sábado 03 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO,** portador de la cédula de ciudadanía número 030181526-0, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a efecto el día sábado 03 de marzo de 2012 a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Jorge Fernando Galabay Rocano, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, y se contó con el defensor público. Se leyó el parte policial de la causa y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al suboficial segundo de policía José Ruiz, quien manifestó: Que se ratifica en el contenido del parte policial sobre los hechos suscitados el 6 de mayo de 2011. El Ab. Víctor Hugo Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público del presunto infractor, manifestó que se tome en cuenta el principio de inocencia de su defendido y que al no existir prueba de alcoholemia o de sangre que determine el estado etílico, pide que se resuelva absolviendo al señor Jorge Fernando Galabay Rocano.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El Código de la Democracia, en el artículo 123, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, concordando con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas señaladas se aplican al presente caso, ya que el parte policial informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del 7 de mayo de 2011. En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, está contemplado el juzgamiento de estas infracciones, siendo éste un procedimiento oral. El artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

A la luz de estas normas y analizando los hechos de la presente causa, es claro que el testimonio del suboficial segundo de policía José Ruiz, no es rebatido por el presunto infractor que no concurre a la audiencia y es el más indicado para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía. Para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de infracciones electorales. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tiene valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, la afirmación del suboficial segundo de policía José Ruiz, nos conduce a determina que el señor Jorge Fernando Galabay Rocano, tiene responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **JORGE FERNANDO GALABAY ROCANO**, portador de la cédula de ciudadanía número 030181526-0, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 04 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0257-2011-TCE.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 04 de marzo de 2012. Las 10h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copia simple de la credencial del suboficial segundo de policía José Ruiz; y, copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JUAN PABLO MACANCELA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0257-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, señalan que el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y por vulneración de normas electorales.

b) El día 07 de mayo de 2011, se realizó el referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, a una de las juezas o jueces, por sorteo; y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 201, está previsto el juzgamiento de las infracciones electorales.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial segundo de policía José Ruiz, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo del 2011, a las 22h30, en la parroquia Guapán, sector Cachipamba, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007984-2011-TCE, al señor **JUAN PABLO MACANCELA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030214515-6, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007984-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 4).

c) En la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, se procede a sortear la causa, el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 11h00, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **JUAN PABLO MACANCELA**, con domicilio en Guapán, sector Cachipamba, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día sábado 03 de marzo de 2012 a las 11h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JUAN PABLO MACANCELA,** fue citado a través de la señora Laura Ubaldina Macancela, prima del presunto infractor, el día jueves 19 de enero de 2012, a las 09h50, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el Ab. Citador/notificador el Tribunal Contencioso Electoral (fs.10).

b) El suboficial segundo de policía José Ruiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012 y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público (fs. 7).

d) El día y hora señalados, esto es el sábado 03 de marzo de 2012, a partir de las 11h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JUAN PABLO MACANCELA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030214515-6, de acuerdo con los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Por el contenido del parte informativo y de la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a efecto el día sábado 03 de marzo de 2012 a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se contó con la presencia del presunto infractor.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al suboficial segundo de policía José Ruiz, quién manifestó: Que se ratifica en el contenido del parte. El señor Juan Pablo Macancela, debidamente asistido por el defensor público, al preguntársele sobre la generales de ley indicó que sus nombres y apellidos son los ya señalados, de 25 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación desempleado, domiciliado en Guapán, en el barrio Cachipamba, cantón Azogues; en cuanto a los días de los hechos yo sí estaba ingiriendo bebidas alcohólicas cerca de mi casa, luego llegó la policía y me extendieron la boleta. El Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público, manifestó que en vista de que su defendido ha aceptado la responsabilidad, pide se proceda conforme a la ley.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa, señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título Cuarto del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Todas estas normas han servido para analizar los hechos de la presente causa y es claro que en el caso que nos ocupa, el contenido del parte informativo remitido a esta jueza por el suboficial segundo de policía José Ruiz, ha sido corroborado por el señor Juan Pablo Macancela, quien ha aceptado su responsabilidad en los hechos que se le imputan, esto es, en el cometimiento de la infracción determinada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **JUAN PABLO MACANCELA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030214515-6, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 04 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0258-2011-TCE.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 04 de marzo de 2012. Las 11H00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la Dra. Diana Esperanza Naula Beltrán, en su calidad de abogada defensora; copias simples de la credencial del señor suboficial segundo de policía José Ruiz y copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN**. Esta causa ha sido identificada con el número 0258-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) El día 07 de mayo de 2011, se realizó el referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, está previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial segundo de policía, José Ruiz, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011, a las 22h30, en la parroquia Guapán, sector Cachipamba, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007985-2011-TCE, al señor **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN**, portador de la cédula de ciudadanía número 030250339-6, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-007985-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 4).

c) En la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, se procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 11h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN**, con domicilio en Guapán, barrio Cachipamba, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día sábado 03 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN,** fue citado a través de la señora Laura Ubaldina Macancela, hermana del presunto infractor, el día jueves 19 de enero de 2012, a las 10h05, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) El suboficial segundo de policía José Ruiz, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012 y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, constante a fojas 7 del proceso, habiéndose contado con la presencia de la Dra. Diana Esperanza Naula Beltrán, en calidad de abogada defensora.

d) El día y hora señalados, esto es el sábado 03 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN,** portador de la cédula de ciudadanía número 030250339-6, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día sábado 03 de marzo de 2012 a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se contó con la presencia del presunto infractor.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al suboficial segundo José Ruiz, manifestando que se ratifica en el contendido del parte. Al interrogatorio formulado por la señora Jueza responde: **1.-**¿El señor estaba solo? Respuesta: Estaban en un grupo conformado por cinco personas; **2.-** ¿Iban a pie o en vehículo? Respuesta: Estaban en un vehículo; **3.-** ¿Estaban solo hombres? Respuesta: Sí, eran solo hombres; **4.-** ¿Qué hizo usted al verlos? Respuesta: Les dijimos que detengan el vehículo porque se pasaron la luz verde del semáforo y procedimos a perseguirles; **5.-** ¿Cómo se dio cuenta que estaban con aliento a licor? Respuesta: Por su apariencia, estaban tomados. La Dra. Diana Esperanza Naula Beltrán, en calidad de abogada defensora, manifestó: **i)** Que niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por el agente de policía en función de que está confundido; **ii)** Que esa noche no hubo persecución alguna, que su defendido salía de la casa de su tía, pasó una camioneta y se subió a ella para dirigirse a su casa; **iii)** Que no existe prueba que demuestre que su defendido se encontraba alcoholizado, el policía dice que solo por apariencia se dio cuenta que estaba alcoholizado; **iv)** Que se incorpore al expediente como prueba dos certificados de honorabilidad que dan fe de que se trata de un ciudadano honorable y honesto; **v)** Que su cliente no se encontraba involucrado en el hecho y que el señor policía se confunde; y, **vi**) Solicita que se ratifique la inocencia de su defendido, ya que no se ha demostrado con prueba plena que estaba alcoholizado. Al interrogatorio formulado por la señora jueza al señor agente del orden responde: **1)** ¿Ese día además del señor Macancela, hubo alguna otra persona que le dio usted la boleta?: Respuesta: Sí, se les dio a cinco ciudadanos, pero que ha transcurrido casi un año y no recuerdo bien.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, el testimonio del suboficial segundo de policía José Ruiz, no puede ser totalmente corroborado ya que al ser contrastado con la declaración del presunto infractor, no se logra establecer con toda precisión la descripción circunstanciada de los hechos; el señor policía tampoco señala qué lo llevó a concluir que el presunto infractor había consumido bebidas alcohólicas. Por tanto en el presente caso no es posible tener la certeza que el señor Víctor Alfredo Macancela Buestán, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad. Para esta jueza, en caso de duda hay que aplicar el principio "indubio pro reo".

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **VÍCTOR ALFREDO MACANCELA BUESTÁN**, portador de la cédula de ciudadanía número 030250339-6.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 04 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 475-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 06 de marzo de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-** Agréguese a los autos el Oficio No. 2012-719-CP-4 de 29 de febrero de 2012, suscrito por el Ab. Carlos Julio Logroño Varela, Coronel de Policía de E.M del Comando Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4 Acc., ingresada en este despacho día 02 de marzo de 2012, a las 14h30.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 475-2011-TCE, seguida en contra del señor Quilme Filiberto Vera Cedeño.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h26.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM.(fs. 1-2)

b) Oficio No. 2011-2141-CP-4 de 8 de mayo de 2011, suscrito por el señor Carlos Orbe Fiallo, Coronel de Policía de E.M, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del Oficio Nos. 2011-965-CCPNM-M de 07 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M Comandante Cantonal de Policía de Manta.(fs. 4)

d) Copia del Parte Informativo Nro. 5258 de fecha sábado 07 de mayo de 2011, elaborado por el señor Paucar Vásquez Héctor Marcelo, Cabo Segundo de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-015651-2011-TCE. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado el día 10 de febrero de 2012, a las 15h30; y extracto de citación. (fs. 8 y 8 A)

g) Oficio No. 020-2012-J.AC-mfp-TCE de 10 de febrero de 2012, dirigido al señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 9)

h) Publicación del extracto de citación por la prensa para el señor Quilme Filberto Vera Cedeño, realizada en el periódico El Diario, el día miércoles 29 de febrero de 2012, en la página 13 A.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día martes 06 de marzo de 2012, a las 14h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, abogado de la Defensoría Pública; el señor Cabo Segundo de Policía Héctor Marcelo Paucar Vásquez y la Ab. Jacqueline Monserrate Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. No compareció el señor Quilme Filiberto Vera Cedeño, pese a que fue debidamente citado.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 5 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada a: (…) 5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones dentro o fuera de los recintos electorales".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público manifestó en nombre de su defendido: **1.** Una vez revisado el expediente, se observa que si bien es cierto existe una boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral, con la cual se notifica al ciudadano Quilme Filiberto Vera Cedeño, por una presunta infracción, éste es el único elemento que tiene el Tribunal para juzgarlo. **2.** La Constitución de la República establece que debe existir prueba plena en el cometimiento de la infracción en este caso en materia electoral, al momento solo existe la información proporcionada por el agente policía que es meramente referencial. **3.** Que deja constancia que al señor Quilme Filiberto, se lo notificó por la prensa el día 29 de febrero de 2012, y que este tiempo era muy corto para que su defendido pueda comparecer, a esta audiencia.

b) El señor Cabo Segundo de Policía expresó que: El día sábado 07 de mayo de 2011, a las 8h20 en la escuela Edulfo Estrada Bonilla, parroquia Leonidas Proaño, el ciudadano Quilme Filiberto Vera Cedeño hizo caso omiso a la disposición dada por su persona, para que no ingresara su vehículo en el área restringida por los conos, por lo cual se produjo una alteración en la parte exterior de la escuela. Manifestó que antes de emitirle la boleta al referido ciudadano, le hizo conocer las consecuencias de dicha contravención. El señor Quilme Filiberto Vera Cedeño, firmó el documento del Tribunal y procedió inmediatamente a entregarle la citación.

c) En su segunda intervención el defensor público, observa que: Que de la intervención del Agente de la policía, se observa, que no existió una alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones o elecciones por tanto su defendido no debería ser juzgado.

d) La audiencia fue realizada en rebeldía, por tanto no se pudo contar con la versión directa del presunto infractor sobre los hechos suscitados el día 07 de mayo de 2011.

e) De lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se colige, que no existen los elementos que configuran el tipo previsto en el artículo 291 numeral 5 del Código de la Democracia, porque no se alteró o perturbó el proceso electoral el día 07 de mayo de 2011, en el recinto electoral.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **QUILME FILIBERTO VERA CEDEÑO.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Quilme Filiberto Vera Cedeño, a través de su Ab. Antón Zambrano Fabián, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 06 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 476-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 06 de marzo de 2012.- Las 17h20. **VISTOS.-** Agréguese a los autos el Oficio No. 2012-720-CP-4 de 29 de febrero de 2012, suscrito por el Ab. Carlos Julio Logroño Varela, ingresado en este despacho el día 02 de marzo de 2012, a las 14h30.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 476-2011-TCE, seguida en contra del señor Carlos Javier Reyes Lucas.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h27.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia del Oficio No. 2011-965-CCPNM-M de 07 de mayo del 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Copia del Parte Informativo Nro. 5257, suscrito por el señor Luis Lligui Tenemaza, Sbos. de Policía, el día sábado 07 de mayo de 2011. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016811-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de Admisión a trámite de fecha 10 de febrero de 2012 a las 15h40. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual se certifica que no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor Reyes Lucas Carlos Javier. (fs. 10)

h) Oficio No. 021-2012-J.AC-mfp-TCE de 10 de febrero de 2012, dirigido al señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11vlta).

i) Auto de 25 de febrero de 2012 a las 09h40 y extracto de citación. (fs. 12 y 13-13vlta)

j) Publicación de la citación por la prensa para el señor Reyes Lucas Carlos Javier, realizada en el periódico, el Diario, el día 01 de marzo de 2012.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 06 de marzo de 2012, a las 15h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Ab. Antón Zambrano Fabián, defensor público; el señor Macías Chilan Alberto, funcionario de la Defensoría del Pueblo, el Sargento Primero de Policía Lligui Tenemaza Luis Antonio. No compareció el presunto infractor señor Carlos Javier Reyes Lucas, por lo tanto la Audiencia se realizó en rebeldía.

Los alegatos presentados por las partes procesales constan en la respectiva acta, que se incorpora en el expediente.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 2 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 2. Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha propaganda se encuentra prohibida por la ley".

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público manifestó: **1.** Que su defendido Carlos Javier Reyes Lucas, ha sido notificado a través de la prensa, que por razones que desconoce no ha acudido ante la Defensoría Pública, en persona. **2.** Que su defendido debe ser juzgado por hechos probados, y que en el expediente consta únicamente la boleta del Tribunal, y no se observa otra prueba que compruebe el cometimiento de la infracción por propaganda electoral. **3.** Que la versión del agente policial es referencial. **4.** Que no se debería sancionar a su defendido y se debe archivar la causa.

b) El señor Sargento Primero de Policía expresó: Que el día 07 de mayo de 2011, observó que el señor Carlos Javier Reyes Lucas, ingresó en la calle 113, en el lugar con propaganda electoral. Que le advirtió que no podía hacer eso y en consecuencia, procedió a entregarle la boleta. El abogado defensor público, preguntó al señor policía, qué tipo de propaganda portaba el señor Carlos Javier Reyes Lucas. Respondió el agente de policía, que el referido ciudadano, se había cortado el pelo y en su cabeza se encontraba un logotipo. Ante una segunda formulada pregunta por la defensa sobre si tenía alguna otra propaganda, señaló el policía que "no tenía otra propaganda"

c) En su segunda intervención el defensor público, expresó: Que lo que supuestamente se había puesto en su cabeza su defendido no constituía una sugerencia para que se votara en algún sentido, en la Consulta Popular y referéndum 2011.

d) El representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que se encontraba presente para vigilar el cumplimiento del debido proceso, y que no tiene nada que observar en esta Audiencia.

e) Por lo expuesto en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se observa que por una parte no se contó con la versión del ciudadano a quien se le entregó la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral, y que en lo principal, los hechos narrados por el señor agente de la policía, no fueron acompañados con otras pruebas materiales que acrediten que el señor Carlos Javier Reyes Lucas, el día sábado 07 de mayo de 2011, vulnerara la disposición contenida en el artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia, respecto a la realización de propaganda electoral.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **CARLOS JAVIER REYES LUCAS**.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Carlos Javier Reyes Lucas, a través de su Ab. Antón Zambrano Fabián, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 06 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

CAUSA 569-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 06 de marzo de 2012, las 17H30.- Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia, con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la a la Dra Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 569-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033533-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Anthony Brando Bravo Bonilla , con cédula de identidad desconocida; el día viernes seis de mayo de dos mil once, a las trece horas con cincuenta y un minutos, en la ciudad de Duran, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones: **PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- a)** Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales; **b)** Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular **c)** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. **d)** El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia; para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez. Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa. **SEGUNDO: ANTECEDENTES.- a)** Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Anthony Brando Bravo Bonilla; en 2 oficios, 1 parte informativo y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5). **b)** En el parte policial suscrito por el señor Sub teniente de Policía Xavier Segarra, aparece que el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033533-2011-TCE a la ciudadano con nombres Anthony Brando Bravo Bonilla por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 3). **c)** El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa

correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5). **d)** El treinta de enero de de dos mil doce, a las once horas, la señora Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Anthony Brando Bravo Bonilla, en el domicilio ubicado en la ciudad de Duran en la ciudadela el Recreo primera etapa Manzana 103 villa 20; señalando para el día martes seis de marzo, a las ocho horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7). **e)** Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las, 10h50 en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6). **f)** Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8). **g)** La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona al señor Anthony Brando Bravo Bonilla **h)** Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 14 y vuelta) **i)** Copia de las cédulas de identidad de las partes procesales (Foja 15) **TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-** Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor." **CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-**De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33533-2011-TCE, de fecha viernes seis de mayo de 2011, a las 13h51, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Anthony Brando Bravo Bonilla portador de la cédula de ciudadanía desconocida, quien ha recibido y firmado esta boleta. **QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-** De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el sub teniente de policía Xavier Segarra, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." **SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-** La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día martes 6 de marzo de dos mil doce a las ocho horas con cincuenta minutos Al efecto, comparecieron: el señor Anthony Brandon Bravo Bonilla**,** en compañia de su represente legal el señor (José Enrique Bonilla Velasco), en compañía de su abogado defensor Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Subteniente de policía Xavier Segarra, portador de la cédula de ciudadanía número 0603409020, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033533-2011-TCE. **SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.- a) Principio de Juez Natural** Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente en este caso contemplado en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador " Código de la Democracia" ; dentro del ámbito de la jurisdicción vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral,respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos. En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral. Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad. Al respecto, es entendible la

designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final. Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley. b) En la Audiencia Oral de Prueba y juzgamiento, se manifestó por parte de la defensa las siguientes consideraciones "Quiero representar al adolecente, Antony Brando Bravo Bonilla, de 16 años de edad, siendo inimputable por lo cual solicito el archivo, de la presente causa".(lo subrayado me corresponde). Al respecto, y conformidad con lo establecido y determinado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento en donde se constato que el presunto infractor es menor de edad conforme se desprende de la cedula de ciudadanía y copia de misma y Partiendo de la concepción del adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de protección, la cual permite que el adolescente conozca que está sujeto a la aplicación de medidas socio educativas si quebranta la norma, hecho que no entra en tratamiento del presente juzgamiento en razón de la materia; El Código de la Niñez y Adolescencia estipula algunas de las garantías de que gozan los menores de edad, las que se encuentran consagradas en la Constitución Política del Ecuador, a más de las que les corresponde por su condición, estableciendo un tratamiento diferente del que se aplica a los adultos, considerando su condición Jurídico, socio educativo y la edad del niño, niña y adolescente, por lo que no serán juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán sanciones previstas en las leyes penales. Lo que determina su ininmputabilidad; respecto de la consagración del principio de inimputabilidad que se encuentra establecido en el Art. 175 de la Constitución Política de la República vigente, mismo que dice " Los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia especializados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores" Mandato Constitucional que se encuentra plasmado en el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 255, de allí que para el conocimiento de los casos en los que se encuentre involucrado un adolescente se debe designar jueces especiales que son los que deben resolver los procesos. De igual manera deben existir Procuradores de Adolescentes, funcionarios designados por el Ministerio Público encargados del ejercicio de la acción penal si lo amerita, de la investigación e inicio de la instrucción fiscal en sus contra, Con esto el cuerpo normativo se establece para los adolescentes un tratamiento diferente, enseñarles que son seres humanos importantes de esta sociedad, sujetos de garantías constitucionales en el caso de cometimiento de alguna infracción; Respecto del Art. 44 de la Constitución Política de la República establece que: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas" Este principio, se encuentra consagrado en el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia que estipula "el Interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades Administrativas, Judiciales, Instituciones Públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y Garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. Este Interés Superior del Niño, es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin antes haber escuchado previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado y que está en condiciones de expresarlo; referente a la naturaleza y alcance de la norma , señalada en el precedente civilista señalando en el art. 21 del Código Civil Ecuatoriano, el que establece que menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años; como una de las características del derecho de los adolescentes es la inimputabilidad; en el cometimiento de infracciones. La inimputabilidad es la antítesis jurídica de la imputabilidad, mediante la cual los adolescentes no se hallan en capacidad de responder por acciones u omisiones punibles, por lo tanto no existe causalidad entre el agente activo del delito y el hecho punible; lo que nos remite a la actuación con conciencia y voluntad ; ratificada en el principio de inimputabilidad que se encuentra establecido en el Art. 175 de la Constitución Política de la República vigente, mismo que dice " Los niños, niñas adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia especializados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral;La administración de justicia dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores" principios que garantiza la Constitución vigente, lo que nos conlleva a referirnos al principio Contradictorio de un proceso; en donde de lo constante en autos, así como lo manifestado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento podemos observar que en todo proceso existe una relación contradictoria, donde se deben definir los distintos roles procesales, y actuaciones; para determinar el principio contradictorio en los casos de los menores de edad debe garantizar muy especialmente el derecho a ser oído, a aportar pruebas e interrogar personalmente a los testigos y a refutar argumentos en contrario. Se debe permitir la intervención de los representantes legales (padres o tutores), lo cual se ratifico con la presencia del padre del menor en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en donde siempre su presencia no fue en contra del interés del adolescente a ser informado de lo que se le inculpa. En relación a la falta de norma expresa que de facultad a esta juzgadora en materia de comisión de una infracción electoral, presuntamente cometida, por un adolescente, o sujeto menor de diez y ocho años de edad ; Al no existir norma expresa en la la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador " Código de la Democracia" , así como en Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, que faculte a esta juzgadora imponer sanción alguna a un menor de edad por presunta

infracción electoral ; y en aplicación del principio de ininputabilidad de los menores de edad, consagrados en la constitución y en las leyes especiales en la materia, se Dispone el **ARCHIVO** de la presente causa **OCTAVO** siga actuando el abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de secretario relator ad-hoc dentro de la presente causa. **NOVENO.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.**

f.) Dra Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 06 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 571-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 06 de marzo de 2012, las 18H30.- Agréguese al expediente el memorando N.0 022-2012-VP-TCE, suscrito por la Dra Amanda Páez Moreno, en su calidad de Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, dirigido a la Dra Amanda Ximena Endara Osejo Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual solicita una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012; el oficio No. 026-2012-SG-TCE suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón de que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 571-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033582-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Isaías Isac Meza Mite, con cédula de ciudadanía 092595403-4; el día domingo ocho de mayo de dos mil once, a las diez horas con quince minutos, en la ciudad de Duran, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo del 2011, que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Isaías Isac Meza Mite, en 2 oficios, 1 parte informativo y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Suboficial Segundo de Policía Henrry García, aparece que el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033582-

2011-TCE al ciudadano con nombres Isaías Isac Meza Mite por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las once horas, la señora Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, y de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Isaías Isac Meza Mite, en el domicilio ubicado en el Cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro, Cdla. Centro Vial, conjunto 2122; señalando para el día martes seis de marzo, a las ocho horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las,11h20 en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Paredes Paredes, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación por interpuesta persona, al señor Isaías Isac Meza Mite.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 14 y vuelta)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Foja 15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor y de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) **g)** En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33582-2011-TCE, de fecha domingo ocho de mayo de 2011, a las 10h15, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Isaías Isac Meza Mite, con cédula de ciudadanía 092595403-4, quien ha recibido y firmado esta boleta.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el Suboficial Segundo de Policía Henrry García, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día martes 06 de marzo de dos mil doce a las 12h:40. Al efecto, comparecierón el señor Isaías Isac Meza Mite**,** en compañía de su abogado defensor, Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Suboficial Segundo de policía Henrry García, portador de la cédula de ciudadanía número 120169619-0, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033582-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente, en este caso contemplado en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador " Código de la Democracia";dentro del ámbito de la jurisdicción vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso,

no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio; afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, para cuyo efecto deberá analizar exclusivamente el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, yl que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

B) Respecto de la versión proporcionada por el agente policial el cual manifiesta "Me ratifico en el contenido del parte Policial y de la Boleta Informativa por lo que no tengo nada más que añadir". Lo cual no ratifica la existencia del hecho como tal, por cuanto el parte policial constante en autos se refiere, a un procedimiento de detención por parte del agente policial, que constituye una contraversión de primera clase estipulada en el articulo Art. 604 del Codigo Penal que dice: "Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América; parte pertinente numeral 25..- "Los que maltrataren, injuriaren o ejercieren actos de resistencia contra los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, si el acto no constituye delito". Al no ser materia de caracter electoral, no procede que esta Judicatura entre a conocer estos hechos. Por su parte el presunto infractor en su declaracion manifestó;"Yo soy Isaias Isaac, Meza Mite, me detuvieron, me llevaron al CDP, estuve dos días detenido, mi compañero fue agredido, le quitaron su celular, a mi no me tocaron, nos sacaron mis familiares, y no creía que me iban a volver a citar.", De igual manera esta exposición no determina un hecho real, de la materialidad de una infracción electoral, únicamente describe de manera somera un proceso de detención ajeno a la materia electoral, por lo que cabe realizar algunas consideraciones: La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente en este proceso ninguna prueba, pese a que en el parte policial se dice que el presunto infractor fue sometido a un examen de alcoholemia; Por el el contrario el señor Isaías Isac Meza Mite, ha enunciado la existencia de un certificado medico emitido por el Centro Medico Oramas Gonzalez del cantón Duran, el cual tampoco consta en el expediente, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."(…) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; por lo expuesto esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que establezca la existencia de un nexo causal, material y real que determine, que el señor Isaías Isac Meza Mite, con cédula de ciudadanía 092595403-4, se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia de la ciudadano Isaías Isac Meza Mite.portador de la cédula de ciudadanía número 092595403-4

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 06 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA 572-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, martes 06 de marzo de 2012, las 19H00.- Agréguese al expediente el oficio N0. 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la a la Doctora Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo a jueves 08 de marzo de 2012. **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 572-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033583-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Eduardo Gabriel Rosero Bohorquez, con cédula de ciudadanía 0923864995; el día domingo ocho de mayo de dos mil once, a las diez horas con quince minutos, en la ciudad de Duran, provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y siete de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Eduardo Gabriel Rosero Bohorquez; en 2 oficios, 1 parte informativo y 1 boleta informativa, que conforman cuatro fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 5).

b) En el parte policial suscrito por el señor Suboficial Segundo de Policía Henrry García, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033583-2011-TCE al ciudadano con nombres Eduardo Gabriel Rosero Bohorquez por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (fojas 3).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 5).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las once horas, la señora Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento del presente proceso, ordenando la citación al presunto infractor Gabriel Rosero Bohorquez, en el domicilio ubicado en el Cantón Duran, parroquia Eloy Alfaro, Cdla. Centro Vial, conjunto 2122; señalando para el día martes seis de marzo, a las ocho horas con treinta minutos, para la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (foja 7).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las, 11h20 en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 8).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador, quien certifica haber entregado la citación en persona al presunto infractor.

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 14 y vuelta)

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Foja 15)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: el presunto infractor fue citado, se le hace conocer que debe designar un abogado defensor o de no tener se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33583-2011-TCE, de fecha domingo ocho de mayo de 2011, a las 10h15, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Eduardo Gabriel Rosero Bohorquez, con cédula de ciudadanía 0923864995, quien ha recibido y firmado esta boleta.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscrita por el Suboficial Segundo de Policía Henrry García, Agente Responsable, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la cuidad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, el día martes 06 de marzo de dos mil doce a las diez y seis horas con cuarenta minutos. Al efecto, comparecieron: el señor Eduardo Gabriel Rosero Bohórquez, en compañía de su abogado defensor, Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Suboficial Segundo de Policía Henry Garcia, portador de la cédula de ciudadanía número 120169619-0, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033583-2011.TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente en este caso contemplado en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador " Código de la Democracia" ; dentro del ámbito de la jurisdicción vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo, la Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

B) Respecto de la versión proporcionada por el agente policial el cual manifiesta "Me ratifico en el contenido del parte Policial y de la Boleta Informativa por lo que no tengo nada más que añadir". Lo cual no ratifica la existencia del hecho como tal, por cuanto el parte policial constante en autos se refiere, a un procedimiento de detención por parte del agente policial, que constitutye una contrvensión de primera calse estipulada en el artículo Art. 604 del Código Penal que dice: "Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América, parte pertinente numeral 25.- "Los que maltrataren, injuriaren o ejercieren actos de resistencia contra los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, si el acto no constituye delito". Al no ser materia de carácter electoral, no procede que esta Judicatura entre a conocer estos hechos. Por su parte el presunto infractor en su declaración manifestó; "El Sub Oficial, García manifiesta que yo estaba libando y la verdad es que los policías, procedieron a interceptarnos, a esposarnos, y deternenos, nos llevaron a un centro médico para realizarnos el examen de alcoholemia y luego a calabozos, me quitaron el celular, el sub oficial, me golpeo tres veces, es lo que tengo que decir". De igual manera esta exposición no determina un hecho real, de la materialidad de una infracción electoral, únicamente describe de manera somera un proceso de detención ajeno a la materia electoral, por lo que cabe realizar algunas consideraciones: La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente en este proceso ninguna prueba, pese a que en el parte policial se dice que el presunto infractor fue sometido a un examen de alcoholemia; Por el el contrario el señor *Eduardo Gabriel Rosero Bohorguez,* ha enunciado la existencia de un certificado medico emitido por el Centro Medico Oramas González del cantón Duran, el cual tampoco consta en el expediente, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor ni prueba válida y concluyente. En consecuencia, con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." (...) "4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria". No basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia, por cuanto su culpabilidad no ha podido ser probada por la parte acusadora; por lo expuesto esta Jueza considera que al no existir prueba determinante y concluyente que establezca la existencia de un nexo causal, material y real que determine, que el señor *Eduardo Gabriel Rosero Bohorguez,* con cédula de ciudadanía 092386499-5 se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y ÑAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Eduardo Gabril Rosero Bohórquez.

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 06 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA No. 482-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 07 de marzo de 2012, las 12h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 482-2011-TCE, seguida en contra del señor Luis Alberto Quiroz Ortiz.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h33.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Oficio No. 2011-964-CCPNM-M, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Original del Parte Policial Nro. 5253, suscrito por el señor Dorian Balladares Romero, Capitán de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016543-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite de fecha 10 de febrero de 2012, a las 16h00. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor QUIROZ ORTIZ LUIS ALBERTO. (fs. 9)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 07 de marzo de 2012, a las 09h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Luis Alberto Quiroz Ortiz, el Ab. Geovanni Gorozabel Intriago, Defensor Público, señor Ab. Obregón Meza Jonas Vespasiano, funcionario de la Defensoría del Pueblo y el Capitán de Policía Dorian Balladares Romero. Como testigo de la defensa comparece el señor Remigio Segundo Chalén Alvia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) Intervino en primer lugar el señor Luis Alberto Quiroz Ortiz, quien señaló que: El día 07 de mayo de 2011, fue a sufragar y se encontraba con un amigo, que estaban sentados en una banca cerca de su casa, junto a él se encontraba una botella de cerveza en el suelo, que pasaron unos policías y le tomaron una foto. Que no se encontraba con aliento a licor, pero que le entregaron una boleta informativa

b) El Defensor Público, ejerciendo la defensa del señor Luis Alberto Quiroz Ortiz señaló que: **1.** Que el parte policial, es meramente informativo. **2.** Que su defendido no cometió la infracción electoral imputada, porque no estuvo ni bebiendo ni vendiendo alcohol. **3.** Que no existe dentro del expediente una prueba que pueda justificar la materialidad de la infracción, como una prueba de alcoholemia, que demuestre que su defendido tenía alcohol en la sangre. **4.** Que ha su defendido lo respalda el principio constitucional de inocencia, por tanto solicita que se absuelva a su defendido.

c) El señor Capitán de Policía, intervino y manifestó: **1.** Que fue designado como Jefe del Operativo policial en el recinto electoral del Colegio de señoritas Manta, mientras se encontraba patrullando en ese sector, siendo las 13h20, en la Av. 23 y Calle 9 de la ciudad de Manta se percató que dos ciudadanos, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, cervezas. Uno ciudadano dijo llamarse Luis Alberto Quiroz Ortiz, y el otro ciudadano que lo acompañaba se llamaba Remigio Segundo Chalén Alvia. Al acercarse a esos ciudadanos, observó y percibió que tenían aliento a licory que tenían en su poder las bebidas alcohólicas cervezas. **2.** Que en cumplimiento a lo que establece el Código de la Democracia, se extendió la correspondiente citación a esos ciudadanos, entregándoles las boletas respectivas y posteriormente se elaboró el parte policial.

d) El abogado de la Defensoría Pública, interrogó al señor Capitán de Policía, preguntándole que si al señor Luis Alberto Quiroz Ortiz, se le practicó un examen de alcohotest. A lo que contestó el señor Capitán de Policía, que dentro del procedimiento establecido para los infractores del Código de la Democracia, se establece que basta la verificación del consumo de bebidas alcohólicas y en ese caso se debía entregar la correspondiente citación. Que de igual manera dentro del proceso establecido por el Consejo Nacional Electoral dentro de las garantías a los ciudadanos se establecía actualmente la no detención de los ciudadanos para garantizar su derecho al sufragio. Es por ello que en cumplimiento de la normativa se le entregó la citación una vez verificada la posesión de las cervezas y su aliento a licor. En una segunda pregunta, el defensor público le preguntó al señor Capitán de Policía, si a su defendido le practicó algún examen científico? Contestó el señor Capitán de Policía que la citación se entregó por lo que establece el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia. La señora Jueza preguntó al señor Capitán de Policía si practicó una prueba científica. El Capitán de Policía contestó que no lo hizo. El abogado de la defensa preguntó si se encuentran en la sala las botellas de cerveza. El Capitán de Policía expresó que no se recogió ninguna botella.

e) El testigo de la defensa señor Remigio Segundo Chalén Alvia, una vez que rindió el respectivo juramento y a quien se le advirtió sobre la pena de perjurio, señaló que: "El día de las elecciones fuimos a votar cumpliendo con lo que indica nuestro derecho y fuimos a la casa, aceptando aquí que tomamos un trago de cerveza y el señor policía nos tomó la (sic) fotos con la botella de cerveza, pero solo fue eso y nada más"

f) Con lo expuesto por las partes procesales en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se colige que: El día sábado 07 de mayo de 2011, día del Referéndum y Consulta Popular, el señor Luis Alberto Quiroz Ortiz, acudió a sufragar. En esa fecha se le entregó una boleta del Tribunal Contencioso Electoral por parte de un agente del orden, por incurrir en una infracción electoral, esto es por consumo de alcohol. No existe prueba de alcoholemia para comprobar el nivel de alcohol en la sangre del ciudadano Luis Alberto Quiroz Ortiz, como lo señaló el Capitán de policía que elaboró el parte informativo y cuyo hecho fue reiteradamente señalado como argumento de defensa por el señor Defensor Público. No obstante, de la versión rendida con juramento por el testigo de la defensa y en aplicación de las garantías del debido proceso, sana crítica y del principio de la verdad procesal, que señala: "Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos

aportados por las partes" (Art. 27 Código Orgánico de la Función Judicial), esta Jueza considera que se ha verificado que el hecho ilícito fue cometido por el ciudadano Luis Alberto Quiroz Ortiz, al haber consumido una bebida alcohólica cerveza, mientras se encontraba vigente la prohibición prevista en el artículo 123 del Código de la Democracia, cuya sanción se encuentra tipificada en el artículo 291 numeral 3 del mismo Código .

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1.- Se declara al señor **LUIS ALBERTO QUIROZ ORTIZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 130632510-9, responsable del cometimiento de la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por tanto, se le sanciona con la multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada. El salario básico unificado en el año 2011, era de USD. 264,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES), según consta en el Acuerdo Ministerial 249, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 358 de 08 de enero de 2011, en consecuencia, como la infracción electoral fue cometida en el año 2011, en aplicación del principio de irretroactividad de la ley y del principio indubio pro reo, se impone al señor LUIS ALBERTO QUIROZ ORTIZ, la multa de ciento treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 132); valor que deberá ser depositado en el término de cuarenta y ocho horas en la cuenta No. 0010001726 COD 19-04.99 del Banco Nacional de Fomento. La copia del depósito respectivo, será entregada en la Delegación Provincial Electoral de Manabí.

Se conmina al Consejo Nacional Electoral, para que ejecute su cobro, en el caso de que el infractor no efectuara el pago de la multa, con la cual ha sido sancionado.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Luis Alberto Quiroz Ortiz, a través de su Ab. Geovanni Gorozabel Intriago, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 483-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 07 de marzo de 2012.- Las 14h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán

"Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 483-2011-TCE, seguida en contra del señor Remigio Segundo Chalén Alvia.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h34.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Oficio No. 2011-964-CCPNM-M, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Original del Parte Policial Nro. 5252, suscrito por el señor Dorian Balladares Romero, Capitán de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016542-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite de fecha 10 de febrero de 2012, a las 16h50. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor CHALÉN ALVIA REMIGIO SEGUNDO. (fs. 10)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 07 de marzo de 2012, a las 10h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Remigio Segundo Chalén Alvia, acompañado del Ab. Geovanni Gorozabel Intriago Defensor Público; el Capitán de Policía Dorian Balladares Romero, el señor Ab. Jonás Vespasiano Obregón Meza, funcionario de la Defensoría del Pueblo.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) En la intervención del señor Defensor Público, en nombre del señor Remigio Segundo Chalén Alvia, manifestó: **1.** Que se encuentra presente en la Audiencia Oral de prueba y juzgamiento por mandato constitucional, para garantizar el derecho a la defensa. **2.** Que para que se sancione a una persona por este tipo de infracción en materia electoral, debe haberse comprobado el hecho material, en el presente caso, no ha sido comprobado científicamente el supuesto consumo de alcohol, no existe examen de alcoholemia. **3.** Que no se ha roto o quebrantado el principio de inocencia que le garantiza la Constitución al señor Remigio Segundo Chalén Alvia.

b) El señor Capitán de Policía, durante su intervención manifestó: **1.** Que el día sábado 7 de mayo de 2011, se encontraba como Jefe de Operativo del Recinto Electoral del Colegio de Señoritas Manta, en la Av. 23 y Calle 9, el ciudadano de nombres Chalén Alvia Remigio Segundo se encontraba junto a un amigo, consumiendo bebidas

alcohólicas, cervezas, en cumplimiento de lo que establece el Código de la Democracia, entregó la correspondiente citación, posteriormente elaboró el parte policial. El abogado de la Defensa preguntó al señor Capitán de Policìa si existe una prueba científica que demuestre que el señor Chalén Alvia Remigio tenía un cierto grado de alcohol, a lo cual contestó el agente del orden que no se hizo prueba científica, pero que constató que el referido ciudadano tenía aliento a licor y que tenía en su poder varias botellas de cervezas.

c) En su segunda intervención el abogado de la Defensoría Pública, expresó que se ha demostrado la teoría de la defensa de que no existe materialidad científica para comprobar que su defendido tenía alcohol en su sangre, por tanto solicitó que se confirme su inocencia.

d) En la presenta causa, se observa que la defensa argumenta la falta de prueba material. No existe en el expediente ni se presentó en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento algún documento que acredite la práctica de una prueba de alcohotest, este hecho se corrobora con lo afirmado por el agente de policía, en esta diligencia; en consecuencia, no existe prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor **REMIGIO SEGUNDO CHALÉN ALVIA.**

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **REMIGIO SEGUNDO CHALÉN ALVIA.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Remigio Segundo Chalén Alvia, a través de su Ab. Geovanni Gorozabel Intriago, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 484-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 07 de marzo de 2012.- Las 17h00.- **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 484-2011-TCE, seguida en contra del señor Julio Alejandro Rodríguez Quijije.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h35.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Oficio No. 2011-961-CCPNM-M, de 07 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo.Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Copia del Parte Informativo Nro. 5243, suscrito por el señor Lic. Fabary Montalvo Calderón, Mayor de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016693-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 08h50. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor Rodríguez Quijije Julio Alejandro. (fs. 10)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 07 de marzo de 2012, a las 15h00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Rodríguez Quijije Julio Alejandro, el Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, Defensor Público. No comparece el señor Mayor de Policía Fabary Montalvo, responsable de la entrega de la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral y del parte policial

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El señor defensor público manifestó en nombre de su defendido: Que ha revisado el expediente y que en el mismo sólo se observa el parte policial y una boleta que es meramente informativa. Que no existe prueba para determinar la materialidad de la infracción, por tanto debe confirmarse la inocencia de su defendido.

b) No se contó en esta audiencia, con la versión del agente del orden que elaboró el parte informativo, por tanto no se pudo conocer de forma directa cómo ocurrió la presunta infracción, tampoco existen evidencias dentro del expediente que aporten con elementos precisos, graves y concordante para demostrar la existencia del cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Al no existir prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor Julio Alejandro Rodríguez Quijije**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Julio Alejandro Rodríguez Quijije, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0259-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 07 de marzo de 2012. Las 17h00.-**VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copia simple de la credencial del señor sargento segundo de policía, Braulio Rivadeneira; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor, señor Orlando Rodrigo Carangui Vázconez; copia simple de las cédula de ciudadanía del señor Segundo Cárdenas Latacela y copia de la licencia de conducir del señor Milton Hernán Palacios Álvarez, que comparecen como testigos.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ**. Esta causa ha sido identificada con el número 0259-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final, confiere al Tribunal Contencioso Electoral, la jurisdicción y competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular, para el día 07 de mayo de 2011 con base en los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad a los incisos tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, realizarán el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, se realizará de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas establecen la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el sargento segundo de policía, Braulio Rivadeneira, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011, a las 19H40, en el parque de la Unidad Nacional, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008081-2011-TCE, al señor **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 030113045-6, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 4).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta

informativa No. BI-008081-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 5).

c) En la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, se sorteo la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 6).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 12h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ**, con domicilio en Guapán, sector Builchapamba, parroquia Guapán, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día martes 06 de marzo de 2012 a las 09h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 7 y 7 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ,** fue citado en su domicilio, recibió la citación la señora Tania Lozado, amiga del presunto infractor, el día jueves 19 de enero de 2012, a las 15h00, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 11)

b) El sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 10h30, conforme consta a fojas 8 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 002-SMM-P-TCE-2012, se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 9).

d) El día y hora señalados, esto es el martes 06 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ,** portador de la cédula de ciudadanía número 030113045-6, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 06 de marzo de 2012 a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues; se contó con la presencia del presunto infractor y del defensor público.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, quien manifiesta: Que ese día se encontraba de patrullaje y que por disposición de la central de radio patrulla se dirigió al parque de la Unidad Nacional, en el cual constató que el señor Orlando Carangui Vázconez se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que se lo trasladó al hospital Castanier Crespo de la ciudad de Azogues para obtener un certificado médico, para posteriormente entregarle la boleta informativa. El señor Orlando Rodrigo Carangui Vázconez, debidamente asistido por el defensor público, al preguntarse sobre sus generales de ley, responde que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030113045-6, de 44 años de edad, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional, domiciliado en Güilchacapamba, parroquia Guapán, cantón Azogues; indica que en ningún momento se los llevó a ningún hospital para que se les haga prueba alguna, y que en el parque existe una cancha, por lo que acudieron ese día hacer deporte, cuando llegó la patrulla y les dijo que estaban tomando. Al interrogatorio formulado por el defensor responde: **1)** ¿Al momento en que llegó la policía, les informó por qué era la detención? Respuesta: Solo dijo era la denuncia; **2)** ¿En ese momento les entregó el documento? Respuesta: Nos dijo que subamos al vehículo y nos dirigieron a la Comandancia; **3)** ¿Qué tiempo transcurrió? Respuesta: Unas tres horas aproximadamente, hasta las once de las noche, en que nos dieron la boleta; **4)** ¿Le practicaron algún tipo de examen? Respuesta: Ese certificado médico es falso. No me hicieron ningún tipo de examen. A la pregunta formulada por la señora Jueza responde: **5)** ¿Cuántas personas estaban? Respuesta: Al principio había algunas, luego quedamos tres, teníamos una botella de agua. A solicitud de la defensa se llama como testigo al señor Oswaldo Cárdenas Latacela, el cual a sus generales de ley responde que los nombres y apellidos son los señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030096435-0, de 42 años de edad, de estado civil casado, de ocupación chofer, domiciliado en Guapán Güindilig del cantón Azogues. Al interrogatorio formulado por la defensa responde: **1.** ¿Puede relatarnos qué paso el

día viernes 6 de mayo de 2011 aproximadamente a las 19h40? Respuesta: Yo estaba en el parque de la cuchara con mis compañeros; **2.** ¿Qué tiempo estuvo? Respuesta: Unos quince minutos, desde las 16h30 a 17h45; **3.** ¿Qué estaban haciendo? Respuesta: Conversando. Al interrogatorio formulado por la señora Jueza responde **4.** ¿Usted era parte del grupo que estaban con el señor Carangui? Respuesta Sí; **5.** ¿Usted vio lo ocurrido? Respuesta: No, ellos me comentaron; **6.** ¿Le dijeron que estaban tomando? Respuesta: No, yo recuerdo que era otro grupo el que estaban tomando, quizá los policías se confunden; **7.** ¿El señor Carangui y los demás le comentaron que los llevaron al hospital? Respuesta: No, no me comentaron; **8.** ¿Sabe dónde está el hospital Homero Castanier Crespo? Respuesta: Sí; **9.** ¿Cuánto tiempo se hace en vehículo? Respuesta: Dos o tres minutos; **10.** ¿Le constan que estaban bebiendo? Respuesta: No. Acto seguido pasa en calidad de Testigo al señor Milton Hernán Palacios Álvarez, indicando que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, de 37 años de edad, de estado civil casado, de ocupación chofer; domiciliado en la calle Luis M. González frene al hospital Homero Castanier, en Azogues; al interrogatorio del la defensa responde: **a)** ¿Puede contarnos que sucedió el día 6 de mayo de 2011, a eso de las 19h00? Respuesta: Estábamos conversando en el parque de la cuchara hasta aproximadamente las 19h00; **b)** ¿Con quién estaba? Respuesta: Con el señor Carangui y otro más; **c)** ¿Qué estaban haciendo? Respuesta: jugando fútbol; **d)** ¿Supo que lo llevaron detenido? Respuesta: No. AL interrogatorio de la señora Jueza responde: d) ¿De lo que conversaron le consta que estaban bebiendo? Respuesta: No; **e)** ¿Se enteró que los llevaron al hospital? Respuesta: No. El Ab. Víctor Sarmiento manifiesta que de la versión rendida por su defendido, se evidencia que no existe prueba alguna, por lo cual impugna el certificado médico anexado, que se violó el procedimiento por no haberse entregado la boleta en el lugar y tomando en cuenta el principio de inocencia se absuelva a su defendido. Acto seguido la señora Jueza pregunta al agente de policía si desea aclarar lo dicho, a lo cual responde que la demora en la entrega de las boletas es porque mi subteniente Julio Larco tenía las boletas, por ello se lo trasladó a la prevención, además se trasladó por disposición de la central radio por la denuncia de los moradores que algunas personas se encontraban libando. La señora jueza pregunta cómo se dio cuenta que estaban libando, respondiendo que se les encontró una botella de Zhumir. El defensor público pregunta quién llenó la boleta, responde que fue el subteniente Larco, el firmó y yo hice el parte. En su alegato final el Ab. Víctor Sarmiento indica que se tome en cuenta que es un superior el que le entrega la boleta y no el agente aquí presente, quién debió haberlo hecho y no otra persona.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, señala que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando lo expuesto en la audiencia a la luz de las normas enunciadas se corrobora el testimonio del sargento de policía Braulio Rivadeneira, no solamente porque se ha reconocido el contenido del parte y boletas informativas, sino también porque en el expediente consta un certificado médico en el que se indica que el presunto infractor se encontraba con aliento a licor. Este documento ha sido firmado por la Dra. Ana Garate, médica general del Hospital Homero Castanier, casa de salud a la cual ha sido conducido el señor Orlando Carangui, para que un profesional de la salud verifique la ingesta de bebidas alcohólicas. El contenido del parte, la boleta informativa, el testimonio del señor policía y el contenido del certificado médico, constituye elementos de convicción suficientes para señalar que el señor Orlando Rodrigo Carangui Vásconez, ha infringido el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **ORLANDO RODRIGO CARANGUI VÁZCONEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 030113045-6, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0260-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 07 de marzo de 2012, a las 17h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copia simple de la credencial del señor sargento segundo de policía, Braulio Rivadeneira; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor; copia de la cédula de ciudadanía del señor Segundo Oswaldo Cárdenas y copia de la licencia de conducir el señor Milton Hernán Palacios Álvarez, en calidad de testigos.

De acuerdo al sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte de señor **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0260-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, siendo sus fallos de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento por cometimiento de infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, se señala que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 19H40, en el parque de la unidad nacional, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008082-2011-TCE, al señor **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030140888-6, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 4).

b) Mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos, la Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008082-2011-TCE, (fs. 1 a 5).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 6).

d) El 11 de enero de 2012, a las 12h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA**, con domicilio en el barrio Virga Pamba, cantón Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día martes 06 de marzo de 2012 a las 11h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 7 y 7 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumplimiento con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) Al señor **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA,** se lo citó en su domicilio, recibió la citación la señora Tania Lozada, amiga del presunto infractor, el día jueves diecinueve de enero 2012, a las 15h00, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 11).

b) Al sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, se le notificó en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00, conforme consta a fojas 9 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició al Coordinador/a de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Andrea Espinoza Pinos (fs. 8).

d) El 06 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030140888-6, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 06 de marzo de 2012 a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se contó con la presencia del presunto infractor y del defensor público.

b) De la audiencia, se destaca lo siguiente: Se lee el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden y se concede la palabra al sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, quien manifestó: Que ese día se encontraba de patrullaje y que por disposición de la central de radio se dirigió al parque de la Unidad Nacional, donde constató que el señor Rodolfo Fernando Siguencia Espinoza, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, razón por la cual se le trasladó al hospital Homero Castanier de la ciudad de Azogues, con la finalidad de que se le extendiera un certificado médico y posteriormente se le trasladó a la prevención para entregarle la boleta. Al interrogatorio formulado por la señora jueza respondió: **1)** ¿En el momento que usted le entregó la boleta, observó que alguien le acompañaba? Respuesta: Estaban tres personas, el ciudadano que estuvo aquí en la audiencia a las nueve de la mañana en la anterior audiencia y el otro ciudadano que conozco que se presenta a las quince horas; **2)** ¿A dónde les llevo a las tres personas? Respuesta: Primero les trasladé la hospital y luego a la prevención, allí se les dio las boletas a cada uno. A continuación la señor Jueza procedió a receptar el testimonio del señor Rodolfo Fernado Siguencia Espinoza, debidamente asistido por su defensor público, a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son las ya señalados, ecuatoriano, de 35 años de edad, de estado civil casado, chofer de taxi, con domicilio en el barrio Virgenpamba de la ciudad de Azogues; que en cuanto a los hechos que se le acusa indicó que ese día habían jugado un partido de futbol, al terminar se quedó conversando, y que en su poder tenían una botella de güitig. A la pregunta formulada por la señora jueza respondió: **1.** ¿Habían otras personas? Repuesta: Sí, bastantes personas entre ellos niños; **2.** ¿Qué pasó cuando llegó la policía? Respuesta: Nos dijeron que estábamos bebiendo y que subamos al patrullero, llegamos a la prevención y nos entregaron las boletas. Al interrogatorio de la defensa respondió, **3.** ¿A qué hora llegaron al parque? Respuesta: a eso de las cuatro o cinco de la tarde, nos pusimos a jugar y llegó la policía; **4.** ¿A dónde las trasladaron? Respuesta: Nos hicieron subir al patrullero y nos llevaron a la prevención. Al interrogatorio de la señora jueza respondió: **5.** ¿Recuerda si le llevaron al hospital? Respuesta: No, nos llevaron a ningún hospital, nos trasladaron directo a la prevención. A pedido de la defensa se llama como testigo al señor Segundo Oswaldo Cárdenas Latacela, quien al interrogatorio respondió: **a)** ¿Nos puede relatar lo sucedido el día 6 de mayo de 2011? Respuesta: Yo llegué como a las seis y media o cuarto para las siete de la noche; **b)** ¿Qué estuvieron haciendo? Respuesta: Estábamos conversando; **c)** ¿Qué actividad estuvieron haciendo? Respuesta: Estábamos conversando; **d)** ¿Usted sabe si fue trasladado a algún lugar? Respuesta: No, yo me retiré enseguida, no sé qué pasó. Al interrogatorio de la señora jueza respondió: **e)** Cómo así fue esa tarde? Respuesta: Pasé para conversar; **f)** ¿Es amigo de los señores? Respuesta: Sí; **g)** ¿Usted pudo observar que habían otras personas? Respuesta: Sí; **h)** Eran conocidas de ustedes? Repuesta: No.- Compareció a rendir testimonio a solicitud de la defensa el señor Milton Hernán Palacios Álvarez; quien al interrogatorio respondió: **1)** ¿Relate los hechos que se suscitaron el día viernes 6 de mayo de 2011? Respuesta: Yo estuve con ellos conversando, A eso de las seis y media a cuarto para las siete, me retiré; **2)** ¿Todo ese tiempo, estaban jugando? Respuesta; Sí hasta las seis y media estuvimos jugando fútbol; **3)** ¿Estuvieron tomando bebidas alcohólicas? Respuesta: No; **4)** ¿Conoce si los trasladaron a algún lugar? Respuesta: No. Me enteré al día siguiente; **5)** ¿Con frecuencia va al parque? Respuesta Sí; **6)** ¿Usted estuvo con los señores? Respuesta Si, allí vamos a conversar del trabajo; **7)** ¿Hasta la hora que usted estuvo, consumieron algún tipo de bebida alcohólica? Respuesta:

No; **8)** ¿Cuando se retiro había alguna botella de licor? Respuesta: No, nada. El Ab. Víctor Sarmiento en sus alegato manifestó, que como se escuchó a su defendido en ningún momento se lo llevó al hospital, por lo que impugna el parte policial y el certificado médico y pide que al momento de resolver se tome en cuenta el principio de inocencia y el hecho de que no existe prueba alguna sobre el cometimiento de la infracción.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

De acuerdo al artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Así mismo el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Aplicando las normas enunciadas a los hechos de la presente causa, podemos señalar que se ha corroborado lo afirmado en el parte y la boleta informativa, ya que dichos documentos han sido reconocidos por el sargento de policía Braulio Rivadeneira, quien al rendir su testimonio, ratifica que el señor Rodolfo Siguencia, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de otras dos personas. Al constar en el expediente el certificado médico que confirma lo informado por el señor policía, los testimonios rendidos no alcanzan a desvirtuar las pruebas presentadas, lo que nos conduce a considerar que el señor Rodolfo Fernando Siguencia Espinoza, ha cometido la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **RODOLFO FERNANDO SIGUENCIA ESPINOZA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030140888-6, en el cometimiento de la infracción prevista en el articulo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 485-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 07 de marzo de 2012.- Las 17h30**. VISTOS.-** Agréguese a los autos el Oficio No. 2012-721-CP-4 de 29 de febrero de 2012, suscrita por el Coronel de Policía de E.M Ab. Carlos Julio Logroño Varela, ingresado en este despacho.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,

determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 485-2011-TCE, seguida en contra del señor Ricardo Orlando Coronel Franco.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h36.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Oficio No. 2011-961-CCPNM-M, de 07 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Copia del Parte Informativo Nro. 5244, suscrito por el señor Lic. Fabary Montalvo Calderón, Mayor de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016692-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 09h00. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor Ricardo Orlando Coronel Franco. (fs. 10)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 07 de marzo de 2012, a las 16h00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Coronel Franco Ricardo Orlando acompañado por el Ab. Mendoza Castillo Alfredo, defensor público. No comparece el señor Mayor de Policía Fabary Montalvo, responsable de la entrega de la boleta informativa y de la elaboración del parte policial, pese a que fue oportunamente notificado, para concurrir a esa diligencia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público a nombre de su defendido expresó que de la revisión del expediente se infiere que sólo existe una boleta informativa, no existe una prueba suficiente para determinar la materialidad de la infracción. Adicionalmente el policía que entregó la boleta no se encuentra presente en la audiencia, por lo que solicitó que se le declare en rebeldía, y que se confirme la inocencia de su defendido.

b) En la presente audiencia conforme se observa del acta que se encuentra incorporada en el expediente, no acudió a esta diligencia el Mayor de Policía por tanto no se pudo contar con su versión sobre los hechos que constan en el parte policial que obra dentro del expediente. Por todo lo expuesto en la audiencia, se colige que no existen pruebas suficientes e inequívocas sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor Ricardo Orlando Coronel Franco, el día 07 de mayo de 2011, en la ciudad de Manta.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor Ricardo Orlando Coronel Franco**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Ricardo Orlando Coronel Franco, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo Enrique, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 576-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 07 de marzo de 2012, las 17H45. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia , con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja, jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno, jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012. - **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 574-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-034618-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Nelson Ernesto Chávez Delgado; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Nelson Ernesto Chávez Delgado, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, aparece que el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-034618-2011-TCE al ciudadano de nombres Nelson Ernesto Chávez Delgado por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12H10, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Nelson Ernesto Chávez Delgado, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, calle tamarindos; señalando para el día miércoles siete de marzo de 2012, a las 16h30, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11H 05, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de citar al señor Nelson Ernesto Chávez Delgado. (7)

h) Providencia de fecha 14 de febrero de 2012; las 12h25, que en parte pertinente dice que ante la imposibilidad de citar al presunto infractor Nelson Ernesto Chávez Delgado, y de conformidad con el articulo 85 inciso final del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, se proceda a citarlo por la prensa.(8)

i) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

j) Extracto de citación por la prensa, publicado en el diario el Telégrafo de fecha 24 de Febrero de 2012, edición número 46330, página 23

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.10, 11)

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12,13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-
Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-34618-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Nelson Ernesto Chávez Delgado ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día miércoles 07 de marzo de 2012 a las 16h40, esto es diez minutos después de la hora señalada, por cuanto el presunto infractor no compareció a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales.- En representación del presunto infractor comparece el Defensor Público Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola, como también el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 034618-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó: "Me Ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa elaborados por mi persona, reconozco mi firma y rubrica, respecto de los hechos y no tengo nada más que añadir, todo consta en el parte informativo";.- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción, tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión

proporcionada por parte del abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quién manifestó: "Solicito se analice la situación jurídica de mi representado, y que se mantenga la presunción de inocencia al momento de dictar el fallo, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador y que la carga de la prueba de la supuesta infracción le corresponde al Agente de Policía que elaboró la boleta informativa".- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso ,es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal, que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Nelson Ernesto Chávez Delgado portador de la cédula de ciudadanía número. 120381517-8- **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Nelson Ernesto Chávez Delgado, sin embargo de que se considera como un agravante la no comparecencia del presunto infractor a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, a pesar de haber sido citado en legal y debida forma por medio de la prensa, pero no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia de la ciudadano Nelson Ernesto Chávez Delgado de la cédula de ciudadanía número 120381517-8

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra Nelly Cevallos Borja Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 07 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0261-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 07 de marzo de 2012. Las 18h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en su calidad de defensor público; copia simple de la credencial del señor sargento segundo de policía, Braulio Rivadeneira; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor; copia de la licencia del señor Milton Hernán Palacios Álvarez y de la cédula de ciudadanía del señor Segundo Oswaldo Cárdenas Latacela, en su calidad de testigos.

En lo principal, en el sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0261-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y para sancionar por vulneración de normas electorales siendo sus fallos son de última instancia, de conformidad con lo que establece el artículo 217, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) De acuerdo con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular.

c) La ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en su artículo 72 inciso tercero y cuarto, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral, está en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, si se recibe la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011, está previsto el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales.

Las normas enunciadas determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el sargento segundo de policía, Braulio Rivadeneira, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 19H40, en el parque de la unidad nacional, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008083-2011-TCE, al señor **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030130609-8, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 4).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008081-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo del año dos mil once a las catorce horas con seis minutos (fs. 1 a 5).

c) En el Tribunal Contencioso Electoral, se sorteo la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas con seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 6).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 13h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA**, con domicilio en la ciudadela Cantos, ciudad de Azogues, provincia del Cañar; se señala que el día martes 06 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 7 y 7 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

De acuerdo con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA,** fue citado en su domicilio, recibió la citación la señora Tania Lozada, esposa del presunto infractor, el día jueves diecinueve de enero de 2012, a las 15h50 minutos, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 11).

b) Con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012, a las 16h00 (fs. 9).

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Ab. Víctor Sarmiento Garzón, en calidad de defensor público (fs. 8).

d) El día y hora señalados, esto es el martes 06 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030130609-8, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 06 de marzo de 2012 a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues. Se contó con la presencia del presunto infractor y del defensor público.

b) De lo señalado en la audiencia, se desprende lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al sargento segundo de policía Braulio Rivadeneira, quien manifestó: Que ese día se encontraba de patrullaje y que por disposición de la central de radio se dirigió al parque de la Unidad Nacional, en el que se encontró que el señor José Antonio Lozano Siguencia, se hallaba ingiriendo bebidas alcohólicas, razón por la cual se le trasladó al hospital Homero Castañer Crespo de la ciudad de Azogues, con la finalidad de que se le examine y se le extienda un certificado médico; posteriormente se le trasladó a la prevención para entregarle la boleta No. 8083-2011-TCE. La señora Jueza realizó las siguientes preguntas: **1)** ¿Hubo algún incidente? Respuesta: No; **2)** ¿Cuántas personas se encontraban? Respuesta: Se encontraban tres, el señor que está aquí más los dos ciudadanos que estuvieron en las audiencias de la mañana; **3)** ¿Pudo usted notar alguna manifestación por la cual afirma estaban tomando bebidas alcohólicas? Respuesta: Se encontraban con aliento a licor y con una botella que quedó como evidencia. El señor José Antonio Lozano Siguencia, debidamente asistido por el defensor público manifestó que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030130609-8, de 40 años de edad, de estado civil casado, de ocupación chofer, domiciliado en la ciudadela Cantos, en la calle Molina s/n de la ciudad de Azogues; en cuanto a los hechos señaló que ese día fueron a jugar un partido de voley, como se había perdido alzaron la voz y los moradores llamaron a la policía, que estaban conversando y tomando agua, luego había llegado la policía y los subieron al patrullero y los llevaron a la prevención. Al interrogatorio de la señora jueza respondió: **1)** ¿Cuando fue la policía estaban allí las personas contra las que jugaban? Respuesta: No, ya se fueron; **2)** ¿Habían otras personas? Respuesta: Sí, había más gente y niños. Al interrogatorio de la defensa respondió: **3)** ¿Qué actividad estaban haciendo? Respuesta: Estuvimos jugando, hubo una discusión, alzamos la voz y cuando estábamos por irnos llegó la policía; **4)** ¿Les dijeron algo? Respuesta: No, solo nos dijeron que subamos, porque habían recibido una llamada de que estábamos haciendo problema; **5)** ¿Se les hizo alguna prueba? Respuesta: No, yo les pedí que me hagan pero no nos hicieron. A pedido de la defensa se llama como testigo al señor Milton Hernán Palacios Álvarez, el cual a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030138278, de 37 años de edad, de estado civil casado, de ocupación chofer, domiciliado en la calle Luis M. González de la ciudad de Azogues; al interrogatorio de la defensa respondió: **1.** ¿Relate cómo fueron los hechos que se dieron el 6 de mayo de 2011, un día antes de las elecciones? Respuesta: Yo llegué unas dos horas antes a ver el partido. Cuando terminó nos quedamos conversando y a eso de las seis y media de la noche yo me retiré a mi casa y los demás se quedaron; **2.** ¿Vio que se quedaron consumiendo licor? Respuesta: No, estaban con una botella de agua; **3.** ¿Al momento que usted se disponía a retirarse, escuchó a sus amigos que iban a quedarse tomando bebidas alcohólicas? Respuesta: No, yo ya me fui; **4.** ¿Cuándo se enteró de lo que pasó? Respuesta: Al día siguiente. A continuación se procede a receptar el testimonio del señor Segundo Oswaldo Cárdenas; quien al interrogatorio de la defensa respondió: **a)** ¿Nos puede relatar que sucedió el día 6 de mayo de 2011? Respuesta: Yo pasaba por ahí y me quedé con ellos a conversar; **b)** ¿Cuándo estaba vio alguna anomalía? Respuesta: No, todo estaba normal; **c)** ¿Usted pudo ver si se quedaron tomando licor? Respuesta: No solo estaban tomando agua. A las preguntas de la señora jueza respondió: **d)** ¿Sus amigos le comentaron que fueron llevados al hospital? Respuesta: No, no me dijeron anda; **e)** ¿Se enteró que la policía dijo que estaban tomando porque había una botella? Respuesta: No, no supe nada. El Ab. Víctor Sarmiento Garzón en su alegato manifestó que de la versión de su defendido manifestó que no se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo cual impugna el certificado médico y el parte policial por ser ajenos a la realidad de los hechos y al no existir prueba pide que en sentencia se absuelva de la infracción al señor José Antonio Lozano Siguencia.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En la audiencia el señor policía confirmó lo que señala el parte y la boleta informativa. En su testimonio se relata una clara versión circunstanciada de los hechos, lo que es corroborado por la presencia del certificado médico que señala la existencia de aliento a licor, lo que es una manifestación del consumo de bebidas alcohólicas, prueba por demás contundente que no alcanza a ser desvirtuada por los testimonios rendidos. Analizando la prueba expuesta, a luz de la normas antes señaladas, consideramos que hay elementos de convicción suficientes de que el señor José Antonio Lozano Siguencia, si cometió la infracción contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **JOSÉ ANTONIO LOZANO SIGUENCIA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030130609-8, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral

Certifico.- Azogues, 07 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 574-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 07 de marzo de 2012, las 18H00. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia, con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 574-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-034099-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Pedro Ismael Espinoza Quinto; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de jueves 24 de marzo de 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 85 a 88 . Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las quince horas con once minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Pedro Ismael Espinoza Quinto; 1 parte informativo y 2 Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-034099-2011-TCE al ciudadano de nombres Pedro Ismael Espinoza Quinto por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y siete de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 11h50, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Pedro Ismael Espinoza Quinto, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, avenida centenario; señalando para el día miércoles siete de marzo de 2012, a las 10h30, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2012, a las 11h00, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación de la Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Andrés Paredes Paredes, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de citar al señor Pedro Ismael Espinoza Quinto. (7)

h) Providencia de fecha 14 de febrero de 2012; las 12h20, la cual en parte pertinente manifiesta, que ante la imposibilidad de citar al presunto infractor Pedro Ismael Espinoza Quinto; y de conformidad con el artículo 85 inciso final del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, se proceda a citarlo por la prensa. (8)

i) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 6)

j) Extracto de citación por la prensa, publicado en el diario el Telele grafo de fecha 24 de Febrero de 2012, edición número 46330, página 16.

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas. 10, 11).

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: “Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso”; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.”

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-34099-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Pedro Ismael Espinoza Quinto quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa, suscritas por el agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audicencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día miércoles 7 de marzo de 2012 a contancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dospone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales.- En representación del presunto infractor comparece el Defensor Público Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola, compareció también el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 034099-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que “toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella”.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, el que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo la Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemas, quien manifestó "Me Ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa elaborados por mi persona, reconozco mi firma y rubrica, respecto de los hechos, no tengo nada más que añadir, todo consta en el parte informativo";.- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos, que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción,. tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho con concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quién manifestó: "Solicito se analice la situación jurídica de mi representado, y que se mantenga la presunción de inocencia al momento de dictar el fallo, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador".- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso, es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (...) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Pedro Ismael Espinoza Quinto portador de la cédula de ciudadanía número 091212454-2.- **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad

del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso eñ agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presuno infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Pedro Isamel Espinoza Quinto, sin embargo de que se considera como un agravante la no comparecencia del presunto infractor a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento; a pesar de haber sido citado el legal y debida forma por medio de la prensa, pero no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Pedro Ismael Espinoza Quinto de la cédula de ciudadanía número 091212454-2

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil07 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0277-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 08 de marzo de 2012. Las 10h00.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la Ab. Andrea Espinoza Pinos, en su calidad de defensora pública; copia simple de la credencial del señor sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte de señor **FABIÁN PATRICIO CARRERA CORONEL**. Esta causa ha sido identificada con el número 0277-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217, en concordancia con los artículos 167, 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de norma electorales.

b) Para el 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,

c) El artículo 72 inciso tercero y cuarto de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde llevarlo adelante en la primera instancia a una de las juezas o jueces, por sorteo; y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El sargento segundo de policía, Luis Peñafiel Peñafiel, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, suscribe el parte informativo, en el consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 23h30, en la calle Ramón Borrero (frente a la escuela Mariana de Jesús), se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-007621-2011-TCE, al

señor **FABIÁN PATRICIO CARRERA CORONEL**, portador de la cédula de ciudadanía número 030161986-2, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) El referido parte y la boleta informativa No. BI-007621-2011-TCE fueron remitidos por la Delegación Provincial Electoral del Cañar, al Tribunal Contencioso Electoral, mediante oficio No. 081-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día miércoles once de mayo de dos mil once, a las quince horas y quince minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral procede a sortear la causa el día miércoles once de mayo del año dos mil once a las quince horas y quince minutos, y a la suscrita jueza le corresponde el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 11 de enero de 2012 a las 14h00 se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **FABIÁN PATRICIO CARRERA CORONEL**, con domicilio en Nar-Cañar, provincia del Cañar; se señala que el día miércoles 07 de marzo de 2012 a las 11h00 se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para cumplir con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **FABIAN PATRICIO CARRERA CORONEL,** fue citado en su domicilio, recibió la citación la señora Gabriela Vanoni Quintero, madre del presunto infractor, el día 19 de enero de 2012 a las 11h30, conforme se desprende de la razón de citación sentada por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10).

b) Con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 18 de enero de 2012 a las 16h00, conforme consta a fojas 8 del proceso.

c) Con fecha 16 de enero de 2012, y con oficio No. 003-SMM-P-TCE se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Andrea Espinoza Pinos, en calidad de defensora pública (fs. 7).

d) El miércoles 07 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **FABIÁN PATRICIO CARRERA CORONEL,** portador de la cédula de ciudadanía número 030161986-2, de acuerdo a los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 07 de marzo de 2012 a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Fabián Patricio Carrera Coronel, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, ya que se contó con la presencia de la defensora pública. Se leyó el parte policial de la causa, y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel, quien manifestó: Que el 6 de mayo de 2011 se encontraba de patrullaje y control y que al pasar por la calle Ramón Borrero de esa ciudad, a las 11h30 de la noche el señor Fabián Carrera se encontraba libando por lo que se le extendió la boleta informativa. Al interrogatorio de la señora Jueza respondió: **1)** ¿Cómo usted se percató que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Porque el señor estaba afuera en la calle junto a un vehículo, no estaba conduciendo, me acerqué y me topé con la novedad que tenía bebidas alcohólicas y tenía aliento a licor; **2)** ¿Qué tipo de licor era? Respuesta: cerveza; **3)** ¿Hubo algún tipo de incidente al entregarle la boleta? Respuesta: No, voluntariamente dijo que aceptaba que estaba libando y recibió la boleta. La Dra. Andrea Espinoza Pinos, en su calidad de defensora pública del señor Fabián Patricio Carrera Coronel manifestó: Que era inconstitucional que se juzgue a una persona en ausencia, que en este caso su defendido no puede dar su versión, para saber que ocurrió; acto seguido procedió a interrogar al sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel, quien respondió: **1.** ¿En dónde presta sus servicios? Respuesta: En la UPC de Tambo; **2**. ¿Dónde se encontraba el vehículo? Respuesta: Estaba en la calle frente a la escuela Mariana de Jesús; **3.** ¿Mi defendido estaba solo? Respuesta: Sí. En su alegato final expresó que se tome en consideración lo manifestado por el señor policía, que su defendido se encontraba solo, por lo que no pudo haber estado consumiendo bebidas alcohólicas y que al no existir prueba que determine el estado etílico, solicitó se declare inocente al señor Fabián Carrera Coronel.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

De acuerdo con el artículo 123 del Código de la Democracia, durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. El artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título Cuarto del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

A la luz de estas normas y analizando los hechos de la presente causa, es claro que el testimonio del sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel, quien reconoce el contenido del parte y boleta informativa, no ha sido desvirtuado por los alegatos de la abogada de la defensa. La ausencia del presunto infractor pese a estar citado en legal y debida forma, no permite replicar la afirmación del señor policía que él personalmente constató que el presunto infractor tenía bebidas alcohólicas y aliento a licor. La norma del Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas; la ingesta de estas bebidas, tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, la afirmación del sargento segundo de policía Luis Peñafiel Peñafiel, nos conduce a determinar que el señor Fabián Patricio Carrera Coronel tiene responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **FABIAN PATRICIO CARRERA CORONEL**, portador de la cédula de ciudadanía número 030161986-2, en el cometimiento de la infracción prevista en el articulo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral del Cañar del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0264-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Azogues, 08 de marzo de 2012. Las 10h30.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Ab. Milton Eduardo Lligui Ortega, en su calidad de abogado defensor; copia simple de la credencial del señor suboficial segundo de policía José Ruiz Saqusilí; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor y copias simples de las cédulas de ciudadanía de los señores Pablo Genaro Lligui Quintuña y Urbio Alfonso Beltrán Abad, en su calidad de testigos.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0264-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas por vulneración de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular; de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales, se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el suboficial segundo de policía José Ruiz Saqusilí, perteneciente al Tercer Distrito, Plaza de Azogues, consta que el día sábado 7 de abril de dos mil once, a la 01h3, en la parroquia Guapán-sector Guapán Centro, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-008233-2011-TCE, al señor **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030110254-7, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral del Cañar, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-008233-2011-TCE, mediante oficio No. 079-CNE-DPC-D de 9 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes 10 de mayo de dos mil once, a las catorce horas y seis minutos (fs. 1 a 4).

c) El Secretario General (E) del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las catorce horas y seis minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 17 de enero de 2012, a las 11h30, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA**, con domicilio en Guapán, parroquia Guapán, provincia del Cañar; se señala que el día miércoles 07 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Cañar, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contempladas en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA,** no pudo ser citado en la dirección descrita en la boleta informativa, conforme se desprende de la razón sentada el día viernes veinte de enero del dos mil doce, a las nueve horas, por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral, (fs. 10); por lo que mediante auto de 31 de enero de 2012, a las 12h00, se dispone la citación por la prensa. Tal citación se publica en el Semanario "El Espectador" de 18 de febrero de 2012, conforme consta a fojas 16 del expediente; en ella se le hace conocer al presunto infractor que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa, concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señala, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia del Cañar.

b) El suboficial segundo de policía José Ruiz Saqusilí, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía del Cañar No. 15, el día miércoles 01 de febrero de 2012 a las 13h00, conforme consta a fojas 13 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 31 de enero de 2012, y con oficio No. 012-SMM-P-TCE-2012 se ofició a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Cañar, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Ab. Andrea Espinoza Pinos, en calidad de defensor público (fs. 14).

d) El día y hora señalados, esto es el miércoles 07 de marzo de 2012, a partir de las 15h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA,** portador de la cédula de ciudadanía número 030110254-7, de acuerdo a los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 07 de marzo de 2012 a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Cañar, ubicada en las calles Alberto Sarmiento y David Mogrovejo de la ciudad de Azogues, se contó con la presencia del presunto infractor y del abogado defensor.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: Una vez leído el parte policial de la causa, cuyo contenido es reconocido por el agente del orden, se concedió la palabra al suboficial segundo de policía José Ruiz Saqusilí, quien manifestó: Que se ratifica en el contenido del parte en su integridad, en donde consta el motivo, la hora, el día en el que fue entregada la boleta por alterar el orden público conjuntamente don dos personas más. El señor Luis Jacinto Guallpa Guallpa, debidamente asistido por su abogado defensor, a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 030110254-7, de 43 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación albañil, domiciliado en la parroquia Guapán, sector Guapán Centro, cantón Azogues; en cuanto a los hechos indicó que la noche del 6 de mayo se encontraba trabajando hasta la media noche en la fundición de una loza, la dueña de la casa les había invitado a una merienda, la cual se había alargado hasta las primeras horas del día sábado y al dirigirse a su casa, cerca de la escuela Bartolomé Serrano, vio que había una pelea, se acercó a ver qué pasaba, en eso llegó la policía y lo involucraron diciéndole que estaba bebiendo y que hacía escándalo, los que habían protagonizado la pelea salieron corriendo y se quedaron tres personas; y que lo habían llevado detenido soltándolo cerca de las cinco de la tarde. Al interrogatorio formulado por la señora jueza respondió: **1)** ¿A usted le detuvieron por una pelea? Respuesta: Sí, lo que pasó es que yo me acerqué a donde estaban peleando y mis compañeros se quedaron atrás; **2)** ¿En qué lugar fue la pelea? Respuesta: Por atrás de la escuela Bartolomé Serrano; **3)** ¿Usted no estaba en la discusión? Respuesta: No, yo solo me acerqué a ver qué pasaba y en eso llegó la policía, yo no tenía por qué correr, yo no estaba tomando ni nada y aún así me involucraron; **4)** ¿Qué hora era? Respuesta: La una de la madrugada más o menos; **5)** ¿Las personas que peleaban eran conocidas? Respuesta: Eran de otro grupo y estaban bebiendo, no eran mis amigos yo no los conocía; **6)** ¿En dónde les detuvieron? Respuesta: En la escuela Bartolomé Serrano; **7)** ¿A dónde les condujeron? Respuesta: Al comando de policía y ahí amanecimos; **8)** ¿A qué hora le llevaron a la intendencia? Respuesta: A eso de las tres o cuatro de la tarde; **9)** ¿Usted voto? Respuesta: No me dieron oportunidad; **10)** ¿Cuánto fue el valor de la multa? Respuesta: 28 dólares; **11)** ¿A qué hora le dieron la libertad? Respuesta: Luego de lo que nos llevaron a la Intendencia nuevamente me llevaron al calabozo y a eso de las cinco de la tarde me sacaron. Se procede a receptar el testimonio del señor Urbio Alfonso Beltrán Abad, quien a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya señalados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 0300472982, de 56 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación albañil, domiciliado en la parroquia Guapán Centro; al interrogatorio de la defensa respondió: **1.** ¿Diga usted si conoce al señor Luis Jacinto Guallpa Guallpa? Respuesta: Sí; **2.** ¿Qué hizo en la madrugada del día 7 de mayo de 2011. Respuesta: Estaba trabajando con él; **3.** ¿Cuando ustedes salieron, qué ocurrió en ese lapso de trabajo a su casa? Respuesta: Encontramos a unos policías y aquí el señor se acercó a ver lo que pasaba y luego le llevaron detenido; **4.** ¿Nos puede decir si el señor se encontraba en estado de embriaguez? Respuesta: No. A continuación se procede a receptar la versión del señor Pablo Genaro Lligui Quintuña, quien a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya indicados, portador de la cédula de ciudadanía No. 030158881-0, de 33 años de edad, de estado civil casado, domiciliado en Guapán Centro, de ocupación chofer de camioneta; al interrogatorio de la señora jueza respondió: **1)** ¿Esa noche ingirieron bebidas alcohólicas? Respuesta: No; **2)** ¿Cuando se encontraron con los policías, usted vio alguna botella de licor? Respuesta: No; **3)** ¿Cuando la policía le detuvo a su amigo, por qué no lo detuvo a usted también? Respuesta: No sé; **4)** ¿Usted vio que se lo llevaron? Respuesta: Sí. Al interrogatorio de la defensa respondió: **5)** ¿Conoce usted al señor Luis Guallpa Guallpa? Respuesta: Si; **6)** ¿Qué hizo la noche del día 6 de mayo y la madrugada del día sábado 7 de mayo? Respuesta: Estábamos trabajando haciendo una loza; **7)** ¿Cuando terminaron, puede relatar qué ocurrió? Respuesta: Nos íbamos a la casa, y al pasar por la Escuela Bartolomé Serrano vimos que había unos sujetos peleándose y después llegó la policía. El señor se acercó y le llevaron detenido; **8)** ¿Usted vio que estaba bebido o que ingirió bebidas alcohólicas? Respuesta: No, no estaba. Al interrogatorio de la señora jueza respondió: **9)** ¿Usted puede decir si esa noche el señor Luis Jacinto Guallpa Gualpa estaba en estado etílico? Respuesta: No, para nada; **10)** Cuando paso ese incidente, llevaban alguna botella? Respuesta: No, nosotros estábamos pasando por ahí; **11)** ¿Por qué no le detuvieron a usted también? Respuesta: No sé, él se fue a ver si podía ayudar. El Ab. Milton Eduardo Lligui Ortega, en su calidad de abogado defensor manifestó que de las versiones rendidas se ha probado que su defendido no estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas o en estado etílico por lo que solicita se absuelva a su defendido por ser inocente.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el

consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas, el testimonio del suboficial segundo de policía José Ruiz Saqusilí y el contenido del parte y de la boleta informativa reconocidos por él, no pueden ser corroborados en la audiencia, toda vez que de la declaración del presunto infractor y los testimonios de los testigos se establece que no se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas; además, se señala que fue detenido hasta el día siguiente y por una falta ajena a la ley electoral, y que además fue llevado ante el intendente, procesado y multado, procedimiento no contemplado en el Código de la Democracia. En el presente caso la sola versión del policía no constituye un elemento de convicción suficiente para señalar que el señor Luis Jacinto Guallpa Guallpa haya cometido la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, y ante la duda, se impone aplicar el principio "indubio pro reo".

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **LUIS JACINTO GUALLPA GUALLPA**, portador de la cédula de ciudadanía número 030110254-7.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Azogues, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 578-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 08 de marzo de 2012, las 12H30. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia , con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012. - **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 578-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033950-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Pablo David Arana Muñoz; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en

materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las doce horas con cuarenta y seis minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Pablo David Arana Muñoz, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033950-2011-TCE al ciudadano de nombres Pablo David Arana Muñoz por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12h30, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Pablo David Arana Muñoz, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, sector denominado Guajalo; señalando para el día jueves ocho de marzo de 2012, a las11H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11H50, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de citar al señor.Pablo David Arana Muñoz (foja 7)

h) Providencia de fecha 14 de febrero de 2012; las 12h10, que en parte pertinente dice que ante la imposibilidad de citar al presunto infractor. Pablo David Arana Muñoz y de conformidad con el articulo 85 inciso final del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, se proceda a citarlo por la prensa. (8)

i) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

j) Extracto de citación por la prensa, publicado en el diario el Telégrafo de fecha 24 de Febrero de 2012, edición número 46330, página 14.

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.10, 11)

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12,13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en

ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33950-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Pablo David Arana Muñoz quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día jueves 08 de marzo de 2012 a las 11H20. El presunto infractor no compareció a esta audiencia, dejándose constancia de este hecho, por lo cual la señora Jueza dispone se proceda a juzgarlo en rebeldía, de conformidad con el Art. 251 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y Art. 87 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales.- En representación del presunto infractor comparece el Defensor Público Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola, compareció también el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033950-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó "Me Ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa elaborados por mi persona, reconozco mi firma y rubrica, respecto de los hechos, no tengo nada más que añadir, todo consta en el parte informativo";.- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción,. tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quién manifestó: "A nombre y representación de mi defendido señor Pablo David Arana Muñoz Invoco el Carta Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica articulo 8 numeral 9 y artículo 76 numeral 2 de la constitución de la República del Ecuador, a fin de que se presuma su inocencia al momento al momento de emitir su pronunciamiento señora Jueza".- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso ,es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Pablo David Arana Muñoz portador de la cédula de ciudadanía número 091908656-1 .**-c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Pablo David Arana Muñoz, sin embargo de que se considera como un agravante la no comparecencia del presunto infractor a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento; a pesar de haber sido citado en legal y debida forma por medio de la prensa, pero no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Pablo David Arana Muñoz portador de la cédula de ciudadanía número 091908656-1

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 08 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 579-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, miércoles 08 de marzo de 2012, las 12H30. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, diriqido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia, con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a

vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 579-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033949-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Magno Manuel Bonilla Herrera; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las doce horas con cuarenta y seis minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Magno Manuel Bonilla Herrera, en base a los siguientes documentos: 1.-Parte informativo y 2.-Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033949-2011-TCE al ciudadano de nombres Magno Manuel Bonilla Herrera por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12h40, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Magno Manuel Bonilla Herrera, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, sector denominado calle María Clementina; señalando para el día jueves ocho de marzo de 2012, a las 15H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 12h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4),

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de citar al señor Magno Manuel Bonilla Herrera (foja 7).

h) Providencia de fecha 14 de febrero de 2012; las 12h10, que en parte pertinente dice que ante la imposibilidad de citar al presunto infractor. Magno Manuel Bonilla Herrera y de conformidad con el articulo 85 inciso final del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, se proceda a citarlo por la prensa (8).

i) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (foja 6).

j) Extracto de citación por la prensa, publicado en el diario el Telégrafo de fecha 24 de Febrero de 2012, edición número 46330, página 15.

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 10, 11).

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (...) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-033949-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Magno Manuel Bonilla Herrera quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (...) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, hoy jueves 8 de marzo de dos mil doce a las quince horas, con tres minutos. Al efecto, comparecieron el señor Magno Manuel Bonilla Herrera, en compañía del Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemas, portador de la cédula de ciudadanía número 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033949-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea tambiçen aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó "Reconozco mi firma y rubrica constante en el parte policial, así como en el contenido de la boleta informativa, no tengo nada más que añadir todo consta en el parte policial".- Al respecto esta Jueza, considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elemento al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción, tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del presunto infractor señor Magano Manuel Bonilla Herrea quien manifestó "Buenas Tardes, el día sábado 07 de mayo, iba pasando por el lugar y estaban tomando unos amigos me llamaron, entré al lugar porque además uno de ellos debía entregarme un teléfono, y de inmediato llegó la policía y el coronel cerró la puerta y dijo que todos íbamos detenidos, todavía no había tomado" y respecto de la versión proporcionada por el abogado Jimmy Delgado Barzola Defensor Público, quien manifestó: "La declaración de mi representado es clara, ya que quién ha ingresado a ese lugar por el lapso de dos minutos y medio a retirar un teléfono, no ha contravenido la ley seca" consecuentemente y, por las circunstancias expuestas solicito, que su versión se la tenga como atenuante, y además, debo mencionar que el agente no hace constatar evidencia alguna, que confirme los hechos, por lo tanto al momento de resolver, se tenga como prueba a favor, la versión rendida por mi representado, Es importante analizar la relación de los hechos que ha expuesto el agente, respecto de los cuales quiero preguntarle la razón por cual no actuó el señor Medina desde la primera vez que pasó por el lugar y presenció los hechos. Será acaso que no había gente en el lugar, y esperó que este se llenara, para hacerse presente?"

En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso, es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrase constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del seño Magno Manuel Bonilla Herrera portador de la cédula de ciudadanía No. 091908656-1.- **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso debe respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Magno Manuel Bonilla Herrera, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Magno Manuel Bonilla Herrera portador de la cédula de ciudadanía número 091908656-1

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc

4) CÚMPLASE Y NOTIFíQUESE.

f.) Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 08 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA No. 486-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 08 de marzo de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-** Agréguese a los autos el Oficio No. 2012-722-CP-4, de 29 de febrero de 2012, suscrito por el Ab. Carlos Julio Logroño Varela, Coronel de Policía de E.M Acc, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4., ingresado en este despacho el día 02 de marzo de 2012, a las 14h30.

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 486-2011-TCE, seguida en contra del señor Jorge Luis Zambrano Burgos.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h37.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Oficio No. 2011-961-CCPNM-M, de 07 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M, Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Copia del Parte Informativo Nro. 5245, suscrito por el señor Lic. Fabary Montalvo Calderón, Mayor de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016691-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 09h20. (fs. 8-8vlta)

g) Oficio no. 023-2012-J.AC-mfp-TCE de 13 de febrero de 2012, dirigido al señor Coronel de Policía de E.M Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 10)

h) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor Zambrano Burgos Jorge Luis. (fs. 10)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 08 de marzo de 2012, a las 08h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Jorge Luis Zambrano Burgos, acompañado del Ab. Mendoza Alfredo, Defensor Público; y la Ab. Jacqueline Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

No compareció el señor Mayor de Policía Fabary Montalvo, responsable de la entrega de la boleta informativa y del parte policial, pese a que fue oportunamente notificado para concurrir a esa diligencia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público intervino en nombre del señor Jorge Luis Zambrano Burgos y manifestó en lo principal que. **1.** No existen elementos de prueba que justifiquen la materialidad de la infracción y la responsabilidad de su defendido. **2.** Que no se ha practicado un examen de alcoholemia en el que se certifique el nivel de alcohol, que supuestamente tenía su defendido en la sangre. **3.** Que a la audiencia no acudió el agente de la policía. **4.** Que se confirme la inocencia de su defendido, al amparado de lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador.

b) Analizados los argumentos de la defensa así como toda la documentación que obra del expediente, en aplicación de las garantías del debido proceso, se considera que no existe prueba suficiente e inequívoca que determine la responsabilidad directa y principal del señor Jorge Luis Zambrano Burgos, en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por consumo de bebidas alcohólicas el día 07 de mayo de 2011.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor JORGE LUIS ZAMBRANO BURGOS**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Jorge Luis Zambrano Burgos, a través de su Ab Mendoza Castillo Alfredo Enrique, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 447-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 08 de marzo de 2012.- Las 17h10**. VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto

electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 447-2011-TCE, seguida en contra del señor Fidel Arturo Buenaventura Vera.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 12h58.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2188-CP-4, de 10 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Original del Parte elevado al Sr. Comandante Provincial de Policía Manabí No. 4, suscrito por el Sbte de Policía Tglo Silva Banda Iván Patricio. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015921-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 5)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 09h30. (fs. 7-7vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor Buenaventura Vera Fidel Arturo. (fs. 8)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 08 de marzo de 2012**,** a las 09h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Fidel Arturo Buenaventura Vera, acompañado del Ab. Mendoza Castillo Alfredo, Defensor Público; Ab. Alberto Macías Chilán, funcionario de la Defensoría del Pueblo, así como el señor Subteniente de Policía Iván Patricio Silva Banda.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) En la intervención del defensor público señaló como argumentos de defensa que: **1.** Que asumía la defensa del señor Fidel Arturo Buenaventura Vera, en cumplimiento del mandato constitucional y por así haber sido designado para esa diligencia. **2.** Que no existen elementos suficientes que demuestren cuál ha sido la infracción cometida por su defendido. **3.**, Que existe un examen de alcoholemia para establecer el grado de alcohol, ni se han presentado testigos en la audiencia, para demostrar el cometimiento de la presunta infracción. **4.** Que si bien es cierto que en la Audiencia, se encuentra presente el agente de la policía que entregó la boleta, su intervención no constituye una prueba principal. **5.** Que solicita se confirme la inocencia de su defendido por falta de prueba.

b) El señor Subteniente de Policía, en su intervención manifestó: **1**. Que en el proceso electoral de mayo de 2011, se encontraba como operativo en el cantón Flavio Alfaro, en la provincia de Manabí. **2.** Que mediante una llamada telefónica, le avisaron que en el sector de la Dolorosa, se encontraban unos sujetos libando**. 3**. Que entre estas personas se encontraba el señor Buenaventura Vera Fidel Arturo, al cual le informó que se encontraba infringiendo la ley, y que procedió a entregarle una boleta del Tribunal, solicitándole sus datos personales para llenar ese documento.

c) En el interrogatorio formulado al señor agente del orden, el señor Defensor Público preguntó en primer lugar al señor Subteniente de Policía qué hacía su defendido con otras personas, a lo que contestó el agente del orden que encontraba con unas botellas de cervezas y licor, que por ese motivo le indicó que se abstuviera de realizar ese acto. En una segunda pregunta, el Defensor Público, preguntó al señor Subteniente de Policía si tenía algún testigo, ante esta pregunta el señor Subteniente contestó que sus testigos eran los policías que se encontraban realizando el procedimiento. En una tercera pregunta respecto a si se le practicó al señor Buenaventura una prueba de alcoholemia, contestó el señor Subteniente que no realizó el examen, le bastó percatarse de su aliento alcohólico.

d) Con lo expuesto durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en donde las partes presentaron sus argumentos, analizados los documentos que obran de autos, en su conjunto se deduce que en la presente causa, no es posible determinar fehacientemente la responsabilidad del señor Fidel Arturo Buenaventura Vera, en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia por consumo de bebidas alcohólicas el día sábado 07 de mayo de 2011, en el cantón Flavio Alfaro, en la provincia de Manta.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor FIDEL ARTURO BUENAVENTURA VERA.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Fidel Arturo Buenaventura Vera, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 448-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo**,** 08 de marzo de 2012.- Las 17h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la

República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 448-2011-TCE, seguida en contra del señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 12h59.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM.(fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2188-CP-4, de 10 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Parte elevado al Sr. Comandante Provincial de Policía Manabí No. 4, suscrito por el Sbte de Policía Tglo Silva Banda Iván Patricio. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015922-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011.(fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 09h40. (fs. 7-7vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler. (fs. 8)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 08 de marzo de 2012, a las 10h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler, acompañado del Ab. Mendoza Castillo Alfredo; el Ab. Macías Chilan Alberto, funcionario de la Defensoría del Pueblo y el señor Subteniente de Policía Silva Banda Iván.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) En la intervención del señor público, en defensa del señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler, manifestó: **1.** Que de la revisión del expediente se observa que no se cumplen los requisitos para demostrar que se ha cometido una infracción electoral. **2.** Que no se practicó un examen de alcoholemia para verificar el grado de alcohol, en la sangre de su defendido antes de entregarle la boleta informativa. **3.** Que no existen testigos que corroboren la información del policía que suscribió el parte policial. **4.** Que si bien el

señor Subteniente ha concurrido a la audiencia, esto no debe ser considera como una prueba única y principal, para determinar la responsabilidad de su defendido. **5.** Que solicita se confirme la inocencia de su defendido.

b) En la intervención del señor Subteniente de Policía, en lo principal manifestó: **1.** Que en el dia de las elecciones, esto es el 07 de mayo de 2011, recibió una llamada telefónica, en la cual le avisaron que habían unas personas libando en el sector de la Dolorosa en el cantón Flavio Alfaro. **2.** Que una vez que llegó al lugar de los hechos, en ese sector se encontraban una cantidad de personas libando, con botellas de cervezas, a quienes se les entregó la boleta, entre ellas estaba el señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler. **3.** Que como no se los podía detener, porque existe una nueva reglamentación, se procedió a entregar la citación.

c) En el interrogatorio formulado al agente del orden por la defensa, el señor Subteniente de Policía manifestó que los únicos testigos que tenía eran los policías que le acompañaron en el operativo, y que no realizó ningún examen de sangre o de alcoholemia al ciudadano Wilmer Antonio Hidrovo Giler, que no es un especialista en este tema y afirmó que en su sector no se cuenta con los equipos necesarios para practicar este tipo de test.

d) Revisados los documentos que obran del expediente y por lo escuchado durante la audiencia oral de prueba y juzgamiento, se considera que en la presente causa, no se ha llegado a determinar fehacientemente la responsabilidad del señor Wilmer Antonio Hidrovo Giler, en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor WILMER ANTONIO HIDROVO GILER**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor WILMER ANTONIO HIDROVO GILER, a través de su Ab. Mendoza Castillo Alfredo, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 449-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 08 de marzo de 2012.- Las 17h40. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los

artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 449-2011-TCE.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 12h59.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2188-CP-4, de 10 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Parte elevado al Sr. Comandante Provincial de Policía Manabí No. 4, suscrito por el Sbte de Policía Tglo Silva Banda Iván Patricio. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015923-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011.(fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 09h50. (fs. 7-7vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar en persona al señor Jimy Alexander Cedeño Moreira. (fs. 8)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 08 de marzo de 2012, a las 14h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Jimy Alexander Cedeño Moreira, acompañado de la Ab. Enma Violeta Cedeño Vélez, defensora pública; la Ab. Jacqueline Pro Pro, Defensora del Pueblo; y el señor Subteniente de Policía Silva Banda Iván Patricio.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige en lo principal que:

a) El señor Jimy Alexander Cedeño Moreira, manifestó: **1.** Que él tiene su residencia en la ciudad de Quito, pero nació en el cantón Flavio Alfaro. **2.** Que fue a sufragar en Flavio Alfaro, que por la tarde un compañero lo invitó a su casa, pasó por una cancha. **3.** Que a esa cancha llegaron los policías, porque habían denunciado que ellos estaban realizando escándalo y bebiendo. **4.** Que manifiesta que no estuvo bebiendo, que no hizo nada, pero igual le entregaron la boleta. **5.** Que acudió en persona al Tribunal para recibir la citación.

b) La señora abogada de la Defensoría Pública expresó en defensa de su defendido: **1.** Que la Defensoría Pública interviene para cumplir lo dispuesto en la Constitución respecto al debido proceso. **2.** Que de la versión de su defendido y de la revisión del expediente queda claro que no existen los elementos probatorios necesarios para que su representado sea juzgado por un delito que no cometió. **3.** Que no existe nexo causal entre la responsabilidad y la materialidad del hecho imputado. **4.** Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, prima el principio de inocencia de su defendido. **5**. Que reitera el hecho de que no estaba correcto el nombre de su defendido en la boleta de citación sin embargo, existe la predisposición de su representado para asistir a la diligencia y aclarar los hechos, que esta es una señal más de su inocencia. **6.** Que solicita que a su defendido se lo declare inocente y exento de cualquier responsabilidad.

c) En la intervención del señor Subteniente de Policía este señaló que: **1.** Recibió una llamada telefónica en Flavio

Alfaro, mediante la cual se le hizo conocer que había moradores del barrio la Dolorosa que estaban libando. **2.** Que habían personas que tenía licor y cerveza, a las cuales les pidió sus documentos para proceder a citarlos, en razón que por las nuevas disposiciones no se podía detenerlos cuando vulneraran la ley seca, entre ellos el señor Cedeño.

d) En el interrogatorio formulado por la señora defensora pública, el señor Subteniente de policía contestó que las personas que se encontraban en el lugar donde se realizó el operativo eran aproximadamente cuatro o cinco personas, las cuales estaban reunidos conversando y con botellas de cervezas. Manifestó que lleva en la policía unos seis años. Y que no hizo el examen de alcohotest porque no hay equipo y sabe que cuando se detecta que una persona ha bebido debe practicársele ese examen.

e) En el presente juzgamiento, esta Jueza, dejó sentada en el acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, que se produjo un error con el apellido del presunto infractor, señalándose que el correcto es Jimy Alexander Cedeño Moreira y no Jimy Alexander Moreira Cedeño como por error involuntario constaba en la razón de ingreso de la causa efectuada por la Secretaría General de este Tribunal.

f) En aplicación de las garantías del debido proceso, se considera que no existen elementos probatorios suficientes e inequívocos para determinar que el señor Jimy Alexander Cedeño Moreira hubiere cometido la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor JIMY ALEXANDER CEDEÑO MOREIRA**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Jimy Alexander Cedeño Moreira, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral

Certifico, Portoviejo, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 577-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. - Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, jueves 08 de marzo de 2012, las 16H30. Agréguese al expediente, el memorando número 022-2012-VP-TCE, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; mediante el cual la Dra. Amanda Páez Moreno Jueza Vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, solicita licencia , con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 al jueves 08 de marzo de 2012 ; el oficio N.0 026-2012-SG-TCE; suscrito por el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual comunica a la Dra. Nelly Cevallos Borja jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral, el reemplazo en actividades administrativas y jurisdiccionales a la Doctora Amanda Páez Moreno; jueza principal del Tribunal Contencioso Electoral, en razón que hará uso de una licencia con cargo a vacaciones entre los días lunes 05 de marzo de 2012, a jueves 08 de marzo de 2012.- **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 577-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-034619-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Luis Alfonso Gordillo Ramírez; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas.".- Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, el Tribunal Contencioso

Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo del 2011, señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha del cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las 12H46, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano de nombres Luis Alfonso Gordillo Ramírez; en un Parte informativo y una Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, aparece que el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-034619-2011-TCE al ciudadano de nombres Luis Alfonso Gordillo Ramírez, por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12h20, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Luis Alfonso Gordillo Ramírez en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, en las calles Pedro y Montero; señalando para el día jueves ocho de marzo de 2012, a las 09h00, para que comparezca a la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11H10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la cual certifica haber citado por interpuesta persona al señor. Luis Alfonso Gordillo Ramírez (Foja 7)

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.08, 09)

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 10,11)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales a ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-34619-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Luis Alfonso Gordillo Ramírez quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte policial y la boleta informativa suscritas por el agente de policía Luis Medina Lemos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se realizó en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día jueves 08 de marzo de 2012 a las 12h38,se instaló el presente juzgamiento, habiendo comparecido el señor Luis Alfonso Gordillo Ramírez **,** en compañía de su Defensor Público Abogado Jimmy Delgado Barzola, y el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 034619-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia; de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa; sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor Cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó lo siguiente: "Me ratifico en el contenido del Parte Policial ".- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos, que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción. Tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real, que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del abogado defensor, el cual manifestó "Señora Jueza, no se ha aportado por parte del señor policía, con ninguna clase de documentación, ni prueba testimonial, que sea considerada como válida y determinante para demostrar que mi representado cometió una infracción; en su exposición él manifestó que ingresó a "orinar" en el local,y no lo hizo en la calle, por la cantidad de gente que pasaba por ahí, debido a las elecciones; por consiguiente y al no haber infringido

ninguna ley solicito se lo declare inocente, sin tener que pagar multa alguna".- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso por parte del abogado de la defensa es necesario remitirse, a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal, que al encontrarse constitucionalmente fundado, preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada." La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Luis Alfonso Gordillo Ramírez ; portador de la cédula de ciudadanía número 092792088-4

c) La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello, con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". El agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba, que de elementos a esta juzgadora para determinar la existencia de una infracción de tipo electoral, por lo que se establece que no existe certeza en la acusación que se ha formulado al presunto infractor, ni prueba válida y concluyente en su contra; y con apego al art. 76 de la Constitución de la República, que ordena: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, no basta una acusación o una mera presunción para que el acusado sea sancionado, ya que se encuentra garantizado con los principios del debido proceso, y principalmente con la presunción de inocencia"; Por lo que no existe prueba determinante y concluyente de que el señor Luis Alfonso Gordillo Ramírez se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Luis Alfonso Gordillo Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía número 092792088-4

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Nelly Cevallos Borja Jueza (S), Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 08 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator Ad-Hoc.

SENTENCIA

CAUSA No. 450-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 08 de marzo de 2012.- Las 17h50. VISTOS.-

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los

artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 450-2011-TCE, seguida en contra del señor Edwin José Cedeño Olmedo.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h01.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM.(fs.1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2188-CP-4, de 10 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Copia certificada del Parte elevado al Sr. Comandante Provincial de Policía Manabí No. 4, suscrito por el Sbte de Policía Tglo Silva Banda Iván Patricio. (fs. 4)

d) Boleta Informativa BI-015924-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 5)

e) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 13 de febrero de 2012, a las 10h00. (fs. 7-7vlta)

f) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar en persona al señor Cedeño Olmedo Edwin José. (fs. 8)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 08 de marzo de 2012, a las 15h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Edwin José Cedeño Olmedo, acompañado por la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública, el Subteniente de Policía Iván Patricio Silva Banda, el Ab. Macías Chilán Alberto, funcionario de la Defensoría del Pueblo.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código expresa: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) La señora Defensoría Pública manifestó en defensa de su defendido: **1.** Que se encuentra presente en el juzgamiento, para garantizar el debido proceso y cumplir la normativa constitucional y los tratados internacionales. **2.** Que no existen elementos suficientes para romper el principio de inocencia, que le asiste al señor Edwin Cedeño Olmedo**. 3.** Que su defendido le ha comentado que estaba reunido con un grupo de amigos, pero que no cometió infracción alguna. **4.** Que su defendido colaboró con la policía y le entregó los documentos de identificación para que elaboraran la boleta no se resistió en ningún momento, y que en vista de que no se encuentra probada la responsabilidad de su defendido ni la materialidad de la infracción, solicitó que se confirme la inocencia de su representado.

b) El señor Subteniente de Policía, expresó que: Durante el proceso electoral tuvo una llamada telefónica en donde le manifestaron que en el sector de la Dolorosa había moradores que estaban libando, que para confirmar este hecho, se trasladó con otros compañeros, a ese lugar y se acercaron a los ciudadanos y les pidieron los documentos de identidad para llenar las boletas de citación. Que no les detuvieron en razón de las nuevas disposiciones que sobre esta materia le habían entregado.

c) La abogada de la Defensoría Pública, interrogó al señor Policía. A lo que contestó que no tenía ninguna prueba y que no realizó el alcohotest porque no tiene ese aparato.

d) Con lo expuesto por el agente de la policía y en aplicación de las garantías del debido proceso al analizar los argumentos presentados por la defensa se colige que no

existe prueba suficiente e inequívoca para determinar que se ha cometido la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracias por parte del señor Edwin Cedeño Olmedo.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declarar sin lugar el juzgamiento del señor EDWIN JOSÉ CEDEÑO OLMEDO**.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese al señor Edwin José Cedeño Olmedo, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 08 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 580-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. - Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, viernes 09 de marzo de 2012, las 16H30; **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 580-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033948-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Jorge Freddy Vargas Herrera; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento

previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las doce horas con cuarenta y seis minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Jorge Freddy Vargas Herrera, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033948-2011-TCE al ciudadano de nombres Jorge Freddy Vargas Herrera por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 12h50, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Jorge Freddy Vargas Herrera, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, sector denominado Klementina; señalando para el día viernes nueve de marzo de 2012, a las 09H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 11H59, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Cristián Jiménez León, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de citar al señor Jorge Freddy Vargas Herrera (foja 7)

h) Providencia de fecha 14 de febrero de 2012; las 12h00, que en parte pertinente dice que ante la imposibilidad de citar al presunto infractor. Jorge Freddy Vargas Herrera y de conformidad con el articulo 85 inciso final del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales, se proceda a citarlo por la prensa. (8)

i) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

j) Extracto de citación por la prensa, publicado en el diario el Telégrafo de fecha 24 de Febrero de 2012, edición número 46330, página 09

k) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.10, 11)

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12,13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: *"Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso";* en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."*

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33948-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Jorge Freddy Vargas Herrera quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: *"Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento*

de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día viernes 09 de marzo de 2012 a las 09H00; al efecto comparecen el señor Jorge Freddy Vargas Herrera presunto infractor compareció el Defensor Público Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola, compareció también el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033948-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que *"toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella"*.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó "Me ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa, reconozco mi firma y rúbrica, en el momento estaba de patrulla, salí al almuerzo pasé por el lugar, el lugar estaba con la puerta abajo, regresé a mi destacamento y por disposición del 1222(llamada telefónica), donde me informaron que en el bar "Pénjamo", estaban consumiendo bebidas alcohólicas, regresé al lugar y encontramos que la puerta del bar se encontraba abierta en la parte baja, entramos al local donde encontramos a varias personas bebiendo licor, tomé procedimiento, trasladamos a algunos de los presuntos infractores hasta el UPC, otros fueron por su cuenta, se les entregó la Boleta Informativa, reconozco al presunto infractor quien fue llevado en el patrullero al UPC";.- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados y evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción,. tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del presunto infractor señor Jorge Freddy Vargas Herrera, quien manifestó "Buenos Días, mi nombre es Jorge Freddy Vargas Herrera con cédula de ciudadanía 092535058-9, yo venía sufragando del Colegio 21 de Junio, porque me había llamado un amigo que tenía que darme una plata pasé por el bar, cuando estuve por el lugar entró la policía, y me llevó al comando, ese día no tome nada", así mismo respecto los alegatos presentados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quién manifestó: "Señora jueza comparezco, de conformidad con el artículo 191 de la constitución de la república del ecuador, de conformidad con el articulo 66 numeral 14, sobre la libertad de tránsito, si bien el cabo Luis Medina, ha ingresado como prueba el parte policial, considero que no existe prueba que incrimine

a mi representado, en la versión de mi representado se han esclarecido los hechos, por lo que solicito, se lo absuelva y se archive el proceso .- En consideración de los alegatos y la fundamentación del caso, así como de las alegaciones realizadas por el señor abogado de la defensa mediante el cual invoca, al artículo 66 numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador numeral 14, el cual manifiesta "art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas, numeral 14 *"El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley la prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente"* en la sustanciación del presente caso, y su fundamentación en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, no existe enunciación y documento alguno, constante en autos que determine que el señor Jorge Freddy Vargas Herrera se le haya negado el ejercicio de este derecho constitucional, respecto de la carga de la prueba es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:"* (…) *"2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Jorge Freddy Vargas Herrera portador de la cédula de ciudadanía número 092535058-9 .**-c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: "El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita". En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Jorge Freddy Vargas Herrera, así como no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Jorge Freddy Vargas Herrera portador de la cédula de ciudadanía número 092535058-9

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 09 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 581-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. - Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, viernes 09 de marzo de 2012, las 17H00; **VISTOS:** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 581-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-033947-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Maximiliano César Ramírez Valero; el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas, en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las doce horas con cuarenta y seis minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Maximiliano César Ramírez Valero, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-033947-2011-TCE al ciudadano de nombres Maximiliano César Ramírez Valero por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 13H00, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno de PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Maximiliano César Ramírez Valero en el domicilio ubicado, en el cantón Yaguachi sector denominado Klementina; señalando para el día viernes nueve de marzo de 2012, a las 11H00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 12H01, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Paredes Paredes, Citador-Notificador, del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual certifica haber citado por interpuesta personal al ciudadano de nombres Maximiliano César Ramírez Valero (foja 7)

h) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas 10, 11).

i) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12,13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: "Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso"; en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-33947-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H00, el

presunto infractor que se identificó con el nombre de Maximiliano César Ramírez Valero quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, el día viernes 09 de marzo de 2012 a las 11H00; al efecto comparecen el señor Maximiliano César Ramírez Valero presunto infractor en compañía de su Abogado Defensor Público Abogado Jimmy Humberto Delgado Barzola, compareció también el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 033947-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que "toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella".

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó "Me ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa, reconozco mi firma y rúbrica, en el momento estaba de patrulla, salí al almuerzo pasé por el lugar, el lugar estaba con la puerta abajo, regresé a mi destacamento y por disposición del 1222 (llamada telefónica), donde me informaron que en el bar "Pénjamo", estaban consumiendo bebidas alcohólicas, regresé al lugar y encontramos que la puerta del bar se encontraba abierta en la parte baja, entramos al local donde encontramos a varias personas bebiendo licor, tomé procedimiento, trasladamos a algunos de los presuntos infractores hasta el UPC, otros fueron por su cuenta, se les entregó la Boleta Informativa, debo manifestar que las unidades móvil 10 y móvil 18 nos colaboraron con el procedimiento".- Al respecto, esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción electoral debe contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados, elementos que han sido manifestados, mas no evidenciados por la parte sustanciadora de la presente acción, tienen relación con la tipificación de la infracción electoral y no describen un hecho concreto y real

que determine la existencia de la infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del presunto infractor señor Maximiliano César Ramírez Valero, quien manifestó "Mi nombre es Maximiliano César Ramírez Valero con cédula de ciudadanía 120494772-3, fui a ver a un amigo que se llama Daniel Gordillo que se encuentra aquí presente, el cual me invitó a pasar dentro del bar, porque tenía que entregarme un dinero, reconozco que no estaba tomando, cuando llegó el policía y nos llevó", asimismo respecto de la versión libre voluntaria y con juramento realizada por el señor Daniel Gualberto Gordillo García portador de la cédula de ciudadanía número 091060261-4, quien en la parte medular de su testimonio manifestó "Que fue al bar Pénjamo a ver un dinero, que estuvo aproximadamente un minuto en el bar, que sufraga en el cantón Sanborondon"; respecto de los alegatos presentados por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quién manifestó: "Como prueba a favor de mi testigo, el día de hoy con un certificado de votación que se lo presentó que mi representado sufraga en el cantón Sanborondón, y que se tenga como prueba su versión libre y bajo juramento del señor Daniel Gordillo García como testigo, añado que la prueba documental y testimonial que se ha presentado en el presente caso, lo que pido que sea parte medular en su decisión, por que ha venido un ciudadano a impugnar un parte informativo, solicito que no se lo sancione a pagar multa alguna y que sea archivado este proceso". Con relación a las alegaciones por parte de la defensa es menester realizar algunas consideraciones, el certificado de votación en copia simple ingresado como prueba número 029-0014, emitido por el Consejo Nacional Electoral, por el proceso de Referendúm y Consulta Popular del 07 de mayo de 2011, certifica que el Señor Gordillo García Daniel Gualberto portador de la cédula de identidad número 0910602614, ha sufragado en la provincia del Guayas, cantón Sanborondón, parroquia Sanborondón; sin embargo, es procedente manifestar que el señor Daniel Gualberto García Gordillo García, no es parte procesal dentro del presente proceso, por lo que la prueba ingresada no se considera por improcedente, pues en nada aporta al proceso, sale del contexto de los hechos. Respecto de la carga de la prueba constante en el parte informativo S/N, que consta en autos, el parte policial que fue ratificado por el agente policial se impugnó por parte de la defensa. Se ha cumplido en aplicar las normas y garantías del debido proceso como derecho fundamental de protección, de obligatoria observancia y garantía procesal, que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: "*En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:"* (…) "2. *Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Maximiliano César Ramírez Valero portador de la cédula de ciudadanía número 091060261-4 .**-c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda, los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina*:"El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita"*. En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que no existe certeza en la acusación formulada al señor Maximiliano César Ramírez Valero, ni se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Maximiliano César Ramírez Valero portador de la cédula de ciudadanía número 120494772-3

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil 09 de Marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA 0214-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Cuenca, 10 de marzo de 2012. Las 10h00. **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la Dra. Teresa Capón, en su calidad de defensora pública y copia simple de la credencial del señor cabo segundo de policía Ulvio Pablo Camacho.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0214-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y para sancionar por vulneración de normas electorales siendo sus fallos de última instancia, de conformidad con lo que establece el artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) De conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011, a proceso de referéndum y consulta popular.

c) La ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en su artículo 72 incisos tercero y cuarto, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011, está previsto el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales.

Las normas enunciadas determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el cabo segundo de policía Pablo Camacho, perteneciente al Comando Provincial de Azuay, Tercer Distrito, Plaza San Fernando, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 21h00, en las calles Bolívar y Jesús Arrizaga, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-006581-2011-TCE, al señor **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO**, portador de la cédula de ciudadanía número 010558810-7, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Comandancia Provincial de la Policía Nacional de Azuay, remite a la Delegación Provincial Electoral de Azuay, el referido parte y la boleta informativa No. BI-006581-2011-TCE, mediante oficio No. 2011-2960-CP-6 de 07 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día martes diez de mayo de dos mil once, a las once horas y treinta y cuatro minutos (fs. 1 a 3).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, sorteó la causa el día martes diez de mayo del año dos mil once, a las once horas y treinta y cuatro minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 4).

d) Con auto de 11 de enero de 2012, a las 15h00, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO**, con domicilio en San Carlos, cantón San Fernando, provincia de Azuay; se señala que el día viernes 09 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral del Azuay, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 5 y 5 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

De acuerdo con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO,** no pudo ser citado en la dirección descrita en la boleta informativa, conforme se desprende de la razón sentada el día miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, a las once horas con cincuenta minutos, por la citadora/notificadora del Tribunal Contencioso Electoral, (fs. 9); por lo que mediante auto de 31 de enero de 2012 a a las 12h30, se dispone la citación por la prensa. Tal citación se publica en el diario "El tiempo", de la ciudad de Cuenca el 17 de febrero de 2012, conforme consta a fojas 15 del expediente, en ella se le hace conocer al presunto infractor que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa, concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señala, y que en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia de Azuay.

b) El cabo segundo de policía Pablo Camacho, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Azuay No. 06, el día miércoles 01 de febrero de 2012 a las 09h58, conforme consta a fojas 13 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 31 de enero de 2012 y con oficio No. 013-SMM-P-TCE-2012 se solicitó a la Coordinadora de la Defensoría Pública de Azuay, con el propósito de que se designe a un defensor público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Dra. Teresa Capón, en calidad de defensora pública (fs. 14).

d) El día y hora señalados, esto es el viernes 09 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral

de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO,** portador de la cédula de ciudadanía número 010558810-7, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 09 de marzo de 2012 a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Azuay, ubicada en las calles Tarqui No. 1180 y Sangurima de la ciudad de Cuenca.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Edison Javier Cobos Morocho, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía, se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, ya que se contó con la presencia de la defensora pública. Se leyó el parte policial de la causa, su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al cabo segundo de policía Ulvio Pablo Camacho, quien manifestó: Que el día 6 de mayo se encontraba patrullando en las calles Bolívar y Jesús Arrizaga, observando a un grupo de personas que se encontraban haciendo escándalo, razón por la cual se los llamó la atención, observándose que el señor Edison Cobos Morocho, se encontraba en estado de embriaguez, motivo por el cual se lo puso a cuidado de uno de sus parientes y se le entregó la boleta informativa. La Dra. Teresa Capón, en su calidad de defensora pública del señor Edison Javier Cobos Morocho, manifestó: **i)** Que no existen las pruebas necesarias para que su defendido sea sancionado, no existen fotografías, solo la versión del policía; **ii)** Que para que una infracción sea sancionada debe existir la materialidad y la responsabilidad y en este caso no se ha demostrado; **iii)** Que no hay prueba de alcocheck que demuestre el grado del alcohol, ni fotos que prueben que haya cometido la infracción; **iv)** Que se tome en cuenta lo que establece el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, respecto de la presunción de inocencia que tiene toda persona y los instrumentos internacionales como el artículo 8.2 de la Convención de Derechos Humanos y artículo 4 del Código de Procedimiento Penal; **v)** Que en el presente caso hay duda, por cuanto no se ha adecuado su conducta en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por lo que al no existir certeza, solicita se absuelva a su defendido. El cabo segundo de policía Ulvio Pablo Camacho, al interrogatorio de la señora Jueza respondió: **1)** ¿Cómo supo usted que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Yo le hice una prueba psicosomática, esto consiste en comprobar cómo están sus pupilas, la forma de caminar, la coordinación de sus movimientos corporales. Al ver que estaba en estado etílico, se llamó a un familiar, habiendo acudido un tío del ciudadano en cuya presencia se le entregó la papeleta y él se encargó de trasladarlo al domicilio. En el alegato final la Dra. Teresa Capón manifestó: Que lo dicho por el policía no es más que un relato de los hechos, no se ha demostrado con prueba documental que se haya cometido la infracción, al no haber prueba material y al existir duda razonable del cometimiento de la infracción, solicita se absuelva al señor Edison Javier Cobos Morocho.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El Código de la Democracia, en el artículo 123, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, concordando con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal, que textualmente indica que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas señaladas se aplican al presente caso, ya que el parte policial informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, está contemplado el juzgamiento de estas infracciones, siendo éste un procedimiento oral. El artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

El testimonio del cabo segundo de policía Ulvio Pablo Camacho quien reconoce el contenido del parte y la boleta informativa, no ha sido desvirtuado por los alegatos de la abogada de la defensa. La ausencia del presunto infractor pese a estar citado en legal y debida forma, no permite replicar lo dicho por el señor policía, quien afirmó que él personalmente constató que el presunto infractor había consumido bebidas alcohólicas por la prueba psicosomática realizada al presunto infractor. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y

juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, la afirmación del cabo segundo de policía Ulvio Pablo Camacho, nos conduce a determinar que el señor Edison Javier Cobos Morocho tiene responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **EDISON JAVIER COBOS MOROCHO**, portador de la cédula de ciudadanía número 010558810-7, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral de Azuay del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Cuenca, 10 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 583-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, sábado 10 de marzo de 2012, las 11H30. **VISTOS.-** A la suscrita Jueza le correspondió el conocimiento de la causa signada con el No. 583-2011-TCE, que contiene entre otros documentos, un Parte Policial y la Boleta Informativa del Tribunal Contencioso Electoral No. BI-034616-2011-TCE, instrumentos de cuyo contenido se encuentra una supuesta infracción electoral presuntamente cometida por el señor Teodoro Daniel Gordillo, el día sábado siete de mayo de dos mil once, a las catorce horas con veinte minutos, en la ciudad de Yaguachi, provincia del Guayas, la cual estaría prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas." Al respecto, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato que consta en los artículos 217 inciso segundo y 221 numeral 2, que se encuentran en el Capítulo sexto, "Función Electoral", en concordancia con los artículos 167 y 168, insertos en los "Principios de la Administración de Justicia", de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Tribunal Contencioso Electoral tiene jurisdicción para administrar justicia en materia electoral, siendo sus fallos de última instancia; así también para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales;

b) Por disposición de los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a Referéndum y Consulta Popular;

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El procedimiento aplicable a la presente causa, es el previsto en los artículos 249 y siguientes de la Sección Segunda "Juzgamiento y Garantías" del Código de la Democracia para el juzgamiento de las infracciones electorales, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.412 de jueves 24 de marzo de 2011 que señala el procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales. Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa constitucional y legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción, no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

Con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales referidas, queda asegurada la jurisdicción y competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte, por lo que se acepta a trámite la presente causa.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) Con fecha diez y ocho de mayo de dos mil once, a las doce horas con treinta y seis minutos, ingresa a este órgano de justicia electoral la presunta infracción en contra del ciudadano Teodoro Daniel Gordillo, en base a los siguientes documentos: 1.- Parte informativo y 2.- Boleta informativa, que conforman dos fojas útiles, acorde a la razón sentada por el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (fojas 3).

b) En el parte policial suscrito por el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, el agente procedió a entregar la Boleta Informativa No. BI-034616-2011-TCE al ciudadano de nombres Teodoro Daniel Gordillo por infringir el numeral 3 del artículo 291 del Código de la Democracia (foja 1).

c) El diez y ocho de mayo de dos mil once, el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa correspondiendo el conocimiento a la Jueza Dra. Tania Arias Manzano (fojas 3).

d) El treinta de enero de de dos mil doce, a las 13h20, la suscrita Jueza Dra. Amanda Páez Moreno, quien se incorporó a este Tribunal Contencioso Electoral, en calidad de Jueza principal por renuncia de la Dra. Tania Arias, de acuerdo con la Resolución del Pleno PLE-TCE-740-01-08-2011, avoca conocimiento de la presente causa, ordenando la citación al presunto infractor Teodoro Daniel Gordillo, en el domicilio ubicado en el cantón Yaguachi, sector denominado la Clementina; señalando para el día sábado diez de marzo de 2012, a las 08H30, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (fojas 5).

e) Providencia de fecha 29 enero de 2011, a las 12h10, en la cual se nombra al Ab. Paúl Mena Zapata como Secretario Relator Ad-Hoc dentro de la sustanciación de la presente causa (fojas 4).

f) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones; las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

g) La razón de citación suscrita por el Ab. Milton Paredes Paredes, Citador-Notificador, mediante la cual manifiesta haber entregado la citación por interpuesta persona (foja 7).

h) Las razones de notificación del Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad- hoc de este despacho, que da fe del cumplimiento de las notificaciones, las publicaciones y demás actuaciones procesales dentro de la sustanciación del presente caso (fojas 6).

i) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento (Fojas.10, 11).

l) Copia certificada de las cédulas de identidad de las partes procesales (Fojas 12, 13)

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador que determinan las garantías básicas para asegurar el derecho al debido proceso, en concordancia con el artículo 72 primer inciso del Código de la Democracia, el cual establece: *"Las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso";* en cuyo cumplimiento se realizaron las siguientes diligencias: citación al presunto infractor, haciéndole conocer que debe designar un abogado defensor, y en caso de no tener, se le designa un defensor público, como indica el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente ordena lo siguiente*: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor."*

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con la Boleta Informativa No. BI-034616-2011-TCE, de fecha sábado 07 de mayo de 2011, a las 14H20, el presunto infractor que se identificó con el nombre de Teodoro Daniel Gordillo quien ha recibido y firmado la Boleta Informativa.

QUINTO: CARGO QUE SE FORMULA EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el Parte policial y la Boleta informativa, suscritas por el Agente de policía Luis Medina Lemos, responsable de la elaboración de los mencionados documentos, se presume la comisión de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; que dice: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas."

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

La Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, hoy sábado 10 de marzo de dos mil doce a las ocho horas, con treinta minutos. Al efecto, compareció el señor Teodoro Daniel Gordillo, en compañía del Ab. Jimmy Delgado Barzola, en su calidad de defensor público, el señor Cabo Segundo de policía Luis Medina Lemos, portador de la cédula de ciudadanía número 0801919838, responsable de la emisión de la boleta informativa número 034616-2011-TCE.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE HECHO Y DE DERECHO.-

a) Principio de Juez Natural

Es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos a ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos.

En virtud a esta garantía procesal, se determina que el juez y el procedimiento deben preexistir al delito y al proceso, no siendo permitidos los Tribunales post-facto así como los juzgamientos por comisión o por delegación, pues su existencia permite inferir que en ciertos casos no actuarán con independencia, ecuanimidad y la imparcialidad que exige el cargo, pudiendo por tales circunstancias asumirse una actitud prejuiciada en torno al caso concreto.

Héctor Fix Zamudio afirma que el principio del derecho de los justiciables al juez natural o competente tiene un doble significado: por una parte indica la supresión de los tribunales de excepción y por otra, establece la prohibición de que una persona sea sustraída del juez competente para ser sometida a un tribunal diverso, generalmente militar; en este orden de ideas, el numeral 1) del Artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona como garantía judicial que *"toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella"*.

Es necesario señalar que el principio de inmediación procesal está referido a la relación entre el juez y el objeto procesal, lo que significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, de este modo la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral.

Por su parte, cabe precisar que la garantía del juez natural constituye a decir de Luigi Ferrajoli una de las garantías orgánicas del debido proceso, asimismo, en su calificación, son garantías de libertad y de verdad.

Al respecto, es entendible la designación de jueces para determinadas áreas a los que se les asigna una carga equitativa, sin embargo, no debemos soslayar que lo más idóneo para una mejor administración de justicia es que aquel juzgador que conoce y asume competencia desde un inicio respecto a determinado proceso, que ha valorado con criterio de conciencia y objetividad los elementos probatorios sometidos a su conocimiento, sea también aquel que emita fallo final.

Así mismo La Jurisdicción y Competencia de este Tribunal y de esta Jueza quedan aseguradas, al amparo de la normativa legal vigente a la fecha de cometimiento de la presunta infracción electoral y del procedimiento previsto en la ley.

b) Respecto de la versión de los hechos que ha dado el señor cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, quien manifestó: "Me ratifico en el contenido del parte policial y boleta informativa, reconozco mi firma y rúbrica; en el momento estaba de patrulla, salí al almuerzo pasé por el lugar, el lugar estaba con la puerta abajo y varias personas sentadas en la vereda, regresé a mi destacamento y por llamada telefónica del 122 me informaron que en el bar "Pénjamo", estaban consumiendo bebidas alcohólicas, regresé al lugar y encontramos que la puerta del bar se encontraba abierta en la parte baja, entramos al local donde encontramos a varias personas bebiendo licor, tomé procedimiento, trasladamos a algunos de los presuntos infractores hasta el UPC, otros fueron por su cuenta, se les entregó la Boleta Informativa, reconozco debo manifestar que las unidades móvil 10 y móvil 18, nos colaboraron con el procedimiento".- Al respecto esta jueza considera que el hecho de la materialidad de la acción que configura los preceptos procesales de una presunta infracción en materia electoral deben contener ciertos requisitos o condiciones que se precisan para que una infracción sea calificada como tal, en consecuencia debe cumplir con algunos preceptos que son tres elementos sustanciales o constitutivos: de carácter general, de carácter constitutivo especial o de carácter constitutivo accidental, que den elementos al juzgador para determinar el nexo causal existente entre la infracción tipificada en la legislación y en los hechos suscitados en esta causa tales elementos han sido manifestados, no tienen relación con la tipificación de la infracción electoral, y no describen un hecho concreto y real que determine la existencia o no de una infracción de tipo electoral.- Respecto de la versión proporcionada por parte del presunto infractor señor Teodoro Daniel Gordillo quien manifestó "Mi nombre es Teodoro Daniel Gordillo Herrera, el siete de mayo fui al cantón Yaguachi, a golpe (sic) de nueve de la mañana llamé a mi padre para saludarlo, quien me comentó que estaba en el cantón Sanboróndon sufragando, como dice el cabo en el bar Pénjamo, sí estaban personas afuera, cuando entré al bar, el señor cabo de policía nos citó", y respecto de la versión proporcionada por el abogado Jimmy Delgado Barzola, Defensor Público, quien manifestó: "Llama la tención a la defensa, de que en esta boleta informativa el agente responsable, dice "Diego Tabango" para la defensa es necesario aclarar esto porque era necesaria, la presencia del Capitán Diego Tabango responsable de la emisión de la Boleta, impugno el parte Policial, mi representado no ha cometido ninguna infracción, alego el principio de presunción de inocencia", respecto de la enunciación de la defensa sobre la no comparecencia del agente Diego Tabango, quien presuntamente suscribe la boleta informativa número BI: 034616-2011-TCE, pues de los autos constantes en el expediente el mencionado agente, no firma la boleta informativa, existe una inscripción del nombre "Diego Tabango" sin su rúbrica de responsabilidad, por lo que no existe certeza de que el agente haya suscrito este documento, sin embargo del parte informativo, que describe el hecho consta la firma y rúbrica de responsabilidad del señor Cabo segundo de Policía Luis Medina Lemos, la cual ha sido ratificada en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, a quien se lo considera como responsable del inicio de la presente acción; respecto de los alegatos y la fundamentación del caso planteado por la defensa, es necesario remitirse a las normas y garantías del debido proceso que es un derecho fundamental de

protección, de obligatoria observancia como garantía procesal que al encontrarse constitucionalmente fundado preserva los principios de justicia, por ello, el art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, manda en su parte pertinente que: *"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas:" (…) "2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."* La presunción de inocencia es un hecho real y objetivo que acompaña a la personalidad humana, es un estado jurídico como consecuencia de la norma, por ello, y según lo actuado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, **se presume la inocencia** del señor Teodoro Daniel Gordillo de la cédula de ciudadanía número 092731531-7. **c)** La presunción de inocencia obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho culposo y encontrar la responsabilidad del procesado, a fin de que se pueda juzgar en derecho lo que corresponda; los medios probatorios en todo proceso deben respetar las normas del debido proceso, por ello con apego al artículo 32 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, que determina: *"El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita"*. En el presente caso el agente de policía no ha incorporado al expediente ninguna prueba determinante y concluyente que establezca la culpabilidad del presunto infractor, por lo que se concluye que no existe certeza en la acusación formulada al señor Teodoro Daniel Gordillo, en virtud de lo cual no se ha podido establecer de manera contundente que el presunto infractor se encuentra incurso en la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1) Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la presunción de inocencia del ciudadano Teodoro Daniel Gordillo portador de la cédula de ciudadanía número 092731531-7

2) Ejecutoriado que sea este fallo, archívese la causa.

3) Actúe en la presente causa el Abogado Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-Hoc.

4) CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza-Vicepresidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Guayaquil, 10 de marzo de 2012.

f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

SENTENCIA

CAUSA No. 452-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 20 de marzo de 2012.- Las 17h10. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 452-2011-TCE, seguida en contra del señor Carlos Alberto Vera Zambrano.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h03.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017832-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 10h20. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor CARLOS ALBERTO VERA ZAMBRANO, dentro de la causa 452-2011-TCE, en vista de que (sic) la dirección denominada "Av. Jama y Eloy Alfaro" no se encuentra especificado manzana, calle o número de vivienda, por lo que tras varios intentos no se encontró a persona alguna que de fe de conocer al ciudadano, CARLOS ALBERTO VERA ZAMBRANO." (fs. 10)

h) Oficio No. 033-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

i) Auto dictado el día 12 de marzo de 2012, a las 15h25 y extracto de citación por la prensa. (fs. 12 y 13-13 vlta)

j) Publicación realizada en El Diario (Manabita de Libre pensamiento), en la página 11 A del extracto de citación para el señor Carlos Alberto Vera Zambrano.

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 20 de marzo de 2012, a las 15h30, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, compareció la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) Que no compareció el presunto infractor, por tanto la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se realizó en rebeldía y para garantizar sus derechos constitucionales asumió su defensa la Defensoría Pública.

b) En la audiencia no se contó con la versión del agente del orden que elaboró el parte policial y que entregó al señor Carlos Alberto Vera Zambrano la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral.

c) Los argumentos de la Defensora Pública se dirigieron a señalar que no existía prueba que determine que su defendido hubiere cometido la infracción electoral y que por tanto debe prevalecer el principio de inocencia garantizado en la Constitución de la República del Ecuador.

d) En la presente causa, una vez efectuada la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se deduce que no existe prueba suficiente e inequívoca para determinar si el señor Carlos Alberto Vera Zambrano vulneró la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, el día 6 de mayo de 2011.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor CARLOS ALBERTO VERA ZAMBRANO.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Carlos Alberto Vera Zambrano, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en las oficinas de la referida institución ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en la calle 18 de Octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 20 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 481-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 21 de marzo de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 481-2011-TCE, seguida en contra del señor Manuel Agustín Farfán Alava.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h32.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2142-CP-4, de 8 de mayo de 2011, suscrito por el Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3)

c) Original del Oficio No. 2011-964-CCPNM-M de 08 de mayo del 2011, suscrito por el Lcdo. Miguel Cisneros Miranda, Coronel de Policía de E.M., Comandante Cantonal de Policía Manta. (fs. 4)

d) Original del Parte Informativo Nro. 5255, suscrito por el señor Miguel Portilla Toapanta, Teniente de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa BI-016541-2011-TCE de fecha 07 de mayo de 2011. (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite de fecha 10 de febrero de 2012, a las 15h50. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por el Ab. Cristian Jiménez León, Citador-Notificador del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual en lo principal certifica que procedió a citar al señor MANUEL AGUSTÍN FARFÁN ALAVA. (fs. 9)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 07 de marzo de 2012, a las 08h40, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Washington Edison Peñafiel Cando, abogado particular y el señor Ab. Jonás Vespasiano Obregón Meza, funcionario de la Defensoría del Pueblo. En el acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento que obra en el expediente, se dejó constancia que el abogado particular debía ratificar su intervención, previo a dictar sentencia, por lo cual se procedió a suspender esa diligencia.

En la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento efectuada el día miércoles 21 de marzo de 2012, a las 08h40, concurrió el señor Manuel Agustín Farfán Alava, acompañado del Ab. Washington Edison Peñafiel Cando, y ratificó su intervención.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 4 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 4. El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) Que no concurrió a la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, el señor Teniente de Policía, Miguel Portilla, aunque fue debidamente notificado, conforme constan de las razones que obran del expediente.

b) En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento el señor abogado particular manifestó en lo principal: **1.** Que no se citó a su defendido en persona, conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil. **2.** Que su defendido no se encontraba en estado de embriaguez como lo señala la boleta informativa entregada por el agente del orden. El señor Manuel Agustín Farfán es un pescador artesanal trabaja en alta mar, y justamente el día de las elecciones llegó a la ciudad al terminar sus faenas, por lo cual hubo una confusión del policía, porque no había consumido alcohol sólo se encontraba cansado y mareado por las actividades propias de su trabajo. **3.** Que no se practicó prueba de alcoholemia, y lo que señala el oficial de policía en el parte es meramente informativo., y no puede ser corroborado al no estar presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. **4.** Que se considere la rusticidad de su defendido, que es una persona que no tiene instrucción y es analfabeto, por lo cual no se encuentra obligado a ejercer su derecho al voto. Esto se comprueba al observa su cédula de ciudadanía. **5.** Que entrega como prueba una copia simple del zarpe.

c) El señor Manuel Agustín Farfán Alava, ratificó en la reinstalación de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento la intervención de su abogado particular y posteriormente se acogió al derecho al silencio. En esa diligencia, la defensa entregó por segunda vez el zarpe de la Capitanía del Puerto de Manta.

d) El alegato del defensor respecto a la citación se rechaza, al considerar que dentro de la presente causa, se ha procedido a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa electoral y a lo previsto en el Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

e) No se consideraron al momento de resolver, los documentos de "Solicitud de Zarpe/Arribo y Rol de Tripulación Embarcaciones de Bandera Ecuatoriana menores de 10 TRB" de la Capitanía del puerto de Manta, porque fueron presentados en dos ocasiones en copias simples, las mismas que no hacen fe en juicio.

f) Analizados en su conjunto los argumentos presentados por la defensa así como los documentos que obran del expediente, se concluye que no existe prueba suficiente e inequívoca sobre el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por parte del señor Manuel Agustín Farfán Alava.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor **MANUEL AGUSTÍN FARFÁN ALAVA.**

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese con el contenido de la presente sentencia: **a)** Al señor Manuel Agustín Farfán Alava, a través de su Ab. Washington Edison Peñafiel Cando, en el casillero judicial No. 470 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en el correo electrónico: boalfaromar@hotmail.com, **b)** A la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, y **c)** A la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Publíquese la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral

Certifico, Portoviejo, 21 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 453-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 21 de marzo de 2012.- Las 17h10. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 453-2011-TCE, seguida en contra del señor Abelardo Antonio Vélez Reyes.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h04.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017833-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 10h30. (fs. 8-8vlta)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual certifica que "(...) en las Av. Jama y Eloy Alfaro del cantón Jama, provincia de Manabí, dentro de la causa No. 453-2011-TCE, en vista de que el señor ABELARDO ANTONIO VÉLEZ REYES, no se encontraba en su domicilio, se procedió a notificar en persona al señor José Vélez (…) padre del presunto infractor, el mismo que manifestó que una vez que su hijo retorne del trabajo le entregaría la boleta de citación." (fs. 10)

h) Oficio No. 034-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 21 de marzo de 2012, a las 09h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, compareció la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública. No compareció el presunto infractor ni el señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) No se contó con la versión del señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle, quien entregó la boleta informativa y elaboró el parte policial.

b) Para garantizar el derecho a la defensa en virtud de lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia, asumió la defensa del presunto infractor la Defensoría Pública.

c) En su intervención, la defensora pública manifestó que se considere a favor de su defendido, lo dispuesto en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto al principio de presunción de inocencia, en concordancia con lo señalado en esta materia en los convenios internacionales ratificados por el Ecuador. Adicionalmente, expresó que no existe prueba que vincule al señor Abelardo Antonio Vélez Reyes con la infracción electoral, por tanto solicitó que se declare sin lugar su juzgamiento.

d) Al amparo de los principios constitucionales del debido proceso se determina que no existe prueba suficiente e inequívoca en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor Abelardo Antonio Vélez Reyes, el día sábado 6 de mayo de 2011.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor ABELARDO ANTONIO VÉLEZ REYES.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Abelardo Antonio Vélez Reyes, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 21 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 454-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 20 de marzo de 2012.- Las 17h20. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 454-2011-TCE, seguida en contra del señor Francisco Félix Bazurto Chila.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h05.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017834-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 11h00. (fs. 8)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) no se pudo dar cumplimiento con la

diligencia de citación al señor FRANCISCO FÉLIX BAZURTO CHILA, dentro de la causa 454-2011-TCE, en vista de que el sector "CAÑALES", se encontraba inundado por lo que fue imposible el acceso al mismo."(fs. 10)

h) Oficio No. 035-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

i) Auto dictado el día 12 de marzo de 2012, a las 15h15 y extracto de citación por la prensa. (fs. 12 y 13-13 vlta)

j) Publicación del extracto de citación para el señor Francisco Félix Bazurto Chila, efectuada en El Diario (Manabita de Libre Pensamiento), en la página 22 A. (fs. 14)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 21 de marzo de 2012, a las 10h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública y el Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle. No compareció el presunto infractor.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) La defensora pública manifestó: **1.** Que si bien su defendido no se encuentra presente en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, esto no es impedimento para la realización de la Audiencia. **2.** Que no existe prueba de que su representado estuviere consumiendo o expendiendo bebidas, no consta en el expediente facturas de venta de licor o una prueba de alcohotest que demuestre el cometimiento de la infracción. **3.** Que se considere el principio constitucional de inocencia y que se deje sin lugar la multa de su defendido.

b) El señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle, expuso en la Audiencia que: **1.** Que elaboró el parte policial porque en las elecciones el consumir alcohol era prohibido, por tanto citó al ciudadano Francisco Félix Bazurto Chila. La defensora pública enseguida procedió a interrogar al señor policía. Ante lo cual contestó el agente del orden: **i.** Que encontró al señor Francisco Félix Bazurto Chila, bebiendo. **ii.** Que no tiene prueba ni certificado médico que acredite lo que afirmó. **iii**. Que trabaja varios años en la Policía Nacional y que sabe qué hacer cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol. **iv.** Que solo consta el parte policial, sin acompañar fotos, que en la capacitación que les impartieron, no les comentaron nada sobre las pruebas, solo les manifestaron que entreguen las citaciones y pidan las identificaciones a los ciudadanos que infrinjan la ley

c) No existe prueba suficiente e inequívoca que permita determinar si el señor Francisco Félix Bazurto Chila incurrió en la infracción electoral tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor FRANCISCO FÉLIX BAZURTO CHILA.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Francisco Félix Bazurto Chila, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 21 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 455-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 21 de marzo de 2012.- Las 17h30. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 455-2011-TCE, seguida en contra del señor Ángel Modesto Balda Marquez.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h06.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017836-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 11h20. (fs. 8-8 vlta)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor ÁNGEL MODESTO BALDA MARQUEZ, dentro de la causa 455-2011-TCE, en vista de que el sector "HUELE", se encontraba inundado por lo que fue imposible el acceso al mismo."(fs. 10)

h) Oficio No. 036-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

i) Auto dictado el día 12 de marzo de 2012, a las 15h05 y extracto de citación por la prensa. (fs. 12 y 13-13 vlta)

j) Publicación del extracto de citación para el señor Angel Modesto Balda Marquez, en El Diario (Manabita de Libre Pensamiento), en la página 15 A. (fs. 14)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 21 de marzo de 2012, a las 11h00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron: la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública y el señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle.

No compareció a la Audiencia el presunto infractor, por tanto la audiencia se realizó en rebeldía, en atención a lo previsto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) La defensora pública manifestó: **1.** Que una vez que ha revisado el expediente observa que no existe prueba de que su defendido hubiera consumido alguna bebida alcohólica y que no se efectuó prueba científica de alcohotest. **2.** Que se sirva considerar el principio constitucional de inocencia, por lo que solicita que no se sancione a su defendido.

b) El señor Cabo Primero de Policía manifestó que entregó la boleta y elaboró el parte policial porque el ciudadano Angel Modesto Balda Marquez, vulneró la Ley.

c) Del interrogatorio que efectuó la defensora pública al señor Cabo Primero de Policía, se colige que no se efectuó examen médico o alguna prueba de alcohotest al señor Angel Modesto Balda Marquez.

d) No existe prueba suficiente e inequívoca para determinar si el señor Ángel Modesto Balda Marquez, cometió la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor ÁNGEL MODESTO BALDA MARQUEZ.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Angel Modesto Balda Marquez, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en la calle 18 de Octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 21 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 456-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 22 de marzo de 2012.- Las 12h00. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 456-2011-TCE, seguida en contra del señor Juan Manuel Conforme Márquez.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h07.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017837-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 11h30. (fs. 8-8 vlta)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) no se pudo dar cumplimiento con la diligencia de citación al señor JUAN MANUEL CONFORME MÁRQUEZ, dentro de la causa 456-2011-TCE, en vista de que el sector "HUELE" se encontraba inundado por lo que fue imposible el acceso al mismo. " (fs. 10)

h) Oficio No. 037-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

i) Auto dictado el día 12 de marzo de 2012, a las 14h55 y extracto de citación por la prensa. (fs. 12 y 13-13 vlta)

j) Publicación del extracto de citación para el señor Juan Manuel Conforme Marquez, realizada en El Diario (Manabita de Libre Pensamiento), en la página 23 A. (fs.14)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 21 de marzo de 2012, a las 15h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, defensor público; el señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle y la señora Jacqueline Monserrate Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. No compareció el presunto infractor, por tanto la audiencia se realizó en rebeldía, en atención a lo previsto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El señor defensor público manifestó: **1.** Que su defendido se encontraba debidamente citado para comparecer a la Audiencia y no ha concurrido a la misma. **2.** Que la defensa no cuenta con una teoría del caso, pero con los elementos que constan en el expediente, solicita que se considere que no existe prueba plena, para determinar que su defendido estuviere bebiendo. **3.** Que el parte policial es meramente informativo.

b) El señor Cabo Primero de Policía manifestó que el motivo de extender la boleta fue por acatar la disposición de las autoridades, según la cual se debía extender las boletas informativas del Tribunal, a la persona que estuviera bebiendo o a los dueño o propietarios que estuvieran expendiendo bebidas alcohólicas. El señor defensor público interrogó al señor policía, ante lo cual contestó el agente del orden, que no recogió alguna evidencia de la infracción.

c) No existe prueba suficiente e inequívoca que permita dilucidar si el señor Juan Manuel Conforme Marquez, cometió la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor JUAN MANUEL CONFORME MARQUEZ.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Juan Manuel Conforme Marquez, a través de su Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en la calle 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 457-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo 22 de marzo de 2012.- Las 12h10. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso

Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 457-2011-TCE, seguida en contra del señor Dionicio Bartolo Vélez Minaya.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h08.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017838-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 12h00. (fs. 8)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) en vista de que el señor DIONICIO BARTOLO VÉLEZ MINAYA, no se encontraba en su domicilio, se procedió a notificar en persona a la señora Carmen Andrade (...) cuñada del presunto infractor, la misma que manifestó que se comunicaría con él para posteriormente entregarle la boleta de citación"" (fs. 10)

h) Oficio No. 038-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 21 de marzo de 2012, a las 16h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, defensor público; la Ab. Jacqueline Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y el señor Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle. No compareció el presunto infractor por tanto la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se realizó en rebeldía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 251 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá

ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El defensor público expresó como argumento de defensa, que no hay prueba suficiente que determine que su defendido cometió la infracción que consta en la boleta informativa y que dio lugar al presente juzgamiento, en consecuencia se debe declarar la inocencia de su defendido.

b) El señor Cabo Primero de Policía, se limitó señalar que el día en el cual entregó la boleta informativa, simplemente cumplía con disposiciones del Tribunal, al entregar las boletas informativas a las personas que se encontraban consumiendo alcohol.

c) En el interrogatorio formulado por el defensor público, el agente del orden contestó que no recogió ninguna evidencia de la infracción.

d) En consideración, a los elementos de cargo y de descargo, que obran del expediente y de los argumentos expuestos en la Audiencia se colige que no existe prueba suficiente e inequívoca para determinar fehacientemente responsabilidad en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por parte del señor Dionicio Bartolo Vélez Minaya.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor DIONICIO BARTOLO VÉLEZ MINAYA.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Dionicio Bartolo Vélez Minaya, a través de su Ab. Fabián Antón Zambrano, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 458-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 22 de marzo de 2012.- Las 17h00. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las

organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 458-2011-TCE, seguida en contra del señor Iter Alberto Cevallos Zambrano.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h09.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017839-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 12h20. (fs. 8)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) en vista de que el señor ITER ALBERTO CEVALLOS ZAMBRANO, no se encontraba en su domicilio, se procedió a notificar en persona a la señora Ana Zambrano, con cédula de identidad número 131304767-0 cuñada del presunto infractor, la misma que manifestó que se comunicaría con él para posteriormente entregarle la boleta de citación." (fs. 10)

h) Oficio No. 039-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 22 de marzo de 2012, a las 09h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Iter Alberto Cevallos Zambrano; el Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, defensor público; la Ab. Jacqueline Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y el Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) En su intervención el señor Iter Cevallos Zambrano manifestó que: **1)** No estaba consumiendo ninguna bebida alcohólica. **2)** Que se encontraba con unos parientes porque había un familiar enfermo. **3)** Que había otros señores con cervezas pero que él no estaba en ese grupo, donde

encontraron los policías la botella. **4**) Que cuando llegó la policía no portaba su cédula porque la encargó a su esposa, pero que cumplió con la orden de la autoridad y entregó sus datos y en ese momento le entregaron la citación del Tribunal.

b) El defensor público manifestó: **1)** Que no hay prueba que corrobore que su defendido se encontraba bebiendo, que la policía no recogió como evidencia la botella de cerveza. **2)** No se observa que en el expediente conste un examen de alcoholemia, por tanto el señor Cevallos, no puede ser juzgado como contraventor de la ley.

d) El señor Cabo Primero de Policía manifestó que lo que motivó la entrega de la citación al ciudadano Iter Cevallos, fue la disposición del Tribunal, para que a las personas que se encuentren consumiendo alcohol se les entregue unas boletas de citación. El abogado de la defensoría púbica interrogó al policía, a lo cual contestó el agente del orden que no practicó la prueba de alcoholemia ni recogió evidencias del supuesto hecho ilícito.

e) En el presente caso, por lo expuesto en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, así como la revisión de los documentos que obran del expediente, se concluye que no existe prueba suficiente e inequívoca para establecer si el señor Iter Alberto Cevallos Zambrano, incurrió en el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor ITER ALBERTO CEVALLOS ZAMBRANO.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Iter Alberto Cevallos Zambrano, a través de su Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 459-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 22 de marzo de 2012.- Las 17h10. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los

plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 459-2011-TCE, seguida en contra del señor Nexar Eduardo Vélez Minaya.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h10.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017840-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 12h30. (fs. 8-8 vlta)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) en vista de que el señor EDUARDO VÉLEZ MINAYA, no se encontraba en su domicilio, se procedió a notificar en persona a la señora Carmen Andrade (…) la misma que manifestó que una vez que su esposo retorne al domicilio le entregaría la boleta de citación" (fs. 10)

h) Oficio No. 039-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 22 de marzo de 2012, a las 10h00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor Nexar Eduardo Vélez Minaya; el Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, defensor público; la Ab. Jacqueline Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y el Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El señor Nexar Eduardo Vélez Minaya, intervino y manifestó: **1.** Que su hijo fue operado en la ciudad de Portoviejo y que le pidió al doctor que le diera de alta, porque tenía que trasladarse a sufragar. **2.** Que se encontraba junto a unos familiares, y por casualidad cerca a ese lugar, había unas botellas. **3.** Que llegaron unos policías y le pidieron que firme una boleta, y que él se negó a firmar porque no se encontraba bebiendo.

b) El señor defensor público, expresó: **1.** Que su defendido niega haber violado la norma electoral, que porque nunca consumió alcohol, en el periodo de elecciones. **2.** Que le correspondía a la otra parte, esto es al agente de la policía el

haber practicado un examen o prueba de alcoholemia, o en su defecto recoger la evidencia. **3.** Que se debe declarar la inocencia de su defendido, ante ausencia de prueba plena.

c) El señor Cabo Primero de Policìa manifestó que entregó la citación al señor Nexar Eduardo Vélez Minaya, porque se encontraba bebiendo el una fecha prohibida por la ley electoral. El abogado defensor interrogó al agente del orden, quien contestó que no recogió evidencia alguna y tampoco se realizó prueba de alcoholemia.

d) En aplicación de los principios del debido proceso, se deduce de todo lo expuesto en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento que no se puede llegar a determinar si el señor Nexar Eduardo Vélez Minaya, cometió la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor NEXAR EDUARDO VÉLEZ MINAYA.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Nexar Eduardo Vélez Minaya, a través de su Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en la calle 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 460-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo 22 de marzo de 2012. Las 17h20. **VISTOS.-**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, asi como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 460-2011-TCE, seguida en contra del señor César Bienvenido Zambrano Vélez.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h11.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017741-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 05 de marzo de 2012, las 14h00. (fs. 8)

g) Razón suscrita por la Dra. Andreína Pinzón A, funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral, según la cual informa que "(...) en el sector Campamento, perteneciente al cantón Jama, provincia de Manabí, dentro de la causa No. 460-2011-TCE, se procedió a notificar en persona al señor CÉSAR BIENVENIDO ZAMBRANO VÉLEZ..." (fs. 10)

h) Oficio No. 041-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 22 de marzo de 2012, a las 11h00, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron el señor César Bienvenido Zambrano Vélez; el Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, defensor público, la Ab. Jacqueline Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo, y el Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) El señor César Bienvenido Zambrano Vélez, expresó: **1.** Que vive en Quito, pero su lugar de votación es en Cojimíes. **2.** Que junto con su familia acudió a sufragar, y que luego se trasladó a Jama, en donde se reunieron y hablaron respecto a una calamidad doméstica, sobre un niño que había sido operado. **3.** Que unos policías llegaron y les entregaron las boletas informativas, porque había botellas cerca a ellos.

b) El defensor público manifestó que: No se debería dictar una resolución sancionatoria por la circunstancia que la declaración del agente policial no es prueba suficiente y porque además no se ha recolectado prueba o evidencia que demuestren que su defendido hubiere consumido alcohol.

c) El señor Cabo Primero de Policía manifestó que la razón de la entrega de la boleta de citación, fue porque el señor Zambrano se encontraba libando, por acatar una disposición del Tribunal que prohibía la venta y consumo de licor el día de las elecciones. El señor abogado interrogó al señor policía, a lo que contestó que no recogió evidencias y que no efectúo la prueba de alcoholemia.

d) Del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se colige que no existe prueba suficiente e inequívoca para determinar si el señor César Bienvenido Zambrano vulneró el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor CÉSAR BIENVENIDO ZAMBRANO VÉLEZ.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor César Bienvenido Zambrano Vélez, a través de su Ab. Fabián Humberto Antón Zambrano, profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en las calles 18 de Octubre y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 461-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- En la ciudad de Portoviejo, 22 de marzo de 2012.- Las 17h30.- VISTOS.-

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de "Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales", disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el "Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones, previstas en esta Ley". **1.2** El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán los principios de "transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso". En el mismo artículo, en su inciso tercero y cuarto, se dispone que "Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo para cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal". Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán "Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causas que por sorteo les corresponda resolver". **1.3** Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento.

Al haberse sustanciado la presente causa de conformidad a la normativa legal vigente a la época del cometimiento de la infracción, que otorgaban competencia y jurisdicción a este Tribunal y a sus Jueces, así como en aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso y del principio de irretroactividad de la Ley, la causa no adolece de nulidad alguna, por lo que se declara su validez.

II. ANTECEDENTES

El día lunes 16 de mayo de 2011, a las 15h03, ingresa en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la causa identificada con el No. 461-2011-TCE, seguida en contra del señor Jacinto Valencia Barreiro.

Efectuado el sorteo de ley, la causa ingresa en este Despacho, el día 11 de junio de 2011, a las 13h12.

Dentro del expediente constan en lo principal los siguientes documentos:

a) Copia certificada del Of. No. 176-D-JBM-DPEM-CNE de 11 de mayo de 2011, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la DPEM. (fs. 1-2)

b) Copia certificada del Oficio No. 2011-2173-CP-4, de 09 de mayo de 2011, suscrito por el señor Coronel de Policía de E.M. Carlos Orbe Fiallo, Comandante Provincial de la Policía Nacional Manabí No. 4. (fs. 3).

c) Copia del Oficio No. 2011-968-CP-4-CSP-P, de 08 de mayo de 2011, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía, encargado del UPC-JAMA. (fs. 4)

d) Copia del parte elevado al señor Comandante Provincial de Policía de Manabí No. 4, suscrito por el señor Jorge Castillo Valle, Cabo Primero de Policía. (fs. 5)

e) Boleta Informativa No. BI-017742-2011-TCE (fs. 6)

f) Auto de admisión a trámite dictado dentro de la presente causa el día 02 de marzo de 2012, las 14h10. (fs. 8)

g) Oficio No. 042-2012-J.AC-mfp-TCE de 5 de marzo de 2012, dirigido al señor Coronel Angel Marcelo Echeverría Escobar, Comandante Provincial de Policía de Manabí. (fs. 11-11 vlta)

III. AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO

En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, efectuada el día 22 de marzo de 2012, a las 15h10, en el Auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, comparecieron la Ab. Enma Cedeño Vélez, defensora pública; la Ab. Jacqueline Pro Pro, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y el Cabo Primero de Policía Jorge Castillo Valle. No compareció el presunto infractor por lo tanto la audiencia se realizó en rebeldía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 281 del Código de la Democracia.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

4.1 La infracción electoral

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 291, numeral 3 dispone que: "Se sancionará con multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: (…) 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas" En concordancia el artículo 123 del mismo Código determina que: "Durante el día de las elecciones, treinta y seis (36) horas antes y doce (12) después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas."

4.2 Relación de los Hechos con el Derecho

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 numerales 2 y 3 de la Constitución, establece que: "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada" y "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento". En el numeral cuarto del artículo referido se determina que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria".

Del análisis de los hechos descritos, y los argumentos expuestos por las partes procesales, con sujeción a los principios de oralidad e inmediación, dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se colige:

a) Que la Defensoría Pública afirmó que no existe prueba plena que permita determinar que su defendido estuviera consumiendo alguna bebida alcohólica en el periodo prohibido por la Ley electoral.

b) Que el señor Cabo Primero de Policía, entregó la boleta informativa del Tribunal Contencioso Electoral al señor Jacinto Valencia Barreiro, porque lo encontró consumiendo alcohol, sin embargo nunca recogió evidencias de la infracción.

c) En aplicación de las reglas sobre la apreciación de la prueba, se establece que no es posible determinar si el señor Jacinto Valencia Barreiro cometió la infracción tipificada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento en contra del señor JACINTO VALENCIA BARREIRO.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

3. Ejecutoriada la sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Notifíquese la presente sentencia al señor Jacinto Valencia Barreiro, a través de su Ab. Enma Cedeño Vélez profesional perteneciente a la Defensoría Pública, en el casillero judicial No. 411 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Notifíquese a la Defensoría del Pueblo, en el casillero judicial No. 268 de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, así como en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Portoviejo, en la calle 18 de octubre entre Pedro Gual y 10 de Agosto.

5. Exhíbase la presente sentencia en la cartelera de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, así como en la cartelera del Tribunal Contencioso Electoral y en la página web institucional.

6. Continúe actuando en la presente causa la Dra. María Fernanda Paredes Loza, en calidad de Secretaria Relatora.

7. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral

Certifico, Portoviejo, 22 de marzo de 2012.

f.) Dra. María Fernanda Paredes Loza, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA No. 001-2012-TCE

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: DRA. XIMENA ENDARA OSEJO, JUEZA PRESIDENTA; DRA. AMANDA PÁEZ MORENO, JUEZA VICEPRESIDENTA; DRA. ALEXANDRA CANTOS MOLINA, JUEZA; AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO, JUEZ; AB. JUAN PAÚL YCAZA VEGA, JUEZ.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 23 de marzo de 2012, las 14h30.- **VISTOS:** Incorpórese los siguientes documentos: **a)** Escrito del Lcdo. Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, presentado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral el día martes veinte de marzo de dos mil doce, a las trece horas con cinco minutos y atendiendo el mismo se dispone la asignación de la casilla contenciosa electoral, además se le notificará en el domicilio electrónico señalado; **b)** Copia certificada de la resolución PLE-TCE-841-22-03-2012, adoptada por el Pleno de este Organismo, en sesión extraordinaria de jueves 22 de marzo de 2012, mediante la cual designa al abogado Juan Paúl Ycaza Vega, como Juez Principal del Tribunal Contencioso Electoral, debido a la renuncia presentada por el doctor Arturo Javier Donoso Castellón y aceptada por el Pleno del Tribunal.

I.- ANTECEDENTES

De tres mil treinta y cinco (3.035) fojas que conforman el expediente, se consideran los siguientes documentos:

1) El día miércoles veinticinco de enero de dos mil doce a las diecisiete horas y dos minutos, se recibe en la Secretaría General de este Tribunal, el expediente en dos mil seiscientos sesenta y tres (2.663) fojas útiles; informe de labores de la Asamblea Nacional por el período 2009-2011, rendición de cuentas de la Asamblea Nacional por el período de agosto 2009-julio 2010: Ley Orgánica de Educación Superior, publicado en el Registro Oficial No. 298 del 12 de octubre de 2010; Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre del 2010; y, 2 CD´s., el expediente ha sido signado con el No. 001-2012-TCE, correspondiente al recurso ordinario de apelación interpuesto por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, respecto de la Resolución PLE-CNE- 9-11-1-2012, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de miércoles 11 de enero del 2012, mediante la cual, se aceptó la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los señores Jorge Oswaldo Chérrez Cano y Guillermo Próspero Quirumbay Suárez, en contra de la autoridad antes señalada.

2) Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, publicado en el Registro Oficial No. 578 de 27 de abril del 2009 (fs. 1 a 27).

3) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas-Código de la Democracia- y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que Regulan la Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo del 2011 (fs. 28 a 30).

4) Oficio No. OF-334-CNE-DPESE-11 de 30 de diciembre del 2011, dirigido al Dr. Domingo Paredes Castillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Ab. Xavier Júpiter Coronel, Director (E) de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, mediante el cual remite el expediente relacionado con la solicitud de revocatoria de mandato propuesta por los señores Jorge Chérrez Cano y Guillermo Quirumbay Suárez y la impugnación a la revocatoria mencionada con documentación adjunta, presentada por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta Provincial de Santa Elena (fs. 31).

5) Oficio No. 076-LMG-DAJ-CNE- 2011 de 20 de diciembre de 2011, dirigido al Ab. Xavier Júpiter Coronel, Director encargado de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, suscrito por el Dr. Lincoln Mora Guevara, Director de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual devuelve el expediente que contiene la solicitud de revocatoria del mandato del Asambleísta provincial de Santa Elena, a fin de que se cumplan con los procedimientos legales establecidos (fs. 32).

6) Solicitud de revocatoria de mandato presentada por los señores Jorge Chérrez Cano y Guillermo Quirumbay Suárez, en contra del Asambleísta por la provincia de Santa Elena, Lic. Milton Jimmy Pinoargote Parra, por incumplimiento del Plan de Trabajo (fs. 33 a 36).

7) Copia certificada del Plan de Trabajo propuesto para el período dos mil nueve a dos mil catorce, por los candidatos a Asambleístas Provinciales por la provincia de Santa Elena, por el Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional Lista 24, señores Milton Jimmy Pinoargote Parra, Nelly Chalen Rodríguez y Wilson Nicolás Cochea Perlaza, realizada mediante escritura de Declaración Voluntaria Juramentada, el cuatro de febrero del dos mil nueve, ante el Ab. Carlos San Andrés Restrepo, Notario del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena (fs. 38 a 45).

8) Copia certificada de la notificación de 21 de diciembre del 2011, dirigida al Lcdo. Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta Provincial de Santa Elena, suscrito por el Ab. Xavier Júpiter Coronel, Director (E) de la Delegación Provincial de Santa Elena, respecto de la solicitud de Revocatoria de Mandato, a fin de que en el término de siete (7) días, el mencionado Asambleísta impugne en forma documentada, si esta no cumple los requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria de Mandato (fs. 46).

9) Impugnación presentada por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, respecto de la solicitud de revocatoria de mandato formulada por los señores Jorge Chérrez Cano y Guillermo Quirumbay Suárez; adjunta diez (10) carpetas con dos mil ochocientas veinte y nueve (2.829) fojas útiles, tres (3) publicaciones y un (1) CD con videos de intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional (fs. 47 a 50).

10) Copias certificadas de convocatorias, registros de asistencia de asambleístas a sesiones de la Asamblea Nacional y resúmenes de votaciones sobre: Presupuesto General del Estado, Ley Orgánica de Educación, Ley Reformatoria al Código Penal y de Procedimiento Penal (fs. 51 a 100).

11) Copias certificadas de convocatorias, registros de asistencia de asambleístas a sesiones de la Asamblea Nacional y detalles de votaciones sobre Proyectos de Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica Reformatoria del Mandato Constituyente No. 10, Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (fs. 101 a 200).

12) Copias certificadas de registros y detalles de asistencia y votación de los Asambleístas en las decisiones de la Asamblea Nacional respecto de Proyectos de Leyes (fs. 201 a 878).

13) Requerimientos de información y documentación mediante oficios a once (11) autoridades y funcionarios públicos nacionales y provinciales; y, once (11) comunicaciones dirigidas al Presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por el Asambleísta Provincial de Santa Elena, Lic. Jimmy Pinoargote Parra, mediante las cuales da a conocer al titular de esa función del Estado, el incumplimiento de la entrega de información requerida a las autoridades y funcionarios públicos (fs. 879 a 900).

14) Copias certificadas de requerimientos de: Información, documentación, contestación, certificación y atención, mediante oficios a ciento sesenta y siete (167) autoridades y funcionarios públicos nacionales y provinciales; y, treinta y tres (33) comunicaciones dirigidas al Presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por el Asambleísta provincial de Santa Elena Lic. Jimmy Pinoargote Parra, mediante las cuales pone en conocimiento del titular de esa función del Estado, el incumplimiento de la entrega de información requerida a las autoridades y funcionarios públicos, para el trámite respectivo en ese Organismo (fs. 901 a 1100).

15) Copias certificadas de requerimientos de información, documentación y acciones a veintiocho (28) autoridades y funcionarios públicos nacionales y provinciales; y, cuatro (4) comunicaciones dirigidas al Presidente de la Asamblea Nacional, suscritas por el Asambleísta provincial de Santa Elena, Lic. Jimmy Pinoargote Parra, con las que comunica respecto al incumplimiento de entrega de información requerida a las autoridades y funcionarios públicos (fs. 1101 a 1132). Análisis del borrador de informe complementario del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (fs. 1134 a 1207).

16) Copias certificadas de observaciones a proyectos de Ley Orgánica de Educación Intercultural; Ley Orgánica de la función Ejecutiva; Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; a la Proforma del Presupuesto del estado. Informes de mayoría y de minoría para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (fs. 1208 a 1521).

17) Copias certificadas del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de turismo; Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.417 de 31 de marzo del 2011; Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, Registro Oficial No. 255 de 11 de agosto de 2010; Informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de comunicación; Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Informe para primer debate del Proyecto de Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos; convocatorias a sesiones ordinarias y registro de asistencias de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero; Informe de mayoría para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (fs.1523 a 2000).

18) Copias certificadas de convocatorias, actas y registros de asistencias a las sesiones de la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, del cual es miembro el Asambleísta provincial de Santa Elena, Lic. Milton Jimmy Pinoargote Parra, para tratar el Proyecto de Ley de Aguas; y, recibir en Comisión General a funcionarios del Estado y organizaciones de la sociedad civil, comunicaciones de detalles de asistencias (fs. 2001 a 2611).

19) Copias certificadas de: Rendición de cuentas para el período de agosto 2009 - julio 2010, del Asambleísta provincial de Santa Elena, Lic. Jimmy Pinoargote Parra; Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del mandato, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 16 de septiembre del 2011; Reforma al Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de

la Iniciativa Popular Normativa, Consultas populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 614 de 9 de enero del 2012 (fs. 2613 a 2623).

20) Memorando No. 002-DES de 03 de enero del 2012, dirigido al Dr. Lincoln Mora, Director de Asesoría Jurídica, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual remite copias de los documentos ingresados en el Archivo de ese Organismo, para que se emita el informe para conocimiento del Pleno (fs. 2624).

21) Memorando No. 014- DAJ- CNE- 2012 de 11 de enero del 2012, dirigido al Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General, suscrito por el Dr. José Vásconez Álvarez, Director de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, con el que adjunta el informe No. 0012-DAJ-CNE-2012, respecto a la Revocatoria de Mandato propuesta en contra del Lcdo. Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena (fs. 2625 a 2635).

22) Memorando No. 031-DOP-CNE-2012 de 13 de enero de 2012, dirigido al Ab. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Lcdo. Pablo Arévalo Mosquera, Director de Organizaciones Políticas del CNE, mediante el cual informa que el número de firmas de respaldo que se requiere para el proceso de Revocatoria de Mandato del señor Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena es de 24.904 firmas de respaldo; y, el plazo que tienen los proponentes para recolectar las mismas es de 150 días contados a partir del día de entrega de los formularios por parte del Consejo Nacional Electoral (fs. 2636 y vuelta).

23) Memorando No. 00026 de 10 de enero del 2012, dirigido al Dr. José Vásconez Álvarez, Director de Asesoría Jurídica, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, con el que adjunta originales del memorando No. 016-DGYRE-CNE-2012 de 10 de enero del 2012, anexado el informe No. 003-DGYRE-CNE-2012 de 10 de enero del 2012, dirigido al Ingeniero Miguel Jarrín Jarrín, Director de Geografía y Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral, suscrito por la Srta. Paulina Galarza Miño, Técnico Electoral 2 del Consejo Nacional Electoral, en el que informa que en la base de datos de esa Dirección se constató que los señores Guillermo Quirumbay Suárez con cédula de identidad No. 090510355-2; y, Jorge Oswaldo Chérrez Cano con cédula de identidad No. 120204121-4, se encuentran en goce de los derechos políticos; Oficio No. 032- DOP-CNE- 2012 de 10 de enero de 2012, dirigido al Ab. Christian Proaño, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Lic. Pablo Arévalo Mosquera, Director de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, en el que informa que, los señores Próspero Guillermo Quirumbay Suárez y Jorge Oswaldo Chérrez Cano, no constan como dignidades electas. Memorando No. 019- DIE-CNE-2012 de 10 de enero de 2012, dirigido al Dr. José Vásconez Álvarez, Director de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Ing. José Luis Gavilanes Balarezo, Director de Informática Electoral del CNE, mediante el cual informa que el ciudadano Próspero Guillermo Quirumbay Suárez , registra su domicilio electoral en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena y parroquia Santa Elena; y, el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Cano, registra su domicilio electoral en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, parroquia La Libertad. Certificación de 10 de enero del 2012, suscrita por el Dr. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual certifica que los señores Chérrez Cano Jorge Oswaldo y Quirumbay Suárez Próspero Guillermo, pertenecen a la jurisdicción de la autoridad contra la que se propone la revocatoria de mandato y sufragaron en las elecciones del 7 de mayo del 2011 en las Juntas números 13 M y 29 M, respectivamente (fs. 2637 a 2643).

24) Copia certificada del Oficio No. 000117 de 17 de enero del 2012, dirigido al Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, suscrito por el Ab. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual comunica que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de miércoles 11 de enero del 2012, adoptó la resolución PLE-CNE-9-11-1-2012, que en el artículo 2 dispone: "Admitir la solicitud de revocatoria de mandato en contra del Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, (…)." (fs. 2653 a 2655).

25) Copia certificada del Oficio No. 000118 de 17 de enero del 2012, dirigido a los señores Guillermo Quirumbay Suárez y Jorge Oswaldo Chérrez Cano, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual notifica la resolución PLE-CNE-9-11-1-2012, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, adoptó en sesión ordinaria del día miércoles 11 de enero del 2012 (fs. 2656 a 2658).

26) Copia certificada del Oficio No. 000116 de 17 de enero del 2012, dirigido al señor Xavier Júpiter Coronel, Director encargado de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, suscrito por el Ab. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, con el que comunica la resolución PLE-CNE-9-11-1- 2012 de 11 de enero del 2012 (fs. 2659 a 2661).

27) Escrito del Lcdo. Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, recibido en el archivo general del Consejo Nacional Electoral el 23 de enero del 2012, a las P: 3:35, con el cual apela de la decisión adoptada por ese Organismo en resolución PLE-CNE-9-11-1-2012, que en el Artículo 2 dispone admitir la solicitud de revocatoria de mandato en contra de la autoridad anteriormente señalada (fs. 2662 y 2663).

28) Ley Orgánica de Educación Superior y Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (fs. 2664 a 2713).

29) Rendición de Cuentas de la Asamblea Nacional por el período de agosto 2009 - julio 2010; Informe de Labores de la Asamblea Nacional por el período 2009 - 2011; Intervenciones del Asambleísta provincial de Santa Elena, Lic. Milton Jimmy Pinoargote Parra, en el Pleno de la Asamblea Nacional (1 CD); Aportes Normativos de la Asamblea Nacional 2009 - 2011 (1CD) (fs. 2714 a 3032).

30) Oficio No. 000295 de 25 de enero del 2012, dirigido a la Doctora Ximena Endara Osejo, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual remite el expediente que corresponde al Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, en contra de la Resolución No. PLE-CNE-9-11-1-2012 de 11 de enero de 2012, a través de la que, se acepta la solicitud de revocatoria de mandato planteada por los señores Jorge Oswaldo Chérrez Cano y Guillermo Próspero Quirumbay Suárez (fs. 3033).

II.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

2.1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano de la Función Electoral, encargado de administrar justicia como instancia final en materia electoral, con el objetivo de garantizar los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 221 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 18, 61, 70, 72 y 268 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. En el artículo 269 se enumeran los casos en los cuales se podrá plantear el recurso ordinario de apelación.

Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 70 numerales 1 y 2; 72, inciso segundo; 268 numeral 1; 269 numeral 12 de este cuerpo legal, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es competente para conocer, tramitar y resolver la presente causa.

El inciso tercero del artículo 244 del Código de la Democracia, dispone que: "En el caso de consultas populares y referéndum, podrán proponer los recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia directa; en el caso de revocatorias del mandato, los que han concurrido en nombre de los ciudadanos en goce de sus derechos políticos para pedir la revocatoria así como la servidora o servidor público de elección popular a quien se solicite revocar el mandato".

En la sustanciación del recurso, se han observado las solemnidades esenciales que le son propias, por lo que se declara su validez.

2.2 ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

2.2.1 La revocatoria del mandato.-

La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 103 a 105 garantiza el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la revocatoria del mandato.

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece en el numeral 5 del artículo 2, dentro de los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos, el "Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular", disposición concordante con lo dispuesto en el artículo 61 numeral 6 de la Constitución.

Los artículos 199 a 201 del Código de la Democracia, establecen los requisitos para la revocatoria del mandato de autoridades de elección popular, mismos que se han observado para esta causa.

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se dispone en el Título II De la Democracia Directa, artículo 5, que: " El Estado garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato; impulsa, además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la Constitución y la ley". En relación a la revocatoria del mandato, se observa que en el capítulo IV, consta en el mecanismo de democracia directa a partir del artículo 25 al 28 de la misma Ley, artículos que en virtud del Registro Oficial No. 445 publicado el miércoles 4 de mayo de 2011, también fueron reformados y sustituidos.

En el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato aprobado por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE-2-6-1-2011, publicado en el Registro Oficial No. 371 de miércoles 26 de enero de 2011, se determina el procedimiento para el proceso de la revocatoria del mandato.

2.2.2 Competencia del Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral, conforme lo señala el artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene entre sus funciones: "1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales (...)", en concordancia con el artículo 25 numerales 2 y 3 del Código de la Democracia, que prescriben: "2. Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato". "3. Resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de su competencia; (...)".

En tal virtud, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria de miércoles 11 de enero del 2012, adoptó la resolución PLE- CNE-9-11-1-2012, que en el artículo 2 de la parte resolutiva dispone:" Admitir la solicitud de revocatoria de mandato en contra del licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de

Santa Elena, y disponer la entrega del formato de formulario para la recolección de firmas, de conformidad con el inciso primero del artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reformada por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regula la revocatoria de mandato, publicada en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo del 2011, y con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatorias de Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 16 de septiembre del 2011."

2.2.3 El recurso ordinario de apelación

Interposición del recurso y argumentos del recurrente

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el plazo para interponer el recurso ordinario de apelación es de tres días; en la especie, el recurrente Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, ha presentado el recurso el 23 de enero de 2012 en el archivo general del Consejo Nacional Electoral, habiendo sido notificado con el Oficio No. 000117 el jueves 19 de enero de 2012, que contiene la resolución PLE-CNE-9-11-1- 2012, es decir que el recurso fue interpuesto por el recurrente en el tiempo determinado en la Ley.

b) El recurrente ha expresado en su escrito de apelación, que " (…) no consta del recaudo ninguna demostración de que se haya comprobado el GOCE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS(sic) por parte de los solicitantes de la Revocatoria: Jorge Oswaldo Chérrez Cano y Guillermo Próspero Quirumbay Suárez; el señor Secretario General del Consejo Nacional Electoral que usted preside, en ningún momento ha extendido el documento que así lo certifique, pues, es el único funcionario que goza y es Ministro de Fé Pública (sic), sacando mas bien el considerando décimo de la Resolución, una conclusión del mero ejercicio del sufragio en las elecciones del 7 de mayo del 2011, en lugar de que sea dicho Secretario quien lo certifique textualmente.(...)".

c) El recurrente argumenta además que: "Es elemental también preguntarse sobre las razones por las cuales no consta en la Resolución ni en el expediente, la comprobación de que los solicitantes son electores en la jurisdicción territorial a la que yo represento, es elemental también hacer esta comprobación, por que solo quien elige, puede revocar, y esto, nos trae a otra pregunta, ¿votaron ellos en el proceso electoral en el cual se me eligió?, o no lo hicieron, ¿sufragaron en su jurisdicción o se presentaron en otra a requerir un certificado en ese sentido?", y que, "La alegación o fundamento de Chérrez Cano y Quirumbay Suárez, única y exclusivamente se circunscribe a que no he cumplido con mi plan de trabajo que lo presenté como oferta de campaña, debidamente escriturado, y nada más". Finalmente, expresa el recurrente que, "Aparte de la simple presentación de mi plan de trabajo y afirmaciones asi mismo simples de los proponentes, no hay una sola certificación de que yo no haya trabajado o incumplido mi plan de trabajo (...)", señalando que al contestar la copia de la solicitud que se le notificó, hizo un amplio despliegue del cumplimiento del referido plan adjuntando documentación en dos mil ochocientas veinte y nueve (2.829) fojas.

2.2.4 Consideraciones del Tribunal Contencioso Electoral

Una vez revisado en su integridad la documentación contenida en el presente expediente, así como los argumentos del recurrente, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral considera:

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 75 señala que: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. (...)". La misma Constitución en el artículo 76 numeral 7 literales a) y m) incluye como garantías básicas del debido proceso correspondientes al derecho a la defensa, los siguientes derechos: " a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento" y " m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en lo que se decida sobre sus derechos."

El recurrente, en su escrito de apelación, expresa que no consta del recaudo que se haya comprobado que los solicitantes de la revocatoria del mandato, señores Jorge Oswaldo Chérrez Cano y Guillermo Próspero Quirumbay Suárez, se encuentren en goce de sus derechos políticos; a fojas dos mil seiscientas treinta y siete (2.637) del expediente, consta el original del memorando No. 00026 de 10 de enero del 2012, dirigido al Dr. José Vásconez Álvarez, Director de Asesoría Jurídica, suscrito por el Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual adjunta el original del memorando No. 016-DGYRE-CNE-2012 de 10 de enero de 2012, dirigido al Abg. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Ing. Miguel Jarrín Jarrín, Director de Geografía y Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral, constante a fojas dos mil seiscientas treinta y ocho (2.638), con el que envía la información solicitada, esto es, el informe No. 003-DGYRE-CNE-2012 de 10 de enero de 2012, en el que señala que revisada la base de datos que mantiene la Dirección de Geografía y Registro Electoral del CNE, los señores Guillermo Quirumbay Suárez, portador de la cédula No. 090510355-2 y Jorge Oswaldo Chérrez Cano, portador de la cédula No. 120204121-4, se encuentran en goce de sus derechos políticos, información constante a fojas dos mil seiscientos treinta y nueve (2.639) del expediente.

El Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, ha manifestado en su recurso que no consta en la resolución ni en el expediente, la comprobación de que los solicitantes son electores en la jurisdicción territorial a la que representa el recurrente y se pregunta si ellos votaron o no en su jurisdicción; y, que el fundamento de los solicitantes solo se circunscribe a que no ha cumplido su plan de trabajo que presentó como oferta de campaña y nada más. Al respecto, mediante memorando No. 019-DIE-CNE-2012 de 10 de enero de 2012, dirigido al Dr. José Vasconez Álvarez, Director de Asesoría Jurídica

del Consejo Nacional Electoral, suscrito por el Ing. José Luis Gavilanes Balarezo, Director de Informática Electoral, constante a fojas dos mil seiscientas cuarenta y uno (2.641) del expediente, informa que el ciudadano Próspero Guillermo Quirumbay Suárez, portador de la cédula de ciudadanía No. 090510355-2, registra su domicilio electoral en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, parroquia Santa Elena; y, el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Cano, portador de la cédula de ciudadanía No. 120204121-4, registra su domicilio electoral en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, parroquia La Libertad.

El Dr. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante certificación de 10 de enero del 2012, constante a fojas dos mil seiscientas cuarenta y dos (2.642) del expediente, certifica que el señor Jorge Oswaldo Chérrez Cano, con cédula de ciudadanía antes señalada, pertenece a la jurisdicción de la autoridad contra la que se propone la revocatoria de mandato y sufragó en las elecciones del 7 de mayo del 2011, en la Junta No. 13-M, de la parroquia y cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, conforme se desprende del cuadro incorporado en las fojas señaladas.

El Dr. Christian Proaño Jurado, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, mediante certificación de 10 de enero del 2012, constante a fojas dos mil seiscientas cuarenta y tres (2.643) del expediente, certifica que el señor Próspero Guillermo Quirumbay Suárez, con cédula de ciudadanía anteriormente señalada, pertenece a la jurisdicción de la autoridad contra la que se propone la revocatoria de mandato y sufragó en las elecciones del 7 de mayo del 2011, en la Junta No. 29-M, de la parroquia, cantón y provincia de Santa Elena, según se desprende del cuadro incorporado en dicha foja. Esta información constante en el expediente materia de la presente causa, se encuentra también señalada en los considerandos noveno y décimo de la resolución No. PLE-CNE-9-11-1-2012 de 11 de enero del 2012, que es materia del recurso ordinario de apelación interpuesto por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta Provincial de Santa Elena y en el informe No. 0012-DAJ-CNE-2012 de 9 de enero de 2012, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica del CNE.

Del análisis realizado al expediente, además de lo anteriormente señalado, se establece que, conforme a la documentación existente en el proceso, el recurrente ha realizado una serie de actividades y gestiones como Asambleísta provincial de Santa Elena, como son; comunicaciones, peticiones y requerimientos a autoridades nacionales, regionales, cantonales, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, privadas, comunitarias y sociales; sin embargo respecto al cumplimiento de su plan de trabajo que ingresó como requisito en la inscripción de la candidatura a Asambleísta provincial, no hace mención en su escrito de impugnación, limitándose a señalar que, "Aparte de la simple presentación de mi plan de trabajo y afirmaciones asi(sic) mismo simples de los proponentes, no hay una sola certificación de que yo no haya trabajado o incumplido mi plan de trabajo (...)"; y, que al contestar la solicitud que se le notificó -dice que- hizo un amplio despliegue del cumplimiento adjuntando documentación en dos mil ochocientas veinte y nueve (2.829) fojas.

De la documentación presentada por el recurrente, existe una escritura de Declaración Voluntaria Juramentada, dentro de la cual a fojas cuarenta y uno (41) y cuarenta y dos (42), consta: "(…) b) PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ASAMBLEISTAS DEL MOVIMIENTO MUNICIPALISTA POR LA INTEGRIDAD NACIONAL LISTA 24, POR LA PROVINCIA DE SANTA ELENA: **1**) Expedición de la Ley que crea la zona franca de Chanduy. **2)** Expedición de la Ley que condona todo tipo de impuesto y gravámenes, durante cinco años, para el empresario que invierta en la provincia de Santa Elena capitales por más de un millón de dólares en obras de desarrollo público o privado. **3**) Expedición de la Ley que determina a la provincia de Santa Elena como zona turística de preferencia, para las exoneraciones de Ley. **4)** Expedición de la Ley que crea el impuesto para la explotación de sal en la provincia de Santa Elena, tributo que deberá ser reinvertido en la provincia. **5)** Expedición de la Ley que crea impuesto a la explotación, producción y comercialización del petroleo y sus derivados en la provincia de Santa Elena. Dichos tributos deberán ser reinvertidos en obras de interés social de la provincia. **6)** Expedición de la Ley que crea la declaratoria de Patrimonio Cultural del País, a la Comuna Valdivia con las garantías de Ley. **7)** Expedición de Ley que crea la contribución, a través de la transferencia de dominio para la Casa de la Cultura, núcleo de Santa Elena. **8)** Expedición de Ley que regula la protección ambiental como política de Estado para la provincia de Santa Elena (...)."

En el expediente se encuentran incorporadas copias certificadas de varios borradores de informes para debates de los proyectos de leyes en los que ha participado el recurrente Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta provincial de Santa Elena, así como informes y observaciones a varios proyectos de leyes como son: Ley Orgánica de Comunicación; Ley Orgánica de Educación Intercultural; Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación; Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua; Ley Orgánica Reformatoria de Turismo; Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, pero ninguno de éstos tienen relación con el Plan de Trabajo propuesto por el Lic. Milton Jimmy Pinoargote Parra, cuando inscribió su candidatura para Asambleísta por la provincia de Santa Elena.

De la revisión de los dos (2) CD´s., entregados por el Asambleísta provincial de Santa Elena Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, se observa, en el primer CD, videos de intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, por parte del asambleísta mencionado, en el tratamiento en primer y segundo debate de proyectos de leyes como: Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua; Ley Orgánica de Comunicación; Ley Orgánica Reformatoria de Turismo; Ley de Deportes; Ley Orgánica de Educación; Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, varios temas y asuntos como: Enfermedades catastróficas, el 30 de septiembre -30-S; Proforma presupuestaria 2011. El segundo CD contiene Aportes Normativos de la Asamblea Nacional 2009-2011, en materias como: Administración Pública, Civil, Descentralización, Económica, Electoral, Legislativa,

Participación Ciudadana, Penal, Salud, Seguridad Pública, Servicio Público, Soberanía Alimentaria, Transporte Terrestre, Tributaria, Control Constitucional y anexos de iniciativas legislativas; intervenciones que no hacen referencia al programa de trabajo antes señalado y presentado en aquel tiempo.

Analizada en su conjunto la documentación aportada por el recurrente, dentro de la cual se encuentra su Plan de Trabajo o Programa de Trabajo, se determina que si bien ha cumplido con su obligación de Asambleísta de asistir tanto a las sesiones de las Comisiones en las que ha sido nombrado, cuanto a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en ninguna parte del expediente, consta documento alguno que pruebe por parte del Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta provincial de Santa Elena, el cumplimiento de su Plan o Programa de Trabajo propuesto previo a la elección de Asambleísta provincial.

El incumplimiento del Plan de Trabajo es causal para que las electoras y electores soliciten la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular, conforme lo prescribe el artículo 25 inciso primero reformado de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regula la Revocatoria de Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo de 2011, que dice: " Art. 25.- **Revocatoria del mandato**.- Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular". Además, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, conforme consta del proceso y previo a dictar la resolución mediante la cual admite la solicitud de revocatoria de mandato en contra del Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, ha verificado que se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en la parte final del inciso segundo del Art. 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que señala: " (…). Podrán presentar esta solicitud las electoras y electores que estén empadronados en la circunscripción respectiva de la autoridad a la que se pretende revocar el mandato. (...)".

El artículo innumerado a continuación del Art. 25 anteriormente señalado, establece los requisitos de admisibilidad y que son los siguientes: " 1.- Comprobación de la identidad del proponente y que este(sic) en ejercicio de los derechos de participación; 2.- Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabilitan; y, 3.- La Determinación(sic) clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria, la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria; (...)", en concordancia con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatorias de Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 16 de septiembre del 2011, que dispone: "El Consejo Nacional Electoral verificará que los proponentes se encuentren en ejercicio de los derechos de participación; consten inscritos en el registro electoral de la circunscripción en la que se propone la revocatoria de mandato; que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad; y, que la motivación se refiera a las causales establecidas en el artículo 14 de este reglamento".

En tal virtud, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral considera que la resolución PLE- CNE-9-11-1-2012, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de 11 de enero de 2012, se ha fundamentado con pertinencia, de manera explícita y en acatamiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, por lo que deviene en improcedente lo solicitado por el recurrente. Además, el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con el debido proceso y se ha motivado en legal y debida forma la decisión dictada en el marco que señala el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

III.- DECISIÓN

Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,** dicta la siguiente sentencia:

1) Desestimar por improcedente, el recurso ordinario de apelación interpuesto por el Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena, contra la resolución PLE-CNE-9-11-1-2012, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de 11 de enero de 2012.

2) Ratificar la resolución PLE-CNE-9-11-1-2012, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral.

3) Notifíquese al recurrente, Licenciado Milton Jimmy Pinoargote Parra, Asambleísta por la provincia de Santa Elena; y, a los solicitantes de la revocatoria de mandato señores Jorge Oswaldo Chérrez Cano y Próspero Guillermo Quirumbay Suárez.

4) Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese con copia certificada al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

5) Continúe actuando en la presente causa el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral.

6) Cúmplase y notifíquese.

f.) Dra. Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta TCE, Voto Salvado.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta TCE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza TCE.

f.) Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez TCE.

f.) Ab. Juan Paúl Ycaza Vega, Juez TCE.

Certifico.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General TCE.

SENTENCIA

CAUSA 0720-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 28 de marzo de 2012. Las 16h55. **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Dr. Darwin León, en su calidad de defensor público y copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

A la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO**, de acuerdo con el sorteo correspondiente. Esta causa ha sido identificada con el número 0720-2011-TCE y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) Para el 07 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De conformidad con los incisos tercero y cuarto del artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) Para el juzgamiento de las infracciones electorales, se tendrá en cuenta el procedimiento que se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas, determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El subteniente de policía Diego Marcalla Chacha, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, suscribe el parte informativo, en el que consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 19h20, en la calle Macará y Mercadillo (parte exterior del estadio Reina del Cisne), se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009196-2011-TCE, al señor **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110178902-0, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-009196-2011-TCE, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral procede a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) El 30 de enero de 2012 a las 10h00 se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO**, con domicilio en El Sagrario, parroquia Sucre, provincia de Loja; se señala que el día martes 27 de marzo de 2012 a las 15h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para cumplir con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO** fue citado en su domicilio, recibió la citación la señora Carlota Ortega, compañera de trabajo del presunto infractor el día jueves 02 de febrero de 2012, a las

8h40, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10)

b) Con el fin de que concurra a la audiencia oral de prueba y juzgamiento en el día y hora señalados, el subteniente de policía Diego Marcalla Chacha fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25, conforme consta a fojas 7 del proceso.

c) Con fecha 31 de enero de 2012 y con oficio No. 010-SMM-PTCE-2012 se notificó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja, con el propósito de que se designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Dr. Darwin León, en calidad de defensor público (fs. 8).

d) El día y hora señalados, esto es el martes 27 de marzo de 2012, a partir de las 15h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO,** portador de la cédula de ciudadanía número 110178902-0, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 27 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia del presunto infractor y del defensor público Dr. Darwin León.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: No compareció el subteniente de policía Diego Marcalla Chacha y por tanto, el contenido del parte informativo no pudo ser reconocido por el agente del orden. Se concedió la palabra al señor Edgar Patricio Pacheco Sarmiento, quien a su generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriano, de 55 años de edad, de estado civil casado, de ocupación docente primario, domiciliado en la avenida Pío Jaramillo Alvarado No. 1939 y Kennedy de la ciudad de Loja; en cuanto a los hechos indicó que ese día se clausuraba un torneo de basket y que se acercó a los jueces de este evento deportivo para llevarles al hotel donde estaban alojados ya que al otro día eran las elecciones. La policía los detuvo diciendo que estaban bebiendo en la vía pública lo cual no fue así, ya que en ningún momento estaban bebiendo; que la boleta fue entregada a las 17h20 y no a las 19h20; que como él conducía, lo llevaron para hacerle la prueba de alcoholemia, en ella no salió nada, por lo que le dejaron en libertad y pudo votar al siguiente día. El Dr. Darwin León en su calidad de defensor publicó manifestó que no se ha reproducido prueba alguna que determine la culpabilidad de su defendido y que de su testimonio se ha establecido que no se encontraba bebiendo en la vía pública. Al no existir contradicción alguna y de conformidad con lo que establece el artículo 76 numeral 2 de la Constitución, solicitó se confirme la inocencia.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

En el artículo 123 del Código de la Democracia se señala que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal textualmente dice que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Estas normas citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

De la aplicación de las normas indicadas al presente caso podemos concluir que la no comparecencia del agente del orden para rendir su versión limita el análisis y contrastación de lo señalado en el parte policial y boleta informativa, lo cual impide que los mismos puedan constituirse en prueba plena, ya que solamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. No existiendo indicios o medios de convicción que permitan probar la responsabilidad del cometimiento de la infracción, para esta jueza, el testimonio rendido por el presunto infractor constituye prueba suficiente para ratificar la inocencia del señor Edgar Patricio Pacheco Sarmiento.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA**, se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **EDGAR PATRICIO PACHECO SARMIENTO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110178902-0.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 28 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0721-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 28 de marzo de 2012. Las 17h25.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Dr. Darwin León, en su calidad de defensor público del presunto infractor.

De acuerdo al sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG**. Esta causa ha sido identificada con el número 0721-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217, en concordancia con los artículos 167, 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, le otorgan al Tribunal Contencioso Electoral la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y, particularmente, para sancionar por vulneraciones de normas electorales.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular para el día 07 de mayo de 2011, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 incisos tercero y cuarto de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde llevarlo adelante en la primera instancia a una de las juezas o jueces, por sorteo; y, la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Al recibir la denuncia sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Con las normas enunciadas queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo suscrito por el subteniente de policía Diego Marcalla Chacha, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, consta que el día viernes 6 de mayo de 2011 a las 19h20, en la calle Macará y Mercadillo (parte exterior del estadio Reina del Cisne), se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009195-2011-TCE, al señor **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG**, portador de la cédula de ciudadanía número 07017128-1, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) Mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, la Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral el referido parte y la boleta informativa No. BI-009195-2011-TCE (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral sortea la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 30 de enero de 2012, a las 10h30, se admite a trámite la presente causa; se ordena la citación al señor **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG**, con domicilio en la ciudadela de Machala, ciudad de Loja, provincia de Loja; se señala que el día martes 27 de marzo de 2012 a las 17h00

se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG,** no pudo ser citado en la dirección descrita en la boleta informativa, conforme se desprende de la razón sentada el día lunes 06 de febrero de 2012, por el citador/notificador del Tribunal Contenciosos Electoral (fs. 9), por lo que, mediante auto de 22 de febrero de 2012 a las 10h00 se dispone la citación por la prensa. Tal citación se publica en el diario "Crónica" del día viernes 16 de marzo de 2012, conforme consta a fojas 14 del expediente, en ella se le hace conocer al presunto infractor que debe designar su abogado defensor, ejercer su derecho a la defensa, concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada; y, que en caso de no contar con un defensor de su confianza se designará a un defensor público de la provincia de Loja.

b) El subteniente de policía Diego Marcalla Chacha fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el 31 de enero de 2012, a las 11h25, conforme consta a fojas 7 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) El 02 de febrero de 2012, mediante oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Dr. Darwin León en calidad de defensor público (fs. 8).

d) El martes 27 de marzo de 2012, a partir de las 17h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa, el presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG,** portador de la cédula de ciudadanía número 070171281-2.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, de acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día martes 27 de marzo de 2012, a partir de las 17h10, en las oficinas de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja ubicadas en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. No compareció el presunto infractor, se contó con la presencia del defensor público, Dr. Darwin León.

b) De la audiencia se desprende lo siguiente: No compareció el señor Jorge Freddy Campain Chang, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía. Tamoco asistió el señor subteniente de policía Diego Marcalla Chacha. Se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia ya que se contó con la presencia del defensor público. Se leyó el parte policial de la causa, el mismo que no pudo ser reconocido por el agente del orden. El Dr. Darwin León en su calidad de defensor público manifestó: Que el numeral 2 del artículo 76 de la Constitución establece el principio de inocencia, el cual sucumbe ante una prueba practicada en audiencia; la falta de comparecencia del agente de policía hace imposible que exista prueba en contra del señor Jorge Freddy Campain Chang, por lo que solicita se le absuelva de la infracción determinada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del 07 de mayo de 2011. Para resolver la presente causa se aplican varias normas, de manera especial, el artículo 123 del Código de la Democracia que indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas; también el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia que textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que, entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En el presente caso, la no comparecencia del agente del orden para rendir su versión impide la corroboración de lo señalado en el parte policial y boleta informativa y los

mismos no pueden constituirse en prueba plena, dado que solamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto al no existir indicios o medios probatorios que brinden elementos de convicción suficientes para determinar la responsabilidad en el cometimiento de la infracción, se ratifica la inocencia del señor Jorge Freddy Campain Chang.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **JORGE FREDDY CAMPAIN CHANG**, portador de la cédula de ciudadanía número 070171281-2.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 28 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0722-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 29 de marzo de 2012. Las 16h55.- **VISTOS:** Agréguese al expediente: **a)** El oficio No. 2012-1589-CP-7, de 28 de marzo de 2012 suscrito por el Ab. Paúl Aguilar Sotomayor, Comandante Provincial de la Policía Nacional de Loja No. 7, en el que se justifica la inasistencia del agente de polícía Jorge Briceño Cabrera; **b)** Copia simple de la credencial profesional de Dra. Soraya Vásquez, en su calidad de defensora pública; y, **c)** Copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral por parte del señor **JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ**. Esta causa ha sido identificada con el número 0722-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales y sus fallos son de última instancia de acuerdo al artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) El día 07 de mayo de 2011 se realizó el referéndum y consulta popular convocado por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia establece que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se realizará de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Al amparo de las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El teniente de policía Fabián Briceño perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, en el parte informativo señala que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h58, en la Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009071-2011-TCE, al señor **JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 110170317-9, por contravenir el artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-009071-2011-TCE, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 5).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral procedió a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 6).

d) Mediante auto de 30 de enero de 2012, a las 11h00, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ**, con domicilio en la ciudadela Nueva Granada, calles 08 de Diciembre y Guayaquil, provincia de Loja; se señala que el día miércoles 28 de marzo de 2012 a las 09h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hace conocer las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 7 y 7 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Garantizando el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JORGE GUSTAVO VILLEGAS IÑIGUEZ** fue citado en su domicilio el día viernes 03 de febrero de 2012, a las 11h15, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 10)

b) Para que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el teniente de policía Fabián Briceño fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25 (fs. 8).

c) Con fecha 31 de enero de 2012 y con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se solicitó al Coordinador/a de la Defensoría Pública de Loja designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Dra. Soraya Vásquez, en calidad de defensora pública (fs. 9).

d) El día y hora señalados, esto es el miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 09h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JORGE GUSTAVO VILLEGAS ÍÑIGUEZ,** portador de la cédula de ciudadanía número 110170317-9, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia del presunto infractor y la defensora pública Dra. Soraya Vásquez.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: No compareció el teniente de policía Fabián Briceño; se leyó el parte policial de la causa, cuyo contenido no pudo ser reconocido por el agente del orden. La Dra. Soraya Vásquez en su calidad de defensora pública manifestó: Que en el país se ha implementado el procedimiento oral, dentro del cual se requiere la presencia de la parte contraria, es decir, de quien realizó el parte policial para que se ratifique en los hechos que constan en el mismo. No habiendo estado presente el que realizó el parte y tomando en cuenta el principio de inocencia establecido en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución solicita se declare la inocencia de su defendido. La señora Jueza preguntó al presunto infractor si desea intervenir, respondiendo que no. A sus generales de ley respondió que sus nombres son Jorge Gustavo Villegas Íñiguez, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 110170317-9, de 49 años de edad, de estado civil casado, de ocupación comerciante, domiciliado en la ciudadela Nueva Granada.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha propaganda se encuentra prohibida por la ley". La norma citada se aplica al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber realizado propaganda electoral el día de las elecciones. El juzgamiento de esta infracción está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. El artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa es evidente que la no comparecencia del agente del orden para rendir su versión no permite corroborar lo señalado en el parte policial y boleta informativa, por lo que los mismos no pueden constituir prueba plena. Por lo antes indicado, en el presente caso no hay indicios ni elementos de convicción suficientes para afirmar, que el señor Jorge Gustavo Villegas Íñiguez infringió el artículo 291 numeral 2 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **JORGE GUSTAVO VILLEGAS ÍÑIGUEZ**, portador de la cédula de ciudadanía número 110170317-9.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 29 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0723-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 29 de marzo de 2012. Las 17h23.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la Dra. Soraya Vásquez, en su calidad de defensora pública; copia simple de la cédula de ciudadanía del señor suboficial segundo de policía, Manuel Ramón Lara; y, copia simple de la cédula de ciudadanía de la presunta infractora.

Por el sorteo respectivo, le correspondió a esta Jueza conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte de la señora **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA**. Se ha identificado esta causa con el número 0723-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) Por mandato del artículo 217 en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 7 de mayo de 2011, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De acuerdo con los incisos tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas antes referidas determinan la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El suboficial segundo de policía Manuel Ramón Lara, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, suscribe el parte policial informativo en el que consta que el día jueves 6 de mayo de 2011 a las 09h30, en el cantón Paltas, ciudad de Catacocha, procedió a entregar la boleta informativa No. BI-010051-2011-TCE, a la señora **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA**, portadora de la cédula de ciudadanía número 110312912-6, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral el referido parte y la boleta informativa No. BI-010051-2011-TCE, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral procede a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo de dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 30 de enero de 2012, a las 11h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación a la señora **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA**, domiciliada en el Barrio Central No. 13-14 e Isidro Ayora, ciudad de Catacocha, parroquia de Lourdes, provincia de Loja; se señala que el día miércoles 28 de marzo de 2012 a las 11h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para cumplir con las garantías del debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) La señora **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA** fue citada en persona en su domicilio, el día miércoles 01 de febrero de 2012, a las 12h30, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 8)

b) Conforme consta a fojas 9 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el suboficial segundo de policía Manuel Ramón Lara, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25.

c) Mediante oficio No.010-SMM-P-TCE-2012, de fecha 31 de enero de 2012, se solicitó al Coordinador/a de la Defensoría Pública de Loja, designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Dra. Soraya Vásquez, en calidad de defensora pública (fs. 10).

d) El miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DE LA PRESUNTA INFRACTORA.-

De acuerdo con la boleta informativa a la presunta infractora se la identifica con el nombre de **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA,** portadora de la cédula de ciudadanía número 110312912-6.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DE LA PRESUNTA INFRACTORA.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) El día miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se realizó la audiencia oral de prueba y juzgamiento en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia de la presunta infractora y la defensora pública la Dra. Soraya Vásquez.

b) De lo actuado en la audiencia se desprende lo siguiente: Se leyó el parte policial de la causa, su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al suboficial segundo de policía Manuel Ramón Lara, quien manifestó: Que al realizar el recorrido por el sector urbano en la ley seca, en el interior de la tienda "La Gótica", se encontraban personas ingiriendo bebidas alcohólicas. La señora jueza intervino para realizar las siguientes preguntas: **1.** ¿Cuántas personas habían? Respuesta: No recuerdo, estaban regadas en distintas mesas; **2.** ¿Qué tipo de bebida alcohólica ingerían? Respuesta: Cerveza; **3.** ¿Usted procedió a entregarles la boleta informativa a las personas que estaban en el interior del bar? Respuesta: No, sólo a la señora dueña del bar. Por parte del agente del orden se entregó fotocopias que describen los hechos, en las cuales está implicado el bar "La Gótica". La Dra. Soraya Vásquez, en su calidad de defensora pública manifestó: **i)** Que rechaza el accionar del agente de policía, toda vez que la ley no solo prohibía su expendió, sino también su consumo, y que, en el caso no se siguió el procedimiento con las personas que se encontraban en el interior del local; **ii)** Que en cuanto a los documentos que se presentaron, no tienen valor jurídico, por ser copias simples, por lo que pide que se desechen; **iii)** Que existió una confusión de su defendida ya que no tomó en cuenta que el día previo era la consulta y que se realizaría el día sábado. La señora Jueza concedió la palabra a la señora Consuelo Luzmila Ramírez Atariguana, quien a sus generales de ley respondió que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1103129126, de 38 años de edad, de estado civil soltera, de ocupación comerciante, domiciliada en la calle Isidro Ayora 1314 y Manuel Vivanco, en Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. Al interrogatorio respondió: **1.** ¿Procedió a cerrar el local al momento que el agente del orden le dio la boleta? Respuesta: No, no cerré, debo indicar que el policía me dio la boleta al día siguiente y no como dice el parte que fue a las 9h30 del día 6 de mayo de 2011; **2.** ¿Usted no estuvo presente al momento en que le emitió la boleta? Respuesta: No, fue a mi empleada a quien entregó; **3.** Cómo conoció usted de la boleta? Respuesta: Al otro día el policía me hizo llegar la boleta. Sinceramente señora jueza yo me equivoque del horario de las votaciones, si no, no hubiera

vendido licor. Yo vendí a las horas que no eran las que debía. Acto seguido se procedió a interrogar al señor agente de policía, respondiendo: **1)** ¿Usted coincide con la versión de la señora aquí presente? Respuesta: Yo me ratifico en el parte; **2)** ¿En el parte dice que se entregó la boleta a la señora? Respuesta: Así es, ella me entregó la cédula y yo hice el parte en base a esos datos.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber expendido bebidas alcohólicas el día anterior a las elecciones del día 07 de mayo de 2011. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos expuestos a la luz de las normas enunciadas es claro que en el caso que nos ocupa, el contenido del parte informativo, remitido a esta jueza por el suboficial segundo de policía Manuel Ramón Lara, ha sido corroborado por la presunta infractora, quien ha reconocido que expendía bebidas alcohólicas en los días que existía prohibición, por lo tanto esta confesión se suma al testimonio del agente del orden lo que permite comprobar la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la señora Consuelo Luzmila Ramírez Atariguana, en el cometimiento de la infracción determinada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad de la señora **CONSUELO LUZMILA RAMÍREZ ATARIGUANA**, portadora de la cédula de ciudadanía número 110312912-6, en el cometimiento de la infracción prevista en el artículo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral de Loja del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 29 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0724-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 29 de marzo de 2012. Las 17h55.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de la Dra. Soraya Vázquez, en su calidad de defensora pública; y copias simples de la cédula del presunto infractor y del señor Nerio Alcivar Vacancela Zhingre, en calidad de testigo.

Por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0724-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final, otorga al Tribunal Contencioso Electoral la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos que se expresan a través del sufragio, particularmente para sancionar por vulneración de normas electorales y sus fallos son de última instancia.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales se encuentra previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía Osmany Vivanco Jaramillo, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, consta que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h30, en el cantón Paltas, ciudad de Catacocha, procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009951-2011-TCE, al señor **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110137488-0, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) Mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, la Delegación Provincial Electoral de Loja, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-009951-2011-TCE, recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) En la Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral se sortea la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos y le corresponde el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Mediante auto de 30 de enero de 2012, a las 12h00, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO**, con domicilio en el barrio San José, parroquia Catacocha, provincia de Loja; se señala que el día miércoles 28 marzo de 2012 a las 15h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral de Loja; además, se le dio a conocer las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Garantizando el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO,** fue citado en su domicilio el día miércoles 01 de febrero de 2012, a las 11h40, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 8)

b) El teniente de policía Osmany Vivanco Jaramillo, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25, conforme consta a fojas 9 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 31 de enero de 2012, y con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja, designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Dra. Soraya Vázquez, en calidad de defensora pública (fs. 10).

d) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, en ella se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO,** portador de la cédula de ciudadanía número 110137488-0, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De conformidad con el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día miércoles 28 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de

Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia del presunto infractor y la defensora pública, Dra. Soraya Vázquez.

b) De la audiencia se destaca lo siguiente: No compareció el teniente de policía Osmany Vivanco Jaramillo; el parte policial de la causa que fue leído en esta diligencia no pudo ser reconocido por el agente del orden. La Dra. Soraya Vásquez en su calidad de defensora pública manifestó: **i)** Que el parte es falso, de falsedad absoluta; **ii)** Que su defendido es propietario de una tienda, en la cual se vende productos alimenticios más no bebidas alcohólicas; **iii)** Que el día de los hechos hubo un grupo de personas jugando naipe y libando en la vía pública, por lo cual se acercó a pedirles que se retiren, a lo que le habían contestado que la calle es libre y que se iban a quedar, respondiendo que iba a llamar a la policía; **iv**) Que al llegar la policía, no emitieron boleta informativa a ninguno de ellos, pero a él si, pese haber sido él quien denunció; **v)** Que el Código de la Democracia en su artículo 3 manifiesta que serán objeto de multa quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas, preguntándose que por qué no se extendió boletas a esas personas; **vi)** Que rechaza el parte policial por ser falso, por lo que solicita se declare la inocencia del su defendido. A continuación la señora Jueza procedió a tomar las generales de ley al José Umercindo Quinchimbo, respondiendo a sus generales de ley, que sus nombres y apellidos son los ya indicados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 110137488-0, de 58 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación albañil, domiciliado en la calle La Loma s/n, barrio San José en Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. En calidad de testigo y a solicitud de la Dra. Soraya Vásquez, se receptó la versión del señor Nerio Alcivar Vacancela Zhingre, quien a su generales de ley, respondió que sus nombres son los ya indicados, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 1103548143, de 36 años de edad, de estado civil casado, de ocupación jornalero, domiciliado en el barrio Santa Marianita, parroquia Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. Al interrogatorio formulado por la defensa respondió: **1.** ¿Usted conoce al señor José Umercindo Quinchimbo? Respuesta: Sí; **2.** ¿Cómo llegó a conocerlo? Respuesta: Por el trabajo; **3.** ¿El día 7 de mayo usted estaba en la tienda del señor Quichimbo? Respuesta: Sí, estaba en la tienda; **4.** ¿Puede decirnos si en la tienda se vende bebidas alcohólicas? Respuesta: No; **5.** ¿Qué se vende? Respuesta: Cosas de comer, colas y agua; **6.** ¿Usted vio a gente en la vía pública? Respuesta: Sí; **7.** ¿Qué estaban haciendo? Respuesta: Estaban jugando naipe y bebiendo; **8.** ¿Usted vio al señor Quichimbo que se acercó a ellos y les pidió que se vayan? Respuesta: Sí; **9.** ¿Se retiraron? Respuesta: No; **10.** ¿Puede decirnos si él llamó a la policía? Respuesta: Sí, lo hizo; **11.** ¿Qué pasó con la policía? Respuesta: Llegó y no les hicieron nada, más bien al señor Quichimbo le dijeron que estaba vendiendo licor y le dieron la boleta; **12.** ¿El señor Quichimbo qué hizo ante esto? Respuesta: Les dijo que por qué le acusaban a él, si fue él quien los llamó, pero la policía no le dio la oportunidad para nada y luego se retiraron.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En la presente causa, la ausencia del agente del orden para rendir su versión impide corroborar lo señalado en el parte policial y boleta informativa, los mismos no pueden constituir prueba, ya que únicamente lo actuado en la audiencia tiene eficacia probatoria; más aún cuando de los testimonios vertidos en la audiencia se desprende que el presunto infractor no se encontraba vendiendo bebidas alcohólicas. Por las consideraciones expuestas, se hace imposible afirmar que el señor José Umercindo Quinchimbo, haya infringido el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **JOSÉ UMERCINDO QUICHIMBO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110137488-0.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 29 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0725-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 30 de marzo de 2012. Las 16h54.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Dr. Byron Enrique Pinto, en su calidad de defensor público; y, copia simple de la credencial del señor teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino.

A la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES**. Esta causa ha sido identificada con el número 0725-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El artículo 217 en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, otorgan al Tribunal Contencioso Electoral la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y, particularmente, para sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneración de normas electorales, siendo sus fallos de última instancia.

b) De conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral convocó a proceso de referéndum y consulta popular para el 7 de mayo de 2011.

c) Los incisos tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia establecen que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba denuncia sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales, debe realizarse conforme lo señalado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas, queda asegurada la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, suscribe el parte informativo, en el que consta que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 12h05, en el colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios, procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009973-2011-TCE, al señor **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES**, portador de la cédula de ciudadanía número 110247019-0, por contravenir el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) El referido parte y la boleta informativa No. BI-009973-2011-TCE son remitidos por la Delegación Provincial Electoral de Loja, al Tribunal Contencioso Electoral, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General el día jueves diecinueve de mayo del año dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) Se procede a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo del año dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) El 30 de enero de 2012, a las 12h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES**, con domicilio en el barrio Guanga Bajo, parroquia Olmedo, provincia de Loja; se señala que el día jueves 29 de marzo de 2012 a las 09h00, se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hace conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo con el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES,** fue citado el día miércoles 01 de febrero de 2012, a las 14h50 minutos, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 8)

b) Con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25 (fs. 9).

c) Se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja designe a un Defensor Público de esa provincia, mediante oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 de 31 de enero de 2012.Se contó con la presencia del Dr. Byron Enrique Pinto, en calidad de defensor público (fs.10).

d) El día y hora señalados, esto es el jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido

proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa, el presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES,** portador de la cédula de ciudadanía número 110247019-0,

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia, según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) El día jueves 29 de marzo de 2012, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. No compareció el presunto infractor. Se contó con la presencia del defensor público, Dr. Byron Enrique Pinto.

b) De la audiencia se desprende lo siguiente: No estuvo presente el presunto infractor señor Santos Querubín Torres Robles, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia. Se prosiguió con la diligencia ya que se contó con la presencia del defensor público. Se leyó el parte policial de la causa y su contenido fue reconocido por el agente del orden. A continuación la señora jueza concedió la palabra al teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, que en lo principal manifestó: Que el día 7 de mayo de 2011, en el colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios a las 12h05 se encontraba en el patio central del recinto, en el cual moradores del sector le indicaron que se encontraba un señor en presunto estado de embriaguez. Al trasladarse a una de las mesas, se percató del hecho; al solicitarle la cédula lo identificó con el nombre de Santos Querubín Torres Robles, quien efectivamente se encontraba en estado de embriaguez, hecho que fue presenciado por la señorita Paola Carrión Valarezo, coordinadora del CNE en ese recinto electoral. A la pregunta realizada por la señora jueza, respondió: ¿Cómo se dio cuenta de que el señor se encontraba en estado de embriaguez? Respuesta: Cuando le pedí los datos percibía un fuerte aliento a licor y al caminar se tambaleaba. El Dr. Byron Enrique Pinto, en su calidad de defensor público, intervino realizando la siguientes preguntas al señor agente del orden: 1) ¿Usted prácticó alguna prueba pericial, a efectos de comprobar que mi representado estaba en estado etílico? Respuesta: No, no se practicó ninguna prueba porque el 7 de mayo eran las elecciones y no teníamos los medios logísticos, por eso nosotros tomamos como referencia a los vocales o a su coordinador para que colaboren y constaten el estado de la persona al momento de presentarse a votar. El Dr. Byron Pinto manifestó que a nombre de su defendido y dado que la Constitución de la República garantiza a todo ciudadano el principio de inocencia en su artículo 76 numeral 2, y no existiendo prueba contundente, veraz y eficaz a efectos de determinar la responsabilidad de la infracción se tomen en cuenta estas consideraciones al momento de resolver.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haberse presentado a votar en estado de embriaguez. Las normas electorales que contienen la tipificación de la infracción y la sanción son el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia que textualmente señala que comete una infracción electoral: "El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez"; y también el artículo 123 del mismo cuerpo legal que indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76 contempla la garantía del debido proceso que, entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

A la luz de estas normas y analizando los hechos de la presente causa, el testimonio del teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, constituye elemento probatorio ya que reconoce el contenido del parte y boleta informativa y señala que constató que el presunto infractor se encontraba con fuerte aliento a licor y se tambaleaba. La norma del Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas. La ingesta de bebidas alcohólicas tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor y el estado de embriaguez por la ingesta de estas bebidas, provoca tambaleo. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, las afirmaciones del teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, nos conduce a determinar que el señor Santos Querubín Torres Robles, tiene responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **SANTOS QUERUBIN TORRES ROBLES**, portador de la cédula de ciudadanía número 110247019-0, en el cometimiento de la infracción prevista en el articulo 291 numeral 4 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral de Loja del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 30 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0738-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 30 de marzo de 2012. Las 17h20.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de Dr. Byron Enrique Pinto, en su calidad de defensor público; copia simple de la credencial del señor subteniente de policía, Diego Marcalla Chacha; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

De acuerdo al sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO**. Esta causa ha sido identificada con el número 0738-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales, siendo sus fallos de última instancia.

b) El Consejo Nacional Electoral convocó para el día 07 de mayo de 2011 a proceso de referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) Para el juzgamiento de las infracciones electorales existen dos instancias, la primera corresponde a una de las juezas o jueces por sorteo y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto del artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo cuando se reciba la denuncia sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se encuentra previsto en Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

La jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, quedan asegurados con las normas enunciadas, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el subteniente de policía Diego Marcalla Chacha, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, consta que el día jueves 5 de mayo de 2011 a las 17h00, en la zona de tolerancia, procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009192-2011-TCE, al señor **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110281440-5, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) La Delegación Provincial Electoral de Loja, remite al Tribunal Contencioso Electoral, el referido parte y la boleta informativa No. BI-009192-2011-TCE, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo del año dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral, procede a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo del año dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) El 30 de enero de 2012, a las 13h00, se admite a trámite la presente causa; y se ordena la citación al señor **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO**, con domicilio en Celí Román, parroquia Celí, provincia de Loja; se señala que el día jueves 29 de marzo de 2012 a las 11h00, se realizaría la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral de Loja, además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para cumplir el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO** el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 17h35, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 9)

b) El subteniente de policía Diego Marcalla Chacha, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25, conforme consta a fojas 7 del proceso, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados.

c) Con fecha 31 de enero de 2012, y con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se notificó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja, con el propósito de que se designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Dr. Byron Enrique Pinto, en calidad de defensor público (fs. 8).

d) El día y hora señalados, esto es el jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO,** portador de la cédula de ciudadanía número 110281440-5, de acuerdo a los datos que consta en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, de acuerdo con el parte informativo y a la boleta informativa ya referidos.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se cuenta con la presencia del presunto infractor y de su defensor público el Dr. Byron Enrique Pinto.

b) De lo actuado en la audiencia, se destaca lo siguiente: Se leyó el parte policial de la causa, su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al subteniente de policía Diego Marcalla Chacha, quien manifestó: Que el día 5 de mayo se encontraba de servicio como módulo en la ciudad de Loja, a eso de las 17h00, conjuntamente con el intendente Dr. Galo Jiménez procedieron al control de la ley seca, dirigiéndose a la zona de tolerancia en donde se constató que en el nigth club "Las Vegas" e "Imperio" existían varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas, entre las cuales se encontraba el señor Edgar Chicaiza, por lo cual se le entregó la boleta de citación respectiva, informándole de la infracción, todo en presencia del intendente que se encontraba en el lugar. La señora jueza realizó las siguientes preguntas: 1) ¿Hubo algún incidente con las personas? Respuesta: No, no tuvimos inconveniente; 2) ¿Qué le hizo llegar a la conclusión que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Porque se encontraron botellas de cerveza y los señores estaban con aliento a licor. La señora Jueza concedió la palabra al presunto infractor, quien a sus generales de ley, señaló que sus nombres y apellidos son Edgar Augusto Chicaiza Guamo, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 110281440-5, de 39 años de edad, de estado civil casado, de ocupación empleado público, domiciliado en la Urbanización Celi Román, a un cuadra del instituto de idiomas. En cuanto a los hechos indicó que ese día fue al local a ver a su amigo que era el dueño, y que mientras conversaba llegó la policía, se acercó y dio sus datos, ya que en ningún momento había ingerido bebidas alcohólicas. En su calidad de defensor público, el Dr. Byron Enrique Pinto realizó las siguientes preguntas al agente del orden: **1)** ¿Indique el nombre del local en donde usted tomó procedimiento? Respuesta: El lugar donde se encontraba el señor Chicaiza era el nigth club "Imperio"; **2)** ¿Habían más personas? Respuesta: Sí, hubo varias personas y varios policías que tomaron procedimiento; **3)** ¿Procedieron a notificar a todos y cada uno de los ciudadanos? Respuesta: Conjuntamente con el intendente procedimos a notificar; **4)** ¿Al momento de entregar la boleta, usted practicó alguna prueba o pericia para aseverar que estaba en estado de embriaguez o consumiendo licor? Respuesta: No, únicamente se pudo constatar el fuerte aliento a licor. La señora jueza preguntó: ¿Procedieron a entregarle la boleta al dueño del nigth club Imperio? Respuesta: Sí, se les entregó a los dueños de los locales. En su alegato final el defensor público manifestó que se tenga en cuenta el principio de inocencia establecido en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución y que no existiendo prueba suficiente y siendo el parte referencial, solicitó que se absuelva a su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia, indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas en los días prohibidos por la ley electoral. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En la presente causa, el teniente de policía Diego Marcalla Chacha ha concurrido a la audiencia oral de prueba y juzgamiento y ha reconocido el parte policial y la boleta informativa; sin embargo la negativa rotunda y enfática del presunto infractor al hecho de haber consumido bebidas alcohólicas en los días que la ley electoral lo prohíbe, que lo manifiesta en varias ocasiones durante la audiencia, genera dudas sobre la responsabilidad del señor Edgar Augusto Chicaiza Guamo, en el cometimiento de la infracción señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia; y dado que no hay más prueba que la testimonial, esta jueza aplica el principio "in dubio pro reo".

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **EDGAR AUGUSTO CHICAIZA GUAMO**, portador de la cédula de ciudadanía número 110281440-5.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 30 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0727-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 30 de marzo de 2012. Las 17h55.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional del Dr. Fausto Aranda Peñarreta, en su calidad de defensor público.

A la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS**. Esta causa ha sido identificada con el número 0727-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y, particularmente, para sancionar por vulneración e incumplimiento de normas electorales, por mandato del artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) El día 07 de mayo de 2011 se realizó el referéndum y consulta popular convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia señala que el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso, y la segunda instancia al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad al inciso tercero y cuarto.

d) Cuando se reciba la denuncia sobre el cometimiento de una infracción electoral, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral están en la obligación de llevar adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo.

e) En el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en

concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011, se contempla el procedimiento para el juzgamiento de las infracciones electorales.

Estas normas aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo, suscrito por el teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, consta que el día sábado 07 de mayo de 2011 a las 11h50, en el colegio Monseñor Alberto Zambrano Palacios, se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-009971-2011-TCE, al señor **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS**, portador de la cédula de ciudadanía número 110402682-6, por contravenir el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) Mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, la Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral el referido parte y la boleta informativa No. BI-009971-2011-TCE, recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) En el Tribunal Contencioso Electoral se sortea la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos y corresponde el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 30 de enero de 2012, a las 13h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS**, con domicilio en el barrio La Delicia, parroquia Olmedo, provincia de Loja; se señala que el día jueves 29 de marzo de 2012 a las 15h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral de Loja; además, se le hace conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS,** fue citado en su domicilio, el día miércoles 01 de febrero de 2012 a las 13h30, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 8).

b) El día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25, fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados (fs. 9).

c) El 31 de enero de 2012 con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012, se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja, que se designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia del Dr. Fausto Aranda Peñarreta (fs. 10).

d) El jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según la boleta informativa, el presunto infractor se lo ha identificado con el nombre de **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS,** portador de la cédula de ciudadanía número 110402682-6.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

De acuerdo al parte informativo y a la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día jueves 29 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en las calles Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. No compareció el presunto infractor, se contó con la presencia del defensor público, Dr. Fausto Aranda Peñarreta.

b) De la audiencia se desprende lo siguiente: No compareció el teniente de policía Lenin Sánchez Zambonino, ni el presunto infractor señor Dionicio Antonio Robles Vargas, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía. Se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia ya que se contó con la presencia del defensor público. Se leyó el parte policial de la causa, su contenido no pudo ser reconocido por el agente del orden. El Dr. Fausto Aranda Peñarreta en lo principal manifestó: En su calidad de defensor público, indicó que el parte policial emitido por el teniente de policía Lenin Sánchez Sambonino se señala haber infringido el artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia, el cual es un mero enunciado, ya que no se puede demostrar si en verdad su defendido se presentó a votar en estado de embriaguez; y, que el señor Dionicio Antonio Robles Vargas no ha sido citado legalmente, en vista de que la boleta se entregó a un amigo del presunto infractor. Por las consideraciones expuestas solicitó se deseche el parte policial por falta de prueba y se absuelva a su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 291 numeral 4 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez", en concordancia con el artículo 123 del Código de la Democracia, que indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción supuestamente cometida es haberse presentado a votar en estado de embriaguez. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título Cuarto del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

En el presente caso, la no comparecencia del agente del orden para rendir su versión impide la corroboración de lo señalado en el parte policial y boleta informativa, por lo mismo no pueden constituirse en prueba plena, dado que solamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto al no existir indicios y medios probatorios que brinden elementos de convicción suficientes para determinar la responsabilidad en el cometimiento de la infracción, se ratifica la inocencia del señor Dionicio Antonio Robles Vargas.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **DIONICIO ANTONIO ROBLES VARGAS**, portador de la cédula de ciudadanía número 110402682-6.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 30 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0728-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 31 de marzo de 2012. Las 16h55.- **VISTOS:** Agréguese al expediente, copia simple de la credencial profesional de Dra. Mónica del Carmen Fierro Montalvo, en su calidad de defensora pública; copia simple de la credencial del señor cabo primero de policía Jorge Ochoa; copia simple de la cédula de ciudadanía del presunto infractor.

A la suscrita jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0728-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final otorgan al Tribunal Contencioso Electoral, a jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, particularmente para sancionar por vulneración de normas electorales; y, sus fallos son de última instancia.

b) Para el día 07 de mayo de 2011 convocó a referéndum y consulta popular el Consejo Nacional Electoral de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) De acuerdo con el artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral,

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se realizará conforme lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El cabo primero de policía Jorge Ochoa perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, suscribió el parte informativo, en el que consta que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h50 en la parroquia Tambo, (tienda sin nombre, frente al parque central), procedió a entregar la boleta informativa No. BI-010551-2011-TCE, al señor **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110505811-7, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) Con oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, la Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral el referido parte y la boleta informativa No. BI-010551-2011-TCE recibido en la Secretaría General el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) Se sortea la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos y le corresponde el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Se admite a trámite la presente causa, mediante auto de 30 de enero de 2012, a las 14h00 y se ordena la citación al señor **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA**, con domicilio en el barrio Miraflores, calle Quinar, parroquia el Sagrario, provincia de Loja; se señala que el día viernes 30 de marzo a las 09h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

En garantía del debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA**, no pudo ser citado en la dirección descrita en la boleta informativa, conforme se desprende de la razón sentada el día lunes 06 de febrero de 2012, por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 9), por lo que mediante auto de 22 de febrero de 2012 a las 10h30, se dispuso la citación por la prensa. Tal citación se publicó en el diario "Crónica" del viernes 16 de marzo de 2012, conforme consta a fojas catorce del expediente, en ella se le hizo conocer al presunto infractor que debe designar su abogado defensor; ejercer su derecho a la defensa; concurrir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento previamente señalada; y que, en caso de no contar con un defensor de su confianza, se designará a un defensor público de la provincia de Loja.

b) Se notificó en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012, a las 11h25, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados el cabo primero de policía Jorge Ochoa (fs. 7).

c) El 31 de enero de 2012 y con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012, se solicitó al Coordinador/a de la Defensoría Pública de Loja designe a un Defensor Público de esa provincia, habiéndose contado con la presencia de la Dra. Mónica del Carmen Fierro Montalvo, en calidad de defensora pública (fs. 8).

d) El viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 09h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso, garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA,** portador de la cédula de ciudadanía número 110505811-7, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Del parte informativo y de la boleta informativa referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 09h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. No compareció el presunto infractor y se contó con la presencia del defensor público.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: No compareció el presunto infractor señor Héctor Hermel Guamán Pinta, pese a estar debidamente citado por la prensa, por lo que se lo declaró en rebeldía; se prosiguió con la diligencia, de acuerdo con el artículo 251 del Código de la Democracia, ya que se contó con la presencia del defensor público. Se leyó el parte policial de la causa, su contenido fue reconocido por el agente del orden. Se concedió la palabra al cabo primero de policía Jorge Ochoa,

quien manifestó: Que el 7 de mayo de 2011, aproximadamente a las 13h50 se encontraba en el parque exterior de la junta receptora del voto, ahí observó que tres ciudadanos estaban libando frente a la tienda de la señora Mercedes Guzmán, con seis botellas de cerveza Club color verde, por lo que les llevó a la UPC para entregarles las boletas informativas. A la pregunta formulada por la señora jueza, si hubo algún incidente, respondió que no, que se los trasladó a la UPC, le hizo soplar y constató que estaban con aliento a licor; además se tomó como evidencia las 6 botellas de cerveza. La Dra. Mónica Fierro, en su calidad de defensora pública del señor Héctor Hermel Guamán Pinta formuló las siguientes preguntas: **1.** ¿Usted ha manifestado que se les hizo una prueba, en qué consistió esa prueba? Respuesta: A los ciudadanos se les hizo soplar y con eso se pudo determinar que tenían aliento a licor; **2.** ¿Esa fue la única prueba que se les práctico? Repuesta: Si; **3.** ¿Sobre es prueba, usted pudo reconocer que habían libado? Respuesta: Sí, eso fue suficiente y por encontrar las seis botellas las cuales algunas estaban consumidas y otras cerradas. Por tal motivo se les procedió a emitir la boleta del Tribunal; **4.** ¿Al expediente no adjuntó, ninguna prueba? Respuesta: En esos casos no se hace la prueba de alcoholemia, solo se les hace soplar. La Dra. Mónica Fierro en su alegato final manifestó que el parte policial y la declaración del policía carecen de suficiente fundamento jurídico para demostrar que su representado haya infringido el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, por lo que solicitó se declare inocente a su defendido de acuerdo con el artículo 76 numeral 2 de la Constitución del Estado.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción presuntamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. Las normas electorales en las que está tipificado este hecho como infracción y su respectiva sanción son los artículos 123 y 291 numeral 3 del Código de la Democracia. El artículo 123 indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas y el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal señala que comete una infracción electoral quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". Además, el artículo 251 del Código de la Democracia señala que si el presunto infractor no comparece en el día y hora señalados y no justifica su inasistencia, la audiencia de prueba y juzgamiento se llevará a cabo en rebeldía. La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones, incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente con la normas enunciadas, es claro que el testimonio del cabo primero de policía Jorge Ochoa constituye un elemento probatorio ya que reconoce el contenido del parte y boleta informativa y en forma detallada señala, que al pedirle que sople al señor Héctor Guamán Pinta, se evidenció que tenía aliento a licor; además, en el lugar se encontraron seis botellas de cerveza club verde, mismas que fueron incautadas. La norma del Código de la Democracia se refiere a no ingerir bebidas alcohólicas; la ingesta de estas bebidas, tiene manifestaciones externas, una de las cuales es el aliento a licor. En vista de que no está presente el presunto infractor para desvirtuar de manera fundamentada lo señalado por el agente de policía, para esta jueza, el testimonio del agente del orden tiene presunción de veracidad por encontrarse investido de la atribución de realizar el control del funcionamiento del proceso electoral y hacer conocer al Tribunal Contencioso Electoral el presunto cometimiento de las infracciones determinadas en el Código de la Democracia. Cabe señalar que únicamente las pruebas actuadas y validadas en la audiencia de prueba y juzgamiento tienen valor jurídico y eficacia probatoria. Por lo tanto, las afirmaciones del cabo primero de policía Jorge Ochoa, proporciona varios indicios, los cuales son concordantes y nos llevan a la conclusión de que el señor Héctor Hermel Guamán Pinta cometió la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara con lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se determina la responsabilidad del señor **HÉCTOR HERMEL GUAMÁN PINTA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110505811-7, en el cometimiento de la infracción prevista en el articulo 291 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

2. Se sanciona con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada, esto es, ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD $ 146,00), valor que deberá ser depositado en la Delegación Provincial Electoral de Loja del Consejo Nacional Electoral.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 31 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0729-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 31 de marzo de 2012. Las 17h25.- **VISTOS:** Agréguese al expediente: **a)** Copia simples de la credencial del señor cabo primero de policía Jorge Ochoa y de la cédula de ciudadanía del presunto infractor; **b)** Copia simple de la credencial profesional de la Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos; y, **c)** En una foja útil el escrito del señor Héctor Barrionuevo Suquilanda presentado el 30 de marzo de 2012, a las 10h50, suscrito conjuntamente con la Ab. Jenny Abrigo en calidad de defensora. Tómese en cuenta el casillero judicial No. 281 de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para futuras notificaciones.

A la suscrita jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **HÉCTOR MANUEL BARRIONUEVO SUQUILANDA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0729-2011-TCE y, al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) De acuerdo con el artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral, tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos y sus fallos son de última instancia; y, particularmente, para sancionar por vulneración de normas electorales.

b) Para el día 07 de mayo de 2011 el Consejo Nacional Electoral convocó a referéndum y consulta popular, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que, el juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.

d) El Tribunal Contencioso Electoral llevará adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se realizará conforme lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

De acuerdo con las normas enunciadas se asegura la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) El cabo primero de policía Jorge Ochoa, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, suscribe el parte informativo, en el que consta que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h50 en la parroquia Tambo (tienda sin nombre, frente al parque central), se procedió a entregar la boleta informativa No. BI-010552-2011-TCE, al señor **HÉCTOR BARRIONUEVO SUQUILANDA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110513472-8, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) El referido parte y la boleta informativa No. BI-010552-2011-TCE son remitidos por la Delegación Provincial Electoral de Loja, mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011 al Tribunal Contencioso Electoral, el que es recibido en la Secretaría General, el día jueves diecinueve de mayo de dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral sorteó la causa el día jueves diecinueve de mayo de dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Mediante auto de 30 de enero de 2012, a las 14h30, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **HÉCTOR BARRIONUEVO SUQUILANDA**, con domicilio en el barrio Pío Jaramillo, parroquia El Tambo, provincia de Loja; se señala que el día viernes 30 de marzo de 2012 a las 11h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la Delegación Electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Cumpliendo con las garantías del debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **HÉCTOR BARRIONUEVO SUQUILANDA** fue citado en su domicilio, en forma personal, el día viernes tres de febrero de dos mil doce, a las once horas con treinta minutos, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 9).

b) Con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados, el cabo primero de policía Jorge Ochoa fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 7, el día jueves 02 de febrero de 2012 a las 11h25 (fs. 7)

c) Con fecha 31 de enero de 2012 y con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja, designe a un Defensor Público de esa provincia, constante a fojas 8 del expediente.

d) El día y hora señalados, esto es el viernes 30 de marzo de 2012 a partir de las 11h10, se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento en donde se tuteló el debido proceso garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Al presunto infractor se lo identifica con el nombre **HÉCTOR BARRIONUEVO SUQUILANDA,** portador de la cédula de ciudadanía número 110513472-8, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume que se ha cometido la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 11h10, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia del presunto infractor y de su abogada Jenny Georgina Abrigo Armijos.

b) De lo actuado en la audiencia, se desprende lo siguiente: Se leyó el parte policial de la causa y su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al cabo primero de policía Jorge Ochoa, quien manifestó: Que encontrándose de servicio en el recinto electoral en la parte exterior verificó que tres ciudadanos se encontraban sentados en la acera de la tienda con botellas de cerveza club, algunas de ellas se encontraba consumidas unas hasta la mitad y otras enteras, por lo cual los llevaron a la UPC para entregarles las boletas informativas. La Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos, en su calidad de abogada defensora solicitó interrogar al agente del orden formulando las siguientes preguntas: **1.** ¿Realizó alguna prueba a mi defendido para decir que estuvo con aliento a licor? Respuesta: Nosotros al momento de tomar contacto con los ciudadanos constatamos que estaban con aliento a licor. Además se encontraron las botellas de licor y la señora de la tienda pudo observar el procedimiento; **2.** ¿Usted le practicó la prueba de alcoholemia? Respuesta: No la hice porque esto no era un procedimiento para la ley seca, lo que nos dijeron era que no se ingiera licor. La abogada defensora en su alegato expresó: que como se ha escuchado del agente, no se ha practicado a su defendido ninguna prueba de alcoholemia, además que su representado no ingirió licor ese día y que en derecho se debe probar y no solo afirmar; que no existiendo prueba contundente que demuestre la comisión de la infracción solicita se dicte sentencia en la que se absuelva a su defendido, tomando en cuenta la presunción de inocencia señalada en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución. El agente del orden a las preguntas realizadas por la señora jueza respondió: **1)** ¿Usted reconocería al ciudadano que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Efectivamente es el señor que está aquí. Con dos compañeros pudimos constatar que estaba en la acera con botellas de cerveza y tenía aliento a licor; **2)** ¿A todos los que estuvieron allí les practicaron la prueba? Repuesta: Sí, a todos les hicimos la prueba y comprobamos que estaban con aliento a licor; **3)** ¿En el momento en que estuvo con él usted le vio ingiriendo bebidas alcohólicas? Respuesta: Sí; **4)** ¿No tiene ninguna duda? Respuesta: No, por eso se lo llevó a la UPC, inclusive de las 6 botellas, unas estaban abiertas y consumidas y otras cerradas. Luego la señora jueza procedió a receptar la versión del presunto infractor, quien a sus generales de ley indicó que sus nombres y apellidos son Héctor Manuel Barrionuevo Suquilanda, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 110513472-8, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado, en la calle Colorados y Eugenio Espejo de la ciudad de Loja. En cuanto a los hechos manifestó que el día de las elecciones acompañó a sus amigos a votar, al regreso vio a unos amigos y se quedó con ellos, a él le dieron una botella de cerveza, la había destapado pero en ningún momento ingirió, tanto es así que la botella estaba llena cuando llegaron los policías, luego les detuvieron, llevándolos a la UPC, les tomaron fotos y después les extendieron la boleta. A las preguntas realizadas por la señora jueza respondió: **1)** ¿Quién tomó las fotos? Respuesta: El policía; **2)** En dónde tomó las fotografías? Respuesta: Fue en la UPC; **3)** Ustedes llevaron las botellas? Respuesta: No, fueron los policías. Allí se ve que estaba llena y no consumida, por eso afirmo que yo no tenía aliento a licor ya que en ningún momento tomé. En el alegato final la Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos, señaló que el parte policial es contradictorio a la realidad de los hechos, no habiendo prueba de alcoholemia que demuestre que su defendido ingirió bebidas alcohólicas, por lo que solicitó se absuelva a su defendido por no existir prueba plena.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El artículo 123 del Código de la Democracia indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. En concordancia con la norma precedente, el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia, textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". Las normas antes citadas se aplican al presente caso, ya que el parte informativo que se conoce en esta causa señala que la

infracción supuestamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en la Sección Segunda, Capítulo Segundo, Título Cuarto del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, el testimonio del cabo primero de policía Jorge Ochoa no puede ser totalmente corroborado ya que la declaración del presunto infractor desvirtúa lo dicho por el agente del orden quien no ha adjuntado las fotografías tomadas que hubieran aclarado los hechos, por lo que no es posible probar fehacientemente que el señor Héctor Manuel Barrionuevo Suquilanda tenga responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia y, ante la duda de que si efectivamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas se impone aplicar el principio "indubio pro reo"

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **HÉCTOR BARRIONUEVO SUQUILANDA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110513472-8.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 31 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

SENTENCIA

CAUSA 0730-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Loja, 31 de marzo de 2012. Las 17h55.- **VISTOS:** Agréguese al expediente: **a)** Copia simple de la credencial profesional de la Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos; **b)** Copias simples de la credencial del señor cabo primero de policía Jorge Ochoa y de la cédula de ciudadanía del presunto infractor; y, **c)** En una foja útil el escrito del señor Fernando Barrionuevo Suquilanda presentado el 30 de marzo de 2012, a las 15h00, suscrito conjuntamente con la Ab. Jenny Abrigo en calidad de defensora. Tómese en cuenta el casillero judicial No. 281 de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para futuras notificaciones.

En lo principal, por sorteo efectuado en la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, a la suscrita Jueza le correspondió conocer el presunto cometimiento de una infracción electoral, por parte del señor **FERNANDO BARRIONUEVO SUQUILANDA**. Esta causa ha sido identificada con el número 0730-2011-TCE, y al respecto se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

a) El Tribunal Contencioso Electoral tiene la jurisdicción y la competencia para administrar justicia en materia de derechos políticos, particularmente para sancionar por vulneración de normas electorales y sus fallos son de última instancia, de acuerdo al artículo 217 inciso segundo, en concordancia con los artículos 167 y 168 numeral tercero y 221 numeral segundo e inciso final de la Constitución de la República del Ecuador.

b) El día 07 de mayo de 2011 se realizó el referéndum y consulta popular convocado por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 61 numeral 4 y 106 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25 numeral 2 y 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

c) El juzgamiento de las infracciones electorales corresponde, en primera instancia, a una de las juezas o jueces por sorteo para cada proceso y, la segunda instancia, al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al artículo 72 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

d) Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral llevarán adelante el proceso jurisdiccional correspondiente, conforme al procedimiento respectivo, cuando se reciba la denuncia o la información sobre el cometimiento de una infracción electoral.

e) El juzgamiento de las infracciones electorales se realizará conforme lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda, artículos 249 y siguientes del Código de la Democracia, en concordancia con los artículos 84 al 88 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral publicado en el Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011.

Las normas enunciadas aseguran la jurisdicción y la competencia de este Tribunal y de esta Jueza, así como el procedimiento previsto para el presente trámite, sin que se observe nulidad alguna que lo afecte.

SEGUNDO: ANTECEDENTES.-

a) En el parte informativo suscrito por el cabo primero de policía Jorge Ochoa, perteneciente al Comando Provincial de Loja No. 7, Tercer Distrito, Plaza de Loja, consta que el día sábado 7 de mayo de 2011 a las 13h50 en la parroquia Tambo (tienda sin nombre, frente al parque central) procedió a entregar la boleta informativa No. BI-010553-2011-TCE, al señor **FERNANDO BARRIONUEVO SUQUILANDA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110517694-3, por contravenir el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia (fs. 3).

b) Mediante oficio No. 234-CNE-D-DPL-2011 de 18 de mayo de 2011, la Delegación Provincial Electoral de Loja remite al Tribunal Contencioso Electoral el referido parte y la boleta informativa No. BI-010553-2011-TCE, recibido en la Secretaría General el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos (fs. 1 a 4).

c) La Secretaria General del Tribunal Contencioso Electoral procede a sortear la causa el día jueves diecinueve de mayo del dos mil once a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos, correspondiendo el conocimiento de la misma a la suscrita Jueza (fs. 5).

d) Con auto de 30 de enero de 2012, a las 15h00, se admite a trámite la presente causa y se ordena la citación al señor **FERNANDO BARRIONUEVO SUQUILANDA**, con domicilio en la Av. Eugenio Espejo y Colorados, ciudad de Catamayo, parroquia El Tambo, provincia de Loja; se señala que el día viernes 30 de marzo de 2012 a las 15h00 se realizará la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en las oficinas de la delegación electoral de Loja; además, se le hizo conocer de las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República (fs. 6 y 6 vta).

TERCERO: GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.-

Para garantizar el debido proceso, el sistema oral y los principios de concentración, contradicción y dispositivo, contemplados en los artículos 11, 76 y 168 de la Constitución de la República del Ecuador, se realizaron las siguientes diligencias:

a) El señor **FERNANDO BARRIONUEVO SUQUILANDA** fue citado en forma personal en su domicilio, el día viernes tres de febrero de dos mil doce, a las once horas con treinta minutos, conforme se desprende de la razón de citación sentada por el citador/notificador del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 9)

b) El cabo primero de policía Jorge Ochoa fue notificado en el Comando Provincial de la Policía de Loja No. 07, el día jueves 02 de febrero de 2012 a las 11h25, con el fin de que concurra a la audiencia en el día y hora señalados (fs. 7).

c) El 31 de enero de 2012, con oficio No. 010-SMM-P-TCE-2012 se solicitó al Coordinador de la Defensoría Pública de Loja que se designe a un Defensor Público de esa provincia (fs. 8).

d) El viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 15h10 se llevó a cabo la audiencia oral de prueba y juzgamiento, en donde se tuteló el debido proceso garantizado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera especial el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

CUARTO: IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

El presunto infractor ha sido identificado con el nombre de **FERNANDO ISMAEL BARRIONUEVO SUQUILANDA,** portador de la cédula de ciudadanía número 110517694-3, de acuerdo con los datos que constan en la boleta informativa.

QUINTO: CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR.-

Según el parte informativo y la boleta informativa ya referidos, se presume la comisión de la infracción electoral señalada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia.

SEXTO: AUDIENCIA ORAL DE PRUEBA Y JUZGAMIENTO.-

a) La audiencia oral de prueba y juzgamiento se llevó a cabo el día viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 15h10, en la Delegación Provincial Electoral del Consejo Nacional Electoral de la provincia de Loja, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja. Se contó con la presencia del presunto infractor y de su defensora Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos.

b) De lo actuado en la audiencia se desprende lo siguiente: Se leyó el parte policial de la causa; su contenido fue reconocido por el agente del orden; se concedió la palabra al cabo primero de policía Jorge Ochoa quien manifestó: Que encontrándose de servicio con otros compañeros se percató que el señor aquí presente se encontraba acompañado de otros sujetos en la acera de una tienda ingiriendo bebidas alcohólicas; que existían seis botellas de cerveza club verde, algunas abiertas y otras cerradas, razón por la cual se los llevaron a la UPC para explicarles que cometieron un acto ilegal en un día cívico, al dialogar con ellos tenían aliento a licor por lo que les entregó las boletas. La Ab. Jenny Georgina Abrigo Armijos, en su calidad de abogada defensora solicita se permita interrogar al agente del orden, realizando las siguientes preguntas: **1.** ¿En qué lugar estuvieron ubicadas las botellas? Respuesta: Los señores se encontraban frente al parque central de esa parroquia, justo en la acera que queda al frente del domicilio de la señora Mercedes Guzmán. Unos estaban parados y otros sentados y las botellas a un lado de ellos, en el piso; **2.** ¿En el caso de mi defendido, le pudo ver con la botella? Respuesta: No le puedo responder porque no pudimos filmar, pero al momento de la entrevista se pudo percibir aliento a licor. En su alegato expresó que el

testimonio y lo señalado en el parte tienen incoherencias porque su defendido no estuvo ingiriendo licor, no tenía ninguna botella en sus manos y no habiendo prueba solicitó que se dicte sentencia absolviendo a su defendido, tomando en cuenta la presunción de inocencia establecida en el artículo 76 numeral 2. La señora Jueza intervino para realizar las siguientes preguntas al agente del orden: **1)** ¿Al momento en que se acercó a las personas pudo distinguir si el caballero sostenía una de las botellas ce cerveza? Respuesta: Yo puedo decir que el señor se encontraba con los otros dos, las botellas a un lado en la acera, junto a ellos. No puedo recordar si él estuvo con la botella en sus manos. Lo que recuerdo es que estuvieron en el piso, destapadas, consumidas a la mitad y por ese motivo en la entrevista se pudo constatar el aliento a licor; **2)** ¿Me puede decir si el señor al momento de entregarle la boleta tenía aliento a licor? Respuesta: Sí. Intervino la defensa para impugnar la versión del agente, ya que no recuerda bien los hechos como sucedieron, por lo que al existir duda y no haber prueba solicitó se absuelva a su defendido.

SÉPTIMO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS.-

El parte informativo que se conoce en esta causa señala que la infracción presuntamente cometida es haber consumido bebidas alcohólicas el día de las elecciones. Las normas electorales en las que está tipificado este hecho como infracción y su respectiva sanción son el artículo 123 del Código de la Democracia que indica que durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas; y, el artículo 291 numeral 3 del mismo cuerpo legal que textualmente señala que comete una infracción electoral: "Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas, en los días en que exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas". El juzgamiento de estas infracciones está contemplado en el Título Cuarto, Capítulo Segundo, Sección Segunda del Código de la Democracia, siendo éste, un procedimiento oral. Específicamente el artículo 253 ordena: "En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes". La Constitución de Montecristi, en sus artículos 75 y 76, contempla la garantía del debido proceso que entre otras protecciones incluye garantizar el juzgamiento observando el trámite propio de cada procedimiento y también la práctica de las pruebas de cargo y de descargo.

Analizando los hechos de la presente causa a la luz de las normas enunciadas anteriormente, el testimonio del cabo primero de policía Jorge Ochoa no puede ser totalmente corroborado ya que de su testimonio se establecen imprecisiones que crean dudas en cuanto al hecho de que efectivamente se haya encontrado bebiendo bebidas alcohólicas, en primer lugar porque la defensa niega que el señor Fernando Suquilanda haya ingerido bebidas alcohólicas; en segundo lugar el agente del orden no recuerda si el procesado tenía alguna botella de cerveza en la mano; en tercer lugar algunas de las botellas de cerveza se encontraban llenas; la debilidad del testimonio del agente del orden genera dudas, con lo cual no es posible probar fehacientemente que el señor Fernando Barrionuevo Suquilanda tenga responsabilidad en el cometimiento de la infracción electoral contemplada en el artículo 291 numeral 3 del Código de la Democracia y ante la duda de que si efectivamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, se impone aplicar el principio "indubio pro reo".

DECISIÓN

Por lo expuesto, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,** se dicta la siguiente sentencia:

1. Se declara sin lugar el presente juzgamiento y en consecuencia se ratifica la inocencia del señor **FERNANDO BARRIONUEVO SUQUILANDA**, portador de la cédula de ciudadanía número 110517694-3.

2. Se ordena el archivo del presente expediente.

3. Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Democracia.

4. Siga actuando la Dra. Sandra Melo Marín como Secretaria Relatora de este Despacho.

5. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Doctora Ximena Endara Osejo, Jueza Presidenta, Tribunal Contencioso Electoral.

Certifico.- Loja, 31 de marzo de 2012.

f.) Dra. Sandra Melo Marín, Secretaria Relatora.

RAZÓN: Siento como tal. Que las trescientas veinte y ocho (328) fojas que anteceden son copias certificadas de las Sentencias dictadas por el Tribunal Contencisoso Electoral entre el 12 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012. CERTIFICO.- Quito, DM, 01 de junio de 2012.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General, Tribunal Contencioso Electoral.

El REGISTRO OFICIAL no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.